

CENTROAMÉRICA:
DEMOCRACIA, MILITARISMO Y CONFLICTOS SOCIALES EN EL SIGLO XXI

Insumisos Latinoamericanos

Cuerpo Académico Internacional e Interinstitucional

Directores

Robinson Salazar Pérez
Nchamah Miller

Cuerpo académico y editorial

Pablo González Casanova, Jorge Alonso Sánchez,
Fernando Mires, Manuel A. Garretón, Martín Shaw,
Jorge Rojas Hernández, Gerónimo de Sierra,
Alberto Riella, Guido Galafassi, Atilio Borón, Roberto Follari,
Eduardo A. Sandoval Forero, Ambrosio Velasco Gómez,
Celia Soibelman Melhem, Ana Isla, Oscar Picardo Joao,
Carmen Beatriz Fernández, Edgardo Ovidio Garbulsky,
Héctor Díaz-Polanco, Rosario Espinal, Sergio Salinas,
Lincoln Bizzorero, Álvaro Márquez Fernández, Ignacio Medina,
Marco A. Gandásegui, Jorge Cadena Roa, Isidro H, Cisneros,
Efrén Barrera Restrepo, Robinson Salazar Pérez,
Ricardo Pérez Montfort, José Ramón Fabelo,
Bernardo Pérez Salazar, María Pilar García,
Ricardo Melgar Bao, Norma Fuller, Flabián Nievas,
Juan Carlos García Hoyos, José Luis Cisneros,
John Saxe Fernández, Gian Carlo Delgado,
Dídimo Castillo, Yamandú Acosta.

Comité de Redacción

Robinson Salazar Pérez
Nchamah Miller
Melissa Salazar Echeagaray

**CENTROAMÉRICA:
DEMOCRACIA, MILITARISMO
Y CONFLICTOS SOCIALES
EN EL SIGLO XXI**

DIRECTOR Y COORDINADOR DEL PROYECTO:

IGNACIO MEDINA NÚÑEZ

*Colección
Insumisos Latinoamericanos
elaleph.com*

Centroamérica : democracia, militarismo y conflictos sociales en el Siglo XXI / David Martínez-Amador ... [et.al.] ; coordinado por Ignacio Medina Núñez ; dirigido por Ignacio Medina Núñez. - 1a ed. - Buenos Aires: Elaleph.com, 2010.

248 p. ; 21x15 cm. - (Insumisos Latinoamericanos / Robinson Salazar y Nchamah Miller)

ISBN 978-987-1701-01-8

1. Ciencias Políticas. I. Martínez-Amador, David II. Medina Núñez, Ignacio, coord. III. Medina Núñez, Ignacio, dir.
CDD 320

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático.

© 2010, los autores de los respectivos trabajos.

© 2010, ELALEPH.COM S.R.L.

contacto@elaleph.com
<http://www.elaleph.com>

Primera edición

Este libro ha sido editado en Argentina.

ISBN 978-987-1701-01-8

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en el mes de abril de 2010 en
Bibliográfica, de Voros S.A.,
Bucarelli 1160, Buenos Aires, Argentina.

ÍNDICE

Prólogo	
<i>Robinson Salazar Pérez</i>	9
Introducción general	
<i>Ignacio Medina Núñez</i>	17
Paramaralitarización de las pandillas en Centroamérica	
<i>Robinson Salazar Pérez</i>	27
Pandillas: Definición	27
Estructura organizacional	28
Función por responsabilidad. Cuadro jerárquico	29
Controles organizacionales	31
Narcotráfico y mercado	32
Gobiernos de Derecha	39
Paramilitares de nuevo cuño	41
Bibliografía	45
Guatemala entre rosas y piedras: lecciones del escándalo Rosenberg	
<i>David Martínez-Amador y Robinson Salazar Pérez</i>	47
El recuento de los hechos	47
Un primer acercamiento: la muerte no importa igual	50
La mano negra de las élites tradicionales	52
Balance final	56
PostScriptum en octubre 2009	57
Bibliografía	60

Elecciones presidenciales en El Salvador 2009:

Un nuevo proyecto nacional

<i>Ignacio Medina Núñez</i>	63
Introducción	63
1. Auge y descenso electoral de la Democracia Cristiana	65
2. El FMLN como fuerza de oposición política a los gobiernos de ARENA	70
3. FMLN: hacia el triunfo electoral de 2009	90
Conclusiones	98
Bibliografía	103

Elecciones 2009 y campaña política; desafíos para la democracia salvadoreña

<i>Nelson de Jesús Quintanilla Gómez</i>	107
Reflexiones preliminares sobre el proceso electoral salvadoreño	107
Campaña electoral: papel de los medios de comunicación	110
Mensajes de los candidatos presidenciales y estrategias de alianzas y coaliciones	113
Actividades de campaña de los distintos partidos políticos	115
La campaña sucia: los improperios de la campaña política	116
El voto deseado: jóvenes y mujeres	117
Balance del proceso electoral	118
Las perspectivas de transformación socio-económica y política	119
Significado del triunfo de la izquierda en El Salvador	120
La propuesta de transformación del FMLN en el programa de gobierno	124
Perspectivas de El Salvador en el escenario de crisis financiera nacional e internacional	127
Conclusiones	130
Bibliografía	130

Democracia, violencia y crecimiento urbano en El Salvador	
<i>Rudis Yilmir Flores Hernández</i>	133
La violencia como máxima expresión de la posguerra	139
La nueva realidad urbana de El Salvador	141
Bibliografía	145
Las interrogantes sobre el golpe de estado en Honduras	
¿Quién maneja la política exterior de EEUU?	
<i>Marco A. Gandásegui, hijo</i>	147
La recesión y las luchas internas en EEUU	148
El Gato y el Ratón	150
La complicidad de los “liberales” norteamericanos.	152
El financiamiento y el lobby en el Congreso	155
Bibliografía	157
Honduras: golpe de estado y alteración de los escaques del ajedrez político en América Latina	
<i>Robinson Salazar Pérez</i>	159
Militares, Narcotráfico, empresarios y pandillas: el eje golpista	160
Empresarios, la derecha y militares dialogan	163
Lo nuevo del Golpe	164
Del Golpe a la Resistencia	165
Atrapados en la agenda golpista	168
La disputa del ajedrez político	170
Bibliografía	171
Honduras: la dictadura de un bloque de clases oligárquicas y el movimiento de resistencia popular	
<i>Roberto Briceño Jiménez</i>	173
1. La sociedad: rasgos estructurales	173
2. Las clases subalternas y el movimiento social hondureño	175
3. La democracia formal con régimen militar de seguridad nacional; guerra de baja intensidad y contrarrevolución	177

4. La contradicción del bloque dominante con el gobierno del presidente Manuel Zelaya y en consecuencia el golpe de Estado	183
5. Nuevos escenarios de lucha política que resultan del golpe de Estado	188
Bibliografía	189

La dinámica política en Nicaragua

<i>Luis Serra Vázquez</i>	193
Introducción	193
1. El Estado Nicaragüense	194
2. Los partidos políticos	196
3. La cultura política en Nicaragua: elites y mayorías	198
4. Situación socio-económica	200
5. Políticas Económicas y Sociales	203
6. Las relaciones sociedad civil – estado	208
Reflexiones finales	216
Bibliografía	218

El militarismo en Panamá

<i>Marco A. Gandásegui, hijo</i>	225
Introducción	225
1. Las bases “aeronavales” de EEUU en Panamá	226
2. La teoría del militarismo	228
3. El militarismo e imperialismo: “El imperativo histórico”	232
4. La contrainsurgencia del siglo XXI	234
5. El militarismo en Panamá	237
Conclusión	241
PostScriptum: El legado que construye Martinelli	242
Bibliografía	244

PRÓLOGO

Centroamérica tuvo que esperar 20 años para volver a tener la relevancia en las mesas de discusiones de la academia y los gobiernos. Después del protagonismo que asumió en las dos últimas décadas del siglo XX con la firma de los Acuerdos de Paz y la desactivación del conflicto bélico, la notoriedad se diluyó por varios factores: la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra fría y consubstancialmente la desintegración del bloque socialista y el arribo del modelo neoliberal con la ideología globalizadora, que declaraba el agotamiento de la vía armada para llegar al poder, la crisis del socialismo y la clausura de las puertas donde la ideología y la historia eran caja de resonancia para analizar, deliberar y tomar posturas políticas revolucionarias.

La siguiente etapa que marcó la transformación de los países centroamericanos se expresó en las siguientes características: gobiernos proclives a los mandatos de empresas transnacionales, inversiones en áreas estratégicas reservadas por el Estado, privatizaciones de los servicios públicos, carreteras, represas, construcción de hidroeléctricas con capital extranjero, interconexión de líneas eléctricas, desplazamientos humanos por la confiscación de tierras y agotamiento de agua por las contenciones de los ríos, apertura de los mercados y una tendencia fuerte por descampesinizar la economía, etc.

Los flujos de dinero, por la vía de préstamos onerosos a cambio de modificar la carta Constitucional y adecuar el reglamentarismo jurídico que diera certidumbre a los inversores, orilló a muchos gobiernos del área a criminalizar las protestas, a elevar a grado de terrorismo las manifestaciones públicas, a desmontar poco a poco las estructuras sindicales progresistas, a sofocar los movimientos sociales populares, que fueron muchas veces reprimidos y ninguneados por los medios de comunicación, que los estigmatizaban como rezagos de la guerra y actores retardatarios incapaces de comprender el cambio permanente de la historia.

La muerte de líderes comunitarios fue asunto común en la vida cotidiana; las persecuciones políticas fueron parte de la limpieza social soterrada que gobiernos de derecha asentados en Guatemala, El Salvador y Honduras desarrollaban bajo la complicidad de los medios de comunicación, organismos internacionales y observadores que daban seguimiento a los Acuerdos de Paz y las muchas asignaturas pendientes durante el Siglo XXI en espera de ser resarcidos con los daños provocados durante la Guerra.

Las antiguas familias que controlaban la economía de países como El Salvador, Nicaragua y Honduras abrieron las compuertas a los nuevos ricos, quienes lucraron con la Guerra, se formaron académicamente en las universidades norteamericanas y asumieron cargo de ministros o asesores en los nuevos gobiernos. Bajo ese paraguas, acumularon dinero por favores a grandes empresas, se apropiaron de los recursos públicos del Estado, buscaron asociarse con nuevos inversores y formaron una clase dominante tecnocrática, inmune ante la justicia y protegidos por los gobiernos de turno. Prefirieron importar mercancías antes que producirlas; el campo quedó desolado porque no se invirtió en la economía campesina; el flujo de migrantes se desplazaba hacia los Estados Unidos y como caso curioso la demanda de mano de obra campesina de El Salvador la suplían los campesinos nicaragüenses; los obreros de la industria de la construcción también devenían del mismo país, mientras que los salvadoreños (al igual que muchos guatemaltecos, nicaragüenses y Hondureños) prefirieron emigrar hacia el coloso del norte, fenómeno que provocó una fuerte dependencia económica de las divisas enviadas por los migrantes a sus familias, lo que a su vez disparó el consumo y fomentó la economía parasitaria.

Los gobiernos dedicaron su esfuerzo por brindar facilidades al capital foráneo, controlar las demandas sociales a través de la represión, desconocimiento de los derechos políticos, laborales y económicos; el desempleo abarató la mano de obra, y las maquiladoras provenientes de la China Nacionalista pretendieron imponer un modelo productivo maquilador sin resultados por la precariedad de los salarios, nula capacitación y escasos incentivos que al final terminaron con centros de trabajos en zonas francas que tenían forma y esencia de confinamientos laborales de tercer mundo y carentes de derecho alguno que protegiera al trabajador.

El Salvador optó en los 20 años de administración del gobierno de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) por dolarizar y desnacionalizar la economía, tecnocratizar la universidad, cancelar los derechos de huelga, estigmatizar a los jóvenes como Maras para criminalizarlos, destruir

las tendencias de una ideología política contestataria al señalarlos como terroristas y militantes de la guerrilla que se resistían a aceptar los Acuerdos de Paz; concesionó tierras para grandes proyectos empresariales, abrió las puertas a la libre importación, pactó la inserción de la Escuela de Interpol en territorio salvadoreño y base de monitoreo militar que funciona en Comalapa; asimismo firmó el Tratado de Libre Comercio que maniató la economía del país a los intereses norteamericanos. Esta breve reseña de todo lo gestionado por ARENA ha tenido impacto hasta hoy, dado que el gobierno de Mauricio Funes, que arribó bajo la fórmula del FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) orientado por Schafik Handal y Salvador Sánchez Cerén durante y en la posguerra, no ha podido destrabar la urdimbre de conflictos y compromisos que ARENA le dejó antes de entregar el poder del Estado.

Panamá también ha vivido serias contradicciones a partir de la defenestración del General Manuel Antonio Noriega. A partir de 1989, el país ha tenido gobernantes excéntricos como Guillermo David Endara Galimany de 1989-1994; lo sucedió en el cargo la fórmula de izquierda democrática de Ernesto Pérez-Balladares y González-Revilla de 1994-1999 quien gobernó con una racionalidad de derecha y con una administración cargada con severos cargos de corrupción; se dio paso a la diseñadora de interiores, Mireya Moscoso, que ligó su administración con intereses de grandes empresarios y poco aportó para la desaceleración económica que vivió el país en su gestión.

En el 2004, llegó Martín Torrijos, quien fue el reverso de lo que había sido su padre, Omar Torrijos, e hizo tan buen trabajo para la derecha que encementó las vías para el arribo del empresario Ricardo Martinelli Berrocal, quien, en el 2009, acaba de abrir las puertas para la instalación de bases militares en el territorio panameño: una afrenta que tanto repudió el pueblo panameño desde los reclamos de propiedad del Canal hasta la fecha.

Las bases militares en territorio panameño, ligadas con la guirnalda misilística que acaban de aprobar en Colombia, conforman el escudo norteamericano y plataforma para agredir pueblos y gobiernos que no compartan la ideología y los dictados que la administración norteamericana quiere imponer en la segunda década del Siglo XXI.

Guatemala en la etapa de posguerra convocó a elecciones, y el excéntrico Alfonso Portillo y el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), fundado por el general golpista Efraín Ríos Montt, constituyeron el primer Gobierno de la Guatemala de posconflicto; ganó con el 68,32% de los votantes,

frente a un 31,68% que había apoyado a Óscar Berger, candidato del gubernamental Partido de Avanzada Nacional (PAN).

Portillo tuvo destacada actuación en corrupción, persecuciones a líderes de comunidades indígenas; incorporó a las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil) para que arrasaran con los cotos de resistencia indígenas en la zona rural; impusieron la ley del miedo y el terror y mutaron a distintas formas de paramilitarismo que muchas veces adquirieron configuración de empresas prestadoras de servicios de vigilancia, sicariato, ejército privado en Guatemala y mas allá de sus fronteras, ligándose con finqueros en Chiapas, México, y con redes del crimen organizado o carteles de la droga en el sureste del país azteca.

Los gobernantes que le sucedieron, Oscar Berger y Álvaro Colom, no han podido desactivar el paramilitarismo; las comunidades campesinas siguen viviendo el temor y la represión, dado que el paramilitarismo y el narcotráfico están coludidos para ejercer controles de territorios en el país de Rigoberta Menchú.

Los intentos por desestabilizar la actual administración de Álvaro Colom devienen de empresarios y ex militares, quienes pretenden imponer la política del terror y obtener jugosas ganancias a través del tráfico de influencias y de drogas, de ahí que asesinatos anunciados previamente, desapariciones de personas, denuncias de fraude, sobornos, amenazas golpistas,... son parte de la vida cotidiana y notas periodísticas de un país que aun no ha recibido atención sobre las lastimaduras que le dejó la Guerra de los años ochenta.

Nicaragua ha sido querida y admirada debido a la lucha que libraron “los muchachos”, como se le llamaba a los integrantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que conquistaron el poder el 19 de Julio de 1979; sin embargo, el Frente perdió las elecciones del 25 de febrero de 1990, y le sucedió en la presidencia la Unión Nacional de Oposición (UNO) con su candidata Violeta Barrios de Chamorro, que fue un gobierno de derecha. Gobernaron luego Arnoldo Alemán Lacayo y Enrique Bolaños Geyer, mandatarios de corte neoliberal hasta las elecciones del 5 de noviembre de 2006 cuando volvieron a triunfar los sandinistas. El 10 de enero de 2007 retomó la presidencia el FSLN, a través de Daniel Ortega Saavedra.

El regreso del FSLN no tiene conectividad con el pasado; es un gobierno desestructurado, con rupturas internas, divisionismo que ha llegado a un estado de agresiones discursivas y poco proclives a buscar acuerdos con

antiguas fuerzas que lo integraron. El FSLN es muy diferente de la organización de la primera época donde tres organizaciones lo conformaban: Línea proletaria, Guerra popular prolongada y terceristas; todas convivían y respetaban acuerdos para garantizar la gobernabilidad y la autonomía del país. El desgajamiento de sus estructuras partidarias, el rompimiento de un sector significativo que se autodenominó Renovación Sandinista y el desahelo de muchos militantes ha dejado con déficit de resortes sociales a la administración de Daniel Ortega en la actualidad.

Con aciertos y Desaciertos en la política social, algunas veces errático y otras pendular en las medidas económicas, ruptura con las organizaciones europeas que apoyaban la política social del Estado pero condicionándolo, concentración excesiva de las facultades de otros órganos de gobierno en la figura presidencial e intervención en las elecciones recién realizadas en 2008 que dejó un sabor de fraude por parte del gobierno,... todo ello desalienta a los sectores populares para depositar la total confianza en el Sandinismo, sin embargo aun sigue siendo un espacio de maniobra acotado para la izquierda.

Dentro de los vaivenes y actuaciones pendulares de la administración de Daniel Ortega, los Estados Unidos, principalmente a través del embajador Robert Callahan, pretenden consolidar la oposición y promover el derrocamiento del gobierno Sandinista. Callahan, dice la especialista Eva Golinger, “pertenece a un selecto grupo de diplomáticos norteamericanos especialistas en operaciones psicológicas, algunos de los cuales son movilizadas desde el Pentágono, poco antes de que en los países ocurran golpes de Estado y acciones desestabilizadoras.” El embajador norteamericano, además, colabora en el grupo de John D. Negroponte y Charles Shapiro, dos piezas del intervencionismo militar norteamericano en el área.

Honduras ha sido la pieza del rompecabezas que altera la lectura de Centroamérica y reposiciona a la región en la mesa de los debates y las argumentaciones académicas. Durante años, la vida política parecía estar inalterable. Mientras el resto de la región inauguraba una etapa distinta a la conflictividad armada, en Honduras, Rafael Leonardo Callejas gobernaba de 1990 hasta 1994 sin sobresaltos, apegado a los lineamientos que le sugerían los organismos internacionales: abrió el país a las inversiones extranjeras en el rubro de las hidroeléctricas y terminó acusado de corrupción y enriquecimiento ilícito. Le sucedieron Carlos Roberto Reyna (1994-98), de corte liberal y defensor de los derechos humanos, y luego Carlos Flores Facussé (1998-2002), empresario y propietario del periódico La Tribuna,

proactivo defensor de los intereses norteamericanos en la región y cercano servil de los militares, miembro de las diez familias que dominan la economía del país.

Los enconos y la ola de violencia que vivía el país producto del desempleo, el monopolio excesivo, el incremento de bandas delictivas ligadas a funcionarios de gobierno y familias ponderosas, militares involucrados en robo y tráfico de autos enrareció el ambiente; después del violento asesinato de su hijo, el empresario Ricardo R. Maduro fue nominado candidato presidencial por el Partido Nacional y ganó la presidencia para el período de enero 2002 a 2006; a principios de este último año, entregó el poder gubernamental a Manuel Zelaya Rosales, del Partido Liberal. Zelaya ha sido un hombre de familia acaudalada sin perfil de izquierda pero de manera inesperada dio un giro en su administración con medidas políticas progresistas: incrementó los salarios de manera significativa, abrió la posibilidad de realizar compras de medicamentos a Cuba en detrimento del monopolio de la industria farmacéutica internacional, ingresó el país a la Alianza Bolivariana para las América (ALBA), se acercó a Venezuela para obtener petróleo barato y crédito blando bajo la organización de Petrocaribe; abrió canales de comunicación y acción con los movimientos sociales, cerró la posibilidad de concesionar tierras y minas a empresas transnacionales de Estados Unidos y Canadá y había planeado la recuperación de Palmerola como aeropuerto civil.

Ante el auge de gobiernos de izquierda en América Latina, los Estados Unidos bajo la administración Bush se preparaban para reinstaurar en el área un férreo control militar de nuevo tipo como son las dictaduras y gobiernos policiales donde el parlamento funciona sin autonomía y el ejecutivo no cuenta con facultades sino que somete su capacidad administrativa a los organismos empresariales internacionales, la vigilancia se interconecta con centros de información policiales regionales y comparten base de datos para cortar los circuitos de sublevaciones y movimientos sociales populares que tienen como objetivo alcanzar el poder.

El 28 de junio de 2009, Centroamérica entró de nuevo con fuerza en la polémica política y académica tanto a nivel nacional como internacional con el golpe de estado impulsado contra el gobierno de Manuel Zelaya. Cuando se realizaron las elecciones programadas para el 29 de noviembre 2009 en que el gobierno de facto de Roberto Micheletti le ha concedido el triunfo a Porfirio Lobo, del Partido Nacional, sin que Zelaya haya sido restituido como presidente del país, quedan muchas interrogantes sobre el

proceso que vive el país; los movimientos sociales exponen sus preguntas y respuestas en la calle, problematizan a partir de lo que la agenda política ofrece cada día; la salida ante el golpe y las elecciones sigue siendo una interrogante que arrojará muchas discusiones y argumentos que harán del país y de la región un actor protagónico en la política internacional.

Mientras ello sucede, países acólitos del militarismo como Colombia, Perú, Panamá, Israel y los Estados Unidos se complacen y avalan las elecciones; otros países guardan mutismo porque temen que esa experiencia se pueda experimentar en la nación que gobiernan; la moneda está en el aire y la policialización de los Estados sigue su curso en Centroamérica y en gran parte de América Latina

Robinson Salazar Pérez
Buenos Aires, Argentina
Noviembre de 2009

INTRODUCCIÓN GENERAL

Ignacio Medina Núñez¹
Director y Coordinador de la edición

“En sentido primario, el hombre que aspira a algo vive hacia el futuro; el pasado sólo viene después, y el auténtico presente casi todavía no existe en absoluto. El futuro es lo temido o lo esperado; según la intención humana, es decir, sin frustración, sólo contiene lo que es esperanza”

Bloch Ernst², 1977

La muerte de Simón Bolívar en 1830 fue también la muerte del proyecto de la gran patria americana, al quedar Hispanoamérica convertida en los estados desunidos del sur; el caso específico de la región Centroamericana fue el ejemplo extremo de la multiplicidad de naciones en que se convirtió la antigua Nueva España. Centroamérica no incluía en aquel momento el territorio de lo que hoy es Panamá —puesto que en ese tiempo pertenecía a la región que luego llegaría a ser Colombia—; al independizarse de España, proclamó el 5 de enero de 1822 su incorporación al imperio mexicano de Agustín de Iturbide; con el fracaso de este imperio, el 1 de julio de 1823, fue proclamada la República Federal de Centroamérica, que incluía los territorios de los futuros estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Las cinco montañas que se expresaban en su bandera y que luego tuvieron como símbolo de la unidad al presidente de la Federación, Francisco

¹ El Prof. Medina es doctor en ciencias sociales, profesor en el ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara, México) y en la Universidad de Guadalajara. Email: nacho@iteso.mx

² Para Ernst Bloch en su libro *Das Prinzip Hoffnung*, no es cuestión de escamotear el presente ni soslayar el pasado para vivir en un mundo de fantasías sobre el futuro, sino de concebir lo nuevo en mediación con lo existente. Es la idea que prevalece para los autores de este libro al pensar en Centroamérica, una región que puede ir avanzando lentamente hacia mejores etapas de desarrollo y convivencia democrática (Bloch Ernst. El principio Esperanza. Tomo I. Ediciones Aguilar. España. 1977).

Morazán, poco a poco se fueron distanciando cuando cada estado fue proclamando su propia independencia hasta el último, que fue El Salvador, en 1842. El fusilamiento de Morazán en ese año reflejó la muerte de las aspiraciones de unidad en una pequeña región dentro de la gran Hispanoamérica.

Con ello, cada país de la región del centro de América ha seguido su propia historia nacional, aunque se han plasmado los esfuerzos del inicio del Mercado Común Centroamericano (MERCOSUR) en 1960, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) en 1991, el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) en 1993 y la Corte Centroamericana de Justicia en 1994, en algunos de los cuales participa incluso Panamá.

Aunque existen varios anhelos de integración expresados sobre todo en el SICA, la región centroamericana tiene, sin embargo, diversos escenarios en cada una de las naciones, en donde las preguntas más importantes están más bien enfocadas hacia su posible desarrollo económico y hacia las diversas formas de convivencia política que buscan transitar del autoritarismo hacia una mejor democracia representativa y social.

En general, el panorama de la región no es muy alentador en un contexto en donde han existido tres transiciones importantes: de situaciones de guerra abierta en algunos países (Nicaragua, El Salvador y Guatemala) a diversos procesos de paz; del militarismo dominante en donde gobiernos como el de Guatemala y El Salvador fueron calificados como los peores violadores de los derechos humanos en la década de los 70s y 80s hacia una nueva etapa de gobiernos civiles electos mediante elecciones abiertas; de una situación de economías cerradas hacia una etapa de libre mercado donde han predominado los programas severos de ajuste.

Las dos primeras transiciones, aunque muy limitadas, han sido positivas para enfrentar actualmente los procesos de globalización, pero la tercera referida a la inserción en una economía de libre mercado plantea muchas interrogantes sobre el modelo de desarrollo de la región, especialmente cuando la pobreza y la violencia, con la actuación de los gobiernos civiles, no se ha detenido sino que se ha profundizado en muchos casos, y sobre todo cuando han aparecido otros fenómenos que provocan mayor inestabilidad: así lo expresa el Informe Estado de la Región de 2008³: “La situación internacional que afronta el itismo se caracteriza por una corrosiva geopolítica de seguridad vinculada al narcotráfico, la creciente vulnerabili-

³ Así lo comprueba el Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible 2008. Un informe desde Centroamérica para Centroamérica, editado en Costa Rica. <http://www.estadonacion.or.cr/estadoregion2008/index.htm>

dad de la inserción económica internacional de los países más rezagados del área y los altos precios internacionales de los hidrocarburos y los alimentos. Ninguno de estos factores se había manifestado con claridad hasta hace poco tiempo” (Estado de la región, 2008: 47).

Desde el punto de vista comparativo, puede ayudar el uso del Índice de Desarrollo Humano (IDH) utilizado por los reportes de la ONU, en donde, a través de los indicadores de ingreso, educación y salud, se ha intentado medir la situación prevaleciente en cada país. Así, utilizando los mismos indicadores para todos los países, podemos ver cómo al interior de América Latina hay países que sobresalen como Chile, Uruguay y Argentina mientras que los peores indicadores se encuentran en los países de Haití, Guatemala, Nicaragua, Honduras y Bolivia. Para el área centroamericana, todos los indicadores nos siguen presentando el caso de Costa Rica que, en su calidad de vida, siguen teniendo el mejor nivel entre los centroamericanos, llegando a tenerlo incluso sobre México.

Índice de Desarrollo Humano 2007 en Centroamérica

Costa Rica	48
Panamá	62
El Salvador	103
Nicaragua	110
Honduras	115
Guatemala	118

Fuente: Índice de Desarrollo Humano, en IDR, 2007: 228-231

Con excepción de la relativa estabilidad de Costa Rica hacia donde migran constantemente los nicaragüenses, los diversos países centroamericanos experimentan factores de expulsión que hacen que la población busque mejores horizontes en Estados Unidos y México. La única solución propuesta desde el Norte ha sido el modelo de la Alianza del Libre Comercio de las Américas (ALCA) –cuestionado y detenido en forma global para América Latina en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata en el 2005– pero particularizado en la región a través de los tratados bilaterales con Estados Unidos por medio del Central América Free Trade Agreement (CAFTA). La globalización salvaje está arrollando a esa población de más de 30 millones de habitantes del centro de América, no tanto porque no haya algún crecimiento económico sino sobre todo por la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza social.

El Informe sobre la región centroamericana (Estado de la Región, 2008) hace esta síntesis de la situación en términos generales: “Durante los últimos años, todos los países de la región han mostrado, en promedio, tasas de crecimiento del PIB positivas, aunque no muy altas (inferiores al 5%), con fluctuaciones generadas por la coyuntura económica propia de cada país, condiciones climatológicas adversas y la situación económica internacional. La inflación promedio de los últimos años ha sido de dos dígitos, sin alcanzar niveles excesivos, pero con notables diferencias entre países. El Salvador y Honduras son los extremos de baja y alta inflación, respectivamente. Hay un importante problema de productividad, relacionado en buena medida con la baja dotación de capital humano y con el desempleo y el subempleo, que se traducen en PIB per cápita muy bajo (cerca de los US\$ 1,000). Hay diferencias por países, pues los PIB per cápita de Costa Rica y Panamá son cerca de tres y cuatro veces superiores a los de Honduras y Nicaragua, respectivamente” (Estado de la Región, 2008: sinopsis).

En la última década del siglo X, por otro lado, el panorama político parecía correr hacia la derecha en los gobiernos nacionales: después de la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en 1990 los gobiernos de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños fueron oligárquicos y con una total alineación con los Estados Unidos; en El Salvador se experimentaba el capital político del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) por haber llegado a ser la segunda fuerza electoral pero con incapacidad hasta el 2008 de conquistar el poder ejecutivo; en Honduras, permanecía el duelo tradicional político-electoral entre los partidos Liberal y Nacional, pero en la práctica ambos expresaban la permanencia del poder oligárquico en el modelo neoliberal; en Guatemala se sucedían gobiernos y partidos diferentes pero en el mismo escenario de violencia y narcotráfico; en Costa Rica, a pesar de la permanencia de un positivo sistema democrático, seguía en el poder hasta el 2006 el binomio de dos partidos –la Democracia Cristiana y el Partido Liberal– cediendo poco a poco las conquistas del antiguo estado benefactor. En los primeros años del siglo XXI, Manuel Rojas Bolaños, sociólogo político de la Universidad de Costa Rica, en la revista Nueva Sociedad de Marzo 2006, reafirmaba y vaticinaba el giro a la derecha entre los gobiernos de la región.

Esto último, afortunadamente, no ha sucedido y, por ello, en cierta medida, podemos hablar de cierta reactivación de movimientos sociales y

progresistas que se han llegado a expresar en posiciones de poder gubernamentales⁴ en toda la parte sur del continente. Para el caso de Centroamérica, tenemos los hechos siguientes: en Guatemala, en las elecciones presidenciales del 2007, perdió la ultraderecha del ex-general Otto Pérez Molina que pretendía imponer la mano dura en país y, con ello, pudo llegar al gobierno una declarada posición socialdemócrata con el presidente Álvaro Colom; en Honduras, perdió a finales del 2005 el conservador Partido Nacional y ganó el Partido Liberal que se estuvo acercando a las posiciones de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) hasta el momento del golpe de estado que derrocó al presidente constitucional Manuel Zelaya en junio de 2009; en Nicaragua, en el 2006, perdió Eduardo Montealegre, el empresario de la derecha, y volvió al poder ejecutivo el FSLN con Daniel Ortega, después de varios intentos infructuosos del mismo candidato; en Costa Rica se rompió el bipartidismo tradicional y triunfó con escasos votos el Partido de Liberación Nacional sobre una naciente fuerza autodenominada de izquierda; en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se había convertido durante muchos años en la segunda fuerza política del país hasta que ganó las elecciones presidenciales en marzo del 2009 con su candidato Mauricio Funes. En el caso de Panamá, tenemos que desde el 2004 no gobernaba la derecha tradicional subordinada tan abiertamente a los Estados Unidos después de la invasión del 20 de diciembre de 1989 sino una tendencia centrista con Martín Torrijos, el hijo del general que logró la importante firma de los tratados Torrijos-Carter, sobre el traspaso de la soberanía del canal de los norteamericanos a los panameños; sin embargo, en las elecciones del 2009 ha llegado al poder ejecutivo, a partir del primero de julio, la derecha de un poder empresarial con el nuevo presidente Ricardo Martinelli para reafirmar en su discurso de toma de posesión “los ideales de una economía libre, desafiando el péndulo ideológico de Latinoamérica”.

Dentro del contexto general de la región, varios participantes en la Mesa Redonda “Centroamérica en Movimiento” dentro del Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) realizado en Buenos Aires, Argentina, del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2009,

⁴ Se trata de una tendencia en el ámbito latinoamericano, especialmente a partir de los resultados de procesos de elecciones presidenciales del 2005-2008, en donde bajo las mismas normas de la democracia electoral encontramos el ascenso de gobiernos de izquierda. Un panorama de esta tendencia regional se encuentra en el libro de Ignacio Medina Núñez “Las elecciones presidenciales en América Latina: el ascenso de una izquierda heterogénea”, publicado por elaleph.com, en Buenos Aires, Argentina, en 2009.

coordinada por el sociólogo el Dr. Robinson Salazar, hemos organizado nuestros trabajos escritos para presentar esta publicación, que está organizada de la siguiente manera.

Se inicia con el trabajo de Robinson Salazar con el tema la “**Paramilitarización de las pandillas en Centroamérica**”, en donde el autor describe cómo se ha ido extendiendo el fenómeno de los grupos juveniles llamados “maras” pero también se analiza cómo se va dando un proceso de paramilitarización (concepto que se refiere a la paramilitarización de las maras) de estos grupos por parte de diversos gobiernos. En la práctica, se está dando una comunión de redes ilícitas con los entramados institucionales especialmente en los mandos policiales.

Sobre Guatemala, sabiendo que desde el triunfo del 2007 sobre la tendencia militarista de la derecha con su representante, el ex-general retirado, Otto Pérez Molina, donde gobierna actualmente el presidente Álvaro Colom, de tendencia socialdemócrata, se presenta un artículo de Robinson Salazar y David Martínez-Amador, con el título “**Guatemala entre rosas y piedras: lecciones del escándalo Rosenberg**”. Los autores quieren hacer un recuento y análisis de la crisis política generada en el país, a raíz del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg: cuatro días después de su muerte, el 11 de mayo de 2009 apareció públicamente un video en donde el implicado acusaba directamente de su posible muerte al presidente de la República y otros personajes. El artículo analiza la politización de este acontecimiento y cómo fue aprovechado por la élite empresarial y la derecha intelectual en Guatemala para ganar posiciones de poder frente al gobierno de Álvaro Colom.

Para el caso de El Salvador ofrecemos tres artículos de análisis. El primero es de Ignacio Medina y se titula “**Elecciones presidenciales en El Salvador 2009: un nuevo proyecto nacional**”, en donde se hace un recuento histórico sobre la participación electoral del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) desde que se insertó en la vida política como partido legalizado después de los acuerdos de paz de 1992 para mostrar luego los resultados específicos de su triunfo sobre el partido de la ultraderecha Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) en los comicios de abril del 2009.

Otro escrito sobre el mismo país es de Nelson de Jesús Quintanilla Gómez, quien nos ofrece el tema “**Elecciones 2009 y campaña política: desafíos para la democracia salvadoreña**”; su idea central es sistematizar el proceso electoral salvadoreño del 2009 destacando principalmente

las diversas formas de la campaña de los partidos políticos contendientes y otras organizaciones sociales tratando de explicar los principales desafíos para la democracia salvadoreña; se parte de la convocatoria oficial del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pasando por la definición e inscripción de las respectivas candidaturas y luego se profundiza en las diversas formas de campaña política de las fuerzas políticas contendientes. Al final, destaca los avances principales sobre el proceso electoral y los aportes para la democracia en el marco de la campaña política, sobre todo el papel de la ciudadanía y del pueblo en general a favor de un cambio que pudo derrotar el miedo y el fraude electoral montado por la derecha.

El tercer artículo sobre este país se titula “**Democracia, violencia y crecimiento urbano en El Salvador**”, de Rudis Yilmar Flores Hernández, quien parte del contexto del país del siglo XX en donde se vivía una democracia solamente representativa y no participativa que, en muchos casos, sufrió de numerosos fraudes electorales; ubica el proceso de transición a la democracia después del conflicto armado entre gobierno y organizaciones guerrilleras en donde se han afrontado graves problemas económicos y también el de la delincuencia e inseguridad. Señala con claridad cómo, con los gobiernos de ARENA durante 20 años, el modelo económico produjo diferencias profundas en las formas de vida de la población y provocó la desaparición casi en su totalidad de rubros como la agricultura que propició procesos de migración, provocando todo un crecimiento urbano que se aprecia desde los asentamientos urbanos, hasta las construcción de las ciudades cerradas.

Pasando al caso de otro país, Honduras, este libro nos ofrece otros tres escritos que tratan de profundizar de manera especial en la situación política posterior al golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya en junio del 2009. El primer de ellos se ubica en el marco internacional, en donde, Marco A. Gandásegui, hijo, así titula su trabajo: “**Las interrogantes sobre el golpe de estado en Honduras: ¿quién maneja la política exterior de Estados Unidos?**” Es cierto que la comunidad internacional, especialmente la Organización de Estados Americanos (OEA) ha condenado la destitución violenta de un presidente electo constitucionalmente, pero la pregunta fundamental es sobre la posición de los Estados Unidos con el nuevo presidente Barack Obama, quien parece estar manteniendo una posición muy tibia de condena a los golpistas y a favor de restituir al presidente constitucional.

Posteriormente, Robinson Salazar, a través de su escrito “**Honduras: golpe de Estado y alteración de los escaques del ajedrez político en América latina**”, nos muestra la importancia de la situación en este pequeño país centroamericano para todo el resto de la región latinoamericana en el inicio del siglo XXI; en esa nación no solamente están en juego los intereses locales sino el destino de todo el subcontinente debido a la posibilidad de que el rumbo hacia una gobernabilidad democrática vuelva a bloquearse a través de golpes militares.

Sobre este mismo país pero visualizando sobre todo la correlación interna de las fuerzas sociales y políticas, encontramos el artículo de Roberto Briceño titulado “**Honduras: la dictadura de un bloque de clases oligárquicas y el movimiento de resistencia popular**”. El autor señala que el neoliberalismo objetivado en el Programa de Ajuste Estructural de la Economía favorece la concentración del capital y la desigualdad social y, a través de ello, consolidó una oligarquía concentradora de poder y deslegitimadora de la democracia como forma de gobierno representativa. Afirma que la formalidad institucional de democracia electoral ha generado la contradicción entre las fuerzas que pretenden avanzar hacia la democracia real y las fuerzas del bloque dominante que continua ejerciendo poder bajo las aparentes formas democráticas de procesos electorales con participación electoral decreciente. El golpe de Estado ha evidenciado la distorsión, corrupción que deslegitima el poder constituyente, contrario a las expectativas de desarrollo de procesos de avance hacia una democracia con amplia participación popular.

Llegando a Nicaragua, nos encontramos con uno de los países más pobres de América Latina, pero en una situación política donde gobierna desde 2007 de nuevo el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con el presidente Daniel Ortega. El FSLN derrocó la dictadura de la familia Somoza en julio de 1979 y gobernó el país 11 años hasta 1990 cuando perdió las elecciones; volvió a competir electoralmente por la presidencia en dos ocasiones hasta que en el 2006 volvió a ganar el gobierno. El artículo de Luis Serra Vázquez titulado “**La dinámica política en Nicaragua**” analiza, dentro del marco general socio-económico del país, la situación y la actuación del nuevo período del Sandinismo en el siglo XXI: el sistema político nicaragüense junto a la dinámica de los actores sociales y políticos, particularmente a partir del triunfo del FSLN en las elecciones presidenciales del 2006; concluye que, aunque hay avances en los indicadores econó-

micos de la población, hay mucho que avanzar en relación al autoritarismo y a las reglas institucionales de un sistema democrático.

El último artículo de este libro se centra en Panamá. Marco A. Gandásegui, hijo, nos ofrece su trabajo sobre **“El militarismo en Panamá”**. Después de la invasión norteamericana de 1989, se sucedieron varios gobiernos de derecha hasta llegar a la presidencia de Mireya Moscoso; ésta fue relevada por la tendencia centrista de Martín Torrijos, hijo del general que negoció los Tratados del Canal para que se traspasaran de la administración norteamericana a la panameña el último día del año 2000; pero, las elecciones del 2009 transitaron hacia el gobierno derechista y empresarial de Ricardo Martinelli, quien, a partir de su toma de posesión el primero de julio, prometió encausar al país al libre comercio enfrentando la tendencia generalizada de la región hacia la izquierda. En toda esta época, Gandásegui muestra la persistencia norteamericana de instalar bases militares aeronavales en territorio panameño, conforme a su consistente estrategia imperial que se extiende hacia el Gran Caribe y Sudamérica.

Muchos lectores podrán advertir con claridad que en el tratamiento sobre Centroamérica no van a encontrar en este libro un capítulo especial sobre Costa Rica como país. Podemos decir que ni siquiera en el tratamiento por país aspiramos a ofrecer un análisis exhaustivo debido a que quedan por mostrar y analizar numerosos datos nacionales y regionales, pero la razón formal es que en nuestra participación en la mesa “Centroamérica en Movimiento” dentro del congreso de ALAS 2009, la mayor parte de la discusión se centró en Honduras y El Salvador. Se puede observar en este sentido que, la mayor parte de los escritos están dirigidos a estos dos países.

En el caso de Costa Rica, encontramos en el 2006 una situación política coyuntural muy importante porque, por primera vez, se rompió el bipartidismo tradicional entre el Partido de Liberación Nacional (PLN) y el Partido de la Unidad Social Cristiana (PUSC); estos dos partidos que expresaban una contradicción continua entre liberales y conservadores se traspasaban el poder del gobierno cada determinado tiempo y, sin embargo, en el 2006, los demócrata cristianos del PUSC fueron relegados por la población a una posición minoritaria cuando el PLN estuvo a punto de perder el gobierno con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y su candidato Ottón Solís (solamente un punto porcentual de diferencia con Oscar Arias, quien fue oficialmente declarado el candidato ganador). Gobierna desde entonces el presidente Arias con un marcado acento neoliberal como lo

mostró en toda la maquinaria gubernamental para ganar la consulta sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; sin embargo, la política y la participación ciudadana se han agitado en el país para presionar por cambios en el modelo económico, a través de un sistema democrático estable por varias décadas.

Esperamos ofrecer, de cualquier manera, un acercamiento analítico sobre ciertos problemas de la región y sobre algunos países en especial. Estamos abiertos al debate desde las posiciones que expresamos los autores en cada uno de los artículos, sabiendo que la polémica es parte de las ciencias sociales. Nuestra esperanza y nuestra lucha están, sin embargo, en el imaginario de un mejor desarrollo de nuestros pueblos con mayor participación de las organizaciones populares en las decisiones gubernamentales.

PARAMARALITARIZACIÓN DE LAS PANDILLAS EN CENTROAMÉRICA

Robinson Salazar Pérez⁵

*Al amigo Enrique Álvarez
Quien alentó el contenido del artículo*

Tres premisas y una transversalidad componen el cuadro problematizado dibujado a través de un mapa conceptual que navega por tres campos temáticos: pandillas juveniles, narcotráfico y paramilitarismo. La argumentación transita por otros núcleos especializados: Seguridad, Narcotráfico y Militarismo, permitiéndonos construir razones y argumentos hibridados para esclarecer este nuevo fenómeno en estructuración en varios países de América Latina, aunque su producto más acabado está en Centroamérica. El concepto de “Paramaramilitarización” es acuñado por el autor a partir de la participación y alianza de las “Maras” en la red del crimen organizado, en especial con los paramilitares en El Salvador y Honduras, en trabajos de limpieza social, hostigamiento y ajusticiamiento a líderes comunitarios en sectores populares.

Pandillas: Definición

Las maras “tienen” una estructura organizacional laxa, articulada bajo el eje de la amistad, las fidelidades, solidaridad, afectos compartidos en una territorialidad específica, donde miembros del conjunto (homie o mareros) producen liderazgos en células delimitadas por calles, zonas o barrios (cli-

⁵ El Dr. Salazar es profesor investigador en la Universidad Autónoma de Sinaloa y director de la Red de Insumisos Latinoamericanos www.insumisos.com Correo electrónico: insumiso2000@yahoo.com.mx

cas) que le prestan una mayor funcionalidad a la comunicación, desenvolvimiento y acciones colectivas de las maras.

Su origen no tuvo un fundamento comportamental delictivo, tampoco surgió bajo el predominio de una acción delincencial, simplemente fue una agregación grupal cargada de solidaridad recíproca, con pertenencia en el barrio, ocupante de espacios públicos en actividades lúdicas, recreacionales y de intercambio.

Durante el transcurso de la guerra, el Estado abandonó gran parte de sus actividades substantivas. La carencia de servicios públicos, el difícil acceso a la educación, el achatado cuadro de oportunidades para los jóvenes, la pobreza, la represión desatada contra todo aquel que tuviese entre 13-25 años, el rompimiento de los hilos asociativos en las comunidades populares, pobres y marginadas, la prohibición de asociarse, la pérdida paulatina del sentido gregario y de responsabilidad colectiva geoespacial rompió poco a poco el sentido comunitario y fue desimbolizando al sujeto y orientándolo a conciliarse con conductas delictiva, de sobrevivencia y confortativas.

Así surgieron las Maras. Indudablemente el poder destructivo, la violencia conjugada con el uso de armamento, los actos súbitos y con cuota de sangre fueron un aprendizaje de las Maras desplazadas a los Estados Unidos en la época de la guerra de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde por asunto de sobrevivencia, echaron mano a los saberes gregario-geoespaciales que guardaban en su acervo de conocimiento y lo pusieron en práctica en ese país; sin embargo, los vínculos con otras pandillas de origen asiático, afro-americanas y redes de narcotraficantes las indujo a combinar formas de trabajo, actividades híbridas de licitud-ilicitud, incursionar en el crimen, el despojo y hasta en bandas de traficantes. Fueron un producto reelaborado y de mayor contundencia delictiva en los años 90-2000.

Estructura organizacional

Cuenta con un soporte estructural de tipo piramidal, jerárquico y toma de decisiones vertical. Desde sus inicios, quedó acentuado el liderazgo unipersonal en el miembro osado, con iniciativa para actuar, resuelto para decidir y sin temor para imponerse.

Quien gozaba y esgrimía esas cualidades asumía el papel de **Primera Palabra o líder**, conocidos en el argot popular como **Ranflero** (Ranfla =carro, el que guía), quien da órdenes y establece las reglas del juego.

Supeditado al Ranflero, estaba la **Segunda Palabra** o ejecutor de las órdenes recibidas y más abajo la **Tercera Palabra**, quien es más cercano a la raza, al grupo o la pandilla, cuyo trabajo es bautizar con seudónimo a cada miembro (poner la taca); algunas veces asumía también el papel de tesorero, distribuyendo tareas o trabajos específicos y recibiendo el dinero obtenido de los operativos sin mediar excusa alguna.

La primera línea de la pirámide organizacional no sólo cumple tareas de orden, sino que gana el lugar o puesto de acuerdo a la gama de actividades, el arrojo, las habilidades y redes de complicidades tejidas para erigirse como un líder.

Función por responsabilidad. Cuadro jerárquico

La **Primera Palabra** ejerce un control estricto sobre los homie y les inculca la voluntad férrea de ofrecer la vida en caso de enfrentar una ofensa en la clica o barrio; así mismo, provee las armas, siembra los principios del código de solidaridad y cohesión interna, vela por la vigencia y permanencia de un colectivo hermanado, es rector y vigilante de las normas y disposiciones internas y aplica la disciplina cuando hay alteración del orden y evita las conductas impropias.

La **Segunda Palabra** tiene como función remplazar o sustituir a la Primera palabra en caso de ausencia, por encarcelamiento o muerte. Mientras no sea desaparición definitiva, la Primera Palabra mantiene el control, el signo de líder y envía señales o mandato.

La **Tercera Palabra**, quien asigna los seudónimos, realiza dicha tarea después de haber cumplido una misión u orden: el homie bautizado; esto quiere decir que el apodo no es entregado por afecto, sino ganado en la realización o cumplimiento de una orden de cierto grado de dificultad (Álvarez, Enrique, 2006). En su desempeño de tesorero, guarda el dinero que sirve para atender determinadas necesidades, entre ellas la compra de ataúdes cuando algunos de ellos mueren en su oficio de marero, adquieren armas, rentan casas de resguardo, canalizan apoyos en excarcelación, pagar fianzas, multas, servicios de abogados, apoyar a la familia en caso de muerte de un homie, compra de ropa o calzado a los miembros de la clica si lo requieren, préstamos entre la raza en caso de urgencia o de atención a la salud, siempre y cuando todo el dinero prestado sea devuelto en los plazos acordados; de lo contrario, hasta la vida pueden perder por el abuso.

Una parte del dinero atesorado es asignado a caja chicas de la **Primera y Segunda Palabra** y cubren los gastos necesarios que le permiten legitimarse ante la comunidad.

La legitimización social con la pertenencia geoespacial está enraizada con las actividades desempeñadas por los homies en las clicas o barrios y/o calles donde están inscritos, lugar donde realizan labores de limpieza, equipan con tambos o toneles donde depositan la basura, podan arboles, en caso de desastre natural colaboran en la evacuación, cuidan la escuela y su equipo, evitan robar o delinquir dentro del territorio demarcado como suyo, compran pintura para señalización de calles, nombre de la colonia o barrio, respetan a las mujeres jóvenes y adolescentes de la clica y sus tropelías; robos y riñas son desarrolladas en territorio ajeno a la espacialidad en donde residen.

Aunque es notorio el curso ilícito del dinero aplicado en las necesidades de la clica o barrio, no es censurado por la comunidad porque no trae afectaciones a sus precarias propiedades e intereses individuales y colectivos.

El Flujo de órdenes está canalizado hacia abajo como toda relación vertical y quienes reciben las directrices emanadas de la Primera, Segunda y tercera Palabra son los colaboradores o “soldados” mareros encargados de tejer las redes de trabajo cotidiano, tareas de mandadero, vigilancia, seguimiento, traslados de recursos materiales, información que requiera para mantener el control de la clica y apoyo a gestiones de las tres primeras líneas de mando, con el objeto de ganarse la confianza y escalar en la pirámide de la organización a través de la confianza ganada y los riesgos asumidos en los oficios realizados.

También le denominan **mitins** las labores mareras; sin embargo, la mayor parte del oficio de mandadero lo realizan hombres, aunque no dejan de participar “bichas” o mujeres pero su representación es baja dado que la equidad de género es un déficit dentro de la organización. En algunas clicas, no todas, promueven el abuso sexual, y el ritual de inicio se da cuando una “bicha” es compartirla sexualmente entre el grupo de líderes.

Una vez iniciados, hombres o mujeres, deciden por voluntad propia su participación de tiempo completo, parcial o esporádica; ello no implica dejar de reunirse frecuentemente en las calles o casa de seguridad para consumir alcohol, drogas, escuchar música, hablar “caliche” el lenguaje típico; intercambian experiencias, saberes, y practican las reciprocidades alimentadoras de toda vida organizacional.

La organicidad obtenida no es de larga data, por las características de su comportamiento en una vida súbita por el riesgo que implica actuar en la ilicitud; el uso de armas se da casi siempre en todos los operativos, y el arrojamiento de los jóvenes entre los 12 a los 25 años los obliga a estar en permanente acoso con la muerte. También existen los mareros adultos entre los 40 y 50 años, pero su trabajo es menos riesgoso y funcionan como asesores o consejeros.

La vida súbita impide construir una visión estratégica, pero no es una carencia sólo de ellos, también es parte de la vida cotidiana de los sectores populares, pobres y marginados que viven en permanente incertidumbre agobiadora; en cualquier momento pueden perder el empleo, la vida, sus pocas pertenencias y hasta un miembro de la familia. Así mismo está confccionado el Estado sin visión estratégica ante los grandes problemas nacionales, las contingencias o las demandas ciudadanas, inculcando una cultura política cortoplacista, mediocre, vulnerable y sin capacidad resolutive.

Controles organizacionales

Los grifos de control de acceso a la organización están habilitados desde el momento en que pretenden ingresar; existen diversas rutas de ser miembro marero, desde presión de amigos o círculo de vecinos del barrio hasta por la necesidad de sentirse protegido y atendido por una red de afectos y solidaridades; lo mismo existe la posibilidad de ser parte por obtener un reconocimiento dentro de la comunidad donde vive, hasta la de contar con un ingreso o recurso económico para solventar necesidades personales y hasta familiares, no obstante existen lo que han decidido pertenecer a las maras por una actitud temeraria, pasional, osada, valiente, por interés de tener y ejercitar poder y/o construir una identidad o reconocimiento ante la comunidad en que está inscrito.

No es necesario para ingresar proceder de sectores pobres o marginados, también existen mareros hijos de policías, funcionarios de gobierno, hijos de maestros y de extracción social solventada; no obstante la extracción social no es un signo evaluado a la hora del ingreso ni da mayor oportunidades, todos deben cumplir con el ritual de inicio y someterse a las reglas del juego establecidas.

Las pruebas vigentes antes de ingresar como miembro pleno son: Reñir con un enemigo seleccionado de antemano, eliminar físicamente a una persona, llevar a cabo un hurto, robo, asalto a mano armada o sustraer alguna mercancía de almacén o negocio establecido.

Son desafíos que tiemplan el espíritu, los hace inmune ante el miedo, desafían la angustia y el temor, están entregados a la osadía y se convierten en seres valientes. Entre más faltas, atentados cometen contra el régimen legalmente establecido, van ganando mayor peso y confianza dentro de la organización marera.

A pesar de que los tatuajes y la vestimenta con sus colores seleccionados son moda obligada, existen casos en que algunos no se apegan a esa exigencia dado que su relación es de tiempo parcial o intermitente, lo distintivo y obligatorio es el lenguaje, medio de comunicación eficaz para controlar el territorio a través de sus particularidades y señas o palabras claves de acceso a la clica o casa de seguridad.

La organicidad con extensión de ingreso económico de manera ilícita es una particularidad agregada en los últimos seis años, porque instrumentan acciones propias del paramilitarismo como los chantajes, vacunas, extorsiones, venta de servicio para brindar seguridad ante las incursiones de otras pandillas y cobro de deudas a través de la violencia. Los comportamientos agregados han posicionado a las Maras en un entorno de mercado de violencia donde las redes ilícitas de las maras y de otras organicidades de perfil similar comparten acciones, intercambian saberes, experiencias, miembros y delitos, dándose una trama de interpenetración entre ellas pero a su vez desnaturalización de sus esencias orgánicas.

Indudablemente la diseminación de las pandillas fue foco de alarma en los distintos segmentos sociales, principalmente en los ligados al comercio, pequeño y mediano productor y sectores medios que sufrieron los impactos de las nuevas formas de operar; así mismo, los medios de comunicación se ensañaron contra ellos, alentados por las nuevas políticas públicas del Estado policial y, desde sus micrófonos y noticieros, preñaron el ambiente de opinión pública, conjuntamente con la intervención de los medios de comunicación, quienes sacaron provecho de este problema asocial derivado del achatamiento del Estado y las desresponsabilidades sociales asumidas.

Narcotráfico y mercado

El crimen organizado, principalmente el eje del narcotráfico vio en las pandillas maras de Centroamérica y el sur de México la oportunidad de enrolarlas en el negocio de la distribución de la droga, especialmente en el mundo del narcomenudeo, habilitando de esta manera dos estrategias: una, que trabajaran en forma de redes, propio de la era de la globalización en

que está desterritorializado el traslado y comercio de la droga; dos, aprovechar la estructura orgánica de las maras y abrir un zaguán que lo colocara en mejor posicionamiento para presionar autoridades, habilitar rutas, incursionar en sectores populares, abrir nuevos mercados y evitar las afectaciones en los decomisos.

El narcotráfico encontraba una etapa de expansión y diversificación en la década de los noventa, la abundancia de las drogas sintéticas, la construcción de nuevos núcleos de poder diseminados, desembarazar a los carteles de Colombia, agregar un plus valor a los aperturistas de nuevas rutas y mercados emergentes, encarecer el valor de la droga pero así mismo distribuir de manera ampliada los ingresos utilizando dos campos: las pandillas y el andamiaje institucional del Estado; con ello se corrompió y destruyó la capacidad de acción del ente público.

Un nuevo escenario estaba montado en el negocio del narcotráfico, principalmente por el ingreso de anfetaminas y meta-anfetaminas, entre otras.

Tipos de drogas y sus efectos

Nombre de Droga:	Alcohol
Tipo de Droga:	Depresivo
Datos para los Padres:	Veinticinco por ciento de los estudiantes en octavo grado admiten haberse intoxicado por lo menos una vez.
Otros Nombres:	Cerveza, vino, licor, booze
Forma de Consumo:	Oral
Efectos:	Adicción (alcoholismo), mareos, nausea, vómitos, resacas, dificultad de expresión, sueño interrumpido, problemas motores, conducta agresiva, problemas al embarazo, depresión respiratoria y muerte (en dosis altas).
Nombre de Droga:	Anfetaminas
Tipo de Droga:	Estimulante
Datos para los Padres:	El uso crónico puede causar psicosis con síntomas de esquizofrenia.
Otros Nombres:	Speed, uppers, ups, hearts, black beauties, pep pills, capilots, bumble bees, Benzedrine, dexadrine, footballs, biphetamine
Forma de Consumo:	Oral, inyectado, jalado o fumado.
Efectos:	Adicción, irritabilidad, ansiedad, presión alta, paranoia, psicosis,

depresión, agresión, convulsiones, pupilas dilatadas, mareos, falta de sueño, falta de apetito, malnutrición, altos riesgos al VIH, hepatitis y otras enfermedades contagiosas si es inyectado.

Nombre de Droga: **Meta-anfetaminas**

Tipo de Droga: Estimulante

Datos para los Padres: Algunos usuarios no duermen por 3 a 15 días.

Otros Nombres: Speed, meth, crank, crystal, ice, fire, croak, crypto, white cross, glass. "Ice" es el nombre que se le conoce en las calles para el tipo que se fuma.

Forma de Consumo: Oral, inyectado, jalado o fumado.

Efectos: Adicción, irritabilidad, agresión, hipertermia, derrames cerebrales, paranoia, psicosis, convulsiones, toxicidad en el corazón y los vasos sanguíneos, alucinaciones, arritmia, fornicación (la sensación de que insectos andan por debajo de la piel).

Nombre de Droga: **Ecstasy**

Tipo de Droga: Estimulante

Datos para los Padres: Es la droga más popular en fiestas nocturnas (llamadas raves) y es la más común de las conocidas como "designer drugs".

Otros Nombres: XTC, Adam, MDMA

Forma de Consumo: Oral

Efectos: Disturbios psiquiátricos como el pánico, la ansiedad, la depresión y la paranoia. Tensión muscular, náusea, visión borrosa, transpiración, palpitaciones elevadas, estremecimientos, alucinaciones, desmayos, escalofríos, problemas para dormir y falta

Nombre de Droga: **Ritalin**

Tipo de Droga: Estimulante

Datos para los Padres: Algunos niños la compran o se la roban a sus compañeros en la escuela.

Otros Nombres: Speed, west coast

Forma de Consumo: La pastilla es reducida a polvo y es jalada o inyectada.

Efectos: Falta de apetito, calenturas, convulsiones y dolores de cabeza severos. Alto riesgo al VIH, hepatitis y otras infecciones. Paranoia, alucinaciones, repetición de movimientos y tareas sin sentido excesivos, estremecimientos, tics musculares.

Nombre de Droga:	Herbal Ecstasy/Efredina
Tipo de Droga:	Estimulante
Datos para los Padres:	Ingredientes principales son la cafeína y la efredina.
Forma de Consumo:	Oral
Efectos:	Palpitaciones elevadas y presión alta. Ataques epilépticos, infartos, derrames cerebrales y muerte.
Nombre de Droga:	Designer Drugs
Tipo de Droga:	Estimulantes
Datos para los Padres:	El cambio estructural de las moléculas de una droga para crear una sustancia nueva resulta en lo que se conoce como “Designer Drugs”
Otros Nombres:	Synthetic heroin, goodfella
Forma de Consumo:	Inyectado, jalado o fumado.
Efectos:	Parálisis respiratoria instantánea. Alta posibilidad de sobredosis por su potencia. Muchos de los mismos efectos de la heroína.
Nombre de Droga:	Cocaína
Tipo de Droga:	Estimulante
Datos para los Padres:	Una droga muy adictiva. Uso frecuente puede producir la paranoia, alucinaciones, agresión, insomnio y depresión.
Otros Nombres:	Coke, snow, nose candy, flake, blow, big C, lady, white, snowbirds.
Forma de Consumo:	Jalado o disuelto en agua e inyectado.
Efectos:	Adicción, dilatación de las pupilas, presión y latidos del corazón elevados. Respiración elevada, ataques epilépticos, infartos, insomnio, ansiedad, inquietud, irritabilidad, temperatura elevada, muerte de una sobredosis
Nombre de Droga:	Crack
Tipo de Droga:	Estimulante
Datos para los Padres:	Una forma barata de la cocaína que puede ser aún más adictiva.
Otros Nombres:	Fumado.
Efectos:	Igual que la cocaína.
Nombre de Droga:	Heroína

Tipo de Droga:	Opiáceos
Datos para los Padres:	Los que usan la heroína rápidamente desarrollan una tolerancia a la droga en forma que necesitan más y más para sentir los efectos o para sentirse bien.
Otros Nombres:	Smack, horse, mud, brown, sugar, junk, black tar, big H, dope.
Efectos:	Adicción. Vocalización poco clara, paso lento, pupilas contraídas, párpados perezosos, problemas con la visión nocturna, adormecimiento, depresión respiratoria o falta de respiración, resequedad de la piel, infecciones epidérmicas. Alto riesgo a VIH, hepatitis y otras enfermedades contagiosas, si se inyecta.
Nombre de Droga:	PCP
Tipo de Droga:	Alucinógeno
Datos para los Padres:	Los cigarrillos de marihuana pueden ser bañados en PCP sin que el fumador se entere.
Otros Nombres:	Angel dust, ozone, rocket fuel, peace pill, elephant tranquilizer, dust.
Forma de Consumo:	Jalado, fumado, oral o inyectado.
Efectos:	Alucinaciones. Experiencias de desdoblamiento, problemas con la coordinación motriz, inhabilidad de sentir dolor, ataque respiratorio, desorientación, temor, pánico, agresión, alto riesgo al VIH, hepatitis y otras enfermedades contagiosas si se inyecta.
Nombre de Droga:	LSD (Lysergic Acid Diethyl amide)
Tipo de Droga:	Alucinógeno
Datos para los Padres:	El más común de los alucinógenos. Las pastillas normalmente son decoradas con diseños coloridos o personajes animados.
Otros Nombres:	Ácido, Acid, microdot, tabs, doses, trips, hits, sugar cubes
Forma de Consumo:	Oral o como gelatina/ líquido puesto en los ojos.
Efectos:	Temperatura y presión elevada, falta de apetito, falta de sueño, estremecimientos, alucinaciones crónicas.
Nombre de Droga:	Hongos
Tipo de Droga:	Alucinógeno
Datos para los Padres:	Muchos de los consumidores consiguen las esporas de los hongos por correo.
Otros Nombres:	Shrooms, caps, magic mushrooms

Forma de Consumo:	Masticados o hervidos y tomados como té.
Efectos:	Presión elevada, transpiración, náusea, alucinaciones.
Nombre de Droga:	Inhalantes
Datos para los Padres:	Cientos de productos caseros son jalados o inhalados para drogarse. Todos pueden ser tóxicos.
Forma de Consumo:	Los vapores son inhalados.
Efectos:	Dolor de cabeza, debilidad muscular, dolor en el abdomen, cambios drásticos en el humor, agresión, náusea, sangra la nariz, daño al hígado, el riñón y los pulmones, desequilibrios químicos peligrosos, falta de coordinación, fatiga, falta de apetito, se disminuye la capacidad de oír y la respiración; hepatitis o neuropatía periférica por uso constante.
Nombre de Droga:	Marihuana
Tipo de Droga:	En promedio, la primera vez que los adolescentes la prueban es a los 14 años.
Datos para los Padres:	Weed, pot, reefer, grass, dope, ganja, Mary Jane, sinsemilla, herb, Aunt Mary, skunk, boom, kif, gangster, chronic, 420.
Forma de Consumo:	Fumada o consumida.
Efectos:	Ojos rojos, boca seca, uso de razón limitado o afectado, razón del tiempo alterado, habilidades que requieren concentración o coordinación son afectadas, como manejar un auto; paranoia, ataques de ansiedad intensificados, percepción alterada, se dificulta el asimilar información nueva, problemas con el aprendizaje, la memoria, la percepción y el criterio, problemas con el habla, con escuchar, pensar, atención de información y resolución de problemas.
Nombre de Droga:	Esteroides
Tipo de Droga:	Los que la usan están sujetos a más de un 70% de efectos secundarios dañinos.
Datos para los Padres:	Rhoids, juice
Forma de Consumo:	Oral o inyectado al músculo.
Efectos:	Cáncer del hígado, esterilidad, rasgos masculinos en mujeres, y femeninos en hombres, agresión, depresión, acné, cambios de humor.

Nombre de Droga:	Tabaco
Datos para los Padres:	De cada 5 estudiantes en el doceavo grado, uno fuma a diario.
Efectos:	Adicción, problemas con el corazón, la laringe, el esófago, la vejiga, el páncreas, el riñón y la boca, cáncer pulmonar, enfisema y bronquitis crónica, aborto espontáneo, niños nacen pesando poco.

Fuente: <http://www.yosipuedo.gov/drugfree/drugeffects.html>

La variedad de drogas del cuadro anterior refleja la segmentalización del mercado, la variedad de precios, el volumen de la comercialización, la estructura organizacional, las grandes ganancias de sus ventas y la densidad del mercado; los promotores del mercado negro de las drogas, para obtener éxito, requieren del uso y complicidad del entramado institucional del gobierno y el mercado, dado que farmacias, laboratorios, centros de diversión, bancos, universidades, colegios, escuelas, policías, partidos políticos, ejercito, aduanas, puertos aéreos y marítimos, aerolíneas, transporte terrestre, casas de cambio, telefonía celular, vendedores ambulantes o buhoneros, gobiernos de los distintos niveles y autoridades burocráticas son agua del mismo río de complicidad y aceite para el engranaje perfecto de la maquinaria del narcotráfico.

La incorporación de las pandillas reedificó la estructura e invisibilizó a los protagonistas del gran negocio, enfermó a millones de consumidores y corrompió la base del Estado y su entramado institucional; sin embargo, los narcotraficantes buscaron bajo toda lid co-administrar el negocio con el Estado, no confrontarlo, dado que no es una organización declarada enemigo del ente político, por dos razones suficientes: por un lado, requiere del andamiaje institucional gubernamental para hacer lucrativo el negocio, además de no poseer la capacidad de producir ni reproducir la naturaleza de las instituciones porque construyen la base con depósitos de confianza ciudadana; por otro lado, no tiene un proyecto de Estado para confrontarlo con el vigente; por el contrario, lo fortalece con dinero, dinamiza la economía y comercio, impulsa el desarrollo inmobiliario, financia campañas políticas y últimamente presta su capacidad de tiro para paramilitarizar cuadros coadyuvantes en las acciones represivas de limpieza social como se observa en el caso de Colombia, México, El Salvador y ahora Honduras.

El narcomenudeo a través de células redes descentraliza el comercio, descongestiona la estructura administrativa, evade la persecución del líder, desterritorializa el poder, amplía la estructura de mandos medios, abre el

compás para que el narcotráfico opte por una forma de corporativo donde los mandos altos (capos de la droga, financistas, asesores de lavado y gestores ante el gobierno sean invisibles); los responsables de rutas, jefes de núcleos caso de Centroamérica y algunos casos de Argentina, Perú y entidades federativas de México trabajan en compartimentación y por ello desconocen a los jefes supremos. Los sicarios, escoltas de rutas, y transportistas de la drogas están expuestos y son negociables en caso de convenir con un gobierno para legitimar acciones gubernamentales.

De esta manera, las pandillas obtuvieron un mejor y mayor ejercicio de la autonomía porque manejan dos perfiles: en el narcomenudeo frente a las responsabilidades con el crimen organizado, y en acciones ilícitas de vacuna, “seguridad”, chantaje, secuestro y violencia común. Todo ello sucede en colaboración con gobiernos de derecha, principalmente en la estructura represiva: limpieza social, seguridad segmentada y delación.

Gobiernos de Derecha

América Latina en la actualidad deja ver tres tipologías de gobierno: los nacionalistas progresistas en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Nicaragua, sin saber todavía el comportamiento del nuevo gobierno en El Salvador en 2009; los de corte Estatal, sin desligarse del mercado como lo demuestran Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Honduras, y finalmente los de corte neoliberal ortodoxo donde están inscritos México, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

En este mosaico, entre los gobiernos de corte represor mayormente cuestionados están Chile, con el asunto de los Mapuches y los estudiantes secundarios; Colombia, con la guerra que pretende negar, Panamá con la agresión permanente a las comunidades indígenas por la destrucción de la ecología y el patrimonio comunitario, Costa Rica con la intransigencia de Oscar Arias Sánchez y la protección que brinda a muchos ex políticos perseguidos por la justicia de varios países de Latinoamérica; y México con superior cantidad de problemas e inferior capacidad de maniobras para enfrentarlos y en donde la derecha llegó con un lenguaje confrontativo, intolerante con sesgo de comportamiento militar y habilitando formas de poder ya enterradas en la historia.

Un fenómeno de interés en los especialistas en seguridad y violencia es el paramilitarismo de nuevo cuño, aparecido y extendido en varias ciudades de los países dominados por la derecha. Ello no es producto de confrontaciones políticas ni por disputa de espacios como aconteció en Colombia.

El paramilitarismo de hoy goza de una base re-articulada de redes orgánicas, algunas ilícitas, y otras como parte del entramado institucional. La imbricación está dada con la intencionalidad de redes de complicidades y colaborativas con distintos fines pero enfrentan los mismos obstáculos para obtener el éxito de su acción. La acción ilícita está fundamentada en la obtención de dinero, lucrar con el producto y a la vez el reconocimiento de la comunidad que habita el espacio donde ejerce el poder.

El entramado institucional gubernamental y sus redes son depósitos de confianza que permiten que reduzcan la complejidad, prestan certeza a los operadores y orientadores, aumenta la capacidad de las redes asociativas, es capital social para ampliar sus acciones, desopaca el ambiente y abre caminos al futuro. La familiaridad y la confianza son dos piezas fundamentales para garantizar la efectividad de una red colaborativa (Luhmann, N. 1996). Entonces, la confianza elimina el temor, el miedo y la incertidumbre; se abre la posibilidad de trabajar a largo plazo y obtener mejores resultados. Este entramado institucional es muy costoso construirlo y sólo puede hacerlo la sociedad como sistema social, siendo un constructo del hombre. El narcotráfico está imposibilitado para fabricarlo, a pesar del cuantioso capital en su haber; es algo que va más allá del dinero y el poder, es una producción social colectiva con fines comunitarios y de reproducción social que ahorra reinventar la sociedad cada día.

La confianza constituye una especie de institución invisible que cumple al menos tres funciones: ampliación de la calidad de legitimidad, una dimensión moral y otra que enaltece la preocupación por el bien común. En síntesis, es un economizador institucional que permite ahorrarse todo un conjunto de verificación y prueba (Rosanvallon Pierre, 2007) y, precisamente, esa confianza es la demandada por toda red ilícita del narcotráfico.

El narcotráfico necesita de entramados institucionales que garanticen el tráfico de drogas seguro y por largo plazo. El Estado administrado por gobiernos represores carece de estrategia y capacidad para contener la ola de protestas, los nudos conflictivos desatados por la crisis, las movilizaciones de los sectores populares y excluidos, la delincuencia producto del desempleo, la pobreza exigente de atención y política pública; los empresarios visibilizan estos hechos y prefieren alejarse con la inversión a otros lados, aflorando la cara de un país caótico pero a su vez produciendo la coyuntura de colaboración entre narcotráfico y gobiernos.

Paramilitares de nuevo cuño

Las dos organizaciones, la ilícita del narcotráfico y la lícita del Estado, necesitadas y juntas con la capacidad de solventar sus carencias, han construido el puente comunicacional para crear la red de complicidades; la muestra inicial es el paramilitarismo de nuevo cuño.

Son ejércitos pequeños con comportamiento celular; cooptan sicarios jóvenes con características de vida súbita y consumidores de un mercado desimbolizado de su naturaleza comunitaria y perteneciente a lealtades de redes ilícitas; esto es, deviene de pandillas, cuadrilla de ladrones, banda de delincuentes o desertores del ejército. Es necesario que ellos cuenten con capacidad de tiro, manejo de armas, conducir moto o automóvil, decididos a viajar, radicar en otro lugar y desprenderse de la familia.

Cuentan con dos perfiles, uno de delincuente y otro de paramilitar; en el ejercicio delincencial, además de traficar con drogas o cumplir un rol dentro de la estructura del narcotráfico, se extorsiona, vacuna, chantajea o tima a ciudadanos, gremios y empresas para obtener recursos, desviando la atención de su rol principal dentro del narcotráfico; en el perfil paramilitar, se mata, desaparece, intimida, hostiga y desplaza a líderes, grupos, comunidades y segmentos sociales que son incómodos para el gobierno local, municipal, estatal o nacional.

En el caso mexicano, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en el estado de Guerrero ha denunciado que su rol de grupo armado irregular en la zona del estado ha sido alterado, dado que no sólo resisten las incursiones del ejército nacional sino la presencia del narcotráfico y paramilitares en los últimos diez años en la zona de la Sierra en la entidad; le costó la vida a unos 60 militantes del ERPI y simpatizantes que vivían en las comunidades de la Tierra Caliente y la Costa Grande (Ocampo Sergio, 2009).

En el mismo tenor, apareció otra denuncia que reseñamos sin alteración alguna: la llegada de un gobernante del PRD, Zeferino Torreblanca, no cambió la larga guerra de baja intensidad que se vive en la sierra de Guerrero, estima el guerrillero del ERPI: “Sobre todo a partir de este gobierno de Zeferino Torreblanca, han querido formar grupos paramilitares, pero cuando surgen, los ubicamos, y los hemos golpeado y desbaratado, y lo vamos a seguir haciendo, y eso lo sabe el enemigo... En la sierra de Guerrero, podemos decir con toda seguridad que los grupos paramilitares y Rogaciano ya no tienen presencia, a diferencia de las partes bajas de la sierra; ahí sí tienen, por eso se presentan diversos crímenes... Incluso, muchos de los familiares de la gente que ha mandado matar Rogaciano están

incorporados a las columnas guerrilleras del ERPI... Hace unos meses, por cierto, Rogaciano bautizó a un grupo como Ejército de Liberación del Pueblo (ELP), pero es falso, no existe; por eso, nadie le hizo caso... Para nosotros está muy claro que a Rogaciano lo protegen Calderón y Zeferino. Se instalan retenes militares, y es extraño, pasan junto a ellos y no los detienen” (Milenio, 16/05/2009).

Otra expresión de la mancomunidad de redes ilícitas con el entramado institucional es el grupo de comando policial que combate a plagiarios pero con 12 años de antigüedad. Financiado por empresarios, comerciantes y profesionistas, tiene varios espacios de operación y lo hace bajo la complicidad y conocimiento de autoridades federales y estatales. Negocia con delincuentes la liberación de víctimas, pero también los persigue, captura, interroga y decide quién muere (Milenio, 2009/18/05).

Las áreas en donde hace sentir su presencia están una en el norte, tres del centro y una más en el sureste del país. Quienes financian esto tienen diversas ideologías, religiones y orígenes culturales.

El líder operativo de El Grupo afirma no pretender suplantar a las autoridades, sino suplir sus vacíos, copar sus carencias. De hecho, la mayoría de veces operan desde el anonimato, pero en conjunto con diversos cuerpos policiales municipales, estatales y federales. El Grupo, literalmente, es un comando parapolicial que usa civiles y recluta selectivamente uniformados en activo y ex policías para actuar con discreción y eficacia; diestros en el uso de armas cortas y largas, expertos en disciplinas de defensa personal y combate, algunos entrenados en al menos dos países, hacen sus propias detenciones e interrogatorios (que incluso filman); suelen entregar a los criminales a las autoridades (Idem).

La permisibilidad es comprendida si públicamente existen argumentaciones por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) para intentar recuperar los territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas, luego de admitir que en el país hay espacios que “han sido cooptados por el crimen organizado, subvirtiendo el orden constitucional”. En el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012, que en breve será publicado en el Diario Oficial de la Federación, destacan las líneas de acción en la materia, entre las que figura la 2.2.5: “Impulsar la recuperación de aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional” (El Universal, 24/05/2009).

Otro perfil del paramilitarismo es la actuación en espacios confinados y/ cárceles, donde en pleno acuerdo con autoridades del sistema peniten-

ciario, hacen arreglos con bandas criminales que gozan de libertad, deciden ejercitar profilaxis social dentro de los cuartos, carracas o celdas a determinados grupos, principalmente reos del fuero común o bandas que no han cumplido con los intercambios propios del negocio ilícito que lo involucra. Esos conatos permanentes en El Salvador, Honduras, Guatemala y México llevan el signo de ajuste de cuentas y limpieza social dentro de los penales, aunque últimamente han aparecido estos comportamientos delictuosos también dentro de las cárceles en Brasil, Argentina y Colombia.

Hay beneficios recíprocos incluso para el gobierno porque baja la población penitenciaria, negocia con un solo grupo o dos, se construye un lenguaje sibilino, se incrementa la seguridad de los involucrados, y la compartimentación no es compleja pero reduce los riesgos de delación.

El fenómeno es tan evidente y de magnitud insoluble que no percibimos los menores esfuerzos de algunos de los países mencionados para confrontarlo; por el contrario, los acercamientos son más estrechos y las complicidades tienen una tendencia ascendente. Colombia cínicamente hizo público y desenmascaró la mancuerna de los paramilitares y sus atrocidades criminales contra millares de colombianos indefensos despojados de sus bienes y la vida; El Salvador es inmutable ante el descubrimiento de legisladores, políticos y funcionarios públicos ligados al narcotráfico y redes de complicidad para ajustar cuentas y desaparecer líderes opositores. Guatemala vive aun la prolongación de la guerra de los años ochenta del siglo XX; Honduras hace esfuerzo por controlar episodios que rompen el esquema institucional pero el país tiene ínsulas y enclaves de poder que dificultan la labor de la presidencia y, en México, el legislador panista Felipe González y el ecologista Arturo Escobar señalaron que si son gente adiestrada y a favor de la justicia, se les incorpore al marco legal dentro de figuras previstas para cooperar con el Ministerio Público (Milenio, 18/05/2009).

El legislador Arturo Escobar recordó que el PVEM presentó una iniciativa para incorporar en las investigaciones a la sociedad civil, a través de la figura de intermediarios y subrayó que es hora de legislar este tema, ante la ilegalidad de grupos como éste que inclusive han asesinado a los plagarios. Sostuvo que no se puede pactar con esos grupos, pero “si ya están organizados, aprovechemos su organización para presionar la autoridad, para presionarnos a nosotros que somos servidores públicos, para dar resultados inmediatos en materia de seguridad pública” (Milenio 19/05/2009).

Otra observación la hace Isain Mandujano, periodista en Chiapas, quien pone acento en el número de campesinos involucrados en actividades de delación y paramilitarismo al escribir:

Suman 12 mil; actúan en 21 estados. Por caminos rurales, armados con viejos mosquetones, a pie o a caballo, unos 12 mil campesinos de la tercera edad, adiestrados por el Ejército Mexicano, colaboran en tareas federales. Son el único cuerpo paramilitar reconocido por las instituciones oficiales. Tienen presencia en 21 de los 31 estados del país, y forman parte de los llamados Cuerpos de Defensas Rurales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Michoacán es el estado con el mayor número de guardias rurales, con mil 472 elementos, seguido por Chiapas, con mil 314; Chihuahua, con mil 286, y Durango, con mil 42. En otros 17 estados del país, el número de esos campesinos no pasa los mil. El estado que menos tiene es Aguascalientes, con 163 Defensas Rurales. Le siguen los estados de Oaxaca, con 166; Tlaxcala, con 183; Sonora, con 187; Colima, con 204; Quintana Roo, con 2005; Morelos, con 208; Hidalgo, con 209; Puebla, con 321; Coahuila, con 417; Nuevo León, con 437; Tamaulipas, con 476; Zacatecas, con 502; Guanajuato, con 717; San Luis Potosí, con 767; México, con 859, y Jalisco, con 866.

A todo ello, le agregamos el conjunto de leyes que han aprobado, cuyo ejercicio legitima el cateo de domicilios sin una orden, la intervención de teléfonos privados y la prohibición de manifestaciones callejeras de protesta, la contratación y desempeño de policías vestidos de civiles y la jornada prolongada de miedo en los medios de comunicación; nos abren un panorama para dar una lectura de lo que es y será el Plan Mérida en la etapa de Obama.

A este escenario, le sumamos aspectos como la contratación de servicios de seguridad privada, formada por ex militares extranjeros donde la explicación de los empresarios nos abre una ventana para alucinar: el temible Xe Blackwater de Estados Unidos (la empresa militar privada que ofrece servicios de “refuerzo de la ley, seguridad, pacificación y operaciones de estabilidad en el mundo”) con uno de sus ex rangers o seals de primera en una tarea de alto riesgo en Irak o Nigeria, o con el mejor francotirador en la zona crítica de Nueva Orleans cuando el huracán Katrina: entre 15 mil y 40 mil dólares/misión (Gomez Leyva Giro, 2009).

Ahora bien, en México, existen 2 mil 20 empresas privadas, 475 con autorización federal y otras mil 545 con autorización de los gobiernos locales. Su fuerza operativa total alcanza los 21 mil 525 elementos. Sin embargo, las más peligrosas son las organizaciones políticas y paramilitares que funcionan “al margen de la ley” y responden a poderosos grupos de poder tal

como sucede en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz, donde han provocado asesinatos de gente civil; los han denunciado como asesinos al servicio del poder.

Para el área centroamericana, las cifras no son menos significativas:

Mapa del miedo y el terror

Empresas de seguridad privada con agentes militares en servicio

Nicaragua: 56 empresas con 9,017 agentes, 5,511 armas registradas y 8.000 policías estatales. Guatemala: 15 mil agentes privados, 58 mil propietarios de armas; 235.935 armas registradas, o sea, 4 por propietarios registrado; 30 mil 487 empresas de seguridad privada; 19.300 mil policías estatales.

El Salvador: 143 empresas, 20000 agentes, 13,000 armas y 19 mil policías estatales.

Honduras: 91 empresas, 60 mil agentes, 10 mil policías estatales.

Costa Rica: 20 mil policías privados, 18 mil estatales.

Panamá: 10 mil agentes privados y 11 mil policías estatales.

Fuente: Estadísticas de RILDEPAZ www.insumisos.com

La red de células pandilleras que transitan por Centroamérica está, aproximadamente, mapeada por 4 mil 500 miembros en Nicaragua, 16 mil en El Salvador, 12.500 en Honduras, 40 mil en Guatemala, y México rebasa las 90 mil bandas ilícitas; es un enjambre denso, entrecruzado, con acciones delictivas híbridas, capacidad de movilidad impronta y con mutaciones en oficios delictivos.

Por esas características, estas células son buscadas y asociadas por el narcotráfico; sin embargo, sin la complicidad del Estado y la estructura institucional acatada a favor de la delincuencia, el éxito del crimen organizado sería mínimo y con todos los espacios acotados. La libertad del mercado, el secreto bancario, el achatamiento del Estado y el crecimiento excesivo de la corrupción, la política onerosa y los políticos y funcionarios preocupados por enriquecerse de manera instantánea a costa de todo nos han dejado un Latinoamérica infectada, rota, derruida y con pocos años de vida con incipiente democracia y un futuro opacado por las redes de la ilicitud.

Bibliografía

Álvarez, Enrique (2006). *Maras y violencia, un estudio exploratorio*. IDEM, Guatemala. CA

Gómez Leyva, Ciro (2009). *Blackwater, o ¿cuánto cuesta comprar a un teniente mexicano?* 18 de mayo de 2009. http://www.sipse.com/ver_opinion.php?id=2205

Luhmann, Niklas (1996). *Confianza*. Anthropos/Universidad Iberoamericana, España.

Mandujano, Isaín (2005). *Paramilitares en México: Cuerpos de Defensas Rurales*. SEDENA, México. Leído 11 mayo 2009.

http://www.proceso.com.mx/noticias_articulo.php?articulo=36093

Mercado, Angélica; Padilla, Liliana; Damián, Fernando; Saúl Vela David (2009). *El Grupo pone en riesgo la gobernabilidad de México*. Milenio, 19 de mayo, México. <http://impreso.milenio.com/node/8577794>

Osorno, Diego Enrique (2009). *El gobierno usa a El Chapo en contrainsurgencia: ERPI*. Milenio. 16 mayo 2009.

<http://impreso.milenio.com/node/8576332>

Ocampo, Sergio (2009). *Entrevista al ERPI. La guerrilla está combatiendo a sicarios del narco y a paramilitares en Guerrero*. Leído 11 de mayo de 2009, <http://www.noticiasdelarebelion.info/articulo.php?p=989&more=1&c=1>

Ramos Pérez, Jorge (2009). *Gobierno, sin "control pleno" en zonas del país*. El Universal, 24 de mayo de 2009, México.

Rosanvallon, Pierre (2007) *La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Edit. Manantial, Argentina.

Salazar, Robinson (2009). *Policialización del ejército y tolerancia cero en América latina*. En Revista Frónesis, en edición, Venezuela

Salazar Robinson (2009). *La nueva estrategia de control social: Miedo en los medios y terror en los espacios emergentes*. Revista Quórum Académico, Universidad del Zulia, Venezuela, en edición.

Salazar, Robinson (2008). *Estado, mercado y criminalidad, en Sentido y contrasentido en América Latina*. págs. 119/144, Elaleph.com/Insumisos Latinoamericanos, Argentina.

White House (2008). *Iniciativa para la excelencia de la educación de los Hispanoamericanos*. Leído mayo 3 de 2009.

<http://www.yosipuedo.gov/drugfree/drugeffects.html>

GUATEMALA ENTRE ROSAS Y PIEDRAS: LECCIONES DEL ESCÁNDALO ROSENBERG

David Martínez-Amador⁶ y Robinson Salazar Pérez

“La Historia es el cementerio de las aristocracias”
Wilfredo Pareto.

“A los trabajadores de mi finca, les doy siempre la ropa de mis hijos y mis nietos que está en buen estado. Y luego, a fin de mes, se las descuento”

Comentario de una mujer guatemalteca
miembro de la oligarquía económica.

El presente artículo es un recuento y análisis de la crisis política generada en Guatemala a raíz del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Pretendemos explicar en este escrito la politización de la situación acaecida y cómo especialmente la élite empresarial e intelectual de la derecha guatemalteca se aprovechó de esta situación para, de vuelta, hacer sentir su presencia con mayor fuerza en el espectro político guatemalteco.

El recuento de los hechos

La tarde del 11 de Mayo del presente año, los medios de comunicación radial en ciudad de Guatemala aglutinaron su programación para dar a conocer una noticia por demás caliente: Se había hecho público un video póstumo, en el cual, su autor (que había sido asesinado días antes, en otro de tantos asesinatos no resueltos en ciudad de Guatemala) acusaba direc-

⁶ El prof. Robinson Salazar es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, México, y David-Martínez Amador es profesor universitario en Centroamérica, exbecario Fulbright Laspau y ha enseñado en Ecuador, Argentina, Puerto Rico, México y Nigeria. Correo Electrónico: david.martinez-amador@fulbrightmail.org

tamente de su muerte al Presidente Álvaro Colom, a la Primera Dama del País y al Secretario Privado de la Presidencia del Gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza.

La reacción no se hizo esperar, y en los días subsiguientes, las plazas públicas más representativas de la ciudad de Guatemala fueron escenarios de protestas —a favor y en contra del actual gobierno del Presidente Colom—. Las protestas en las que miles de guatemaltecos salieron a las calles, unos para exigir la renuncia del presidente Álvaro Colom y otros para apoyarle por el Caso Rosenberg, concluyeron sin incidentes, dejando evidencia de la polarización que vive Guatemala. El enfoque mediático fue increíble: En cuestión de días, corresponsables extranjeros se encontraban presentes en las manifestaciones; CNN en español entrevistó en exclusiva (otorgando los 30 minutos del bloque de noticias tradicional) al Presidente Colom; Noticieros Televisa y su presentador Joaquín López-Doriga realizaron enlaces todas las noches a ciudad de Guatemala, además de entrevistar en directo a personalidades políticas del ambiente Guatemalteco. Los opositores al presidente Colom presentaron en las semanas subsiguientes un documento al Congreso Guatemalteco en el que requerían el retiro de la inmunidad del Presidente Colom para que abandonara su puesto.

La dinámica generó un pulso de poder clásico de las realidades político latinoamericanas. Venidos de los lugares más apartados del país, más de 40.000 personas, según los organizadores, colmaron la Plaza de la Constitución, frente al Palacio Nacional de la Cultura, para apoyar al Presidente Colom. A cuerdas de distancia, podían observarse los baños portátiles provistos por el Gobierno y los autobuses en los cuales arribaron los manifestantes; un caso de acarreo clásico. Slogans como los siguientes: “Estamos acá para defender la democracia y el Estado de Derecho”, “Colom, estamos contigo”, “Álvaro, presidente amigo, Guatemala está contigo” y “Con Colom hasta la muerte”, se leía en las pancartas que adornaban los centenares de autobuses que desde sus comunidades trasladaron a los manifestantes hacia la ciudad capital, en su mayoría, habitantes de los cinturones de pobreza que rodean a la ciudad de Guatemala tan caracterizada por la distribución no equitativa de la riqueza.

A menos de dos kilómetros de distancia, en la Plaza Italia, otro grupo de cerca de 50.000 guatemaltecos, según sus propios datos, pedían la renuncia del mandatario. Estos manifestantes, que marcharon vestidos de blanco, eran en su mayoría habitantes de las zonas urbanas, integrantes de las clases medias y altas de la sociedad, y estaban dirigidos por líderes em-

presariales y políticos de oposición. En la emisión nocturna de CNN en español del día 13 de Mayo 2009, la emisión abrió con una toma de cámara en la cual se enfocaban ambos grupos: los opositores al Presidente Colom, ciudadanos guatemaltecos de rasgos caucásicos, rubios, vestidos a la moda enarbolaban carteles en los cuales acusaban al Presidente Colom de asesino, además de ladrón y mentiroso. Los partidarios del Presidente Colom, ciudadanos guatemaltecos de rasgos indígenas, mestizos y negroides, sin ropa de marca, llenaban la Plaza Central y coreaban fórmulas de apoyo al gobierno. Conclusión: los medios internacionales mostraron una polarización política y racial en un país que, a 36 años del fin de un conflicto armado no ha podido construir políticas públicas de alto impacto. Por un lado, los manifestantes opositores apedreaban con consignas que requerían la renuncia, el juicio, y el uso del epíteto de asesino al presidente Colom; y la administración Colom se bañaba en rosas argumentando que “este gobierno no es matón”⁷. Fue una semana que se vivió entre Rosas y Piedras.

La cobertura noticiosa local de las protestas difería de la cobertura prevista por los medios internacionales. Salvo el Canal Local Guatevisión (canal del mismo capital que sustenta al diario Prensa Libre, mismo diario que durante la pasada campaña electoral en Guatemala vaticinó en sus encuestas de opinión una derrota segura del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza) que dio una cobertura constante e los hechos, ninguno de los otros canales nacionales de televisión dieron cobertura real a las manifestaciones diarias. Los canales en mención, propiedad del empresario mexicano Ángel González (conocido en el mundillo político como el magnate de las comunicaciones, además de recibir en cada época electoral las peregrinaciones de todos los candidatos políticos para asegurar un acceso al medio televisivo) no realizaron ninguna cobertura del hecho, aspecto que puede entenderse: recientemente González recibió una disminución del pago de impuestos por parte del Gobierno Colom.

Los únicos medios guatemaltecos con una cobertura de los hechos relacionados al caso Rosenberg fueron los siguientes: Las cadenas radiales Emisoras Unidas, el programa radial Libertópolis, y los medios escritos Prensa Libre, El Periódico y Siglo XXI.

⁷ Es una cita textual de la declaración del Presidente Colom dada a Patricia Janiot en la entrevista de CNN.

Un primer acercamiento: la muerte no importa igual

Las protestas en contra del gobierno del Presidente Colom subieron de tono discursivo y mostraron una logística consistente. No puede negarse que entre los participantes a esta manifestación denominada la marea blanca habían amas de casa y guatemaltecos clase-medieros. Tipificar este movimiento cómo un movimiento exclusivo de élites sería por demás falso; sin embargo, en términos de organización, dirección, organización, manejo de la protesta, agenda de reuniones y conducción de la manifestación, era visible la presencia de profesores universitarios, columnistas de prensa, comunicadores sociales e individuos afines al sector empresarial conservador guatemalteco.

Si bien las investigaciones comenzaban a revelar detalles de la vida personal del abogado Rosenberg; detalles de la vida personal del quien filmara la cinta póstuma (el periodista Mario David García, quien durante la década de los ochenta se acoge a una ley de amnistía decretada para beneficiar a sujetos acusados de promover e instaurar golpes de Estado en Guatemala), detalles personales de quien divulgara la grabación póstuma; amigo personal de Rosenberg y ligado a los círculos de inteligencia del anterior gobierno derechista del Ex Presidente Berger; si bien los fiscales del Ministerio Público habrían descubierto un desfalco en el Banco Banrural (institución bancaria ligada al Gobierno del Presidente Colom como la receptora de grandes fideicomisos estatales y acusada de corrupción en el video póstumo del abogado Rosenberg) y si bien es cierto que eventualmente se comprobó la relación sentimental entre el Abogado Rosenberg y la hija de un Empresario Guatemalteco de ascendencia Libanesa asesinado una semana antes de la muerte del Lic. Rosenberg –también su hija– (hecho que, por cierto, Rosenberg imputó al Secretario Privado de la Presidencia de la República) y si bien se conoció después que el Licenciado Rosenberg había perdido la licitación de una lucrativa concesión gubernamental frente a empresarios favorecidos por el gobierno Colom; a pesar de todos estos hechos, la oposición no moderó su tono: los epítetos de “asesino” seguían utilizándose aunque y a pesar de que ningún proceso judicial había vencido en juicio al Presidente Colom; además, está el hecho de que el mismo video no es probatorio para procesar a ningún ciudadano, mucho menos a un Presidente de la República.

La tonalidad de las protestas utilizaba argumentos como el siguiente: “El licenciado Rosenberg tenía los medios para escapar, rehacer su vida en otro país, no volver jamás a Guatemala. Pero este suelo lo vio nacer, lo

cobijó en su adolescencia y su madurez; aquí estudió y trabajó. Huir era contribuir a que los guatemaltecos, sus hermanos, siguiéramos tragando la misma ponzoña por el resto de la vida”⁸.

Los diarios estaban saturados de informaciones y opiniones que abordan con abundancia este alevoso crimen, que necesariamente debe esclarecerse sin importar el rango de quienes estén implicados. Hecho paradójico en un país donde 17 ciudadanos son asesinados diariamente en sucesos conectados con la delincuencia común; pero por demás paradójico e hipócrita resulta que 4 meses antes del asesinato del Abogado Rosenberg, Guatemala conoció a la víctima más joven de la delincuencia común en el país: Un niño de dos años muerto por una bala perdida. No hubo marea blanca ni protestas por este asesinato. Este niño de nombre Anthony Josué murió adentro de un autobús del servicio público; Rosenberg murió a metros de su departamento ubicado en un exclusivo sector del sur de la ciudad de Guatemala cuando se proponía a realizar su ejercicio preferido. Parecería que la indignación por la muerte en un país como Guatemala importa más para los blancos que para los mestizos e indígenas.

“Guate, porque te quiero, te voy a rescatar”: así rezaba una de las mantas desplegadas en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura por los opositores al gobierno Colom: No hubo mantas por la muerte Anthony Josué. El crimen contra el abogado y la movilización a favor de la renuncia de Colom, y las manifestaciones de apoyo a su gestión por parte de pobladores, evidenció la existencia de estas dos “guatemalas” opuestas: una integrada por la población con las posibilidades suficientes para satisfacer sus necesidades sociales, y otra formada por todas las personas que apenas alcanzan a tomar conciencia de sus propios derechos.

Sin duda, las voces que vitorearon al Presidente y a su esposa en la entrada de Casa Presidencial durante todos los días de la manifestación nos demuestran una estructura **pretoriana** de apoyo político construida por la administración Colom; sin embargo, no puede negarse que lo que mueve a este grupo de personas va más allá de unos cuantos pesos: es el resultado de los programas impulsados por el Consejo de Cohesión Social y en medio de ello, si bien puede pensarse en políticas partidistas, no puede negarse, hay ciudadanos provenientes de las áreas rurales de Guatemala que por primera vez ven aseguradas las posibilidades de tener una mesa con comida y techo.

⁸ Es una cita textual de un comentario hecho en el Diario de alta circulación Prensa Libre.

Pero por el otro lado, la oposición, esa marea blanca de guatemaltecos blancos, mostró los parqueos cercanos al centro capitalino llenos con vehículos último modelo y escoltas de seguridad que acompañaban a los manifestantes que debían de transitar por las calles aledañas antes de llegar al punto de protesta convenido.

Lo cierto del caso es que en ninguno de los dos bandos se escucharon voces que clamaran por políticas públicas dirigidas a cambiar la estructura económica del país, de un país donde se condena el asesinato de una persona y se ignora la precaria situación de vida de la mayoría de la población.

La mano negra de las élites tradicionales

Interpretar esta crisis política en Guatemala requiere la utilización de una metodología muy compleja. Hemos querido utilizar parte de la metodología Gadameriana para comprender la realidad política guatemalteca y leer más allá de los muy justificados reclamos de justicia. Gadamer afirma que cada elemento lingüístico en cualquier lenguaje natural encierra un “círculo de lo inexpressado. “¿Qué es lo que no expresaban claramente las manifestaciones en contra del Gobierno del Presidente Colom? Esta pregunta es fundamental, pues, en la lógica de la hermenéutica interpretativa, lo que permite que se genere una red de creencias no es más que “las experiencias vividas” y esto sugiere que al momento de referirse a un hecho en particular, el intérprete no hace más que proyectar sus “vivencias” sobre lo que texto presenta. La forma de entender el comportamiento y los reclamos de seguridad, justicia y juicio para con el Presidente Colom tiene un fuerte carácter kantiano en mi opinión: El pre-juicio es el elemento que hace posible la comprensión hermenéutica, y consecuentemente, define el terreno donde la fusión de horizontes presentes y pasados toma lugar. Es necesario comprender la concepción política, ideológica e intereses propios de las élites económicas y estamentos tradicionales en Guatemala para entender el elemento oculto en esta situación. La realidad política en Guatemala tiene que interpretarse a la luz de la teoría de las élites.

Como fenómeno socio-político, desde la conquista hasta nuestros días, los acontecimientos históricos en Guatemala han dejado secuelas profundas en las relaciones étnicas, sociales y económicas alrededor de la propiedad y la explotación de la tierra como recurso comercial, de reproducción cultural y desarrollo en el país. La élite del poder tradicional, está representada por una alianza entre el sector terrateniente, industrial, comercial y financiero. Al respecto, Marta Casaus (1995: 19) sobre la élite del poder en

Guatemala argumenta que las redes familiares “se constituyen en élites de poder en la sociedad colonial, logran sobrevivir y consolidarse en el poder a lo largo del siglo XIX, configurando un tipo de Estado oligárquico y se mimetizan y perviven en el siglo XX, convirtiéndose en estructuras de poder de larga duración”. El país ha desarrollado un modelo agrario dependiente y polarizado. Esta situación ha generado toda una pirámide, en donde la base, la mayoría indígena, argumenta una mayor dependencia de la tierra por factores de “historicidad cultural” y como fuente de subsistencia. Las consecuencias del desarrollo rural recaen profundamente en el estado de marginación, explotación y dependencia que genera el agro en las relaciones económicas, sociales y culturales. La élite tradicional manifiesta su relevancia a partir de las relaciones patrimoniales que sostiene en el mantenimiento de formas precapitalistas de producción, que han influido históricamente en la población indígena⁹. De acuerdo a Lina Barrios, históricamente, la relación electoral, entre el indígena y la élite de corte tradicional, sostiene: “primero era manipulada por los ladinos influyentes (dueños de plantaciones, fincas, haciendas o comerciantes), por medio de amenazas (expulsión de colonos, no alquiler de tierras, despidos de trabajo, negación de crédito o cobro de deudas atrasadas), para lograr el apoyo a determinado candidato (...) a su vez, han marginado al indígena utilizándolo como masa votante y otorgándole algunos puestos inferiores dentro del gobierno comunal” (Barrios, 2001: 199 y 210).

El patrimonialismo, como expresión precapitalista, se manifiesta y se ejerce a partir de la relación patrimonial entre el terrateniente con el indígena; es decir, se privilegia dicotomía que existe entre sumisión y lealtad para no perder las garantías otorgadas entre el dueño de la propiedad que otorga la tierra en arrendamiento, colonato, o en las tierras donde incluso se han suscitado ocupaciones e invasiones.

Ante la escasez de arquitectura institucional democrática, en el país se ha fortalecido un modelo corporativo, que acompañado de la exclusión social, la pobreza y la crisis económica, se transforma en un estratégico instrumento de descomposición institucional y social. En un sistema corporativo las reglas consensuadas de negociación e intereses de los diferen-

⁹ Max Weber definió el patrimonialismo como una variedad evolucionada del tipo de autoridad tradicional, que se caracteriza por la existencia de un cuadro administrativo, civil y militar, permanente al servicio del imperante que ejerce la autoridad. Este cuadro administrativo es reclutado entre quienes están ligados a la persona mediante vínculos de piedad filial y lealtad personal. En GINER, Salvador et al. p. 564.

tes grupos políticamente organizados, no se realizan bajo la mirada pública, institucional y deliberativa que supone una democracia participativa¹⁰. Resulta entonces que, sobre estos estamentos rígidos, Guatemala intenta construir un modelo de modernidad y competitividad económica apostando por los instrumentos modernos de la teoría del comercio internacional. En la lógica interna de las mismas élites tradicionales, los reclamos políticos para que el Estado proteja únicamente la vida, la libertad y la propiedad (a la mejor usanza de los reclamos de la élites terratenientes esclavistas virginianas) se justifican pues, desde la óptica de estos grupos sociales, no existen relaciones de conflicto original de ningún tipo en la estructura social Guatemalteca. En suma, la riqueza y patrimonio de las élites tradicionales en Guatemala –desde la misma lógica interna de las élites– es producto semejante a la acumulación de capital propia del mercantilismo liberal de los países bajos protestantes durante el siglo XIX; paradójica aceptación en un país donde el trabajo manual no está santificado, no existe la libertad religiosa en la concepción clásica de las élites y tampoco la aceptación de las minorías de ningún tipo. Si bien es cierto que ante la presión corporativa y el conflicto social, el gobierno fomenta la estructura clientelar repartiendo beneficios en aras de la gobernabilidad y equilibrio del sistema, el papel preponderante no lo toman los ciudadanos individuales, sino las asociaciones “organizadas”, que sin embargo, actúan como vehículos de representación funcional de los grupos de interés, obteniendo para estos un reconocimiento público y una autorización estatal para la negociación económica y social.

El análisis del comportamiento de las protestas contra el Presidente Colom por el asesinato del Abogado Rosenberg nos demuestra una interesante reproducción y supervivencia de la élite criolla en Guatemala. Desde la perspectiva clásica, se había aceptado que “esta oligarquía, ante la posibilidad de perder su hegemonía sobre toda la región, recompone sus fuerzas y sus alianzas de clase, se reestructura internamente y retorna al poder, esta vez no por la vía autoritaria de los gobiernos dictatoriales de 1930 ni con la militarización del poder y la aplicación de la contrainsurgencia, como en la década de los setenta, sino que, tras un largo periodo de crisis y falta de realineamiento interno, retorna por la vía de las urnas” (Casaús M., 1995). La reconstrucción y reciclaje de estas élites, encuentra un resurgir en el

¹⁰ En un sentido Habermansiano se refiere al tipo de democracia que requiere un orden político legítimo reconocido por los ciudadanos como correcto y justo, donde las decisiones tienen un carácter participativo basado en el consenso. (Habermas, 1985:115).

mundo moderno a través de un ideario en el cual, los reclamos propios del mundo Anglosajón del siglo XIX pueden extrapolarse de forma literal a la dinámica mesoamericana.

En Guatemala, esta situación se encarna y toma forma en la academia que las élites criollas conservadoras, anti-liberales, anti-comunistas y conservadoras construyen. Si bien a primera vista puede parecer que el ideario derechista tradicional en Guatemala ensalza la ética del trabajo responsable (y puede ser que sea así), los ideólogos ortodoxos de la derecha en Guatemala —ha de decirse, no son economistas entrenados de carrera sino empresarios, hacendados y periodistas que admiran las ideas de autores conservadores en materia económica— se han caracterizado en la dinámica Guatemalteca por mezclar los argumentos anticomunistas y anti-estadistas tradicionales en América Latina con los reclamos históricos del liberalismo político. En esta perspectiva entonces, la receta social requiere, comercio libre, justicia, bajos impuestos, respeto a la propiedad privada y un rol limitado del gobierno. Este reclamo propio del siglo XIX que santifica la propiedad privada es fundamental para las élites criollas guatemaltecas pues con él, logran justificar la disparidad en la posesión de la tierra y la existencia del latifundio. Utilizando la metodología del Profesor Lasky en el texto **Liberalismo Europeo**, podemos afirmar que este ideario libertario o de libre cambio en Guatemala ha sido la herramienta del sector anti-comunista para evitar las reformas agrarias o equiparaciones históricas de parte de los estamentos tradicionales hacia las mayorías desposeídas.

El escándalo Rosenberg destapó una realidad por demás interesante para los académicos de las ciencias sociales en Guatemala: Fue la constatación empírica de la tesis manejada por el Profesor de Economía de la Universidad de París, Jean Imbert¹¹, tesis en la cual se afirma que dentro de los fenómenos de regularidad universal que proveen a la Ciencia Económica de su criterio científico debe de incluirse el hecho de que a través del tiempo las élites de todo tipo parecen responder a los mismos valores sin importar elementos geográficos de otro orden. Mientras las condiciones particulares que sustentan el *Ancien Régime* estén presentes, la tensión política de cualquier marco político girará en torno al siguiente binomio: Las élites patrimoniales reclamarán la existencia de un Estado Policía que proteja la libertad y la propiedad; mientras que las masas desposeídas utilizarán como elemento de protesta el reclamo agrario.

¹¹ Imbert es autor de la obra clásica *Historia del Pensamiento Económico: desde los orígenes hasta 1789*. Fondo de Cultura Económica. México, 1985.

Puede sostenerse la tesis entonces, que la derecha en Guatemala, al igual que la mayoría de las nuevas derechas en el continente, no recurrió a un partido político para ostentar el poder, pues su interés no está en disputar el poder sino desacreditar la política y al Estado para entonces, sostener marcos de anarco-capitalismo que sustenten un orden neo-feudal sobre el cual, quiere construirse modernidad. En el caso de la derecha Guatemalteca el aspecto interesante consiste en re-interpretar la historia, asumiendo que es posible construir todo un ideario de modernidad política y económica sobre un sedimento histórico que responde a los condicionamientos propios del *Ancien Régime* Francés. Este problema de sedimento histórico resulta crítico para la realidad política Guatemalteca, pues todas aquellas variables que han envenenado y dificultado el desarrollo del proceso de construcción de procesos políticos no pueden ser borradas por la introducción de comunidades lingüísticas o realidades discursivas que ignoran los condicionamientos aún medievales-comunitarios que rigen la realidad de la estructura política Guatemalteca. Negar o alterar las percepciones culturales del individuo resulta muy difícil, pero en Guatemala es por medio del color de la piel o el barrio en que se reside que se construyen visiones fragmentadas de país. Lo cierto es que, al igual que en la Francia pre-revolucionaria, como en la Guatemala de hoy, el llamado tercer estado no tiene representación.

Balance final

Tomando entonces todo lo mencionado con anterioridad y con la mayor imparcialidad del caso; cuando las tomas de televisión mostraban a estudiantes y profesores de esta entidad educativa mencionada gritando el epíteto de asesino a los cuatro vientos contra el Presidente Colom; cuando comunicadores sociales abiertamente identificados con la derecha y posteriormente, cuando el sector empresarial respalda este movimiento —pues hay que afirmar que la primera respuesta del sector empresarial organizado fue la cautela frente a los hechos— un lector ajeno, extranjero e independiente no puede dejar de sospechar, o al menos preguntarse, si la movilización de esta marea blanca no fuera una herramienta utilizada por las élites tradicionales para desestabilizar a un gobierno, que a merced de sus errores y falta de transparencia ha sabido ganarse el odio de la derecha guatemalteca por su inclinación hacia la política de corte social y el aumento impositivo para sostener planes de endeudamiento.

Todo este sumario nos sugiere que esta denuncia de reclamos de liberalismo y del Estado de derecho para lograr el mantenimiento y la defensa de las viejas oligarquías es el color real, del ideario liberal en Guatemala, residuo de una región que vio el desarrollo del liberalismo en el siglo XIX atado al dominio de las oligarquías y la centralidad de un capitalismo agro-exportador bestial. Aun dentro del esquema de un funcional modo de producción capitalista, una cosa es la necesidad de cultivar una ética del trabajo y de la labor, del esfuerzo y otra muy diferente oponerse con odio patológico a la intervención del estado, el gasto social, y demás medidas para atemperar las inequidades inherentes al capitalismo y de un orden de carácter pre-capitalista y pre-político como el Guatemalteco. Los reclamos de protesta debido al escándalo Rosenberg no fueron los de una ciudadanía espontánea y libre que desea conquistar derechos; fueron el espacio, la ventana de oportunidad, para que una élite conservadora disfrazada de liberal, encontrara una momento para intentar desestabilizar y tirar por tierra a un gobierno que abiertamente ha reivindicado (al menos discursivamente) la causa de los pobres y los marginados. Otra cosa es que no ha sabido gobernar con la transparencia, capital político y capacidad conciliadora de las izquierdas liberales europeas.

Al Gobierno del Presidente Colom se le puede acusar de un mal uso de los fondos públicos y de esconder una compraventa de votos a través de los planes de ayuda social; pero a la élite criolla guatemalteca se le puede acusar de prostituir el ideario de la libertad política. Fuego contra fuego, el caso Ronsenberg destapó una sociedad polarizada en términos raciales, económicos y políticos incapaz de resolver a través de pactos políticos los problemas más fundamentales del país. Pero también nos mostró una país en el cual, los reclamos de la derecha y la izquierda son en términos del análisis de Guillermo O'donnell nubarrones grises pasajeros donde los movimientos sociales están al servicio de caudillos o estamentos.

PostScriptum en octubre 2009

Hoy las protestas han terminado, la marea blanca que afirmaba que era imposible seguir viviendo en este país ha retornado con toda naturalidad a los cafés chic, los salones de belleza y los clubes privados. Las masas de marginados y olvidados ciudadanos guatemaltecos de rasgos negroides, mestizos e indígenas han retornado a sus cinturones de pobreza, a la espera de un nuevo llamado del sector gobierno para a cambio de un poco de dinero o pan, defender una causa política que les es tan ajena. Las protestas

por el caso Rosenberg fueron un espacio temporal, una ventana de oportunidad en el cual la élite criolla, la oligarquía más conservadora del continente mezclara sus reclamos históricos con la protesta entendida y justificada de una ciudadanía.

Al final de cuentas, lo único que abundó en este escándalo fueron las esperanzas perdidas; escasearon los culpables por el asesinato y faltó una interpretación acuciosa de los hechos. La dinámica política Guatemalteca asemeja en sus élites los reclamos de **propiedad, libertad y seguridad** de las élites agrarias victorianas que veían la esclavitud como una institución natural; asemeja en términos de movilidad social y competencia interna los estamentos rígidos que criticó Santo Tomás de Aquino; las propuestas de la izquierda tradicional asemejan la molestia a la modernidad del comercio propios de los escritos de Tomás Moro en Utopía; y el comportamiento del estamento de derecha nos recuerda la necesidad de la Revolución cuando nadie escucha a las mayorías olvidadas y marginadas.

El caso Rosenberg aún no se resuelve. La Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG) realizó un proceso investigativo que culminó con la captura de 10 presuntos autores materiales del hecho; los autores intelectuales están aún libres. El director de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, el Español Carlos Castresana, afirma que la información relacionada a la autoría intelectual está lista. A la fecha en que se elaboró este escrito, Castresana ha viajado a Naciones Unidas para reunirse con el Secretario General de la ONU.

La sociedad Guatemalteca comienza a despertar de un pesado letargo de interés institucional, en el cual, ha quedado claro a todas luces, que de no ser por las apuntaciones directas del Comisionado Castresana, ninguna otra instancia del país levantaría el dedo para señalar procesos anómalos en la elección de magistrados, funcionarios etc.. Hace menos de una semana de la elaboración de este escrito, el proceso para la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia culminó en un proceso dividido: la Comisión Internacional contra la Corrupción señaló a 6 de los 13 magistrados seleccionados por las Comisiones de Postulación (Compuestas por Decanos Universitarios, Juristas, Activistas e Intelectuales) de tener nexos claros en su accionar de jurisprudencia con Partidos Políticos y Empresarios. Pareciera que, a pesar del uso de herramientas de transparencia democrática, el ethos guatemalteco es propenso a la corrupción y al clientelismo de la misma forma como este fenómeno se observó en los procesos judiciales llevados a cabo en Palermo por los Jueces Falcone y Borsellino.

Preocupa, sin embargo, al espectador imparcial, la radicalización del debate. Con fecha de 12 de Octubre 2009, las protestas campesinas indígenas en conmemoración del Descubrimiento de América generaron actos violentos en los cuales, las marchas campesinas destruyeron propiedad privada, además de bloquear acceso viales importantes a la ciudad de Guatemala y agredir físicamente a ciudadanos que lo único que pretendían era dirigirse a sus lugares de trabajo (en un país donde la tasa de informalidad laboral es del 73%). Los reclamos tradicionales de la izquierda están polarizados y radicalizados, pero la culpa es de la derecha tradicional.

El polo de debate en la derecha guatemalteca se materializa en una propuesta de Reforma Constitucional, propuesta apoyada por el grupo derechista guatemalteco Liga Pro-Patria compuesto por ex militares, abogados de prestigio e intelectuales conservadores de derecha caracterizados por un sesgo pro-empresarial así como una inclinación ideológica por el liberalismo clásico en su vertiente primitiva; es decir, el liberalismo en la concepción de Locke, Smith y Ricardo; paradójicamente, el liberalismo modernizado de Mill y Spencer tendía a caracterizarse en este entorno académico como socialismo junto con un rechazo hacia la economía neo-clásica, los óptimos Paretianos y la necesaria falseabilidad de toda propuesta teórica que quiera ser científica.

La derecha y la izquierda en Guatemala temen a esa lapidaria concepción de la ciencia en Pareto en la cual, ahora **son los objetos lo que determinan el tipo de leyes a construir en el análisis sociológico**. No existen más leyes sociales a-históricas válidas en todo momento, en toda etapa de tiempo y para todo grupo humano. Existen únicamente regularidades falseables; y a eso teme el polarizado debate ideológico, sobre todo entre quienes debiesen de formar futuros tecnócratas para el desarrollo de políticas públicas. El Equilibrio de Bienestar necesario en todo marco social es incapaz de construirse en el contexto Guatemalteco debido a la ideologización pre-científica con la cual se hace academia.

La propuesta de Reforma Constitucional promovida por las derechas Guatemaltecas lleva el nombre de **Pro-Reforma**. Hágase la salvedad de que esta propuesta de Reforma Constitucional ataca con inteligencia el viciado y politizado proceso de elección de Magistrados en todas las índoles de la política Guatemalteca: los Partidos Políticos han sub-plantado al demos. Sin embargo, es aún más paradójico que los ideólogos liberales Guatemaltecos sugieran en esta propuesta de Reforma la conformación de

un Senado con Membrecía Vitalicia encargado de ser el único capaz de modificar los artículos dogmáticos de la Constitución Guatemalteca.

La historia nos enseña que el liberalismo político es una respuesta no a un problema económico sino a un problema político: la necesaria alternancia. Senadores de carácter vitalicio son un concepto antagónico al Liberalismo Político. Y esto es una traición al ideario de la libertad.

Alguien en el debate ideológico Guatemalteco debe de ceder; alguien debe de conceder y estar dispuesto a construir pactos. De lo contrario, la radicalización política del país concluirá con la revolución inevitable.

Bibliografía

Alcántara, Manuel (1994, 1997). *Gobernabilidad, crisis y cambio*. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid. De la gobernabilidad. Revista América Latina Hoy No. 8. Gobernabilidad y Democracia. Instituto Interuniversitario de Iberoamérica. Universidad de Salamanca.

<http://iberoame.usal.es/americalatinahoy/ALH-PDF-TIFF/ALHvol8/ALHvol8alcantara.pdf>

Barrios, Lina (2001). *Antecedentes Históricos de las Alcaldías Indígenas, tras las Huellas del Poder Local: La Alcaldía Indígena en Guatemala, del siglo XVI al XX*. Guatemala: Universidad Rafael Landívar, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, 2001. ISBN 99922-67-21-6.

Bastos, Santiago y Camus, Manuela (2003). *Entre el mecapan y el cielo. Desarrollo del Movimiento Maya en Guatemala*. Guatemala: Editorial Ciencias Sociales, Cholsamaj. Guatemala

Casaus Arzú, Marta (1995). *Linaje y Racismo*. FLACSO, 1995, 2da. Edición. Costa Rica

CONGCOOP (2004). *Propuesta de reforma agraria integral (RAI)*. Coordinadora nacional de organizaciones campesinas de Guatemala, cnoc, y la coordinación de ong y cooperativas. guatemal. [en línea], 22 de mayo de 2004. [citado 09 de marzo 2005]. http://www.cerai.es/fmra/archivo/cnoc_es.pdf

Giner, Salvador, et al (2002). *Diccionario de Sociología*. Alianza editorial. Segunda reimpresión. Madrid.

Habermas, Jürgen (1985). *Conciencia moral y acción comunicativa*. Península, Barcelona.

North, Douglas (1989). *Instituciones, Cambio Institucional y Desempeño Económico*. Fondo de Cultura Económica. 1989.

Ritzer, George (2002). *Teoría sociológica clásica. Funcionalismo estructural, neofuncionalismo y teoría del conflicto*. The MacGraw-Hill Companies. FARESO, S.A. Madrid.

Schmitter, Philippe C. y Lehbruch G. eds. (1970) *Trends toward Corporatist Intermediation*. Sage Publications. London.

ELECCIONES PRESIDENCIALES EN EL SALVADOR 2009: UN NUEVO PROYECTO NACIONAL

Ignacio Medina Núñez¹²

“La vida consiste en la resolución de problemas. A menudo la solución es la elección o construcción de un nuevo nicho ecológico”

Popper Karl 1996: 33

Introducción

La imposibilidad de acceder políticamente a posiciones de poder por parte de cualquier personaje o movimiento que tuviera algo que ver con posiciones de “izquierda” o aunque fuera solamente simpatía por sus demandas tradicionales de tierra, justicia social, respeto a los derechos humanos, aumentos salariales, etc. siempre fue algo claro para todos, durante la mayor parte del siglo XX. En el contexto internacional estaban los hechos de las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile, la dictadura de Videla en Argentina, la de Stroessner en Paraguay, teniendo además la cercanía de los hechos centroamericanos de la remoción del gobierno progresista de Jacobo Arbenz, en Guatemala, en 1954, y del apoyo incondicional de los Estados Unidos al gobierno nicaragüense durante la época de la familia Somoza.

En el caso particular de El Salvador, llamado el “Pulgarcito de América” por Gabriela Mistral debido a la pequeñez geográfica del país, había también hechos contundentes en esta misma dirección: había sucedido la masacre de 1932 bajo la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez que costó la vida de alrededor de 30 mil salvadoreños, incluido el fusilamiento de Agustín Farabundo Martí; décadas después, varios partidos de

¹² Ignacio Medina es Doctor en Ciencias Sociales y trabaja como profesor en el ITESO (Universidad Jesuita de Guadalajara) y en la Universidad de Guadalajara. Correo electrónico: nacho@iteso.mx

oposición se unieron para postular en la contienda electoral a Napoleón Duarte, del Partido de la Democracia Cristiana (PDC), en 1972, frente al candidato de los militares, Armando A. Molina: “Duarte claramente ganó la elección, pero el fraude y la intervención militar lo despojaron de la victoria” (Leiken y Rubin, 1987: 320); a partir de ahí Duarte tuvo que pasar varios años en el exilio.

Si el camino de la contienda política a través de los procesos electorales se había ido cerrando, las condiciones nacionales hicieron surgir en numerosos grupos sociales la única alternativa: la lucha armada frente al gobierno. Por ello fueron naciendo diversas coordinaciones de movimientos populares y sobre todo las organizaciones político-militares de la insurgencia frente a las sucesivas dictaduras militares:

- 1) Las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL) en 1970
- 2) El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1971
- 3) Las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) en 1975
- 4) El Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), en 1979.
- 5) La reactivación del antiguo Partido Comunista Salvadoreño (PCS), que se incorporó a la lucha armada a través de sus Fuerzas Armadas de Liberación.

El proceso de lucha de estas diferentes organizaciones insurgentes contra los diversos gobiernos militares de El Salvador desembocaron en un proceso de unificación a través de una Dirección Revolucionaria Unificada, la cual desembocó finalmente en la constitución del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en octubre de 1980.

Durante la década de los 80, hubo formalmente en el país una transición hacia los procesos electorales en donde se formó una Asamblea Constituyente y se reconoció oficialmente el triunfo de José Napoleón Duarte¹³, de la Democracia Cristiana, como presidente, en 1984. Sin embargo, el enfrentamiento bélico continuó de una manera encarnizada, puesto que el gobierno de la Democracia Cristiana (PDC) –y posteriormente el de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a partir de 1989, con Alfredo

¹³ Napoleón Duarte, sin embargo, ya había dejado de ser un líder opuesto a los militares; se había aliado con ellos, con la derecha en el país y se había subordinado a los designios de Estados Unidos con tal de llegar al poder ejecutivo.

Cristiani—, apoyado abiertamente por el régimen norteamericano de Ronald Reagan, implementó una sangrienta guerra, que lo convirtió en uno de los regímenes señalados entre los peores violadores de los derechos humanos en América Latina. Durante esa época, la llamada transición democrática no fue más que el paso de las dictaduras militares hacia la “continuidad a una larga historia de procesos electorales ilegítimos que validaron gobiernos corruptos” (Lungo, 1986: 29).

Sin embargo, dentro del mismo proceso general centroamericano hacia la reconciliación, a través de los Acuerdos de Esquipulas, El Salvador también aterrizó en un Acuerdo de Paz en 1992: el 16 de enero de 1992, el gobierno de ARENA de Alfredo Cristiani y el FMLN firmaron la paz en la ciudad de México y, con ello, dieron origen al actual sistema de partidos políticos, en donde la antigua insurgencia armada aceptaba las nuevas reglas políticas con un nuevo marco para las contiendas electorales.

El hecho para el año del 2009 es que, a la distancia de 20 años de gobiernos de ARENA, la organización gobernante de ultraderecha, el FMLN ha conquistado la presidencia del país en el mes de marzo. Este escrito da cuenta de ese proceso de inserción política de la antigua organización armada y cómo permaneció en la oposición hasta el presente año, cuando su candidato Mauricio Funes logró la victoria. Muy difícil ha sido todo este proceso, aunque tal vez más difícil será realizar un gobierno que cumpla las esenciales promesas de campaña.

1. Auge y descenso electoral de la Democracia Cristiana

El modelo que ofrecía el Partido de la Democracia Cristiana (PDC) en El Salvador fue el que el gobierno norteamericano de Ronald Reagan encontró más adecuado para su política exterior guerrerista: bajo una apariencia de transición a la democracia por el solo hecho de realizarse procesos electorales, ambos gobiernos se encaminaron a una encarnizada guerra para acabar con la insurgencia armada del FMLN. La política exterior de Reagan se expresó con mucha claridad: El Salvador era el objeto de una expansión comunista originada en la Unión Soviética, pasando por Cuba y Nicaragua, y por tanto, el destino de la confrontación Este-Oeste se tenía que definir en ese pequeño país para evitar que el imperio del mal llegara al corazón de Norteamérica.

De esta manera, los procesos electorales se utilizaron para querer encubrir una estrategia de guerra de baja intensidad¹⁴: “Las elecciones, que en sí mismas pueden ser un arma de lucha del pueblo para avanzar hacia la democracia, en realidad, en El Salvador se han convertido en un instrumento de mayor opresión interna y en una fachada para intentar justificar toda la ayuda económica y militar de los Estados Unidos y, con ello, tratar de ganar militarmente la guerra” (Medina, 1990: 41).

Napoleón Duarte habría sufrido un tremendo fraude electoral en las elecciones presidenciales de 1972 porque su triunfo en los comicios le fue arrebatado por los militares. Tuvo que huir fuera del país y volvió a El Salvador en octubre de 1979 pero en una alianza de colaboración con las diferentes juntas militares de gobierno; él mismo fue parte integrante de la tercera Junta de Gobierno y pasó a presidir la cuarta, en diciembre de 1980. Esta alianza de la cúpula del PDC con los gobiernos militares propició la realización de diversas masacres en varias regiones del país, incluyendo el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, en 1980.

La junta de gobierno presidida por Duarte organizó en 1982 las elecciones para una Asamblea Constituyente, a pesar de la oposición de un sector de militares de ultraderecha, que nunca estuvieron de acuerdo en la alianza con el PDC. Estos militares se organizaron para formar su propio partido al que denominaron Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), teniendo como su principal dirigente al mayor Roberto D’Aubuisson, un negro personaje que había implementado en el país las acciones de numerosos Escuadrones de la Muerte.

En las elecciones de la Asamblea Constituyente de 1982 en que solamente participaron las ideologías de ultraderecha y la derecha, los resultados fueron los siguientes: el PDC obtuvo el 41% de la votación (24 curules) y ARENA el 26% (19 curules). Sin embargo, la alianza con otros partidos de la derecha, le permitía a ARENA una formidable presión sobre el gobierno: el Partido de Conciliación Nacional (PCN) obtuvo catorce curules, Acción Democrática dos y el Partido Popular Salvadoreño solamente una. Estas elecciones fueron alabadas en forma desproporcional por el gobierno norteamericano mientras quedaban muchísimas dudas sobre la

¹⁴ El concepto de guerra de baja intensidad fue utilizado para Centroamérica por parte del gobierno de Ronald Reagan, para distinguirla del enfrentamiento directo con la Unión Soviética durante la guerra fría. Sin embargo, esta supuesta baja intensidad no fue obstáculo para el uso de numerosas armas de alta tecnología en contra de la insurgencia de Nicaragua y El Salvador.

forma como se había realizado dicho proceso. Para evitar una polarización violenta, la fuerza real de los militares le negó la presidencia provisional tanto a Duarte como a D'Aubuisson y se la otorgó a un hombre de negocios, Álvaro Magaña.

Sin embargo, una vez redactada la nueva Constitución del país, se preparó el nuevo proceso electoral en donde abiertamente se tuvieron que enfrentar Napoleón Duarte, por el PDC, y Roberto D'Aubuisson, por ARENA. La guerra contra la insurgencia del FMLN continuaba mientras que los dos principales candidatos solamente se preocupaban de atraer el favor de los Estados Unidos, que era el determinante para el devenir nacional.

La intervención del embajador Pickering y numerosos agentes norteamericanos fue determinante para el proceso electoral en donde el 26 de marzo de 1984, el PDC ganó la primera ronda electoral con el 43.4% de los votos sobre ARENA, que consiguió el 29%, y sobre el PCN, que consiguió el 16% de la votación. Para la segunda ronda electoral, el 6 de mayo, que se realizó solamente entre el PDC y ARENA, Napoleón Duarte se convirtió en el presidente electo con el 53% de la votación sobre el 46.4% de su cercano competidor.

¿Qué significaron las elecciones durante este período de transición? “Las elecciones para la Asamblea Constituyente celebrada en marzo de 1982 y las elecciones presidenciales de marzo y mayo de 1984, las cuales se desarrollaron en medio de una guerra popular revolucionaria y bajo la dirección del gobierno de Reagan,... daban continuidad a una larga historia de procesos electorales ilegítimos que validaron gobiernos espurios” (Lungo, 1986: 29).

El ascenso político del PDC en El Salvador era claro pero en un contexto muy cuestionado de ilegitimidad y con el apoyo explícito del gobierno de los Estados Unidos. La Democracia Cristiana todo lo sacrificó en aras de lograr el poder gubernamental. Y lo logró su objetivo. Sin embargo, el gobierno de Duarte representa la cima y el comienzo de la caída de su propuesta política: mientras el presidente besaba cariñosamente la bandera norteamericana en una visita a El Salvador del presidente Reagan, una tercera parte del territorio salvadoreño estaba fuera del control gubernamental, las masacres y la guerra contra la insurgencia y la población civil continuaban en numerosos lugares; la situación económica, por otro lado, a pesar de los millones de dólares provenientes de Estados Unidos, se agravaba para la población. El gobierno de Duarte se distinguió por accio-

nes de corrupción, asesinatos, desaparecidos, despedidos de sus centros de trabajo, represión a manifestaciones en las calles, guerra de baja intensidad, etc.

Cuando se renovó la Asamblea legislativa, el 20 de marzo de 1988, el descenso político del PDC era manifiesto. Por un lado estaba el fenómeno del abstencionismo que llegó al 60%, y, por otro, las mismos votantes le dieron el triunfo a ARENA con 447,696 votos frente a 326,716 otorgados a la democracia cristiana. En términos numéricos de curules, ARENA, por sí solo, logró una mayoría relativa de 31 diputados en la Asamblea legislativa. Además, en la alcaldía de San Salvador, el candidato del PDC, Alejandro Duarte –hijo del presidente– también perdió. En un contexto posterior a estas elecciones, durante la preparación de los comicios presidenciales, el PDC también sufrió una tremenda división a raíz de la pretensión de dos de sus líderes para ser candidatos a la presidencia: Fidel Chávez Mena y Adolfo Rey Prendes; el asunto se dirimió con gran controversia y, con el apoyo de Napoleón Duarte, el candidato fue Fidel Chávez Mena; sin embargo, el candidato perdedor se separó del PDC y formó su propio partido. Por otro lado, resultó simbólico que el propio Napoleón Duarte tuviera que abandonar temporalmente la presidencia en junio de 1988 debido al cáncer que amenazaba su vida: la Democracia Cristiana se encontraba sin su principal dirigente y en medio de graves conflictos internos.

Por su parte, ARENA se preparó para la búsqueda de la alternancia en la presidencia: sabiendo que su dirigente Roberto D'Aubuisson tenía cargada la imagen con los escuadrones de la muerte, propuso en 1988 una alternativa como candidato a la presidencia nacional más aceptable para los Estados Unidos, la de Alfredo Cristiani. Se trataba de un civil en vez de un militar, pero con la misma ideología ultraderechista de ARENA y acoplado perfectamente a los designios estadounidenses.

El FMLN sorprendió a las fuerzas políticas nacionales e internacionales cuando, antes de los comicios presidenciales programados para el 19 de marzo de 1989, lanzó una propuesta de paz. El elemento novedoso era el siguiente: “El FMLN planteaba su posible participación en las elecciones presidenciales apoyando al candidato de la Convergencia Democrática, el doctor Guillermo M. Ungo, si el proceso electoral se aplazaba por un período de seis meses y si había una mayor participación de la misma Convergencia en el Consejo Central de Elecciones” (Medina, 1990: 147). Fue la primera vez que la insurgencia planteó su posible incorporación a los procesos electorales del país, en medio de una situación de guerra y en el con-

texto de una arena electoral controlada por el gobierno; se pretendía, como lo mencionaba el comunicado del Frente, el 23 de enero de 1989, “convertir las elecciones en una contribución a la paz”, pero lo hacía en alianza con el antiguo Frente Democrático Revolucionario (FDR), una organización de movimientos sociales que había surgido en 1980 y que luego en 1988 se transformó en partido político con el nombre de Convergencia Democrática, para participar legalmente en los procesos electorales.

La propuesta fue rechazada tanto por el gobierno como por los partidos políticos tradicionales, aduciendo solamente la razón de la “inconstitucionalidad” en relación al cambio de fecha electoral. Se perdió una oportunidad para la paz y permaneció la fecha prevista del 19 de marzo en donde sucedió la debacle prevista del PDC: ganó Alfredo Cristiani, de ARENA, con 503,370 votos sobre los 338,369 de los demócrata-cristianos. Cristiani tomó luego posesión como presidente el 1 de junio de 1989.

Como era previsible, la guerra se intensificó, especialmente con la ofensiva general del mes de noviembre de ese año, con combates a lo largo del territorio nacional y que llegaron a la misma capital de San Salvador. El gobierno llegó a bombardear la ciudad capital y orquestó el asesinato de varios de los miembros de la comunidad de los jesuitas de El Salvador, y que se habían convertido en un importante actor crítico ante la política represiva de los sucesivos gobiernos. Al final de la ofensiva, ambas partes tuvieron que reconocer la imposibilidad de ganar la guerra por la vía militar e iniciaron un proceso de negociación de la paz con el aval de las Naciones Unidas: los dos contendientes firmaron de hecho un protocolo oficial, el 4 de abril de 1990, para iniciar la negociación, con la mediación de Javier Pérez de Cuellar, el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU).

El reconocimiento de la imposibilidad de ganar la guerra contra la insurgencia por medios militares fue lo que caracterizó al gobierno de Cristiani, a diferencia de la Democracia Cristiana y, por ello, el gobierno de ARENA aceptó la negociación. Pero los puntos a negociar eran muy complicados: el cese de fuego, la existencia de los escuadrones de la muerte, el respeto a los derechos humanos, las reformas a la constitución, las reformas económicas para el país, la incorporación de los insurgentes y de la población en zonas de conflicto, la conversión del FMLN en organismo político y, sobre todo, la depuración del ejército gubernamental y su transformación. A pesar de las grandes dificultades, se firmaron los Acuerdos de Paz entre los contendientes el 16 de Enero de 1992: se inició entonces un nuevo proceso político en El Salvador, que fue en realidad el inicio del

proceso de transición desde el autoritarismo militar hacia un sistema de fuerzas y partidos más plural para negociar las decisiones nacionales y definir presidencias municipales, legisladores y presidente de la República.

Uno de los puntos importantes de dichos Acuerdos fue la creación de la Comisión de la Verdad, que tenía, entre sus objetivos, la investigación de los hechos de violencia ocurridos en El Salvador desde 1980. Integrada esta Comisión por personalidades internacionales como Belisario Betancourt, Reinaldo Figueredo, Thomas Buergenthal, etc., presentó sus conclusiones en la sede de la ONU en marzo de 1993: “De la Locura a la Esperanza: la guerra de doce años en El Salvador”. En el 95% de los casos de muertos y desaparecidos, la Comisión encontró como responsable al gobierno salvadoreño, al ejército y a los escuadrones de la muerte auspiciados por los militares; el FMLN también tuvo responsabilidad en varios hechos de violencia aunque fuera en un mínimo porcentaje.

Napoleón Duarte había fallecido a causa de su enfermedad el 23 de febrero de 1990. Su muerte fue el símbolo del fracaso político de la Democracia Cristiana, un partido que él había fundado y que lo llevó a la presidencia del país pero en una subordinación descarada hacia los militares y hacia el gobierno de los Estados Unidos. Después de su período presidencial (1984-1989) como mal gobierno, el partido fue desbancado de la presidencia porque Alfredo Cristiani, de ARENA, ganó en la primera ronda electoral con el 54% de los votos; la organización jamás se pudo recuperar políticamente: ARENA continuó en ascenso en las elecciones legislativas de 1991 al lograr 39 de los 84 escaños de la Asamblea Legislativa y al arrebatarle al PDC la alcaldía de San Salvador. Para las elecciones presidenciales de 1994, la Democracia Cristiana ocupó ya el tercer lugar en la votación nacional (logró 240,451 votos), quedando atrás incluso del FMLN, a quien había tratado de aniquilar política y militarmente y quien por primera vez participó en los comicios. Para las elecciones intermedias de 1997, los demócrata cristianos cayeron todavía con más estrépito al conseguir solamente 93,545 votos.

2. El FMLN como fuerza de oposición política a los gobiernos de ARENA

La conformación del FMLN como partido político legalmente reconocido fue un proceso muy difícil después de los Acuerdos de paz de 1992. Dichos acuerdos no solamente implicaban el silencio de las armas sino todo un proceso de reconstrucción del país después de la guerra, un proce-

so que no llegó a ocurrir porque el gobierno nunca quiso cumplir las demandas fundamentales que antes tenía la insurgencia en relación sobre todo a la justicia social. Además, la situación de guerra no podía olvidarse fácilmente porque seguían enquistadas muchas fuerzas oscuras dentro de los militares y en las esferas gubernamentales.

Los escuadrones de la muerte y fuerzas paramilitares tuvieron todavía muchas oportunidades de actuar de manera violenta contra militantes y dirigentes del Frente¹⁵ después de 1992; Américas Rights Watch certifica, por ejemplo, la muerte violenta de Oscar Grimaldi, un antiguo dirigente logístico de la guerrilla, el 19 de agosto de 1993; la de Francisco Velis, miembro del Consejo Nacional y candidato a la asamblea legislativa por el Frente, el 25 de octubre; la de Heleno Hernán Castro, el 30 de octubre del mismo año; la de José Andrés Bonilla Ventura, candidato a presidente municipal de Guazapa por el Frente, el 10 de diciembre; la de José Mario López Alvarenga (anteriormente comandante Venancio en las filas del Frente), el 9 de diciembre de 1993, quien había sido integrante del equipo que había negociado los acuerdos de paz, era miembro de la secretaría de educación del Frente y candidato al Parlamento Centroamericano (Cfr. Arnsón C., 1994).

Sin embargo, en 1994, estaban bien delineadas las fuerzas políticas más importantes: el partido gobernante ARENA había postulado al alcalde de San Salvador, Armando Calderón Sol; el FMLN, antigua organización insurgente, había hecho coalición con el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y con Convergencia Democrática (CD) para postular a Rubén Zamora¹⁶; el PDC persistió en postular al mismo candidato que ya había perdido en 1989, Fidel Chávez Mena. Se puede señalar también la importancia relativa del antiguo partido de los militares, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) con 83,520 votos y 4 legisladores, en una trayectoria declinante pero que conservaría un papel decisivo en las alianzas parlamentarias con ARENA.

¹⁵ A ellos y a miles más que no llegaron a vivir el triunfo del 2009, el presidente Mauricio Funes los recordaría en su toma de posesión: “Un largo camino ha debido recorrer el pueblo salvadoreño para llegar a este día. Ningún esfuerzo ni ningún sacrificio ha sido inútil” (Funes, 2009).

¹⁶ Esta alianza era un intento de unificar las fuerzas políticas de izquierda más importantes del país; fue una importante alianza pero heterogénea, porque cada una de las organizaciones tenían visiones distintas del país abarcando desde la socialdemocracia hasta la izquierda radical.

En ese año electoral, ARENA se consolidó en su ascenso electoral después de haberle arrebatado la presidencia a la Democracia Cristiana en 1989; el partido supo capitalizar en su provecho el desarrollo de los acuerdos de paz a través de la gestión de Alfredo Cristiani y con una campaña pública de constante descrédito sobre los antiguos líderes de la insurgencia; la votación que le dio el triunfo a Calderón Sol como presidente fue del 49.03%, obteniendo 38 diputados en la cámara de legisladores y 206 presidencias municipales de un total de 262.

La Democracia Cristiana continuó su descenso político sin ningún líder de significado que sustituyera a Napoleón Duarte; su candidato Chávez Mena no pudo evitar la profundización de las crisis internas y tampoco supo hacer campaña para presentarse como opción ante la población. Este partido solamente logró el 16.39% de la votación consiguiendo solamente 18 legisladores en la Asamblea Nacional y el triunfo en 29 presidencias municipales.

El FMLN perdió con claridad en su primera presentación en la arena político electoral, pero es importante señalar el gran número de votos que lo ubicó en el segundo lugar de las preferencias para un partido que había dado un enorme salto desde la ilegalidad como fuerza político militar transformándose en un contendiente reconocido dentro del sistema todavía viciado y controlado por los organismos gubernamentales. La coalición de una izquierda heterogénea FMLN-MNR-CD conquistó el 24% de la votación, 22 legisladores para la Asamblea y el triunfo en 15 alcaldías de las 172 que habían logrado inscribir. Aunque hubo numerosas irregularidades comprobadas, ninguno de los partidos políticos hizo acusaciones de fraude.

Según las reglas electorales de El Salvador, al no obtener ninguno de los contendientes el 50% de la votación, hubo necesidad de una segunda ronda para el 24 de abril de 1994, que se realizó únicamente entre Calderón Sol, de ARENA, y Rubén Zamora de la coalición FMLN-MNR-CD. El resultado era previsible, dados los números de los dos candidatos en la primera ronda electoral: ganó ARENA con 818,264 votos (68.35%) sobre los 378,980 votos que consiguió la oposición (31.65%). “Lo que destacaba en estas elecciones era el sensible crecimiento político que tuvo el FMLN y –junto al desplazamiento del PDC– el desplazamiento de partidos de centro izquierda... El balance final de la elección mostró de nueva cuenta que el enfrentamiento principal seguía dándose entre las posiciones más extremas del abanico político: entre ARENA y el FML –los dos proyectos

históricamente en pugna—, lo cual era reflejo de la polarización social que aún vivía El Salvador” (Preciado J. y López M., en Medina, 1998: 117).

La primera contienda electoral del FMLN fue satisfactoria al haber logrado el segundo lugar en la votación y al haber forzado la segunda vuelta con su candidato; sin embargo, había que tener en cuenta numerosos factores para los futuros procesos: la coalición FMLN-MNR-CD solamente funcionó para elegir presidente y vicepresidente del país puesto que en los otros niveles cada organización postulaba sus propios candidatos.

“Para la votación presidencial, en la primera vuelta ARENA obtuvo 49,11% de los votos, mientras que la coalición formada por el FMLN, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Convergencia Democrática (CD), consiguió 24,99%, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) alcanzó 16,27% de los votos. En la segunda vuelta realizada a fines de abril, Arena obtuvo una contundente victoria con 68,35% de la votación, mientras que la coalición de izquierda obtuvo 31,65%. En las elecciones para diputados, Arena mantuvo sus 39 diputados, el PDC pasa de 26 a 18, el Partido de Conciliación Nacional (PCN) de 9 a 4, y el FMLN debuta con 21 diputados; otros partidos obtienen 2 diputados. En cuanto a las alcaldías municipales, Arena obtuvo 207; el PDC 29; el FMLN 15 –2 de ellas en coalición–; 10 el PCN; y 1 el Movimiento Auténtico Cristiano (MAC). En estas elecciones, el gobernante Arena se mantuvo como la principal fuerza política del país, en tanto que la coalición de izquierda se ubicó como el segundo grupo mientras el PDC quedaba desplazado a la tercera posición” (Córdova, 2000: 23-24).

Una nueva experiencia para Frente sería la vida política en la oposición legal, tanto en su relación con los movimientos populares como en el nivel del trabajo legislativo donde la negociación política dentro de la Asamblea Nacional sería el quehacer diario con los antiguos enemigos y algunos pocos amigos: ARENA había obtenido 39 diputaciones, el FMLN 21, el PDC 18, el PCN 4, Convergencia Democrática 1 y Movimiento de Unidad 1. “En 1994 participa por primera vez en elecciones como partido político obteniendo 21 diputados y 15 gobiernos locales, y desde entonces hasta hoy su fuerza electoral ha crecido ininterrumpidamente, tanto en el ámbito municipal como en el legislativo” (Harnecker, 2000).

En este contexto, el partido gobernante, aunque no contaba con mayoría absoluta, pudo imponer con cierta facilidad sus propuestas debido a que podía contar con los cuatro diputados de un aliado casi incondicional,

el PCN, y eventualmente con diputados del PDC, que siempre preferían una alianza con el gobierno a una coalición con la antigua insurgencia.

La vida política al interior del mismo FMLN también encontró tensión y contradicciones entre los antiguos grupos guerrilleros que conformaban el movimiento junto con la inexperiencia de los propios dirigentes en el nuevo ámbito electoral. En la conformación original del Frente en 1980 se unieron las FPL, el ERP, las FARN, el PRTC y el PCS¹⁷. Cada organismo seguía existiendo en su interior y eventualmente llegaron a choques internos sobre el informe de la Comisión de la Verdad, sobre las políticas públicas en relación a los desmovilizados, sobre cuotas de poder o designación de dirigentes, etc. De manera inmediata, por ejemplo, en el mes de mayo de 1994, siete diputados del antiguo ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, que transformó su significado en Expresión Renovadora del Pueblo) y de las FARN no acataron los acuerdos del conjunto del Frente y realizaron una negociación en donde ellos apoyaron a una diputada de ARENA para presidir la Asamblea a cambio de que se reconociera a una integrante de su fracción, Ana Guadalupe Martínez (ERP) como vicepresidenta en la junta directiva. Más allá de los casos coyunturales, se fue delimitando la formación de dos bloques al interior del Frente: las FPL, el PCS y el PRTC frente al intento de sobresalir de los dirigentes del ERP y las FARN, Joaquín Villalobos y Fermán Cienfuegos. No sólo estaban en juego los deseos de protagonismo de varios dirigentes sino sobre todo la discusión sobre el nuevo proyecto político del Frente en la nueva etapa política, en una situación de cierto desmantelamiento de las antiguas bases sociales del Frente en el proceso de incorporación de muchos dirigentes a la vida legal y civil.

Posteriormente, el 16 de marzo de 1997, se realizarían de nuevo elecciones para 262 alcaldes y 84 diputados, que se convertían en la segunda experiencia electoral del FMLN. El proceso se desarrolló con menos irregularidades y actos de violencia, debido a las reformas realizadas anteriormente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE); las organizaciones políticas pudieron además la capacidad de tener representantes en numerosas mesas de votación.

¹⁷ Éstas fueron las organizaciones fundantes del FMLN, como ya se señaló anteriormente: Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN o RN), Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y Partido Comunista Salvadoreño (PCS).

El resultado sorprende por el descenso en votación del partido en el gobierno: de 605,775 votos que había tenido en 1994, en las elecciones de 1997, ARENA bajó a 396,301. El FMLN por su parte hizo crecer sus votos de 287,811 a 369,709. Los argumentos explicativos del presidente Calderón y de la presidenta de la Asamblea Legislativa fueron patéticas: los ciudadanos simpatizantes de ARENA no se presentaron a votar porque tenían una sobre confianza en lo que estaba realizando el gobierno. Pero los resultados son contundentes: ARENA bajó de 39 a 28 diputados, y de estar gobernando 207 alcaldías en 1994 solamente triunfó en 162 en 1997; el FMLN elevó el número de sus diputados de 21 en 1994 a 27 en 1997, y hizo crecer el número de sus alcaldías de 13 a 48 (más otras dos en coalición con la CD); el PDC bajó de 18 a 7 diputaciones en el lapso de los tres años y las alcaldías bajo su dominio también descendieron de 29 a 15. Hay que hacer notar, sin embargo, que el PCN tuvo un ligero repunte al pasar de 4 diputados en 1994 a 11 en 1997. Es importante mencionar el ascenso de la izquierda en las posiciones legislativas: “Este resultado electoral produce una nueva composición de la Asamblea Legislativa: 28 diputados para Arena; FMLN, 27; PCN, 11; PDC, 9; Unión Social Cristiana (USC), 3; CD, 2; Partido Liberal Democrático (PLD), 2; Movimiento de Unidad (MU), 1; y el Partido Demócrata (PD), 1” (Córdova M., 2000: 24)

Sin embargo, la coyuntura de las elecciones presidenciales del 7 de marzo del 1999 fue una prueba de fuego para el FMLN porque llegó a la contienda en medio de una crisis interna debido a un enfrentamiento profundo sobre su proyecto de país. La debacle podía expresarse de esta manera: “crecientes contradicciones internas aparecidas dentro del FMLN, que llegaron hasta el extremo de que hacer contracampañas públicas y privadas contra los candidatos de la fórmula presidencial y un discurso político y orientación de la campaña muy poco diferenciados de ARENA, crearon escepticismo y desconfianza entre los votantes” (Harnecker, 2000).

Volvió a ganar ARENA habiendo postulado a su candidato Francisco Flores (quien gobernaría el país de 1999 a 2004), pero lo hizo con el 52% de los votos, sin necesidad de ir a una segunda ronda electoral; el derrotado fue Facundo Guardado, antiguo comandante guerrillero del FMLN, junto con su compañera de fórmula Nidia Díaz, quienes solamente alcanzaron el 29% de la votación; el tercer lugar fue para Rubén Zamora, candidato de la Coalición del Centro Democrático Unido. Se calculó, además, un abstencionismo cercano al 60%.

Facundo había tenido serios enfrentamientos dentro del Frente, confrontándose especialmente con otros líderes como Shafick Handal y Salvador Sánchez Cerén. Después de las elecciones, echando la culpa de su derrota a las facciones de su organización que no quisieron apoyarlo, renunció a sus puestos de dirección política. Facundo quiso presentarse ante la sociedad como una figura de centro político, abriéndose a una mejor relación con la empresa privada y sumándose a las propuestas del libre mercado. La división interna de la antigua organización guerrillera se había hecho pública desde la nominación del candidato para la presidencial de 1999 porque se requirieron tres asambleas nacionales para poder llegar a la designación de Guardado. “Se necesitaron tres convenciones para que el FMLN lograra coincidir en torno de su fórmula de candidatos, con el agravante de que durante los últimos meses de 1998 este partido aparece en los medios de comunicación mostrando sus diferencias internas, con una imagen de agrupación dividida e incapaz de ponerse de acuerdo, lo cual erosiona su imagen pública. El daño mayor fue producido por la I Convención, en donde el FMLN mostró una imagen interna de polarización, intolerancia e irrespeto. Finalmente, en la III Convención, celebrada a finales de septiembre, se elige la fórmula presidencial, conformada por los ex-comandantes Facundo Guardado y Nidia Díaz” (Córdova M, 2000: 26).

Ya se había dado una división pública en 1996 cuando Joaquín Villalobos, antiguo comandante guerrillero en el ERP había dejado el Frente para fundar una organización centrista llamada “Partido Democrático”, que nunca tuvo una importancia política en el país. Posteriormente, previo a las elecciones presidenciales de 1999, desde la sexta convención nacional del FMLN, en diciembre de 1997, se debatía en su interior sobre cuál debía ser su nuevo papel en la sociedad salvadoreña y por tanto el mejor perfil del futuro candidato presidencial; Guardado había sustituido a Salvador Sánchez Cerén en la coordinación nacional de la organización: “el FMLN se debate en discusiones y pugnas internas. La posibilidad que se le abre de acceder al control del gobierno coincide con el preciso y obligado momento en que debe debatir cuál ha de ser el rol y la identidad de la izquierda en tiempos de gran incertidumbre” (Envío digital, 1998: no. 199). Parecía que la fórmula acordada¹⁸ finalmente en septiembre de 1998 para las elecciones de marzo de 1999 (Facundo Guardado y Martha Valladares, la ex comandante Nidia Díaz) podía dar fin a los conflictos internos de la organización

¹⁸ Ya antes se habían puesto a discusión las propuestas de Héctor Silva, alcalde de San Salvador, y de Héctor Dada, pero no habían logrado mayoría en las convenciones nacionales.

por el abrazo que se dieron todos los dirigentes, pero no fue así. El enfrentamiento se agudizó entre las posiciones centristas, socialdemócratas, que privilegiaban la negociación con las fuerzas de la derecha y que estaban representadas en la figura de Guardado frente a la tendencia representada sobre todo por Schafick Handal y Salvador Sánchez Cerén (ex comandante Leonel González) que no querían olvidar la lucha por el socialismo.

La posición de Facundo fue reconocida por él mismo en su intento de transformación de la organización: “asumo la coordinación general de este partido, como resultado de una elección abierta, e intento, junto a otro grupo de dirigentes, hacer una reforma para convertir al FMLN en una fuerza de carácter socialdemócrata, más comprometida con el progreso, con el bienestar social y alejarlo del discurso de la guerra fría o del tipo de fanatismo de izquierda que siempre he considerado que no lleva a ningún buen fin” (Guardado, 2006). Posteriormente, esta posición lo llevaría a criticar constantemente a Fidel Castro en Cuba, a Hugo Chávez en Venezuela, a todo lo que él considerara una izquierda radical. Años después, el propio Guardado reconocía explícitamente su intención de aquel momento: “Yo (cuando era coordinador general del Frente) quería acabar con los comunistas, mandarlos a hacer su partido fuera del FMLN. ¡Agarren maletas y váyanse a hacer partido fuera del FMLN!, que es lo que tienen que hacer” (Guardado, en Martínez, 2005).

“El sector de las FPL, fiel a Leonel González comenzó a atacar a Guardado por privilegiar las negociaciones con la derecha y por subordinar los intereses del partido y de la lucha revolucionaria a sus intereses personales, calificándolo como socialdemócrata, aliado con la derecha, alejado de los principios revolucionarios, corrupto, etc. Este sector se vinculó pronto con el núcleo original del Partido Comunista de Schafick Handal, y después encontró eco en la corriente disidente del PC, la Tendencia Revolucionaria dirigida por Dagoberto Gutiérrez. En algunos momentos, este sector contó con el apoyo de la otra corriente, la Tendencia Democrática, dirigida por Raúl Mijando, disidente del ERP que dirigió Joaquín Villalobos. Tantas maneras de ver y concebir la marcha y la vida del FMLN acabaron configuradas coyunturalmente en dos bloques: el bloque radical encabezado por Schafick Handal y Leonel González, y el bloque moderado dirigido por Facundo Guardado y Nidia Díaz” (Envío, 1998: no. 199).

Una de las tragedias que se ha manifestado constantemente en la izquierda latinoamericana se hizo presente también en El Salvador: para el FMLN, el enemigo externo, el gobierno y la derecha económica y política,

pasó a un segundo lugar, y todo se concentró en las luchas internas: “ARENA desapareció prácticamente del horizonte de lucha del FMLN y los adversarios del FMLN pasaron a estar dentro del partido. Mientras arreciaba la lucha intestina, el candidato de ARENA recorría el territorio nacional con una imagen de hombre conciliador y propositivo” (Idem: no. 199).

De esta manera, el resultado se mostró en las elecciones presidenciales de marzo de 1999: Francisco Flores, un joven candidato de ARENA con poca tradición en sus filas, no tuvo dificultad para ganar, sin necesidad de una segunda vuelta electoral: recibió 614,268 votos, que significaban el 51.96%; por su parte, Facundo Guardado, de la coalición FMLN-USC (Unión Social Cristiana), conquistó solamente 365,689 votos, que significaban un descenso con el 28.88% de la votación. Otros candidatos recibieron también su parte de la votación nacional: Rubén Zamora de la Coalición de Centro Democrático (incluyendo al Partido Popular Laborista, la Convergencia Democrática y el Partido Democrático) tuvo el 7.59% de la votación; Rodrigo Parker, del Partido de la Democracia Cristiana, solamente obtuvo el 5.78%; Salvador Nelson García, de la Liga Democrática Republicana, consiguió el 3.75%; Hernán Contreras del Partido de Conciliación Nacional alcanzó el 1.66%; y Francisco Ayala de Paz, de PUNTO, solamente conquistó 4,571 votos (el 0.36%).

Guardado culpó de su derrota, sin mencionar sus nombres, a gente de su propia organización, “un pequeño grupo de líderes fanáticos con extremas ambiciones de poder” (LADB, Abril 8, 1999), y quería insistir en su lucha ideológica para evitar que el FMLN se convirtiera en una secta fundamentalista. El Consejo Nacional del Frente aceptó la renuncia ofrecida por Guardado e inició un proceso de reagrupamiento ideológico y organizacional bajo un nuevo coordinador nacional, Fabio Castillo, quien pertenecía a la posición ideológica de Handal y Sánchez Cerén. Pero la disputa de posiciones con Guardado no terminó sino que se prolongó por un tiempo más con enfrentamientos internos hasta que, en octubre del 2001, un tribunal de honor de la organización lo expulsó debido a diversas acciones de indisciplina y por apoyar posiciones del gobierno de ARENA como la propuesta de dolarización del país, en contraposición con las posiciones del Frente. Posteriormente, todo el grupo de renovadores rompió totalmente con el Frente formaron una nueva organización política, el Partido del Movimiento Renovador (PMR), explicitando una clara tendencia socialdemócrata como lo pretendía Facundo.

En ese momento, observadores internacionales distinguían varias corrientes al interior del Frente: “las tres fracciones del Partido son los la facción de izquierda de los Ortodoxos dirigidos por Schafik Handal y Salvador Sánchez Cerén, los Renovadores dirigidos por Guardado, y los Terceristas o Integracionistas (Institucionalistas) dirigidos por Gerson Martínez. Esencialmente, estas divisiones conforman las tendencias políticas de la guerra fría con una izquierda que permanece fiel a la ortodoxia socialista y llamando a los reformadores como derechistas y anticomunistas. Los institucionalistas se colocan a ellos mismos en un plano central no ideológico llamando siempre por una mediación y hacia la unidad” (LADB, NotiCen, Oct. 11, 2001).

A pesar de este señalamiento de tres tendencias, la contradicción principal al interior del Frente se encontraba en dos interpretaciones opuestas sobre lo que debería ser la organización y que desde su origen histórico a partir de cinco grupos ya se habían presentado: “La constitución del FMLN en partido político ha sido todo un proceso. En 1992, en el momento de nacer, fue un partido de partidos compuesto por las 5 organizaciones que lo conformaron durante la guerra: las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), el Partido Comunista Salvadoreño (PCS), el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y la Resistencia Nacional. Luego, en 1994 –fecha en que se salieron de la organización los dirigentes del ERP y la RN–, se transformó en un partido de tendencias. Pero en 1997, al darse en el interior del partido posiciones muy encontradas acerca del rumbo que éste debía seguir: una tendencia encabezada por Facundo Guardado, calificada por la prensa de “renovadora”, que buscaba una social-democratización del FMLN, y la otra, calificada de ortodoxa, que defendía su línea histórica (Harnecker, 2000).

A pesar de haber perdido el FMLN las elecciones presidenciales en 1999, con el mal desempeño del gobierno de Flores¹⁹ casi desde un principio, para el año 2000, se dio una importante recuperación puesto que la

¹⁹ Después de 3 meses de gobierno, el presidente tenía, según una encuesta de Iudop, una calificación de 5.7 (en escala de 1 a 10), y el 49.3% de la gente pensaba que estaba haciendo muy mal las cosas. El presidente Francisco Flores toma posesión en junio de 1999. Habiendo sido elegido con un amplio respaldo del electorado (51,96% de los votos válidos), sorprende la rápida erosión de su apoyo y el temprano surgimiento de cuestionamientos a su gestión de gobierno. Las distintas evaluaciones de los primeros 100 días le fueron negativas y pusieron en evidencia una preocupante crisis de confianza de distintos sectores de la población frente al futuro del país” (Córdova M., 2000: 26).

organización llegó a tener una gran importancia en la cámara de los legisladores, incluso por arriba de ARENA. Dentro de los 84 legisladores totales, de haber tenido 14 diputados en 1994, el Frente tenía 31 en el 2000, mientras que a ARENA solamente pertenecían 29; por otro lado, Héctor Silva, del FMLN, tenía la presidencia municipal de San Salvador. “En marzo del 2000, Arena sufre el más severo revés político de su historia. Pierde 169 mil 600 votos en relación con la votación de 1994, quedando en minoría legislativa respecto al FMLN. Este último partido logra dos escaños más en el parlamento y 8 de las 14 capitales de provincias, entre ellas la más importante: San Salvador” (Harnecker, 2000). Comparado con el fracaso electoral de las presidenciales de 1999, no cabía duda que la principal fuerza de izquierda recobraba un importante terreno: “El resultado de las pasadas elecciones salvadoreñas del 12 de marzo de 2000 para diputados a la Asamblea Legislativa y los gobiernos locales, muestra un avance significativo de la izquierda, en un escenario que puede ser considerado como un virtual empate en el ámbito nacional entre las dos principales fuerzas políticas del país: Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), superando el primero al segundo por casi 10.000 votos...” (Córdova M., 2000: 23). De esta manera, “Arena disminuye su nivel de votación en 178.078 votos (pasando de 614.268 a 436.190 votos) en relación con las elecciones presidenciales de marzo de 1999... El incremento en el nivel de votación del FMLN en 82.826 votos (pasando de 343.472 a 426.298), obteniendo en el ámbito nacional casi el mismo número de votos que Arena (que obtuvo 436.190 sufragios, mientras que el FMLN alcanzó 426.298)” (Córdova M., 2000: 26).

Pero las divisiones internas no permitieron aprovechar esta fortaleza relativa entre los legisladores puesto que diversos diputados pertenecientes al grupo de los Renovadores, de Guardado, llegaron a votar en contra de la línea de la organización y a favor de las políticas gubernamentales en temas como el tratado de libre comercio con Chile en el 2001.

Sin embargo, la situación del partido gobernante también sufrió una crisis interna de liderazgos y, pensando en las siguientes elecciones presidenciales para el año 2004, con Flores como presidente, hubo desplazamiento de muchos líderes para quedar controlado el partido por la ideología y líderes más ortodoxos del neoliberalismo. El programa del presidente Flores no contaba con una aceptación generalizada, especialmente en lo referente a la propuesta de dolarización del país (la Ley de Integración

Monetaria²⁰); el terremoto de enero del 2001 que causó la destrucción de 185 mil viviendas con sus consecuencias económicas (más de mil millones de dólares en pérdidas por los daños a la propiedad e infraestructura) y el mal manejo gubernamental para auxiliar a las víctimas empeoró la imagen de ARENA. A ello se sumaron diversos fraudes bancarios y denuncias de falsas credenciales académicas de numerosos jueces salvadoreños en el mismo año. Incluso se dieron en ese período choques violentos entre fuerzas gubernamentales y miembros de los grupos paramilitares (Patrullas de Autodefensa Civil) que habían apoyado las labores del Ejército en la guerra contra los insurgentes y que luego demandaban algún tipo de indemnización monetaria después de los acuerdos de paz.

Por su parte, el FMLN decidió iniciar, a finales del 2001, un proceso de depuración en sus filas para hacer prevalecer la ideología originaria de izquierda de la organización a través de la reafirmación del liderazgo de Handal y Sánchez Cerén. En las elecciones internas del Frente, volvió a la coordinación nacional Salvador Sánchez para un período de tres años y tomó posesión de su puesto el 16 de diciembre de 2001. Handal y Sánchez se convirtieron en los principales líderes del Frente y reafirmaron su orientación “socialista, democrática y revolucionaria”; la pequeña corriente renovadora protestó calificando la elección interna como fraude, mientras que la corriente de los llamados terceristas se alineó con los líderes electos. Uno de los miembros de la comisión política de la organización y antiguo comandante guerrillero, José Luis Merino, en 2005, justificaría plenamente este proceso de depuración como una vuelta a sus orígenes de izquierda; los llamados renovadores –decía– “fueron parte de la izquierda que fue convencida de colaborar con el sistema. Ese ha sido el gran debate al interior del FMLN con varios de ellos. Ellos expresan que el Frente debería prepararse para colaborar con la derecha y con el gobierno de ARENA en particular, con las medidas neoliberales, con la privatización... Hemos tenido largas discusiones y las diferencias radican en que una parte ha sido atraída a la idea de que no queda más camino que humanizar el capitalismo y ese es el destino que ellos le ven a la izquierda. Nosotros creemos que es necesario cambiar el sistema al socialismo, que es cambiar la esencia del modelo... Hoy hay una dirección más cohesionada, con una identidad más

²⁰ Esta ley entró en efecto el primero de enero del 2001 y tenía previsto permitir la circulación de ambas monedas, el dólar y el colón, pero en el curso de los años posteriores, la realidad fue que la moneda salvadoreña fue desapareciendo en el uso común de la población, con un redondeo perjudicial para los consumidores.

plena.” (Merino, en Martínez y Arauz, 2005). En el año 2002 la Comisión Política del FMLN publicó un documento titulado “Nuestra Orientación Hacia el Socialismo”, en el que definieron su concepción de socialismo y el programa transitorio al que denominaron Revolución Democrática.

Sin la oposición interna de los renovadores que se escindieron para formar su propio partido, el PMR, en marzo del 2002, y con la reafirmación de una ideología más cohesionada en su dirección política, el FMLN se preparó para las elecciones legislativas y municipales del 2003²¹ y las presidenciales del 2004 y llegaría a nombrar como su candidato a Schafick Handal.

Mientras tanto, ARENA redefinía también su proyecto alrededor del consenso de Washington. El presidente George Bush lideraba para América Latina su proyecto sobre la Alianza del Libre Comercio de las Américas (ALCA), al que tanto había exaltado en la Cumbre de las Américas en Quebec en el 2001: más que programas de ayuda, mencionaba, el continente necesitaba el libre comercio, privatizaciones, desregulación y duras medidas fiscales en programas de reajuste estructural dentro del esquema del neoliberalismo. Durante el 2002, en el mes de marzo, después de visitar Monterrey, México, para la conferencia de la ONU sobre los financiamientos para el desarrollo, se presentó en El Salvador para una minicumbre, proponiendo un tratado con la región centroamericana, el CAFTA (Central America Free Trade Agreement). El hecho de la visita de Bush al pequeño país fue interpretado explícitamente por René León, embajador salvadoreño en Washington, como un señalamiento de que El Salvador era reconocido como el mejor ejemplo del modelo neoliberal para los Estados Unidos. Bush, en efecto, saludó a El Salvador como uno de los países más libres, más fuertes y más estables del hemisferio occidental, aunque hubo manifestaciones callejeras contra su visita y aunque el FMLN, principal partido de oposición, se oponía abiertamente al CAFTA y al ALCA. Parecía existir, además, un grave simbolismo en esta visita al ocurrir exactamente en la fecha del 24 de marzo, fecha de aniversario del terrible asesinato de Mons. Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador, en 1980, cuya muerte fue atribuida a los escuadrones de la muerte en el contexto de una guerra sangrienta del gobierno de entonces en contra de la insurgencia y en contra de todos aquellos que tuvieran alguna simpatía con ellos.

²¹ La vida política seguiría contraponiendo al FMLN con la fracción del PMR; para el 2003, Héctor Silva, del Frente, quería un tercer mandato pero en coalición con otras fuerzas. Podían haberlo apoyado también el PMR e incluso el PDC, pero el FMLN se opuso.

Cuando el gobierno de Flores cumplía los tres años, quiso mostrar sus grandes logros en el país: la ayuda dada a los afectados por los terremotos del 2001, la dolarización en todo el territorio, la expansión de la maquila y el avance en las negociaciones para los tratados de libre comercio con Estados Unidos y otros países, en el contexto de una amistad cercana con el presidente George Bush. La oposición política del FMLN preguntaba, sin embargo, sobre un tema no tocado por el gobierno: si la pobreza había disminuido en El Salvador. Había indicadores como un reporte del 2002 de parte de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) sobre 1.3 millones de salvadoreños que vivían en extrema pobreza, ganando menos de un dólar por día (Cfr. LADB, NotiCen. June 27, 2002). Otras organizaciones políticas y pertenecientes a la sociedad civil también organizaron protestas contra las políticas gubernamentales y su modelo económico; fue el caso, por ejemplo, del Foro de la Sociedad Civil, cuya representante, Margarita Posada, señalaba: “nuestra autonomía ha sido violada; ahora dependemos sobre todo de las exportaciones, de las importaciones y de las remesas familiares porque Flores no ha sabido cómo fortificar la economía política de El Salvador... Se ha subordinado nuestra soberanía a los intereses del imperialismo norteamericano que, con medidas erróneas como la dolarización y la sujeción al terrorismo de estado de George Bush, ha estado haciendo de nuestro país una colonia de Norteamérica” (LADB, Idem).

Una de las medidas claras de la sujeción de Flores en su gobierno al modelo neoliberal²² y las recomendaciones de organismos internacionales fue el intento de privatizar el sistema público de salud (Instituto Salvadoreño del Seguro Social), a mediados del 2002. Ello provocó que, en septiembre de ese año, los trabajadores de la salud dejaran el trabajo y salieran a protestar, en cuyo objetivo –impedir la privatización– se solidarizó el FMLN. El paro fue creciendo y, en el mes de octubre, el movimiento llegó a obstruir carreteras, lo que provocó un caos del transporte en la capital y en todo el país. Los dirigentes del movimiento exigían que el gobierno firmara un decreto en el diario oficial en donde prohibiera la privatización.

Héctor Silva, presidente municipal de San Salvador por el FMLN, en un intento de mediación se ofreció a participar en una Comisión de Seguimiento propuesta por el gobierno para intentar solucionar el conflicto.

²² Junto con este intento de privatización en la salud, el proyecto de Flores estaba abarcando otros sectores para trasladarlos al sector privado: el sistema telefónico, la electricidad, los fondos de pensiones, el sistema bancario,...

Pero el movimiento de trabajadores de la salud no quería ninguna intermediación sino solamente la retirada del proyecto de privatización; el FMLN también juzgó como erróneo el intento de Silva, quien manifestaba en su propuesta el intento de buscar solución al conflicto. El presidente municipal de San Salvador persistió en su intento y tuvo entonces que desistir de su proyecto de postularse para la alcaldía para una tercera ocasión en el 2003 apoyado por el FMLN; sin embargo, sin salirse del Frente, mantenía la aspiración de su candidatura con el soporte solamente de los otros miembros de la coalición: Acción Popular, Centro Democrático Unido y la Iniciativa Ciudadana. Con ello dejó el campo libre para otro candidato del FMLN para la alcaldía de la capital.

Para las elecciones legislativas y municipales del 16 de marzo del 2003, el Frente recobró parte de su fuerza electoral. En sustitución de Héctor Silva, el nuevo presidente municipal electo en la capital San Salvador fue Carlos Rivas Zamora, en donde el FMLN ganaba por tercera vez de manera consecutiva; en la Asamblea Nacional, obtuvo 31 legisladores mientras que ARENA solamente obtuvo 27, aunque las alianzas con otros pequeños partidos le permitirían tener una votación a la derecha de 43 de los 84 asientos legislativos. Un problema importante seguía siendo el abstencionismo, que había llegado en ese año a cerca de un 60%. A pesar de todo, a nivel de las alcaldías, el FMLN parecía gobernar el 60% de la población salvadoreña.

En contraparte, ARENA sintió estas elecciones como una derrota y obligaron a la renuncia del presidente del partido Archie Baldocchi y del vicepresidente Francisco Laínez, y se inició cierto proceso de reestructuración aunque con la figura de un presidente debilitado. Por su parte, la oposición política del Frente sintió seguridad y propuso como su candidato para las presidenciales del 2004 a Schafick Handal, quien había sido dirigente del Partido Comunista en el período anterior a la fusión con el FMLN. Sin embargo, las encuestas realizadas en ese momento no favorecían al dirigente del Frente sino a Mauricio Funes, quien era un popular periodista de televisión, dirigiendo programas como “Hechos” y “Entrevista al Día”, en el canal 12; si las elecciones hubieran sido en ese momento (las encuestas se realizaron entre el 26 de abril y el 9 de mayo 2003), las preferencias favorecían a Funes con el Frente en relación a cualquier candidato de ARENA con una ventaja del 17% (LADB, NotiCen. June 5, 2003). Pero la dirigencia del Frente se sentía confiada para el 2004, creyendo que la gente iba a votar por la organización de izquierda, independiente

del candidato postulado: quién más, entonces, que una figura histórica de la insurgencia como Schafick! La Comisión política de la organización tenía, además, la propuesta de incluir a Guillermo Mata, presidente del Colegio Médica, como compañero de fórmula; les parecía una fórmula ideal porque implicaría la fusión con uno de los movimientos más importantes²³ opositores al gobierno de ARENA, quien persistía en su afán de privatizar los servicios de salud.

En el mismo ambiente preelectoral, la embajada de los Estados Unidos en El Salvador empezó a intervenir abiertamente mostrándose preocupada por la posibilidad de que el Frente pudiera llegar a ganar las elecciones: la embajadora Rose Likens empezó a promover una campaña de miedo, señalando especialmente la posibilidad de que un comunista como Handal llegara a la presidencia y con ello pusiera en peligro los valores democráticos y las inversiones norteamericanas en el país. Después de la destrucción de las torres de Nueva York el 11 de septiembre, el FMLN siempre mantuvo una postura de rechazo a las intervenciones armadas de Estados Unidos en Afganistán e Irak y, por otro lado, eran manifiestas sus relaciones de amistad con Fidel Castro en Cuba y con Hugo Chávez en Venezuela, e incluso con las FARC en Colombia. Por su parte, el presidente Flores empezó también a profundizar esta veta para atacar a sus principales adversarios políticos: de ganar el FMLN, se caerán las remesas de los salvadoreños en los Estados Unidos, habrá un masivo retorno de salvadoreños al país provocando un caos en la situación del empleo, se incrementará terriblemente el costo de la vida, la inversión extranjera caerá de una forma drástica, se perderá el CAFTA como instrumento fundamental para el desarrollo, se promoverá la lucha de clases, etc. Al interior del país, el presidente Flores solamente encontró en la “mano dura” contra las bandas juveniles llamadas “maras” un medio para tratar de aumentar su popularidad, presentando la violencia policíaca como la única capaz de poner orden en contra de la delincuencia y asesinatos continuos en el país.

El Departamento de Estado norteamericano organizó en el mes de junio del 2003 en Miami unas “Jornadas de Diálogo sobre la Democracia” juntando a numerosos líderes políticos de América Latina y de África, en donde fue invitado el presidente salvadoreño Flores, siendo presentado

²³ Este fuerte movimiento de los trabajadores de la salud, iniciado desde mediados del 2002, en contra del proceso de privatización propuesto por el presidente Flores, se había mantenido ya por bastante tiempo en sus acciones políticas y manifestaciones callejeras.

por los funcionarios norteamericanos como el mejor ejemplo²⁴ de los líderes mejor comprometidos con el modelo de desarrollo a partir del libre comercio y la búsqueda de la democracia. Todo esto empezó a obligar al FMLN a definir mejor su propuesta de programa de gobierno no como un programa radical de estatizaciones y en contra de los ricos sino como la búsqueda de una consolidación de la economía nacional, sin oponerse a la dolarización pero con una mejor distribución de la riqueza social, y no en una posición de guerra contra los Estados Unidos sino a partir de una relación de amistad que pueda respetar la soberanía nacional.

Por su parte, Héctor Silva, quien había sido presidente municipal de la capital postulado por el FMLN en dos ocasiones (1997-2003), confiando en su propia popularidad, también quiso presentarse como candidato para las presidenciales del 2004, pero a través de la coalición del Partido de la Democracia Cristiana (PDC) y del Centro Democrático Unido (CDU). En vez de lanzarse por tercera ocasión a la presidencia de San Salvador, contentió como candidato para la Asamblea Legislativa en marzo del 2003 postulado por el CDU y ganó un asiento. Como candidato a la presidencia se quiso presentar con una posición de centro ideológico que quería evitar los extremos del FMLN y de ARENA; su compañera de fórmula fue Ana Cristina Sol, una mujer empresaria que había sido embajadora en los gobiernos de Alfredo Cristiani y Calderón Sol, pero sin ser nunca miembro de ARENA.

ARENA designó como candidato a una nueva figura, Antonio Saca, de 38 años y quien era el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y había sido comentarista deportivo. Con ello, se distanciaron un poco del debilitado presidente Flores sin cambiar sus políticas fundamentales, y empezaron a hacer campaña también para prometer solución a los problemas sociales del país. Saca escogió como compañera de fórmula a Ana Vilma de Escobar, quien había sido anteriormente directora del Instituto del Seguro Social y había trabajado varios años en una agencia norteamericana de desarrollo (USAID) y colaborando estrechamente con la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES). Por su parte, el PCN escogió de candidato al legislador Rafa-

²⁴ La posición del gobierno de El Salvador subordinada a las decisiones del gobierno de Bush se manifestaba en diversas decisiones muy controvertidas: el país es uno de los pocos en el mundo que mantenía su embajada en Jerusalén y no en Tel Aviv; el gobierno seguía manteniendo su apoyo con tropas salvadoreñas en la guerra norteamericana contra Irak cuando ya España, Honduras y Nicaragua las habían retirado.

el Machuca, acompañado de Genaro Ramírez, un propietario de una compañía de transporte público.

A unas semanas del inicio oficial de la campaña presidencial electoral, las encuestas del mes de octubre del 2003 hechas por el Instituto Universitario de Opinión Pública, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, mostraron las preferencias electorales de ese momento en donde Antonio Saca recibía el 48% de los votos, Handal el 14.6%, Héctor Silva 16.7% (LADB, NotiCen. Nov. 20, 2003). Para el 21 de marzo de 2004, los pronósticos se cumplieron en relación a quien quedaría como candidato vencedor, y permaneció ARENA en el gobierno con la elección triunfante de Antonio Saca sin necesidad de segunda vuelta (57% contra 35% de Handal): por un lado, había triunfado la campaña del miedo²⁵ por parte del partido gubernamental y por una intervención intensa y abierta de los Estados Unidos y, por otro, la votación entre corrientes de izquierda y centro izquierda se diversificaron entre los que apoyaron a Schafick y a Héctor Silva. El nuevo presidente electo, Elías Antonio Saca González, era –igual que lo había sido Flores– una figura nueva del partido en el poder pero con las posiciones fundamentales de la ultraderecha que tenía la dirección del gobierno salvadoreño desde 1989; Saca era un empresario de 39 años propietario de estaciones de radio que daba continuidad a los postulados de ARENA pero con un gran impulso de renovación. Los resultados oficiales fueron dados a conocer por el TSE el 26 de marzo con las siguientes cifras: ARENA ganó con el 57.71% de la votación; el FMLN logró el 35.68%; la coalición CDU/PDC obtuvo 3.9%, y el PCN el 2.71%.

Tratándose solamente, en marzo del 2004, del voto para la presidencia, en el ámbito electoral, el fracaso fue para la coalición que postuló a Héctor Silva, y también para el PCN, puesto que los partidos no lograron el mínimo de votación legal (el 3%) para poder subsistir como organizaciones políticas reconocidas. Tanto los tradicionales PCN como el PDC y la organización de centro izquierda CD dejaron de existir, dejando al país solamente entre las dos grandes corrientes políticas. En el ámbito legislativo –donde el FMLN tenía una mayoría relativa de diputados– e incluso en el ámbito ciudadano, el Frente se mostró como el único partido de oposición

²⁵ El elemento fundamental de la campaña de ARENA fue el descrédito de Handal, de 73 años, el candidato del FMLN, como un comunista que podría traer el desastre al país: iba a provocar que Estados Unidos devolviera al país a miles de salvadoreños ocasionando una crisis al país con la caída de las remesas y un terrible aumento del desempleo, iba a enseñar tácticas guerrilleras a los niños en las escuelas, iba a estatizar la economía, iba a traer el modelo de Cuba a El Salvador, iba a quitar la libertad, etc.

para el gobierno de Saca. Handal quiso incluso boicotear la ceremonia de toma de posesión el primero de junio y prometió una actividad de enérgica oposición al gobierno.

Para el mes de noviembre, sin embargo, el Frente tuvo de nuevo conflictos internos en la renovación de su dirigencia cuando surgieron otra vez enfrentamientos con otros intentos de remodelar la línea de la organización a partir de una corriente de reformadores llamados “Fuerza por el Cambio”, que pedían una negociación y colaboración con el gobierno. El presidente Saca había iniciado su período de gobierno con propuestas sobre una reforma fiscal y pedía que el FMLN, con su fuerte cuerpo de legisladores, tuviera una mente abierta para colaborar en los cambios económicos que el país necesitaba; de hecho, uno de los diputados del Frente llegó a votar a favor de dichas reformas. Sin embargo, al llegar el momento de las elecciones internas de la organización para decidir sobre su nuevo coordinador general, persistió la misma posición del grupo anterior pues ganó en votación popular con voto secreto Medardo González con un 58.45% de los votos sobre el candidato de la Fuerza por el Cambio, Oscar Ortiz, quien fungía como presidente municipal de Santa Tecla. Así, con la continuidad de su línea ideológica, el Frente se preparaba para una oposición clara y fuerte a las propuestas del gobierno de ARENA y también para las elecciones legislativas y municipales que tendrían lugar en el 2006.

Una evaluación positiva sobre la definición ideológica que había hecho el FMLN en el período anterior, la realizaba, por ejemplo, José Luis Merino, miembro de la dirección de la organización, señalando que “si Schafik hubiera hecho un discurso aguado, envuelto, no hubiera logrado duplicar la votación del FMLN...”, a pesar de haber perdido la presidencia en el 2004: “Perdimos las elecciones, por supuesto. Pero la Fuerza del Frente creció” (Martínez y Arauz, 2005).

La primera batalla política, sin embargo, entre el gobierno y la oposición fue una derrota para los últimos. Se trataba de la discusión sobre el CAFTA, en donde El Salvador llegó a ser el primer país de Centroamérica en aprobarlo²⁶ en el mes de diciembre del 2004. Las fuerzas políticas se polarizaron pero el gobierno contó con los diputados de ARENA aliados

²⁶ Después de la ratificación del CAFTA en El Salvador a finales del 2004, seguirían, en los primeros meses del 2006, tanto Honduras (con el Presidente Zelaya) como Nicaragua (con el presidente Bolaños); después vendría Costa Rica (con el presidente Oscar Arias), en donde la decisión no se dio en el congreso sino en un referéndum muy cerrado que fue puesto en consulta a la población en general.

con los del PCN y los del PDC –más un diputado proveniente del FMLN–, para sumar 49 votos en la Asamblea legislativa de un total de 84. Hacia delante, el gobierno de Saca seguiría con su política económica acorde a los lineamientos del modelo neoliberal y como fiel aliado de los Estados Unidos, y enfrentado permanentemente con la principal oposición.

En el mes de enero del 2006, el FMLN fue sacudido por la muerte de su dirigente nacional, Schafik Handal, a sus 75 años de edad, por un ataque cardíaco, cuando volvía de la toma de posesión del presidente Evo Morales en Bolivia. El sepelio ocurrido el 29 de enero fue un impresionante evento político en apoyo al Frente: la figura de Handal tendría en este sentido una repercusión muy positiva entre los seguidores del Frente, particularmente con relación a las siguientes elecciones de marzo. En el aparato legislativo, Handal fue sustituido por Salvador Sánchez Cerén como jefe de la bancada del partido y se confirmó la línea general de la organización. Además, este cambio propició una gran ventaja política puesto que con la figura de Sánchez Cerén, el antiguo comandante Leonel, se reavivó la antigua tendencia de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) a vincularse con los movimientos de masas y organizaciones populares en la calle y en el campo, algo que impulsaría de manera clara la nueva dirección del Frente para ampliar más su base social.

En las elecciones municipales y legislativas del mes de marzo del 2006, el resultado volvió a mantener al Frente como la principal fuerza de oposición. Ciertamente en el caso de la capital San Salvador, se mantuvo en la presidencia –la que conservaba desde 1997– con su candidata Violeta Menjívar, pero con una ventaja de muy pocos votos sobre el candidato de ARENA. En el ámbito legislativo, los resultados preliminares indicaban 34 diputados para ARENA, 32 para el FMLN, 10 para el PCN, 6 para la democracia cristiana y 2 para los socialdemócratas (CD) (LADB, NotiCen, March 16, 2006). Se confirmaba la tendencia a un bipartidismo claro de dos fuerzas (39.40% de votación por ARENA frente a 39.10% del FMLN, con una diferencia de solamente 4,518 votos) casi iguales mientras que los partidos menores –PCN, PDC, etc.– iban perdiendo paulatinamente posiciones de poder (PDA, 2007). El partido gobernante aumentaba ciertamente su número de diputados pero lo hacía a costa de uno de sus principales aliados, el PCN; por su parte, el Frente no solamente no se vio afectado por los conflictos y escisiones internas cuando varios de sus diputados salieron de sus filas sino que ganó uno más en relación a la votación del 2003.

3. FMLN: hacia el triunfo electoral de 2009

Para hacer el análisis del proceso del Frente en su camino hacia el triunfo electoral el 2009 hay que considerar todo el contexto histórico posterior a los acuerdos de Paz de 1992, pero especialmente la situación del país que iba deteriorándose gradualmente durante el gobierno de Antonio Saca (2004-2009). Cuando el presidente rindió informe, por ejemplo, sobre sus dos primeros años de gobierno, no tenía cómo excusarse sobre el incumplimiento de sus grandes promesas de campaña: la violencia y la delincuencia seguían siendo la principal preocupación de los salvadoreños a pesar de la política de “mano dura” y, por otro lado, la situación económica²⁷ se agravaba con claros signos en el aumento del desempleo y de la migración hacia el Norte presentando una percepción contraria a todos los augurios gubernamentales sobre el CAFTA²⁸. El presidente prometía más de lo mismo: una “súper mano dura” y más libre comercio y subordinación al gobierno estadounidense. El lenguaje gubernamental parecía exacerbarse llegando a acusar al propio FMLN de terrorista e incitador de la violencia; el gobierno llegó a ocupar la sede de la Universidad Nacional en persecución de estudiantes y quiso imponer una ley antiterrorista en el Congreso. Sin embargo, a pesar de la confrontación verbal, en el contexto de una severa crisis económica que algunos analistas vaticinaban como preludio de un Corralito al estilo argentino, se realizaron unas primeras reuniones de diálogo entre el gobierno y el Frente para discutir la posibilidad de un préstamo internacional de cerca de 400 millones de dólares.

Pero el partido en el gobierno salvadoreño era una institución en descrédito de manera semejante al de sus vecinos en Guatemala, llegando incluso a hablarse del fracaso del estado de derecho. Por ejemplo, en la

²⁷ Para mediados del 2006 se estimaba que 2.5 millones de salvadoreños (una tercera parte de la población) se encontraban en Estados Unidos y de allá habían enviado al país en el 2005 cerca de 3 mil millones de dólares, lo cual significaba el 17% del Producto Interno Bruto.

²⁸ El economista Raúl Moreno señalaba con claridad a finales del 2006 que frente a todas las promesas relacionadas con el CAFTA (más empleos, más inversiones, más exportaciones, más crecimiento de la economía, más penetración en el mercado norteamericano, más desarrollo de las capacidades productivas nacionales, etc.), nada de ello se estaba haciendo realidad (LADB, NotiCen, Dec. 14, 2006). Mientras tanto, el país se veía inundado de productos norteamericanos mientras se iba destruyendo todo su aparato productivo agropecuario.

noche del 19 de febrero de 2007, tres miembros del PARLACEN (Parlamento Centroamericano) y su chofer fueron asesinados e incinerados en circunstancias misteriosas dentro de territorio guatemalteco. Los legisladores Eduardo D'Aubuisson, José Ramón González y William Pichinte pertenecían al partido ARENA y, con ello, el presidente Saca, de manera irresponsable, habló de brutal asesinato premeditado y planeado por “los comunistas que quieren llegar al poder”. Rodrigo Ávila, el futuro candidato presidencial de ARENA, estaba a cargo de la Policía Nacional Civil y trató de investigar los hechos. El móvil no había sido aclarado pero cuatro oficiales de policía guatemaltecos fueron culpados y llevados a la prisión de Boquerón, la de más alta seguridad en el país, en el mismo mes de febrero, donde, según la prensa, se dijo que confesaron el crimen²⁹ ordenado por narcotraficantes en relación a 5 millones de dólares que portaban los legisladores, pero inmediatamente un comando especial de asesinos ingresó a esta cárcel de alta seguridad, el 25 de febrero, cortaron la electricidad de todo el edificio y ultimó a los cuatro acusados. El presidente Saca cambió su versión sobre los culpables comunistas y acusó al crimen organizado relacionado con el contrabando y tráfico de drogas. Estos asesinatos como muchos en Guatemala y El Salvador parecían quedar sin resolver, pero en el mes de agosto del 2007, el gobierno de Oscar Berger lo declaró resuelto acusando como cabeza del crimen a Manuel Castillo, un legislador independiente en el Congreso.

La situación de violencia³⁰ en El Salvador (de manera semejante a la de sus vecinos Guatemala y Honduras) se convertiría en un punto agrio de continuo debate político. En el caso de las elecciones presidenciales de Guatemala, dicha situación llegaría a definir las dos estrategias diferentes de los dos candidatos presidenciales, Álvaro Colom con su propuesta de mano solidaria, y el ex general Otto Pérez con su propuesta de mano dura. En El Salvador, Rodrigo Ávila había prometido poner orden y bajar a la mitad el número de asesinados en dos años en su puesto como director de la Policía Nacional Civil (PNC): no lo logró pero seguiría prometiendo más mano dura cuando se convirtió en candidato presidencial por ARENA. Mientras tanto, el gobierno salvadoreño aprovecharía el concepto de terro-

²⁹ El jefe de la policía de Guatemala, Erwin Sperisen, afirmó que los acusados habían confesado el crimen y que estaban queriendo negociar algo a cambio de la delación sobre el autor intelectual de los asesinatos.

³⁰ Desde Junio del 2004, ya había en el 2007 alrededor de 10 mil asesinados en El Salvador en sus 4 años de gobierno: el promedio en abril del 2007 eran 10.4 asesinados cada día.

rismo para implementar una política de represión brutal al interior del país como sucedió, por ejemplo, en julio del 2007, durante demostraciones públicas contra la privatización del agua, en donde los ciudadanos fueron atacados por la PNC con gas, golpes y balas de goma y luego fueron arrestados 12 miembros de organizaciones populares y una periodista (María Haydee Chicas), acusados de “actos de terrorismo”.

Ya durante el 2008, el cuarto gobierno consecutivo de ARENA en El Salvador estaba mostrando sus límites al no poder ofrecer soluciones mínimas a los problemas básicos de la población. El 10 de junio del 2008, apareció una encuesta realizada por la Universidad Tecnológica, relacionada con las preferencias de los electores en vistas de los comicios presidenciales que tendrían lugar en marzo del 2009, en donde era clara la tendencia favorable a las posiciones de izquierda del FMLN, apartándose de apoyar al gobierno de ese momento: “por primera vez en la historia postguerra, el 48.3% de los electores preferían votar por el FMLN, mientras que ARENA solamente era favorecida por el 29.8% de los votantes. El partido de izquierda también llevaría la delantera en el contexto de elecciones municipales y legislativas... la calificación para el presidente Saca era de 5.7 en una escala del 1 al 10” (LADB, NotiCen. June 12, 2008). El gran peso para ARENA estaba en el ámbito económico: todo un proceso de privatizaciones (los bancos, las pensiones, la electricidad, las comunicaciones, etc.) sin que ello repercutiera en mejores condiciones de vida para la población, sobre todo en un agudo contexto de crisis económica mundial; pero también el peso negativo estaba en el ámbito político y civil debido al deterioro de las condiciones de violencia y delincuencia sin que el gobierno tuviera la mínima capacidad de poner algo de orden³¹.

Conviene considerar sintéticamente algunos rasgos de la situación social de El Salvador para ver el contexto que estaban viviendo los habitantes en todo el proceso político.

³¹ El Índice de Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat, 2008) ponía a El Salvador dentro del nivel de la institucionalidad democrática con un rango de 4.184 mientras que Costa Rica obtenía una calificación de 10.0 Por otro lado, un estudio del Consejo Nacional de Seguridad Pública en El Salvador titulado “Los costos económicos de la violencia en Centroamérica” publicado en julio del 2008, mencionaba la región centroamericana como la más violenta en toda América Latina, señalando especialmente los casos de El Salvador, Guatemala y Honduras.

El Salvador Datos generales: 2006

Población	6.762 millones
Remesas	3,329 millones de dólares
IED	203 millones de dólares
PIB per capita	2,262 dólares anuales
Pobreza total	47.5%
Exportaciones a USA	21.1%
Exportaciones a Centroamérica	57.6%
Saldo de la Balanza Comercial	-4.067.8 millones de dólares

Fuente: Estado de la Región, 2008: 544

El país tiene una fuerte economía en el marco regional de Centroamérica pero su ritmo de crecimiento ha disminuido a un promedio del 2.6% en los últimos años, llegando a ser el más bajo en comparación con sus vecinos. Se puede ver claramente que a pesar de su opción por el libre comercio dentro del CAFTA no le ha proporcionado una mayor facilidad de exportar hacia los Estados Unidos puesto que sus exportaciones se mantienen en ese nivel de 21% desde hace una década, y en el balance comercial está muy claro el déficit monetario; la debilidad de la economía salvadoreña, sin embargo, se mantiene gracias a la gran cantidad de las remesas familiares de quienes viven en suelo norteamericano, que han subido a un ritmo sin precedentes también en una década: “pasaron de 366 a 3.329 millones de dólares entre 1990 y 2006, lo que evidencia la dimensión económica de los movimientos migratorios” (Estado de la Región, 2008:543). De alguna manera, la fragilidad de la situación económica tiene que ver con el modelo escogido por ARENA para acoplarse a los lineamientos del Consenso de Washington, en donde se han impuesto diversos procesos de privatización, apertura comercial en las fronteras, controles salariales, etc. sin que el derrame de la riqueza se logre a nivel de la población en general. “Las oportunidades de mejorar la calidad de vida, particularmente para los grupos de mayor rezago social no están siendo generadas de manera suficiente por el mercado, pero tampoco son propiciadas por el Estado” (Estado de la Región, 2008: 545).

Para el mes de agosto del 2008, una vez definidos los candidatos de los dos principales partidos en contienda, la batalla electoral había comenzado tanto para las elecciones legislativas que tendrían lugar el 18 de enero del 2009 como para la presidencial del 15 de marzo del 2009. Diversas encuestas eran desde entonces favorables a Mauricio Funes, el candidato del

Frente: la Cid-Gallup predecía que Funes ganaría en la primera vuelta electoral; otra encuesta dada a conocer en la Prensa Gráfica mostraba que el Frente lograría el 38.6% frente al 29% de ARENA. Este partido en el gobierno confiaba en la figura de mano dura de Rodrigo Ávila como solución a los problemas del país, pero era una figura ya gastada en su antiguo cargo como director de la Policía Nacional Civil.

La postulación de Rodrigo Ávila por ARENA tenía la intencionalidad política de proporcionar la imagen de una personalidad fuerte con experiencia que pudiera poner orden y solución a los graves problemas de violencia y delincuencia. Sin embargo, la “mano dura” ya había sido una consigna utilizada por Antonio Saca en su campaña presidencial de cinco años atrás. El resultado final mostraría lo erróneo de esta decisión por la imagen de años de esta institución en la percepción de muchos ciudadanos. Lo había dicho ya Harnecker en un análisis de años atrás: “En la actualidad, la Policía Nacional Civil no puede garantizar un nivel mínimo de tranquilidad a la ciudadanía, al tiempo que se muestra impotente frente al accionar de la delincuencia común y del crimen organizado [Esta situación] alimenta la frustración y la cólera de la población” (Harnecker, 2000).

La campaña de ARENA se fincó de nuevo en infundir miedo a la población ante la posibilidad del triunfo del Frente; su llamamiento era para cerrar filas ante la posibilidad de que se pudiera implantar el “socialismo” en el país. Para Rodrigo Ávila sus oponentes políticos pretendían imponer el “socialismo del siglo XXI” en El Salvador, que no significaba más que “una mala caricatura del comunismo del siglo pasado” (El País, 2009). El presidente Saca también entró fervientemente a la campaña del miedo, acusando al FMLN de ser el causante de graves crímenes, de estar vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de ser comunista, de estar subordinado a gobiernos dictatoriales como el de Chávez o Castro, etc. Tanto el PCN como el PDC retiraron a sus candidatos de la contienda presidencial y le dieron su apoyo al partido gobernante, en un intento más para impedir la victoria de la izquierda. Debido a que en esta ocasión, esta campaña del miedo no parecía estar funcionando, en octubre de 2008, la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Marisol Argueta de Barillas, hizo un llamado explícito al gobierno de los Estados Unidos para que interviniera frente al peligro de un posible gobierno del FMLN: “Los Estados Unidos deben intervenir más en la región, particularmente poniendo atención sobre lo que está pasando en El Salvador y que tendría consecuencias nacionales y geopolíticas, puesto que los enemi-

gos se están agrupando y fortaleciendo... Los Estados Unidos deben estar vigilantes de que El Salvador continúe el camino de la libertad y la fortaleza de la ley” (LADB, NotiCen, Oct. 16, 2008).

El FMLN había postulado una buena fórmula: Mauricio Funes para la presidencia y Salvador Sánchez Cerén para la vicepresidencia. La izquierda histórica de la antigua organización político militar estaba bien representada por Sánchez Cerén, quien en los años 70s había sido dirigente de las FPL, pero la figura del principal candidato era un ciudadano que no había participado en la guerrilla sino en la lucha ciudadana en el contexto de los medios de comunicación donde era conocido por sus posiciones progresistas y democráticas.

Funes había realizado sus estudios de Licenciatura en Letras, con especialidad en Medios de Comunicación Social, en la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA). Participó en el movimiento estudiantil pero nunca militó en partido político alguno. También realizó estudios universitarios de economía y sociología en la misma universidad. Fue profesor durante cinco años en colegios católicos de San Salvador. En Febrero de 1986, Funes inició su carrera periodística como reportero de Noticiero Tele 10, del Canal 10 de Televisión. Un año después fue contratado por el Canal 12, para trabajar como periodista del Noticiero Al Día. En 1991, en pleno proceso de negociación de los Acuerdos de Paz, entre el gobierno de El Salvador y el FMLN, entrevistó al coordinador de la comisión de diálogo de la guerrilla, Schafik Handal, lo que provocó el retiro de anunciantes y el incremento de las presiones en su contra, en Canal 12.

Dirigió programas de debate del Canal 12, hasta 1991. Ese año, decidió dejar la televisora para fundar el Centro de Vídeo de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y formar parte del equipo gestor de radio YSUCA. En 1992, regresó a Canal 12 para dirigir la política editorial de la televisora y asumir la dirección y conducción de La Entrevista Al Día. Con la firma de la paz, en 1992, su trabajo se orientó cada vez más a la creación de un periodismo crítico y fiscalizador del ejercicio del poder público

A partir de 1997, asumió la Dirección de Noticias de Canal 12, bajo la administración de TV Azteca. También fue productor y conductor de otros programas de opinión y debates como “En la Mira”, una co-producción de Canal 12 y la Agencia de Cooperación Canadiense, así como “Realidades, Periodismo de Fondo”, programa producido bajo el auspicio de la Cooperación Sueca. Sufrió numerosas presiones a partir de su trabajo

periodístico y tuvo que salir de Canal 12, en febrero de 2005. Pero, en Mayo de ese mismo año, regresó a la televisión, a través de los canales de Megavisión.

Fuera del Canal 12, se desempeñó como corresponsal de CNN en Español, desde Junio de 1991 hasta septiembre de 2007. Durante su carrera periodística viajó para diversos países, entrevistó a decenas de jefes de Estado y líderes mundiales, y recibió numerosos premios nacionales e internacionales de organismos como la UNICEF, la Universidad de Columbia de Nueva York y la Asociación de Periodistas de El Salvador. Por su independencia, enfrentó persecución sistemática de parte de militares y de la extrema derecha. No obstante, fue uno de los primeros periodistas que institucionalizaron foros de discusión y reflexión en el que participaron diferentes corrientes ideológicas. A través del periodismo de Funes, la población salvadoreña tuvo la oportunidad de conocer y confrontar puntos de vista alternativos a los del gobierno.

Desde la convención nacional de agosto de 2008, Funes había delineado su programa de gobierno en varios puntos fundamentales: sacar al país de la crisis, encontrar el camino al desarrollo, construir y consolidar la democracia y un estado de derecho, ofrecer transparencia en sus gestiones de gobierno, fortificar el proceso de integración centroamericana. Prometió mantener al país dentro del CAFTA ya firmado años antes pero haciendo las correcciones que fueran necesarias; también prometió mantener la dolarización de la economía pero implementando numerosas medidas para el desarrollo local, brindando confianza a los empresarios nacionales. Su programa desarmaba todas las acusaciones del gobierno que lo tachaban de comunista, aunque en el caso de Cuba sí mencionaba explícitamente su deseo de retomar las relaciones con el gobierno de la isla caribeña.

En el 2009, coincidieron tanto las elecciones legislativas y de municipios como las presidenciales, pero en un momento diferente. Las primeras se realizaron a principios de año, el 18 de enero, y el FMLN resultó ganador al obtener el mayor número de diputados en la Asamblea Legislativa, pero no con la holgura que habían mencionado las encuestas: con 42.6% de votos el frente conquistó 35 escaños, mientras que ARENA con el 38.5% de los votos obtuvo 32 legisladores. Sin embargo, el PCN, aliado de ARENA conquistó 11 legisladores, y el PDC 5. Por otro lado, aunque el Frente ganó más municipios que en el 2006, se perdió la presidencia municipal de la capital San Salvador, que había mantenido de manera continua

desde 1997; los partidarios de ARENA coreaban el triunfo: “patria sí, comunismo no”.

Mauricio Funes con el Frente movilizó a miles de personas con su mensaje de cambio y esperanza. En un discurso ante miles de simpatizantes que llegaron al centro de San Salvador, Funes pronunció un discurso en el que anunció que “El Salvador no se ha doblegado; El Salvador quiere el cambio y no ha renunciado al cambio” (El País, 2009).

La elección había quedado solamente entre Mauricio Funes y Rodrigo Ávila, lo que obligaba a tener una sola vuelta electoral, el día 15 de marzo del 2009; el resultado oficial mostraría el triunfo a Mauricio Funes con el 51.32%, frente a un 48.68%, lo que se tradujo en una diferencia de sólo 69,412 votos (PDA, 2009). Las palabras de Funes simbolizaban el momento histórico del final de ese día: “Esta noche debe tener el mismo sentimiento de esperanza y reconciliación que hizo posible los acuerdos de paz. Hoy hemos firmado un nuevo acuerdo de paz, de reconciliación del país consigo mismo. Por esta razón, invito desde este momento a las diferentes fuerzas sociales y políticas a que construyamos juntos el futuro. No me cabe ninguna duda que este día ha triunfado la ciudadanía que creyó en la esperanza y venció el miedo”. Brindó unas palabras de homenaje a las Fuerzas Armadas de El Salvador, por su comportamiento durante la jornada electoral. En su discurso se evocaron también unas palabras del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado a en marzo de 1980 cuando oficiaba una misa en la capilla del hospital de La Divina Providencia de San Salvador. “Monseñor Romero dijo que la Iglesia tenía una opción preferencial con los pobres. Eso haré yo. Favorecer a los pobres y a los excluidos” (Funes, 2009).

Y en realidad fue un triunfo histórico no solamente para El Salvador sino con una gran resonancia para América Latina: una antigua organización guerrillera que combatió la represión de gobiernos militares y civiles pudo, después de los acuerdos de Paz de 1992, y después de varias experiencias de participación político-electoral, convertirse y consolidarse como partido político y mantener su línea ideológica y programa para obtener un triunfo claro y conquistar el poder ejecutivo.

El Salvador: Elecciones presidenciales (1994-2009)

	1994	1999	2004	2009
ARENA	Armando Calderón Sol: 49% y en 2ª vuelta: 68%	Francisco Flores: 52%	Antonio Saca: 57%	Rodrigo Ávila: 48%
FMLN	Rubén Zamora: 24% y en 2ª vuelta: 31%	Facundo Guardado: 29%	Schafiek Handal: 35%	Mauricio Funes: 51%

Fuente: cuadro personal, 2009

El recorrido histórico parte de 1992 con la decisión del FMLN de convertirse en partido político; sin embargo, esa decisión no puede entenderse sin todo el proceso histórico de combate político militar frente a los gobiernos militares y frente al gobierno de Napoleón Duarte, por el PDC, que se convirtió en un instrumento activo en los planes de Ronald Reagan para Centroamérica. El Frente ya había sorprendido al país y al mundo en 1989 con su propuesta para su transformación política en oposición legal si las elecciones de ese año se hubieran pospuesto. Años después, en 1992, la propuesta se concretó en los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec, pero con una estrategia que no transigía sus principios de lucha original y que tuvo su primera batalla electoral en 1994. Tres derrotas consecutivas en la candidatura presidencial (1994, 1999, 2004) significaron en la práctica un avance político electoral que rindió sus frutos en el 2009. El FMLN ha llegado a encontrarse con el mayor reto de su historia a partir del 1 de junio de 2009, en la toma de posesión del presidente Mauricio Funes.

Conclusiones

Se ha hablado mucho de la transición a la democracia en América Latina a partir de la existencia de tantos gobiernos militares represivos existentes hasta la década de 1980. Y efectivamente, ya no vemos esos golpes militares³² frecuentes y sangrientos de hace varias décadas que fortificaron la imagen de dictadores latinoamericanos como Pinochet, Videla, Duvalier, Stroessner, Somoza, etc. Desde esta perspectiva no hay más que alegrarnos

³² Siempre existe la posibilidad de la regresión al pasado; tal ha sido el caso del golpe cívico-militar en Honduras, sucedido el 28 de junio de 2009: Manuel Zelaya, el presidente elegido en el 2005 fue derrocado y sacado de su casa y expulsado hacia Costa Rica. Desde entonces, existe un movimiento interno en el país con gran apoyo internacional para volver a la democracia y al orden constitucional.

por esta transición que se ha generalizado, aunque deberíamos puntualizar que el término de dicho proceso no es precisamente la democracia –término tan rico pero tan polivalente en sus significados– sino la realización de procesos electorales pacíficos en los diversos países con muchas irregularidades.

Lo que hay que constatar, sin embargo, es que dichos procesos electorales con gobiernos civiles más legítimos no han producido necesariamente una mejora en las condiciones de vida de la población y, por ello, existe una percepción generalizada de desencantamiento o desilusión al grado de que, al mismo tiempo que festejamos las elecciones pacíficas, se ha elevado en muchos casos el abstencionismo cuando los diversos partidos políticos de un país no significan más que demagogia sin cambios reales en el modelo económico de país y en una situación prevaleciente de corrupción, delincuencia e impunidad.

Nuestra primera conclusión, a partir del caso de El Salvador y otros países, es el reconocimiento de que no todos los partidos políticos son más de lo mismo. Incluso, aunque se confundan a veces en sus posiciones, la derecha y la izquierda siguen siendo bastante distinguibles en América Latina cuando se habla de temas como el libre comercio, el neoliberalismo, la política social contra la pobreza, la participación ciudadana, los movimientos sociales, la sujeción o autonomía con relación al intervencionismo de los Estados Unidos, la lucha por la igualdad de género, etc. Si nos referimos específicamente al país que analizamos, es claro ver históricamente las diferencias radicales entre ARENA y el FMLN, y por tanto, se puede decir que, en términos políticos, es posible optar por opciones diferentes en cada nación.

En segundo lugar, hay que reconocer la posibilidad real de cambio en el poder del gobierno y del estado, a partir de los procesos electorales, sin que sean éstos la única forma de promover el cambio en la política y la economía de un país. Los sistemas electorales en cada país son complejos y específicos y no necesariamente en todos se ha llegado a un aparato que garantice con plenitud el sufragio y el conteo legítimo de todos los votos. El FMLN se oponía abiertamente en la década de 1970 y 1980 a la realización de elecciones en El Salvador por considerarlas un instrumento de dominación con exclusión de las opciones no deseadas por el gobierno. Esta posición cambió con los acuerdos de Paz de 1992 cuando el Frente se convirtió en un partido político reconocido. Ahora se tienen que defender los procesos electorales como vía de acceso a posiciones de poder dentro del Estado, pero las instituciones electorales siguen siendo perfectibles:

gane la derecha o la izquierda en los municipios o en posiciones legislativas, siempre siguen habiendo denuncias de fraude o de manipulaciones del voto. Un gran campo de lucha seguirá estando por mucho tiempo en la consolidación de aparatos electorales de estado que ofrezcan mejor legitimidad a los procesos.

En tercer lugar, para el caso de El Salvador, se ha constatado lo acertado del Frente en su estrategia de mantener gran parte de sus opciones originales de tipo ideológico frente a la población aunque flexibilizando numerosos conceptos: ya no se habla del proletariado pero sí de los pobres y los excluidos; Estados Unidos ya no es el gran enemigo imperialista pero sí un gran poder al que se le debe exigir respeto a las autonomías nacionales, etc. Es un hecho la debacle del Partido de la Democracia Cristiana, que acomodó todos sus principios a los militares y a la ultraderecha con tal de acceder al poder en la figura de Napoleón Duarte; el desenlace en El Salvador para los demócrata cristianos es la casi inexistencia de su opción política dentro de las preferencias de los ciudadanos en el momento presente. El Frente, por su parte, resistió la tentación tercerista o moderada de acoplamiento y colaboración con las posiciones gubernamentales y pudo tener una imagen más clara ante la población, desechando dirigentes como Villalobos o Facundo con su imagen socialdemócrata, que ya no tienen significación política nacional. Por los resultados, se puede hablar de una gran sabiduría del Frente al mantener una orientación estratégica firme y clara aunque flexibilizada en la victoria a través de un candidato de la sociedad civil como Funes, que no había sido miembro activo de la organización.

En cuarto lugar, se puede ver con claridad cómo desde un principio en su primera participación electoral de 1994, el Frente se mostró con una base sólida de militantes que acudieron a las urnas. Se trata de lo que muchos analistas han llamado el “voto duro” de ciertos partidos, que se explica por una vinculación histórica de la organización con diferentes grupos sociales. En el caso del FMLN, hay que hacer notar que varias de las organizaciones que lo integraron, en la década de 1970, paralelo a la acción militar, también desarrollaron un intenso trabajo político de movilización de masas, como lo fue, por ejemplo, el Bloque Popular Revolucionario. La vinculación del FMLN con numerosos movimientos sociales continuó en los 80 y fue por ello que las violentas ofensivas gubernamentales no sólo se dirigieron en contra de la guerrilla organizada sino también en contra de la población civil ocasionando numerosas masacres, como se constata en la evaluación que hizo la ONU sobre esta guerra. De esta manera, una de las

conclusiones importantes que hay que sacar como explicación de la victoria en el 2009 es que el Frente no se subordinó únicamente a las estrategias de mercadotecnia política durante las campañas electorales sino que persistió constantemente una vinculación con los movimientos populares y de masas en defensa de los derechos de numerosas comunidades.

En quinto lugar, hay que enfatizar cómo la opción por el cambio se llegó a manifestar en las urnas a pesar de la permanente y fuerte campaña del miedo que el gobierno trató de infundir en la población. Durante las campañas en El Salvador y en otros países, siempre es posible ver cómo diversos grupos de empresarios, partidos de la derecha e incluso sectores de la Iglesia católica y funcionarios del gobierno norteamericano quieren infundir temor a la gente condenando las opciones de la izquierda política: el comunismo, la pérdida de la libertad, la pérdida de las inversiones, el totalitarismo, etc. todo ello ocurrirá cuando la izquierda llegue al poder. Bien lo decía Mauricio Funes al serle reconocido el triunfo: la esperanza le pudo ganar a la mentira y el miedo. Esto no puede significar más que un signo de madurez ciudadana sobre decisiones individuales reflexionadas, a pesar del peso de la propaganda de la derecha.

En sexto lugar, es necesario reconocer que la victoria ha sido clara pero no aplastante, como tampoco lo fueron las posiciones del FMLN en las elecciones legislativas del mes de enero de 2009. Ha sido muy difícil llegar al triunfo para alcanzar el poder ejecutivo del país, pero más difícil aún será la negociación política en el aparato legislativo con el objetivo de poder aprobar las reformas necesarias para el país. Los 35 legisladores del FMLN frente a 32 diputados de ARENA parecen una clara mayoría relativa; sin embargo, dentro del número total de 84 legisladores, será muy fácil que ARENA se coaligue con los también diputados de derecha del PCN que son 11, su tradicional aliado en décadas anteriores, para hacer una mayoría legislativa absoluta e impedir en el ámbito legal las iniciativas del presidente Mauricio Funes; para ese fin, incluso los 5 diputados del PDC podrían coaligarse en determinados momentos con la derecha, mientras que el FMLN solamente podría tener algún soporte en un solo diputado del partido Cambio Democrático. La gobernabilidad del país está en cuestión cuando un presidente se encuentra frente a una oposición mayoritaria en el congreso. En otro ámbito, se puede ver también que ARENA le arrebató al FMLN la presidencia municipal de la capital San Salvador. Desde esta posición de debilidad, el gobierno de Funes tendrá no solamente que tener una gran habilidad para la negociación política en la lucha por sacar adelan-

te sus diferentes iniciativas sino sobre todo la necesidad de promover un nuevo pacto social e incluso un nuevo cambio constitucional.

En séptimo lugar, en el nivel electoral, hay que tener en cuenta que ciertamente ha sido posible la alternancia política pacífica en El Salvador después la sangrienta guerra contrainsurgente, pero también hay que tener en cuenta que el nuevo gobierno estará sujeto en el futuro de nuevo a las urnas, teniendo en consideración que la población juzgará también el desempeño real del Frente en el gobierno: una prueba de fuego serán las nuevas elecciones municipales y legislativas del 2012 y, en cinco años, las presidenciales del 2014; el FMLN podría estar pensando en Oscar Ortiz, el alcalde de Santa Tecla, y ARENA en la vicepresidenta saliente, Ana Vilma de Escobar. Pero más allá de las personalidades futuras en disputa, lo más importante será el desempeño del gobierno de Funes en sus grandes temas de campaña (desarrollo económico, delincuencia, lucha contra la corrupción, combate a la pobreza, etc.). En su programa de gobierno dejó claramente establecido que “continuar con el actual estado de cosas nos llevaría a profundizar la pobreza y la exclusión social y, lo que es peor, acaba con la posibilidad de construir el camino del desarrollo y el bienestar” (FMLN, 2009). Y ese cambio tendrá que notarse, como los dos personajes triunfantes en las elecciones de marzo lo han mostrado en su plataforma gubernamental, en el ámbito social, en el económico, en la gestión ambiental y en una reforma política que los diferencia claramente de lo hecho anteriormente por ARENA y por el PDC. Así lo manifestó Funes en su toma de posesión: “no hacer lo que algunos ya hicieron mal en este país: gobernar para pocos, ser complaciente con la corrupción, temer y ser cómplice del crimen organizado, pactar con el atraso en todas sus formas de expresión” (Funes, 2009).

Por último, se puede decir que el nuevo gobierno dará un gran impulso hacia los procesos de integración regionales y latinoamericanos. Las posiciones programáticas coinciden con otros gobiernos de América Latina en el ámbito de una izquierda heterogénea³³, donde la colaboración podrá fortificar numerosos proyectos de desarrollo con mayor autonomía respec-

³³ Muchos han querido vincular a Funes directamente con el presidente Chávez, de Venezuela, pero, sin negar las afinidades que tiene históricamente el FMLN con el dirigente venezolano, el presidente salvadoreño electo que entró en funciones el 1 de junio de 2009 ha sabido responder que Chávez gobierna para los venezolanos y que él gobernará para los salvadoreños. Los gobiernos de izquierda ya son muchos y variados en América Latina (como se puede ver el análisis de Medina, 2009); la sabiduría del nuevo presidente en El Salvador lo llevará a numerosos proyectos de colaboración con todos ellos.

to de los Estados Unidos. En este sentido, ha sido significativa la decisión de retomar las relaciones diplomáticas con Cuba: “Somos consientes de que el destino de El Salvador está indisolublemente ligado al de nuestros hermanos centro y sudamericanos. Por eso seremos decididos impulsores de La unidad regional y latinoamericana. En coherencia con esta visión, el gobierno que presido, dado su carácter progresista y pluralista, tendrá relaciones diplomáticas, comerciales y culturales con todos los países de América Latina. Esto significa que de inmediato se restablecerán los vínculos diplomáticos, comerciales y culturales con Cuba” (Funes M., Discurso 1-VI-2009). Hay que notar que El Salvador era el único país latinoamericano que no había retomado relaciones con la isla desde 1962, cuando la Organización de Estados Americanos (OEA), subordinada a los Estados Unidos, quiso expulsar al gobierno de Fidel Castro.

Bibliografía

Arnsón, Cynthia (1994). *El Salvador Darkening Horizons: Human Rights on the eve of the march 1994 elections*. Human Rights Watch /Americas, Report. March 1994, Volume VI, Number 4.

<http://www.hrw.org/reports/pdfs/e/elsalvdr/elsalv943.pdf>

Córdova Macías, Ricardo (2000). *El Salvador: ¿se mueve el péndulo hacia la izquierda?* Revista Nueva Sociedad, No. 168. Caracas, Venezuela.

Couffignal, Georges (sous la direction de), (2007). *Amérique latine, les surprises de la démocratie*. Études de la documentation française. IHEAL: Observatoire des changements en Amérique latine. Paris, France.

Dutrénit, Silvia (1989). *El Salvador. Textos de la historia de Centroamérica y El Caribe*. Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora / Universidad de Guadalajara / Nueva Imagen. México.

Envío digital (1998). *FMLN: fórmula presidencial de doble filo*. Publicación de la Universidad Centroamericana. No. 199. Managua, Nicaragua.

Estado de la Región (2008). *Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible 2008*. Un informe desde Centroamérica para Centroamérica. Costa Rica.

<http://www.estadonacion.or.cr/estadoregion2008/index.htm>

FMLN (2009). *Cambio en El Salvador para vivir mejor: Programa de Gobierno 2009-2014*. San Salvador, El Salvador.

Funes, Mauricio (2009). *Discurso de toma de posesión como presidente de El Salvador*. 1 junio 2009. San Salvador, El Salvador.

Guardado, Facundo (2006). *Chávez alimenta expectativas falsas*. Entrevista a F. Guardado por Gabriel Silva. 22/11/2006. <http://www.offnews.info/>

Harnecker, Martha (2000). *El Salvador: avance electoral del FMLN*. http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/politica/harnecker11_300901.htm

IDD-Lat (2008). *Índice de Desarrollo Democrático de América Latina*. Konrad Adenauer Stiftung. <http://www.idd-lat.org/>

LADB (1999-2009). *Latin America Data Base*. NotiCen. Base de datos sobre Centroamérica de la University of New Mexico at Albuquerque, USA.

Leiken, Robert S. y Barry, Rubin (1987). *The Central America Crisis Reader*, en *The Essentials guide to the most controversial foreign policy issue today*. New York Summit Books. USA.

Lungo, Mario (1986). *El Salvador 1981-1984. La dimensión política de la guerra*. UCA Editores. San Salvador, C.A.

Lungo Uclés, Mario (1990). *El Salvador en los 80: contrainsurgencia y revolución*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Editorial Universitaria Centroamericana. San José, Costa Rica.

Manwaring Max G., and Prisk Court (edited by) (1988). *El Salvador at war: An oral history of conflict from the 1979 insurrection to the present*. National Defense University Press. Washington, DC. USA.

Martínez, Carlos (2005). *La izquierda en El Salvador: un drama sin libreto*. Noticias El Faro.net El primer periódico digital latinoamericano. San Salvador, El Salvador.

http://www.elfaro.net/Secciones/noticias/20051107/noticias6_20051107.asp

Martínez, Carlos y Arauz, Sergio (2005). *El FMLN no es plural y no debe serlo*. Entrevista con José Luis Merino. Noticias El Faro.net El primero periódico digital latinoamericano. San Salvador, El Salvador.

http://www.elfaro.net/Secciones/noticias/20051107/noticias5_20051107.asp

Mazzorovich, Gabriel (2009). *El pulgarcito de América ya creció*. Artículo aparecido en LR 21: Larepública.com 17 marzo, 2009. Uruguay.

Medina Núñez, Ignacio (1990). *El Salvador: entre la guerra y la esperanza*. Colección Estudios Latinoamericanos. Universidad de Guadalajara. México.

- Medina Núñez, Ignacio (compilador), (1995). *El Salvador: elecciones y proceso de paz*. Ediciones de la Universidad de Guadalajara. México.
- Medina Núñez, Ignacio (compilador), (1998). *Centroamérica: después de la guerra*. Fondo Editorial Universitario. México.
- Medina Núñez, Ignacio (2009). *Elecciones presidenciales en América Latina: el surgimiento de una izquierda heterogénea*. Ediciones Elaleph.com. Buenos Aires, Argentina.
- ONU (1993). *De la locura a la esperanza. Informe elaborado por la Comisión de la Verdad (O.N.U.)*, en cumplimiento de los Acuerdos de Paz para el Salvador. Naciones Unidas, San Salvador, Nueva York.
- Palma, Rigoberto (2004). *El Salvador. Elecciones 2004: valoraciones de los resultados*. *www.rebellion.org* 29 de marzo 2004.
- PDA (1999). *Political Database of the Americas* (11 de Marzo de 1999). El Salvador: 1999 Presidential Elections. Georgetown University and the Organization of American States:
<http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/pre99.html>
- PDA (2000). *Political Database of the Americas* (25 de Mayo de 2000). El Salvador: Presidential Election Results 1994. Georgetown University and the Organization of American States:
<http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/pres94.html>
- PDA (2004). *Political Database of the Americas* (21 de Marzo de 2004). El Salvador: 2004 Presidential Elections. Georgetown University and the Organization of American States:
<http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/pre04.html>
- PDA (2007). *Political Database of the Americas* (28 de Noviembre de 2007). El Salvador: 2006 legislative elections. de Georgetown University and the Organization of American States:
<http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/leg06.html>
- PDA (2009). *Political Database of the Americas* (20 de Marzo de 2009). El Salvador: 2009 Presidential Elections. Georgetown University and the Organization of American States:
<http://pdba.georgetown.edu/Elecdata/ElSal/pres09.html>

Petrich, Blanche (2009). *Déficit fiscal de más de mil millones de dólares, herencia de Arena a Mauricio Funes*. Univision.com Consulta el 5/29/09
<http://foro.univision.com/univision/board/message?board.id=politicaelsalvador&message.id=72500>

Popper, Karl (1996). *En busca de un mundo mejor*. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona, España.

Regalado, Roberto (2008). *Los gobiernos de izquierda en América Latina*. Ocean Sur, una editorial latinoamericana. México.

Socorro Jurídico (1981). *El Salvador. La situación de los derechos humanos: octubre 1979 - julio 1981*. Edición del Arzobispado de San Salvador. El Salvador.

TSE (2006). *El Salvador, Resultados Electorales (1994-2006)*. Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. 15 de Diciembre de 2006. Observatorio de Elites Parlamentarias de América Latina:
<http://americo.usal.es/oir/Opal/elecciones/EleccionesElSalvador2006.pdf>

ELECCIONES 2009 Y CAMPAÑA POLÍTICA; DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA SALVADOREÑA

Nelson de Jesús Quintanilla Gómez³⁴

Reflexiones preliminares sobre el proceso electoral salvadoreño

El primero de Septiembre del 2008, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a elecciones en El Salvador para elegir Diputados y Diputadas a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano, Consejos Municipales y Presidente y Vice-Presidente de la República; al día siguiente, el Frente Farabundo Martí Para la Liberación Nacional (FMLN) inscribió su fórmula presidencial integrada por Carlos Mauricio Funes Cartagena y Salvador Sánchez Ceren; mientras tanto, el partido en el gobierno Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) no pudo inscribir su fórmula porque hasta principios del mes de octubre aun no había definido su candidato a Vice-Presidente al igual que el resto de partidos políticos contendientes existentes en el proceso electoral del 2009.

Desde el 11 de Noviembre del 2007, el FMLN proclamó su fórmula presidencial en el estadio Cuscatlán ante miles de simpatizantes y militantes del partido y, de ahí en adelante, se inició una **caravana roja**, llamada también la **caravana de la esperanza**; es decir, inició una pre-campaña para posicionar la fórmula presidencial; esta situación provocó que ARENA adelantara su proceso de selección para definir la fórmula presidencial a través de un mecanismo que según sus dirigentes era democrático en tanto realizaban consulta con sus bases sometiendo una diversidad de aspirantes a un proselitismo interno que les genera desgaste, por cuanto la dirigencia

³⁴ El Prof. Quintanilla es académico de la Universidad de El Salvador, en la Facultad Multidisciplinaria Oriental, Sección de Ciencias Sociales, San Miguel, El Salvador, C.A. Correo electrónico: nelquint@botmail.com

incide de manera directa en las bases para que levantaran la mano por quien ellos decían; esto más que beneficiarles les generó división interna.

Según el Art. 227 del Código Electoral (C.E.) Salvadoreño, **la propaganda electoral constituye un derecho de los partidos políticos o coaliciones debidamente inscritos. Cerrado el periodo de inscripción de candidatos, el derecho a hacer propaganda corresponderá únicamente a los partidos políticos o coaliciones contendientes, pudiendo hacerse por todos los medios lícitos de difusión, sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la materia, la moral y las buenas costumbres.** Al respecto, es importante tener presente que, en El Salvador, esta disposición es violentada constantemente ya que surgen en tiempos de campaña organizaciones y personas fantasmas realizando campaña a favor o en contra de un determinado candidato, partido político o coalición contendiente, y nadie dice nada, es decir, nadie hace algo para detener tal situación que es dañina para la pacificación del país y para estimular una participación ciudadana activa en pro de fortalecer el ejercicio democrático.

Según el Art. 228 del C.E., los que, con ocasión a la propaganda electoral, injurien, difamen, o calumnien, dirijan, promuevan o participen en desórdenes públicos u ocasionen daños a la propiedad serán castigados de conformidad con las leyes comunes. En este mismo orden, en el inciso tercero de este mismo artículo, se establece que queda prohibido a través de la propaganda electoral lesionar la moral, el honor o la vida privada de candidatos o líderes vivos o muertos. Esta disposición tampoco se respeta: tanto en el pasado como en el presente electoral, se injuria a personajes de la oposición; se difama con el fin de descalificar a líderes, funcionarios o instituciones que se percibe tienen posibilidades reales de triunfo; al respecto se debe poner orden, si se quiere fortalecer la democracia electoral; eso implica que las instituciones encargadas de aplicar justicia lo hagan sin privilegios de nada y sin preferencias de estatus de las personas o las instituciones que participan en la contienda electoral.

La campaña política debe ser una oportunidad para que el pueblo conozca los candidatos y candidatas, así como las propuestas o plataformas de gobiernos tanto municipales como nacionales; además, debe ser un espacio de discusión de los distintos puntos de vista de cómo resolver los principales problemas que viven los municipios, los departamentos o el país en general.

Las elecciones del 2009 en El Salvador generaron un despertar en la población en el sentido que se desarrolló un entusiasmo por cambiar el rumbo del país; esto suponía el cambio de partido en el gobierno central y en muchos gobiernos municipales y la principal razón que señalaba la ciudadanía era la mala gestión del gobierno de ARENA en funciones (políticas anti populares, corrupción, deficiente atención al público, toma de decisiones sin consulta con el pueblo, la falta de atención a las necesidades de las comunidades, etc.), o por la falta de liderazgo de muchos candidatos y funcionarios, pero que llegaban a los cargos por amiguismos o compadrazgos y en algunos casos por lazos de familiaridad de los máximos dirigentes partidarios; obviamente, cada partido político posee su propio marco normativo que a veces no se cumple, así como su propia visión de cómo resolver la problemática social.

Lo novedoso de las elecciones del 2009 y de la campaña política en El Salvador es que la derecha política por primera vez en la historia realizó una jugada política, según ellos, al definir separar las elecciones para consejos municipales y de diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano de las elecciones presidenciales; el propósito fundamental según ellos era bajar la moral a quienes perdieran en los municipios el 18 de enero y no llegaran con entusiasmo victorioso a las presidenciales el 15 de marzo; además, hicieron una campaña en la que regalaron gallinas, le pidieron a los Estados Unidos que intervinieran en las elecciones porque el FMLN podía obtener un triunfo electoral y eso significaría perder las libertades del país; movilizaron a los militares retirados que estuvieron vinculados durante la guerra civil del 80 al 92 a crímenes masivos de la sociedad civil y de líderes del movimiento social e incluso de líderes religiosos como el caso de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, aduciendo que el candidato del FMLN iba a abolir la ley de amnistía que resultó de los acuerdos de paz y que lo iba a meter presos; el presidente de la República le pidió a los empresarios de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) que hablaran con sus empleados para que no votaran por el Frente, porque se ponía en peligro las libertades; en los últimos días de la campaña presidencial, realizaron una campaña “sucía” en la que denigraban a través de spots televisivos al ciudadano candidato a la vice presidencia por el FMLN (Salvador Sánchez Cerén) y al candidato presidencial (Carlos Mauricio Funes Cartagena); los tildaron de mentirosos, de asesinos, de vende patrias; dijeron que si ganaba el Frente quien iba a gobernar era Hugo Chávez (Actual Presidente Venezolano); pusieron vallas publicitarias con la foto de Mauri-

cio acompañado de la foto de Fidel Castro, Hugo Chávez y Evo Morales; otras vallas tenían el mensaje: YO NO ENTREGO EL SALVADOR, etc.

Se firmó un pacto de no agresión en la campaña electoral entre los principales dirigentes de los partidos políticos y la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que no se respetó, puesto que se actuaba con violencia física contra algunos dirigentes de oposición y se pasaron spots televisivos que llamaban a la violencia en donde se señalaba al candidato presidencial del Frente como si fuese a actuar como un títere del presidente Hugo Chávez de Venezuela; además, se dijo que se ponía en peligro las remesas de los compatriotas en EE.UU. así como el permiso TPS que se otorga a algunos salvadoreños para que puedan trabajar sin dificultades en el país norteamericano.

En concreto, el proceso electoral salvadoreño del 2009 expresó el desgaste natural de cuatro gobiernos consecutivos de ARENA, en el contexto de la crisis socio económica y de seguridad ciudadana que afectó a las grandes mayorías de salvadoreños y salvadoreñas. El candidato presidencial del FMLN no dependía de su dirigencia histórica y era muy conocido y fue electo sin conflicto interno, sino con unanimidad votos de su dirigencia atendiendo al clamor popular. El candidato de ARENA era de bajo perfil y fue electo en un proceso que tuvo cuestionamientos internos; en los sectores empresariales y en ARENA, hubo conciencia de la gravedad de la crisis que impactaba al país; fue la primera vez que ARENA no puede ocultar sus diferencias internas entre el grupo que gobierna y el grupo que detenta el poder económico tradicional.

Campaña electoral: papel de los medios de comunicación

No cabe duda que los medios de comunicación como parte del aparato ideológico del Estado, además de ser propiedad privada de algunos empresarios, se ponen al servicio del partido en el gobierno en la mayoría de casos y muchas veces ofertan espacios para los partidos y candidatos que creen no serán ningún problema para ellos en caso de obtener un triunfo electoral, a pesar que el Código Electoral salvadoreño regula los espacios para la campaña; esto no se cumple ni se respeta por el hecho mismo de ser propiedad privada y de contar con el beneplácito de los funcionarios e instituciones que deben aplicar la ley e incluso algunos funcionarios y candidatos poseen sus propios medios para hacer su campaña de manera permanente utilizando recursos de las instituciones que dirigen para financiar

programas que promuevan su figura personal o la bandera del partido al que pertenecen.

Muchos de los dueños o directores de prensa e incluso periodistas y reporteros de los principales medios de comunicación en El Salvador se pusieron al servicio del partido en el gobierno para realizar publicidad a favor de sus candidatos a distintos cargos de elección popular para lograr que les compraran espacios o les dieran dinero por tales favores; esto hizo que no se respetaran las normas sobre la campaña ya que, el que posee más dinero tiene las mejores condiciones de promover sus imágenes e incidir en la voluntad de la ciudadanía para lograr su apoyo a través del voto; esto, por supuesto, no contribuye al fortalecimiento y desarrollo democrático de la sociedad salvadoreña.

Los medios de comunicación debieran promover espacios de debate con reglas claras y concretas entre los candidatos y dirigentes de los partidos políticos para que la ciudadanía pueda evaluar quienes poseen las mejores **propuestas de solución a los problemas del país**; esto, además, fortalecería la democracia y generaría una nueva cultura de participación popular y, por consiguiente, se gestaría el inicio de la construcción de una democracia participativa y no solo representativa; ello naturalmente requiere de voluntad política de quienes toman las decisiones en esta materia.

Los medios de comunicación en su mayoría en El Salvador se inclinan a favor de la derecha política precisamente porque su propósito principal es obtener ganancias económicas y no lo que en teoría deben hacer, promover información veraz y objetiva e imparcial al pueblo; son muy pocos los medios de comunicación que tratan de cumplir su verdadero papel y los que se inclinan por esa posición muchas veces son tildados de revoltosos o que hacen los mandados a los comunistas; esta situación tampoco contribuye al ejercicio democrático que se trata de desarrollar.

Un ejemplo claro de la parcialidad con que algunos medios actuaron en los momentos de campaña política electoral fue la manera de cómo la PRENSA GRAFICA estuvo publicando una serie de encuestas a través de LPG DATOS, en las que en muchos casos planteaba la existencia de un empate técnico entre el FMLN y ARENA o entre Mauricio Funes y Rodrigo Ávila, y la otra situación fue la entrevista que impulsaron los canales 2,4 y 6 sobre el proceso electoral y que dirigió el periodista Jorge Hernández en la que se inclinaba la balanza a facilitar el discurso o las opiniones de los candidatos de la derecha; por otro lado, se cuestionaba y a veces se daba

poco espacio a los candidatos de izquierda para hacerlos quedar mal ante la tele audiencia.

Algunas radios emisoras tenían programas en los que se pasaban criticando la vida privada de los candidatos de la oposición; se recurría al pasado conflicto armado para denigrar a quienes participaron directamente en ese proceso y muchas veces se ridiculizaba la personalidad de los contendientes tratando de explotar las debilidades personales y no se atacaban las propuestas de solución a los problemas económicos, sociales y políticos; no se promovía el debate de altura, sino el golpe bajo y a veces hasta mal educado con palabras soeces.

En el Diario de Hoy tienen espacio muchos columnistas que opinan sobre el acontecer político electoral de manera demagógica y generalmente son personajes de tendencia derechista que obviamente buscan defender el sistema y el modelo económico vigente; por lo general, planteaban como amenaza el hecho de que el pueblo estaba opinando a favor del cambio y se llamaba la atención sobre cómo estaban en peligro las libertades del sistema, por lo que convocaban a la población a no dejarse engañar, como si la ciudadanía no tuviera la capacidad de pensar con cabeza propia a partir de sus propias realidades; estos medios y estos personajes midieron muy mal creyendo que el pueblo les iba a seguir creyendo; el pueblo estaba convencido que el cambio no sólo era posible sino necesario para reorientar al país por nuevos derroteros de desarrollo, democracia y justicia social.

Es de aclarar que en el caso de Radio Sabrosa y TVO, que son propiedad del Señor Wilfredo Salgado, alcalde municipal de San Miguel después que firmó un compromiso de campaña con el señor Rodrigo Ávila, candidato de ARENA, dedicaron espacios permanentes a la campaña del entonces partido oficial al extremo que ni la tele corporación salvadoreña programó de manera permanente (cada hora) una película de la guerra en la que se denigró al candidato presidencial y a la vicepresidencia del FMLN; esta situación fue mal vista por la población y el electorado; la gente quería hacer algo: tirarles piedra, hacer tomas pacíficas de los mencionados medios, sentarse frente a sus locales, hacer manifestaciones de protesta contra los medios y su propietario. Al final, esa situación no dio el resultado esperado para la derecha, más bien favoreció a la izquierda en el caso de San Miguel (uno de los departamento de mayor importancia electoral de El Salvador), pues el resultado electoral fue de 58,327 votos para el FMLN contra 34,901 de ARENA y Wil Salgado; es decir, el FMLN obtuvo 23,426

votos más que esa alianza perversa de la derecha en el municipio de San Miguel en la elección presidencial.

Mensajes de los candidatos presidenciales y estrategias de alianzas y coaliciones

El 14 de Noviembre inició la campaña electoral para la presidencia de la República de El Salvador a través de visitas al territorio, es decir, en los 14 departamentos y en los 262 municipios, así como en el plano mediático, principalmente la televisión, la radio y los principales medios escritos como son la Prensa Grafica y el Diario de Hoy.

El candidato presidencial del partido oficial, el Ingeniero Rodrigo Ávila, ex director de la Policía Nacional Civil, buscaba superar el desgaste de 19 años de gobierno del partido ARENA autoproclamándose como **el presidente del empleo**, además planteaba que era una nueva cara de la derecha definiendo su plan de gobierno de **país más justo**; por otro lado, prometió crear con el sector privado, profesional y académico **la gran alianza nacional por el empleo**, mediante la cual pretendía crear 200,000 puestos de trabajo; el problema se complicaba mucho más cuando la ciudadanía revisaba la realidad que ha estado viviendo y la realidad del presente que por más discursos y mensajes apantalladores ya no creía en promesas encubiertas por compromiso que se firmaran en la campaña y se pretendían cumplir mañana, es decir cuando llegaran al gobierno.

Por su parte, el candidato presidencial del FMLN, el periodista Mauricio Funes Cartagena, sostenía en sus mensajes que representaba **el cambio seguro** y prometía mejorar los servicios de salud, educación y elevar los niveles de seguridad pública; sin embargo, la situación del país era bastante delicada en lo social, económico y político; la ciudadanía quería el cambio y lo expresaba en las distintas encuestas de opinión pública; el reto era no sólo llenar de esperanzas a la población sino cumplir en lo mínimo necesario para iniciar un proceso de transición que superara poco a poco la difícil situación del país.

La fórmula presidencial del PCN, el Licenciado Tomas Chevez y el ex-jefe de la División Rural de la PNC, Rafael Antonio González Garciaguire, aseguraban que el país iba por mal camino y que era necesario la alternancia en el poder en el sentido de cambiar al presidente y al Partido en el Gobierno; además, sostenían **que hay que romper la polarización** y hacer cambios moderados en la forma de gobernar si se llegaba a la presidencia; por otro lado, planteaban **combatir la corrupción** que tanto daño

le ha hecho al país y reactivar la agricultura. Se proponían, además, combatir las maras, los vicios de las drogas y el alcoholismo.

La fórmula presidencial del PDC, representada por el Licenciado Carlos Rivas Zamora, presidente y Merlín Peña, Vice presidenta, sostenían que: “se debe crear una cartera de estado para la Mujer, la Niñez y la Juventud” (Diario CoLatino 17 Oct. 2008). Esto era la columna vertebral de su plan de gobierno y, con ello, buscaban ser una opción y enganchar el voto femenino; otro elemento importante en el mensaje del candidato presidencial era la crítica permanente a las extremas, es decir a la derecha y a la izquierda para ganar protagonismo en el electorado.

El gran problema de Rivas Zamora era que fue Alcalde de San Salvador por el partido FMLN y luego decidió pasarse al PDC para seguir siendo opción en una candidatura presidencial, pues se creía que quien pasa por la alcaldía capitalina tiene las credenciales necesarias para ser candidato presidencial; la población lo percibió como alguien sin principios y que lo único que buscaba era ganar notoriedad pública personal.

Después de los resultados del 18 de Enero para Consejos Municipales y la Asamblea Legislativa, el partido ARENA buscó a través de los máximos dirigentes de los partidos PCN y PDC hacer una alianza política con la que, según ellos, lograrían unir a la derecha; desinscribieron las fórmulas de estos partidos independientemente de la opinión de los candidatos y de las bases respectivas; ello, por supuesto, creó un descontento que favoreció a la fórmula del FMLN ya que por ejemplo la fórmula del PCN pidió el apoyo para Mauricio y Salvador. Algunos alcaldes electos del PCN y del PDC se sumaron a la campaña junto a la fórmula presidencial del Frente y trabajaron en la defensa del voto el día 15 de marzo; hubo otros como el candidato del PDC en Santa Ana que apoyó a ARENA, así como el alcalde de San Miguel que utilizó muy mal su supuesto liderazgo realizando un show publicitario para definir su apoyo al candidato Ávila a través de un compromiso que firmaron y una campaña “sucía” que realizó en sus medios de comunicación (TVO y Radio la Sabrosa), recurriendo al pasado conflicto armado, e incluso albergando en la alcaldía, en sus establecimientos comerciales y en casas particulares de su propiedad y de su familia a personas de Nicaragua que trajeron para que participaran en el proceso electoral; esto, por supuesto, fue denunciado y repudiado por la población Migueleña; el repudio se expresó en las urnas porque su misma gente que mandó al aparato de defensa del voto, apoyó al Frente, y la población que creía en él también le dio el voto al FMLN; esto se demostró en que de las 384 urnas del

municipio de San Miguel, 383 las ganó el Frente y sólo una ganó ARENA: fueron 58,327 votos válidos para el FMLN contra 34,901 de ARENA; fue una victoria contundente, un triunfo de la Izquierda salvadoreña.

Actividades de campaña de los distintos partidos políticos

ARENA era el partido que defendía el *estatus quo* social y a su vez el partido de gobierno, además de representar los intereses de la clase dominante; poseía los recursos económicos y materiales suficientes para realizar una campaña millonaria y utilizar la mayor parte de espacios de los principales medios de comunicación, con lo que saturaron al electorado con mensajes propagandísticos de sus principales figuras y de sus principales propuestas de campaña. Por supuesto, dedicaron bastante espacio al discurso demagógico y crítica personalizada a los candidatos contrincantes y partidos de oposición que se presentaban como su principal amenaza para seguir en el poder.

ARENA realizó su campaña fundamentalmente por medio de spots de televisión y cuñas radiales, así como campos pagados en los medios escritos tales como La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy; no menos importante fue la pinta y pega que realizaron en postes del tendido eléctrico en todo el territorio nacional; también hicieron concentraciones y mítines en colonias y cantones; realizaron también perifoneo masivo en la ciudad y el campo con mensajes de sus candidatos promoviendo sus compromisos de campaña según la elección de que se tratara.

A finales del mes de diciembre del 2008, “un estudio de Transparencia Internacional muestra que ARENA es la fuerza política que entre Abril y noviembre más gastó en propaganda: el 75% del total. Segundo fue el FMLN y tercera fue un no partido: Fuerza Solidaria” (El Faro, 22 Dic 2008).

Se estima 7.6 millones de dólares gastados en campaña y mucha de ella no para proponer soluciones a los problemas, sino para denigrar a Mauricio Funes y al FMLN; esto lo hizo de manera constante Fuerza Solidaria en complicidad con el partido de gobierno y de la derecha aglutinada en el TSE; esta situación no era buena para el país y menos para entusiasmar a la ciudadanía a la participación; más bien, se dejaba en evidencia la necesidad de tener control sobre el origen del financiamiento de la campaña electoral de todos los partidos políticos contendientes.

El FMLN, por su parte, centró su campaña en la visita casa por casa en la que se buscaba tener un contacto directo con la ciudadanía para intercambiar sobre la situación del país, así como de lo que se pensaba del go-

bierno y del partido en el poder; además, se preguntaba si creía que el país necesitaba un cambio o si debía continuar tal y como estaba; se preguntaba sobre el apoyo al FMLN y a sus candidatos. En este contacto también se descubrían los indecisos, a quienes se debía visitar para convencerlo que votara por el Frente. Además, se identificaba a los militantes duros de la derecha para no perder tiempo en una próxima visita; también se realizaban caravanas de vehículos, pega de afiches de los candidatos en los postes del tendido eléctrico; se hacían hojas volantes en las que se daba a conocer los candidatos y las propuestas de trabajo; se realizaban murales con los rostros de los principales candidatos, se hacían algunas vallas publicitarias con el rostro de los principales candidatos y candidatas, se compraban espacios radiales para promover el perfil y las plataformas de gobierno, se realizaban campañas médicas sobre todo en la zona rural, se patrocinaban torneos de fútbol, se realizaba perifoneo con la voz y propuestas de los candidatos sobre la solución de los principales problemas del municipio, departamento o el país según sea el caso.

La campaña sucia: los improperios de la campaña política

Casi siempre en las campañas político-electorales en El Salvador, se daba la campaña “sucia” y normalmente la realizaba una persona o una institución “fantasma” que generalmente estaba ligada al partido en el gobierno. En las elecciones del 2009 no hubo excepción: existió una institución llamada “Fuerza Solidaria” que se encargó de denigrar la fórmula presidencial del FMLN y al principal partido político de izquierda, tratando de confundir a la ciudadanía con el pasado conflicto armado, señalando que poseían grupos armados, que tenían relaciones con Hugo Chávez o con Cuba. Sin embargo, ese tipo de campaña no dio los resultados esperados por la derecha, dado que la población vivía una situación económico-social y política que no necesitaba mensajes mediáticos para entenderla; en todo caso, los representantes de Fuerza Solidaria llegaron a los Hoteles y a las empresas para realizar reuniones en las que presentaban videos tergiversando el papel del presidente Venezolano y Cubano para infundir miedo a los trabajadores de esas instituciones para que no votaran por el FMLN; ese tipo de campaña tampoco dio los resultados esperados a la derecha aglutinada en ARENA.

En algunos municipios de mayor importancia electoralmente hablando como San Salvador se realizaron acciones como el hecho de botar la basura en pleno centro de la capital para mostrar a la población que el principal

problema era la recolección de la basura; a partir de ello, se realizaron spot televisivos de campaña para influir en el electorado; en otros casos, como el municipio de San Miguel, el señor alcalde municipal acostumbraba poner **apodos** a los rivales y actuaba de manera informal y mal educado ante los contendientes e incluso explotaba públicamente los problemas personales y familiares de sus oponentes, todo con el objetivo de llamar la atención de quienes tenían alguna simpatía por su persona, es decir, buscaba convertirse en un populista de la zona oriental del país.

Todos esos impropiedades de la campaña no contribuyen a construir una sociedad en la que la reconciliación y la paz duradera sean principios del nuevo país que se quiere construir; además, se estaba desperdiciando la oportunidad que el pueblo salvadoreño tenía de producir un cambio que le beneficiara en todos sus aspectos y principalmente en la nueva cultura democrática que demandan los tiempos actuales.

El voto deseado: jóvenes y mujeres

Los partidos políticos salvadoreños en la campaña política del 2009 trataron de atraer el voto de los jóvenes proponiendo situaciones como “mi primer empleo”. Además, ofertaron propuestas enfocadas al deporte, protección de sus derechos, mayor educación y atención a la niñez; sin embargo, estas propuestas no parecieron motivar a la juventud dado que los espacios que se brindaban fueron muy restringidos, exceptuando al FMLN que posee en sus estatutos cuotas de poder para los jóvenes en instancias de dirección del partido y en la selección de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular; en este caso, la cuota establecida era del 25%.

El sector de las mujeres resulta ser la población mayoritaria en El Salvador, según los últimos censos poblacionales; a partir de ello, se convirtieron en un atractivo electoral a conquistar para aumentar en caudal de votos en todas las elecciones; sin embargo, dada la cultura machista y el régimen de dictadura que aún persiste en el país, las mujeres son el sector que menos espacios de participación tiene en los procesos electorales; generalmente son los hombres los que participan mayoritariamente tanto en los organismos de dirección partidaria, como en los cargos de elección popular y al igual que con los jóvenes, es el FMLN quien por estatuto garantizaba la participación de mujeres en las instancias antes señaladas; el porcentaje establecido era de 35%.

Las mujeres y los jóvenes son segmentos poblacionales que deben considerarse siempre en las campañas políticas no para utilizarlos en la misma,

sino para crear mayores niveles de participación ciudadana y de esta manera fortalecer la democracia participativa que en estos momentos es incipiente en El Salvador; es importante, además, promover el apoyo a estos sectores para generar una cultura democrática que permita precisamente construir un país más justo y humano.

Balance del proceso electoral

En la recta final de la campaña, las propuestas y compromisos de los distintos candidatos y candidatas y de los partidos políticos contendientes no se terminaron de concretar puntualmente, ya que en la práctica la campaña tuvo más de un año en estarse desarrollando de manera disfrazada (pre-campaña); la ciudadanía no tenía en esos momentos una propuesta que recogiera la problemática concreta de país; más bien, existieron planteamientos bastante generales. Esto, por supuesto, tenía en la base la visión particular de cada punto de vista del candidato o partido que lo planteaba en términos de publicidad.

Cada partido y cada candidato poseía su plataforma de gobierno tanto en lo local como en lo nacional; el problema era que en la campaña apenas se mencionaban algunos ejes de las propuestas; en muy pocos casos se hicieron debates en los que se profundizara en las propuestas de solución a los problemas; casi siempre se estuvo pensando en lo que la ciudadanía quería escuchar y con base a ello se hizo la campaña; en otras palabras, se estuvo pensando y actuando en función del voto y no en la persona o el ciudadano.

A lo anterior debe agregársele que la crisis mundial requería de tomar decisiones orientadas a palear de manera concreta contra los efectos económicos, sociales y políticos que de hecho ya impactaban la mayoría de sectores populares e incluso a las empresas productivas del planeta. El capitalismo está en crisis y, por tanto, es urgente construir un nuevo modelo de sociedad en el que la participación ciudadana sea el eje fundamental de las decisiones que se tomen.

Existió campaña sucia, es decir campaña que denigraba las instituciones políticas adversarias al partido oficial y personajes (candidatos y dirigentes) para desacreditarlos y bajar su popularidad a fin de crear la posibilidad de mantenerse en el poder o llegar al mismo de cualquier manera; el punto era tratar de lograr que la ciudadanía se inclinara por respaldar con su voto a determinado partido contendiente, sin importar que la democracia exige una cultura política que posibilite la tolerancia y la discusión franca, respe-

tuosa y directa sobre los problemas de la sociedad sin violentar los derechos elementales de las personas.

En esta campaña, todavía prevaleció la demagogia, el golpe bajo, el fraude electoral, la compra de voluntades, el uso excesivo de los recursos del Estado a favor del partido oficial y muchos otros aspectos que no ayudan al fortalecimiento de la democracia salvadoreña.

También existen personajes e instituciones que creen que el pueblo se puede manejar a su antojo, o que su voluntad se puede comprar o negociar por obras o dinero, como si las personas no tuvieran capacidad de pensar; eso es un insulto a la inteligencia de las personas; en todo caso, la voluntad del pueblo se expresa en las urnas cada vez que hay elecciones, a juzgar por los resultados.

Al final de la campaña y del proceso electoral salvadoreño, el pueblo es quien tiene la última palabra y en honor a la verdad las perspectivas siempre fueron favorables para que el poder del pueblo se expresara en las urnas y con ello, contribuir a dar un paso más en la construcción de la democracia participativa que tanto se necesita en el salvador.

Finalmente queda claro que los principales desafíos para la democracia salvadoreña en los procesos electorales y en las campañas políticas son los siguientes: cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en materia electoral, crear y cumplir nuevas normas que garanticen la igualdad de oportunidades a los partidos contendientes en materia de campaña, prohibir definitivamente la participación en campaña de personas e instituciones que se dedican a denigrar candidatos y candidatas o partidos políticos contendientes, crear una cultura política en la que se promueva el debate y la sana crítica de las propuestas de solución a los problemas socio económicos y políticos del país, la creación de un mecanismo de fiscalización del financiamiento de las campañas políticas para evitar la intromisión de procesos ilícitos en los procesos electorales, la regulación de los medios de comunicación en cuanto a su papel en las campañas políticas así como el establecimiento de un reglamento de ética política para los partidos, candidatos, medios de comunicación y periodistas que se involucran en actividades proselitistas, evitando también la participación de extranjeros en los procesos electorales de manera directa y en calidad de electores.

Las perspectivas de transformación socio-económica y política

Durante toda la campaña política electoral en El Salvador desde el año 2008 al 2009, la opinión ciudadana expresada en las distintas encuestas de

opinión pública tanto de instituciones nacionales como internacionales siempre manifestó que el FMLN tenía las mejores perspectivas de ganar las elecciones presidenciales del 15 de Marzo; la razón fundamental era que después de 20 años de gobierno del partido ARENA, es decir, de cuatro periodos consecutivos de poseer el control del poder político del ejecutivo y de aplicación del modelo económico neoliberal, la ciudadanía estaba sometida a una situación de crisis que reclamaba el cambio de gobierno y de partido en el ejercicio del poder político del Estado.

Sin lugar a dudas, existía un desgaste natural del partido ARENA, pero también la derecha había venido realizando muy mal las cosas en el gobierno ya que las medidas de política pública que se aplicaron fueron de mayor beneficio para unos pocos, en detrimento de los intereses de las mayorías; problemas como el desempleo, la delincuencia, la pobreza, la corrupción, mala calidad de la educación y de la salud generaron desesperanza en los sectores populares; en todos estos años, fueron las remesas las que se convirtieron en la válvula de escape a la crisis económica que venía experimentando la población desde que ARENA llegó al poder en 1989.

Se debe destacar también que la izquierda trazó una buena estrategia para profundizar el desgaste de ARENA y de sus gobiernos a través de definir con claridad sus dos principales formas de lucha: política y social; además, se buscó el establecimiento de amplias alianzas sociales y coaliciones con partidos que coincidieran en la necesidad de cambiar el rumbo del país; resolvió, además, algunos problemas internos de división y pleito por cargos de dirección y de elección popular, supo definir con mucha anticipación su fórmula presidencial y estableció un dialogo social abierto por El Salvador que quería para construir su plan de gobierno.

Significado del triunfo de la izquierda en El Salvador

El triunfo de la izquierda en el Salvador a través de la lucha político electoral significa una victoria trascendental de las fuerzas revolucionarias que abren una nueva página en la historia del país para concretizar la toma del poder ejecutivo que anhelaba Farabundo Martí, Feliciano Ama, Modesto Ramírez, Francisco Sánchez, Mario Zapata, Alfonso Luna, Anastasio Aquino, Schafik Jorge Handal, Monseñor Romero, los padres Jesuitas (asesinados por la derecha recalcitrante que organizó los escuadrones de la muerte para eliminar el pensamiento progresista del pueblo) y muchos hombres y mujeres de distintos sectores de la vida nacional que ofrendaron su vida a lo largo de la histórica lucha revolucionaria.

Significa, además, la posibilidad real de iniciar un proceso sistemático de transformaciones profundas en el área social, política y económica que conduzca al establecimiento de una sociedad en paz, democrática y desarrollada, en donde se respeten los derechos humanos, se resuelva la delincuencia generalizada que existe, en donde se respete la libertad de culto y haya una mejor educación para dejar atrás el analfabetismo, se mejore el sistema de salud, se creen fuentes de trabajo dignas, se mejoren los salarios de los trabajadores y se ofrezcan mejores oportunidades a los campesinos, ganaderos, comerciantes, empresarios, etc.

El triunfo de la izquierda significa también la derrota del miedo de la ciudadanía infundido por la derecha y particularmente por el partido ARENA con la campaña sucia; es también la derrota del fraude montado desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al no depurar muchos muertos del padrón electoral, así como la existencia de extranjeros centroamericanos, especialmente de Nicaragua, Honduras y Guatemala que vinieron a votar; esta vez, el pueblo se incorporó a las tareas de vigilancia y hostigamiento para evitar que estas personas ejercieran el sufragio; fueron jornadas de desvelo, de lucha permanente deteniendo autobuses, camiones, pick up, ubicando casas y hoteles donde estaban hospedados hasta asegurarse de garantizar que estas personas no participaran en un evento que era propio de los salvadoreños y las salvadoreñas.

Para la derecha, las elecciones son una fiesta cívica en teoría; en la práctica, son un proceso en el cual buscan mantener el control del poder político del estado para seguir saqueando las arcas del gobierno; para la izquierda, son una batalla en la que se pone a prueba la capacidad organizativa del partido, así como su convicción de lucha revolucionaria para cumplir misiones que garanticen la toma del poder a través del voto. Las elecciones son, además, un proceso en el cual se enfrentaron dos proyectos políticos y dos formas distintas de cómo desarrollar el país; por tanto son un espacio de lucha por el control del poder político del estado.

La estrategia utilizada por la derecha en el proceso electoral fue la demagogia, la compra de voluntades, el fraude electoral, el uso excesivo de los recursos del estado en la campaña, así como el intento de unificar a la derecha a través de pactos de coalición cupular que al final de cuentas no le dieron el resultado positivo que esperaban porque perdió las elecciones; mientras tanto, la estrategia de la izquierda fue sacar a ARENA del ejecutivo, resolviendo primero sus problemas internos, definiendo con mucha anticipación la fórmula presidencial sin internas y atendiendo al sentir y

pensar del pueblo, contactando directamente a la ciudadanía y construyendo el plan de gobierno, tomando en cuenta la participación activa de los distintos sectores de la vida nacional.

El pueblo estaba cansado de tanta promesa incumplida y de muchos compromisos firmados en papel y no llevados a la práctica; los cambios eran una demanda social generalizada que se conjugaron muy bien con la estrategia del Frente de presentar una oferta electoral que le resultó atractiva a la ciudadanía; se generó un vuelco radical en la correlación de fuerzas a favor del cambio con Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, quienes generaron confianza de estar preparados para realizar los cambios; ahora sólo falta esperar que se apliquen las medidas que garanticen las transformaciones desde el ejecutivo.

A nivel social, se espera que el nuevo gobierno aplique medidas para resolver la delincuencia generalizada que existe como las extorciones, narcotráfico, maras, la pobreza, la falta de alimentos, la mala calidad de salud, el desempleo, la mala calidad de educación, el déficit habitacional, la desintegración familiar; hay que generar procesos de atención integral a la niñez, la juventud, las mujeres, mejorar los espacios sanos de recreación y deportes; por supuesto, esto debe ser un proceso sistemático en el que deben participar todos los sectores (Gobierno, empresa privada, trabajadores, profesionales, universidades, campesinos, estudiantes, ganaderos, ONG, comerciantes, etc.) así como los gobiernos amigos comprometidos con las transformaciones sociales de las sociedades actuales.

A nivel económico, se espera que se tomen medidas no sólo de política económica que beneficien a la población en general, sino que se ataque de manera inmediata temas específicos como la evasión fiscal, la falta de productividad sobre todo en el sector agrícola, ganadero, pesquero, industrial, y comercial; hay que recuperar el papel del estado en los asuntos económicos, es decir, evitar que sea la oferta y la demanda quienes continúen regulando los precios de los productos en el mercado; se deben revisar los tratados comerciales en el sentido que no sólo beneficien a los grandes empresarios sino a los trabajadores en general; en concreto, la idea debe ser tomar medidas para recuperar la capacidad productiva del país y de esta manera resolver la crisis económica que agobia a la ciudadanía en general.

En el aspecto político, la situación es bastante interesante ya que el legado de los acuerdos de paz obligar a profundizar en las medidas orientadas a avanzar en la democratización del país para trascender de la democracia representativa a la democracia participativa (generar mayores espacios de

participación ciudadana); esto implica tomar medidas que transformen el régimen político y el sistema político salvadoreño. Un aspecto importante para la población es la depuración del padrón electoral en el sentido que los muertos ya no estén registrados como electores, que los centroamericanos que no son nacionalizados no deben ser parte del cuerpo electoral y que se regule aspectos como la financiación en campaña de los partidos políticos, el papel de los medios de comunicación radial, escritos y televisivos en las campañas políticas.

El reto parece muy grande y quizás hasta imposible; sin embargo, se sabe que éste será un gobierno de transición del neoliberalismo a la creación de un modelo económico alternativo en el que se vayan creando las bases para un nuevo modelo de sociedad y en la que de una vez por todas se superen problemas históricos como la pobreza, la falta de democracia participativa y el desarrollo económico del país.

Mauricio Funes, al final de la campaña política, publicitó cinco grandes compromisos de su próximo gobierno con la familia salvadoreña que son los siguientes: bajar el costo de la vida y aumentar el poder de compra de nuestra gente; crear más y mejores empleos con especial oportunidad para jóvenes y mujeres; derrota de la delincuencia y ofrecer seguridad para la familia; apoyo concentrado dirigido especialmente a las familias pobres del campo y de la ciudad, y un gobierno dedicado a defender y apoyar a la familia migrante y a sus hijos, madres, esposas y hermanas en el salvador; todo esto, por supuesto, es una responsabilidad que debe cumplirse de manera inmediata al asumir el gobierno; obviamente se realizará paulatinamente hasta cumplir lo prometido.

La victoria electoral del 15 de Marzo, para algunos analistas políticos es la derrota de la oligarquía salvadoreña por parte de las fuerzas revolucionarias; esto es cierto, si se tiene en cuenta que la revolución salvadoreña siempre tuvo como objetivo estratégico la toma del poder ejecutivo por la vía que fuese necesario según lo demandara la realidad de cada momento histórico; para otros, es el inicio de un proceso que será difícil puesto que remover estructuras de poder enraizadas desde hace 500 años no será cosa fácil; sin embargo, gobierno, partido y pueblo unido serán la fórmula que debe actuar de manera clara impulsando en plan de gobierno que se ofertó en la campaña.

Los cambios deben estar orientados no sólo a la alternancia en el gobierno, sino en la alternativa de cambio estructural; esto significa que el gobierno de Mauricio Funes, siendo un gobierno de izquierda, debe ser

una alternativa sistémica que en este quinquenio debe poner las primeras piedras para edificar las bases de la sociedad que soñaron los hombres y mujeres que cayeron en la guerra y que ahora deben estar satisfechos de esta victoria política electoral.

La propuesta de transformación del FMLN en el programa de gobierno

Las perspectivas de transformación socioeconómica y política están bastante claras en el plan de gobierno presentado por Mauricio Funes en Junio del 2008 en el marco de la pre-campaña política; sin embargo, dicha propuesta fue el resultado de un amplio proceso de diálogo social abierto con los distintos sectores de la vida nacional. El programa presenta cuatro partes importantes que son las siguientes:

- 1- Reforma Social,
- 2- Reforma Económica,
- 3- Sustentabilidad Ambiental y
- 4- Reforma Política.

El programa de gobierno posee otros componentes más, pero ahora no se hace referencia a ellos. Veamos en qué consisten las partes fundamentales del programa:

La Reforma Social es uno de los componentes más esperados por el pueblo salvadoreño ya que en este aspecto es donde está la mayor deuda de los gobiernos de derecha que anteceden al gobierno de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. En este aspecto, se propone la construcción de una sociedad justa y solidaria, en la que se supere la precaria estabilidad macroeconómica que caracterizó a los gobiernos areneros por su escasa sustentación y por su fuerte tensión con la economía real, su desajuste con la microeconomía y su traumática desafección con la vida de la gente.

En este aspecto, el reto es superar los siguientes fenómenos: el irrefrenable costo de la vida, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, el desempleo y la emigración; naturalmente para lograr este propósito, se hace necesario impulsar un nuevo enfoque de la política social teniendo claro que la potencialidad y la riqueza más importante del país es su gente; ésta es la premisa superior del programa del nuevo gobierno.

Los objetivos principales de la Reforma Social son los siguientes: reducir sustancialmente la pobreza, elevar los niveles educativos de la población

en calidad y cobertura, frenar el alto costo de la vida, erradicar la exclusión económica, social y política, disminuir la desigualdad y elevar progresiva y sostenidamente la calidad, el eficaz rendimiento y la asignación al gasto y la inversión social.

Es importante reconocer que la familia será un elemento importante en la conducción del nuevo gobierno, ya que se reconoce como el núcleo fundamental de la sociedad y, por lo tanto, será vista como un eje transversal en las políticas públicas; esto será la piedra angular del nuevo programa de gobierno.

Las políticas que se implementarán en esta área serán las siguientes: política alimentaria y de consumo básico, reforma integral de salud, política de cultura, educación, ciencia y tecnología, política de vivienda y desarrollo urbano, política para la equidad de género, política de seguridad previsional, política de la niñez y la adolescencia, política de juventud, política para el bienestar de las personas adultas mayores, política hacia las personas con discapacidad y política hacia los pueblos originarios.

La Reforma Económica es otro de los componentes trascendentales del programa en el que se pretende una economía para el bienestar, lo cual implica superar el fracaso de las políticas neoliberales impulsadas por ARENA en sus cuatro gobiernos consecutivos desde 1989 hasta el 2009. El modelo se agotó y no dio bienestar a la ciudadanía; el mayor problema que se enfrenta hoy en este aspecto es la falta de empleo y subempleo; existe concentración económica en un pequeño grupo; existen abusos y violaciones a las reglas de una sana y libre competencia, las privatizaciones y la desregulación sirven a un pequeño grupo de interés; la economía es importadora; con los TLCs, se destruyó la estructura productiva agropecuaria, se desmanteló parte del sector industrial y se debilitó la producción nacional, se reprivatizó la banca al servicio de unos pocos (Oligarquía Financiera), la dolarización de la economía no estimuló la inversión extranjera, ni la inversión nacional, mientras la inflación golpeaba fuertemente a las familias, encareciendo los artículos de la canasta básica y se volvió más precaria la vida de la población en general.

Se pretende una economía comprometida con el bienestar social; esto supone la superación de la problemática antes planteada y en consecuencia impulsar medidas para crear más y mejores empleos, acelerar el crecimiento económico, crear un estado promotor del desarrollo económico y social, establecer una economía orientada a la equidad, la inclusión y la participación, dinamizar la oferta y la demanda, promover la iniciativa privada, ga-

rantizar la sostenibilidad fiscal y financiera y construir una economía sustentable y centro americanista.

Con la reforma económica, se propone impulsar políticas tales como el empleo y los derechos laborales, el rescate agropecuario, soberanía y seguridad alimentara y energética; impulsar el desarrollo de las MIPYME hacia la gran empresa; apoyo para las microempresas no formalizadas, estímulo hacia la industria y la construcción (dentro de ésta, se impulsará política de transporte, nacional de pesca y de turismo); una política de comercio exterior, fiscal, de inversión pública para el desarrollo y una política monetaria y fortalecimiento del sistema financiero.

El reto de transformación más importante y determinante para las grandes mayorías de la ciudadanía está planteado en la reforma económica y particularmente en lo que tiene que ver con el empleo; la gente inmediatamente después del triunfo electoral busca a los dirigentes de todos los niveles pidiéndole que le ayude a buscar un trabajo, que la situación está difícil y que la esperanza es el nuevo gobierno.

La sustentabilidad ambiental es un aspecto importante en la perspectiva de cambio, ya que durante la historia de los distintos gobiernos de derecha han estado por encima los intereses económicos respecto al cuidado del medio ambiente; por tal razón, se propone construir una sociedad en armonía con la naturaleza, esto significa actuar con un nuevo enfoque de sustentabilidad y de gestión ambiental y para lograrlo se plantean las políticas siguientes: gestión integral y sustentable del agua; gestión integral de los recursos naturales, biodiversidad y ecosistema; ordenamiento ambiental y desarrollo sustentable del territorio; gestión de riesgos y protección civil; frente al cambio climático; gestión integral de desechos sólidos; control de fuentes de contaminación; educación para la cultura ambiental y fortalecimiento institucional.

La protección y cuidado del medio ambiente es un elemento importante ya que éste es el hábitat del ser humano y si a esto no se le presta atención desde el gobierno hasta el ciudadano común y corriente se estaría generando en el corto plazo una crisis de sobrevivencia más temprano que tarde y quien sufriría las peores consecuencias sería el ser humano y por consiguiente la sociedad en general.

En cuanto a la Reforma Política, se plantea realizar una reforma democrática que profundice el camino trazado por los acuerdos de paz para avanzar en la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho; para lograrlo, se proponen las siguientes políticas: participación ciudadana,

la cual debe impulsarse en tres niveles que son, primero, en las formas de intervención ciudadana en las que se exprese su poder decisorio y su incidencia en la formación de la voluntad política en el país; segundo en la participación socialmente compartida e interactiva en las responsabilidades y tareas para una mejor vida común, y tercero en la participación en los beneficios de los avances democráticos, de la vida económica, de la riqueza natural y de las relaciones de El Salvador con el mundo; política de derechos humanos; integración hacia la unión centroamericana; salvadoreñas y salvadoreños en el mundo; justicia, seguridad pública y convivencia ciudadana; libertad de pensamiento, conciencia y expresión; de desarrollo territorial y local; plan especial de coordinación y cooperación para el desarrollo urbano; ética, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción; cumplimiento, desarrollo de la paz y de la reconciliación; política de defensa: la reforma militar democrática; política exterior de paz, autodeterminación y solidaridad para el desarrollo, y por último la democratización del sistema electoral.

Todo lo anterior es una síntesis del programa de gobierno planteado por el FMLN y su fórmula presidencial; esto, por supuesto, después de las elecciones, se convierte en un compromiso con el pueblo; pero para impulsarlo necesariamente deben tomarse en cuenta las condiciones de la realidad nacional como internacional y explicarle al pueblo la realidad objetiva en la que se va actuar como gobierno, es decir, se deben explicar las condiciones en que se recibe el gobierno, sus distintas carteras e instituciones.

Perspectivas de El Salvador en el escenario de crisis financiera nacional e internacional

En los últimos días, el tema objeto de discusión es el impacto de la crisis económica mundial y su incidencia en los países de todo el mundo. El Salvador no es la excepción. En este mismo marco, también el presidente electo por el pueblo salvadoreño (Mauricio Funes) está buscando los mecanismos de cooperación que le permitan prevenir un impacto catastrófico en las mayorías del pueblo salvadoreño, al mismo tiempo que se prepara para asumir la misión que se le ha encomendado de una manera diferente a los gobiernos de derecha que le han antecedido.

A nivel nacional, la crisis financiera es un problema permanente, dado que El Salvador es un país históricamente subdesarrollado y dependiente, que se caracteriza por altos índices de pobreza y bajos niveles de escolaridad, altos índices delincuenciales, bajos niveles de productividad, un pési-

mo sistema de salud, una deuda externa que es impagable y por consiguiente una mala calidad de vida de la mayor parte de la población; pero también debe agregarse que El Salvador depende de las remesas de los compatriotas que mayoritariamente viven y trabajan en los Estados Unidos para el sostenimiento de la economía, ya que el país posee un sistema económico generador de pobreza y desigualdad, pues realiza una distribución desigual del excedente y se tiene una flexibilización del mercado laboral que hace inestable la situación laboral de los empleados en general y además existe un alto costo de la vida que hace más precaria la situación de la gente.

La realidad nacional es muy difícil en todos los aspectos de la vida no sólo porque el gobierno anterior hizo muy mal las cosas en cuanto al manejo de la cosa pública, sino porque no se tiene un sistema económico y político que responda a las necesidades de las mayorías; además, la situación social golpea fuertemente en las condiciones de vida de la ciudadanía, sobre todo en lo relativo a la pobreza, el desempleo y la delincuencia.

La situación internacional tampoco es favorable a El Salvador para salir de la crisis y transitar a perspectivas de solución a los problemas antes citados; para empezar, la estabilidad de la región Centroamericana es inestable económica y socialmente hablando, y se profundiza a partir del Golpe de Estado del pasado 28 de Junio 2009 contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya; dicho golpe no sólo es un retroceso a la democracia de Honduras, sino también un mal mensaje para los procesos de consolidación de los regímenes democráticos de la región y por supuesto es una especie de resurgimiento del militarismo que se creía ya era historia en América Latina; la paz en Centroamérica esta en peligro y, por tanto, la posibilidad de resolver las crisis es todavía más complicada.

Después del golpe de Estado en Honduras, la situación socio económica y política de la región se ha visto agravada dado que las contradicciones tienden a profundizarse, ya que, por un lado, se han tomado medidas que buscan restituir al presidente depuesto tanto al interior del Honduras, como en el resto de países vecinos. Algunos sectores de derecha de Honduras como del resto de la región sostienen que no hay golpe de Estado y de manera reiterada y sin argumentos de peso dicen que lo que ahí sucede es un proceso de rescate de la constitucionalidad y justifican que lo que se hizo es lo correcto; pero olvidan que la comunidad internacional más allá de la región ha sostenido que no reconocen al presidente de facto, Roberto Michelletti, y exigen la restitución de Manuel Zelaya.

Después del golpe de Estado en Honduras, la situación centroamericana en términos políticos se convierte en el centro de atención de la comunidad nacional e internacional a tal grado que se percibe un ambiente complicado para la estabilidad de ese país como del resto de Centroamérica; la perspectiva es incierta o con bastante posibilidad que un conflicto político se convierta en militar; esa situación debe evitarse para buscar alternativas de paz y revivir la democracia en el hermano país centroamericano y en ese orden resolver los problemas diversos que aquejan al resto de Centroamérica y particularmente el caso salvadoreño.

En este orden, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, ha implementado un **plan anti-crisis** que tiene como objetivos principales: proteger los empleos existentes y generar nuevas fuentes de trabajo; proteger a la población vulnerable de los impactos negativos de la crisis, especialmente a la población pobre y excluida; iniciar la implementación del sistema de protección social universal y aprovechar la crisis para construir políticas de Estado inclusivas en materia económica y social. Tiene, además, como componentes principales lo siguiente: un Programa de apoyo a la producción y generación de ingresos y empleos; un sistema de protección social universal; un Programa de fortalecimiento de las finanzas públicas y Políticas de Estado para el desarrollo.

En el plan anti-crisis existe una diversidad de medidas según cada componente que, a 100 días de gobierno (9-9-2009), se destacan algunas que ya se echaron a andar y otras que se han anunciado tales como la eliminación de cuotas voluntarias en el sistema de salud pública, la implementación del programa de vivienda “piso y techo” en municipios de pobreza extrema severa, la ampliación del programa de alimentación escolar a centros educativos en las áreas urbanas. Para el próximo año escolar del 2010 se plantea la implementación de la dotación gratuita de uniformes y útiles escolares; se ha creado el Consejo Económico y Social y se ha iniciado la implementación de entrega de paquetes agrícolas a los trabajadores del campo.

También hay que mencionar una situación compleja de resolver como lo es el problema de la violencia generalizada que vive el país; éste es el punto débil y de lo que más reclama la gente, así como también el hecho de que en muchas instituciones del Estado siguen muchos areneros haciendo de las suyas, aparte de la gente de derecha que el presidente ubicó en el gabinete de gobierno que tampoco la población lo ve con buenos ojos.

Conclusiones

El triunfo de la Izquierda en El Salvador el pasado, el 15 de Marzo, ha generado grandes expectativas de cambio en los diferentes aspectos de la vida de los salvadoreños y salvadoreñas, pero, después de 100 días de gobierno, el pueblo empieza a resentir que los cambios no llegan con la rapidez que los esperaba, la esperanza se empieza a desvanecer, se espera que el presidente se dé cuenta de ello y reacomode sus papel siendo consecuente con el discurso de campaña y de toma de posesión del gobierno.

Después de 100 días de gobierno de Funes, hay señales de rumbo en función de los más necesitados con las medidas aplicadas hasta este momento; sin embargo, la ciudadanía espera mucho más, pues las necesidades son muchas y el pueblo lo que quiere son soluciones concretas y no paliativos o discursos demagógicos como lo hizo la derecha.

Naturalmente, hay grandes diferencias respecto a la forma de gobernar del primer gobierno de izquierda con respecto a los anteriores de derecha; existen más acciones en beneficio de los más pobres y necesitados; se percibe más transparencia en la administración pública; la corrupción parece que no tendrá cabida –por lo menos eso se manifiesta hasta este momento–; hoy no hay beneficios para la militancia del partido de gobierno como lo hubo con ARENA.

El triunfo de la izquierda ha dejado en crisis al partido Arena y lo ha convertido en una oposición no constructiva como lo dijera en un principio sus dirigentes; las perspectivas de cambio van avanzando poco a poco aun con la oposición fuerte que controla la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.

El cambio camina a paso lento pero seguro; esa es la esperanza que todavía el pueblo tiene y aunque la derecha lo va a evitar a toda costa, la perspectiva es que el cambio avance en un proceso permanente y sistemático de tal manera que la situación económica, política y social del país se transforme en beneficio de los sectores populares.

Bibliografía

ARENA, (2008). *Plataforma de gobierno 2009-2014*. San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Diario Co Latino, (2008). Octubre, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

- Faro El (2008). *\$7.6 en 8 meses de propaganda*. Periódico Digital. 22 de Diciembre, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.
- FMLN, (2008). *Programa de Gobierno 2009-2014, nace la esperanza, viene el cambio*. 11 de Agosto, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.
<http://surasway.blogspot.com/>
- Gobierno de El Salvador (2009). *Plan Global Anti-Crisis*. Secretaria Técnica de la Presidencia. San Salvador, 17 de Junio de 2009.
- IUDOP (2009). *Los Salvadoreños y Salvadoreñas evalúan 100 días de Gobierno de Mauricio Funes*. Encuesta del IUDOP, UCA. Agosto de 2009.
- Periódico Nuevo Enfoque, (2009). *¡Presidente de Izquierda por primera vez en 188 años!* No 49, primera quincena, Abril, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.
- Periódico Co-Latino, 2 de Junio de 2009
- Prensa Digital, (2009a). *Borge da Ganador a Ávila; UTEC, UFG y Gallup a Funes*. Revista Contra Punto, No 101, Febrero 26, El Salvador, Centroamérica.
- Prensa Digital, (2009b). *ARENA y FMLN pulseando con todo en final electoral*. Revista Contra Punto, No 102, Marzo 6, El Salvador, Centroamérica.
- Prensa Digital, (2009c). *La recta final de la campaña electoral*. Revista Contra Punto, No 103, Marzo 10, El Salvador, Centroamérica.
- Prensa Digital, (2009d). *La hora de las definiciones en el Salvador*. Revista Contra Punto, No 103, Marzo 10, El Salvador, Centroamérica.
- Prensa Digital, (2009e). *La Revolución Salvadoreña derrota a la Oligarquía*. Revista Contra Punto, No 105, Abril 10, El Salvador, Centroamérica.
- Prensa Digital (2009f). *Revista Contra Punto*. Edición 126, martes 5 de Septiembre de 2009, El Salvador, Centroamérica
- Prensa Digital (2009g). *Revista Contra Punto*. Edición 126, martes 8 de Septiembre de 2009, El Salvador, Centroamérica
- Prensa Gráfica, 2 de Junio de 2009.
- TSE (2006). *Código Electoral*. Tribunal Supremo Electoral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

DEMOCRACIA, VIOLENCIA Y CRECIMIENTO URBANO EN EL SALVADOR

Rudis Yilmar Flores Hernández³⁵

América Latina es una región con muchos componentes similares, pero también con una gran diversidad. La globalización le da algunas características similares en el funcionamiento económico con la puesta en marcha y el ya agotado Modelo Neoliberal, sin prejuicio de la diversidad que proviene de su propia historia; en materia política, cada país es un caso concreto y específico, con grandes diferencias en sus estructuras sociales culturales y políticas.

En muchos países de la región, la lucha por la democracia viene desde principios del siglo XX, bajo la lógica de crear una sociedad más justa donde no predomine la Democracia formal, si no una Democracia participativa, donde el Estado consume un papel fundamental en el cumplimiento de una función social que garantice el goce de todos los derechos de los ciudadanos.

La conquista por la democracia real ha tenido a su base la lucha de los distintos sectores organizados de la sociedad, tanto a nivel político como militar y que lograron ganar y construir espacios; tal es el caso de la revolución Cubana y los procesos revolucionarios tanto en Centroamérica como en América del sur.

Con la finalización de los conflictos armados y las dictaduras militares, en la región se han propiciado nuevas condiciones para construir una verdadera democracia representativa, con el goce de espacios que permitan consolidar la participación de la población en la toma de decisiones y en la

³⁵ Rudis Flores es sociólogo y Profesor de la Universidad de El Salvador, Centroamérica. Correo: ryflores.nes@gmail.com

búsqueda de un proyecto alternativo que dé como resultado el retorno del abandonado Estado producto del Neoliberalismo y se recupere la ciudadanía.

En El Salvador, las últimas tres décadas del siglo XX marcan experiencias autoritarias y proceso dictatoriales; el país ha estado sumergido en una condición de pobreza, atraso, dependencia y subdesarrollo, lo cual en el presente conlleva a un sentir generalizado de una revalorización de la democracia, orientada a un fin en sí misma, como un verdadero estilo de vida, más que como un instrumento para alcanzar determinados objetivos, como ocurría en el pasado; la democracia debe plantearse como un régimen político que resuelva la forma de gobierno y la relación de la ciudadanía con el Estado, con énfasis en la libertad, la justicia, y la participación ciudadana.

Es importante apuntalar que la sociedad Salvadoreña vivió, en la década de los años 80 del siglo pasado, el inicio de una guerra civil marcada por la falta de espacios democráticos que permitieran la participación directa de la población en la toma de decisiones; esta lucha duró doce años y culminó con los Acuerdos de Paz en 1992 que llevaron a la finalización del conflicto, pero esta etapa que hoy vivimos de posguerra es mucho más difícil bajo la lógica neoliberal del mercado.

El debate sobre la transición de posguerra en El Salvador continúa abierto, a dieciséis años de iniciado este proceso. Uno de los aspectos cruciales de la discusión es la dimensión democrática de esta transición; se pensó que si se daba esta transición, ésta debía ser necesariamente democrática, pero la realidad demostró que no se trataba de algo mecánico que nos conduciría a un régimen de estas dimensiones.

En cierto modo, El Salvador en los últimos tiempos debió perder la brújula en el tema del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, ya que éstos fueron suscritos como un requisito imprescindible para avanzar en los nuevos propósitos de la democratización social y política del país, pero a estas alturas existe un déficit en su cumplimiento, según lo pactado en Chapultepec y en Nueva York.

En ausencia de mejores condiciones democráticas, ha sido notable el aumento de los problemas que generaron el conflicto armado, porque el empobrecimiento de la mayor parte de la población es evidente, y la responsabilidad social del estado fue reducida a su mínima expresión, convirtiéndolo en un estado bajo el control de la clase empresarial.

La Democracia pierde vitalidad cuando trata de mejorar las condiciones de vida de la población. Por eso la tarea es avanzar hacia una Democracia de Ciudadanía. Lo anterior consiste en organizar a la sociedad para asegurar y expandir sus derechos. Es necesario, para ello, una Democraticidad del Estado: el grado en que el Estado ha organizado las relaciones sociales.

No puede haber democratización política, por ejemplo, cuando los funcionarios públicos de alto rango se eligen en función de los intereses partidarios, llámense corte de cuentas, fiscalía general de la república, procuraduría general de la república, y sobre el papel de la asamblea legislativa que a través de las componendas entre los partidos de derecha han conducido al país a un retroceso en materia política, quedándose estancados y proclives a la corrupción, tráfico de poder y de influencias y al chantaje.

El país atraviesa un momento bastante difícil, con una serie de fisuras que reflejan un alto grado de conflictividad social y una clara ampliación de la brecha entre ricos y pobres.

En este contexto, es importante reflexionar sobre el comportamiento que ha tenido el país y la configuración de la transición que hoy vivimos desde sus dimensiones económicas políticas y sociales.

Por ejemplo, la poca vitalidad de nuestra Democracia Electoral para resolver los problemas de la pobreza se debe, a la infuncionalidad o disfuncionalidad de nuestras Instituciones, la cual es causada por los condicionamientos que los grupos de presión ejercen sobre el régimen político, principalmente millonarios y financieros. Existe una opinión generalizada de que la estatalidad latinoamericana no garantiza calidad institucional. Por lo cual, hay poca democraticidad del Estado.

La construcción de la democracia no será fácil; hay que recordar que, en toda la historia, El Salvador siempre ha estado gobernado por los militares y la clase dominante; la Constitución de la República es violada constantemente e impunemente; no existe una división de poderes, pues el poder ejecutivo a través del gobierno, en el pasado reciente, ha controlado los otros dos órganos como lo es La Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial.

Los últimos 20 años han estado gobernados por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y, bajo la doctrina neoliberal, se comenzaron a implementar una serie de medidas antidemocráticas tales como el ajuste estructural que propició la reducción del gasto público en las áreas sociales y una serie de procesos de privatización que han generado un aumento en los niveles de desempleo y provocando un éxodo masivo de

salvadoreños a otras partes del mundo y de manera particular hacia los Estados Unidos en busca del sueño americano.

El modelo económico implementado en 1989 con la llegada del presidente Alfredo Cristiani al poder por medio del partido ARENA comenzó toda una etapa de reformas neoliberales que condujeron al país a una polarización, sin darle soluciones concretas a los problemas que dieron origen al conflicto armado.

Un aspecto de dichas políticas es haber delegado las funciones del Estado a la clase empresarial, y esto ha provocado que durante los últimos 20 años se diera una ausencia completa de las funciones del Estado en resolver los problemas del país, como superar el analfabetismo que alcanza según datos oficiales del Ministerio de Educación el 25%, la falta de medicinas en los hospitales de la red pública, la falta de empleo, vivienda, alimentación.

Las medidas antidemocráticas de los últimos cuatro gobiernos desde (1989-2009) establecieron una amplia brecha entre ricos y pobres y se generaron procesos de privatización en diversas fases que empezaron con aquellos activos que no prestaban precisamente un bien público como las cementeras, los hoteles, puertos y aeropuertos; en una segunda fase, se vendieron las empresas generadoras de energía eléctrica, las telecomunicaciones y las pensiones; actualmente está en discusión la privatización del agua y la salud; también en el año 2001 se produjo el proceso de dolarización de la economía que benefició a las transnacionales y los sectores empresariales en detrimento de las mayorías que comenzaron a pagar los costos de la dolarización al incrementarse de manera vertiginosa el costo de la vida y una caída de los salarios.

Según la Dirección de Estadísticas y Censos del país para el año 2000, el 80.6% de la población padecía diferentes grados de pobreza, el 23% era extremadamente pobre y no poseían un ingreso suficiente para los alimentos mínimos, un 27% contaba con un ingreso mínimo inferior al gasto de la canasta básica y un 30.60% carecía de ingreso suficiente para cubrir la canasta de mercado que en marzo de 2002 equivalía a \$600.00.³⁶

La realidad de los salvadoreños se volvió muy compleja ya que las necesidades más sentidas de la población no se logran resolver; esto necesariamente conduce a los sectores populares a una lucha permanente por la reivindicación de sus derechos y la respuesta de manera inmediata de los

³⁶ Informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de El Salvador, año 2000 <http://www.digestyc.gob.sv/>

últimos dos gobiernos ha sido la criminalización de los movimientos sociales a partir de la creación de nuevas leyes como la ley antiterrorista y los planes mano dura y súper mano dura y el surgimiento de los juzgados especializados o “blindados” como las nuevas formas de represión del estado.

En contraposición, los movimientos sociales han seguido profundizando los niveles de lucha en contra de los procesos de privatización del agua, la salud, y la implementación de los mega proyectos que contemplan la construcción de represas en la zona norte del país y la implementación de la longitudinal del norte, los proyectos de explotación minera, la implementación de generadoras de energía eléctrica a base de gas y carbón, los cuales ponen en peligro la sostenibilidad de los pocos recursos naturales que le quedan al país y todo el proceso de degradación ambiental que éstos están generando.

En este contexto, el país se encaminó también a un proceso de desestabilización; los salvadoreños comenzaron a emigrar tanto del campo a la ciudad a partir de las pocas oportunidades que los campesinos tenían para producir la tierra, ya que el sistema bancario los asfixió con los créditos y el alto precio de los insumos agrícolas, obligando a muchos a emigrar hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

Después de la finalización del conflicto armado, la realidad política del país comenzó a tomar un rumbo distinto ya que por primera vez en la historia salvadoreña un grupo guerrillero (FMLN), con la firma de los Acuerdos de Paz pasó a constituirse como instituto político, y la lucha pasó a un plano eminentemente político en la búsqueda de la conquista del proyecto histórico clamado por el pueblo salvadoreño.

Los procesos electorales, desde marzo de 1994, se habían convertido en la bandera de lucha para la conquista de la democracia; sin embargo, éstos sólo habían estado al servicio de la clase dominante y limitándose a la participación de la población en dichos eventos electorales pero sin derecho a elegir ya que las instituciones están diseñadas para permitir el fraude legal.

En todos los procesos electorales, la derecha ha invertido millones en una campaña de terror, lo cual ha propiciado que los gobiernos no sean representativos pues se han utilizado los medios de comunicación para infundir miedo a través de sendas campañas que terminaban obligando al electorado a darles el voto.

Esta realidad se revirtió en los últimos dos procesos electorales del año 2009, tanto en elecciones legislativas y municipales y presidenciales, a partir de la toma de conciencia de la población, donde pesaron más los problemas

económicos y sociales que la propaganda mediática fundamentada en miedo a un cambio que no corresponde a los intereses de la clase dominante.

Sin embargo, es de destacar el nivel de acumulación de fuerza que ha tenido la izquierda en los últimos años y aun cuando ganó las elecciones presidenciales del 15 de marzo del 2009 y que tiene mayoría de diputados en la asamblea legislativa (35) y ganó también alrededor de 98 alcaldías, el camino por la construcción de la democracia aun no termina; en todo caso, se puede tener el control del gobierno, pero no se tiene el poder suficiente por el hecho de que muchas instituciones seguirán siendo manejadas por la derecha que logra tener el control de la asamblea legislativa representada por tres partidos de derecha, órgano judicial y sobre todo el poder económico.

Después de 77 años del levantamiento campesino de 1932, no sólo se ha logrado derrotar a un partido político sino que se logró quitarle el control del gobierno, a quienes históricamente han promovido la exclusión social, la explotación y la corrupción al más alto nivel y que nos ubica, según Transparencia Internacional, en la posición número diez de los países más corruptos de América Latina.

La tarea de la construcción de la democracia es una tarea pendiente de los Acuerdos de Paz y retoma mayor auge con el gane electoral de la izquierda, el 15 de marzo de 2009, representada por el FMLN, por considerarse como el triunfo del pueblo y donde el estado de privilegios de que gozaba la derecha tiende a desaparecer, y el nuevo gobierno debe tener en la agenda el trato preferencial por los pobres.

No cabe duda, existe una deuda histórica con el pueblo salvadoreño y su democracia; ahora se le presentan nuevos escenarios y nuevas formas de lucha ante la nueva realidad que vive el país y el mundo; aun cuando la izquierda gobierne, es necesario romper los viejos esquemas de dominación y de explotación de la clase empresarial que hoy en día siguen vigentes y que se niegan a aceptar que el mundo cambió.

La conquista de mejores condiciones que abonen el camino de la democracia es un reto fundamental en este momento en que por primera vez la izquierda partidaria con un candidato de la sociedad civil logra arribar al poder político; esto implica nuevos frentes de lucha para la defensa de los espacios conquistados ya que este triunfo electoral se considera como el triunfo del pueblo y, por lo tanto, debe expresarse en la implementación de políticas dirigidas y conducidas por el Estado en función de beneficiar a los sectores más desprotegidos.

Es importante mencionar que las democracias de los países centroamericanos se encuentran en procesos de consolidación y tropiezan con un peligro permanente, ya que las derechas, a partir de las derrotas electorales, han comenzado a reagruparse a nivel de América Latina, alentadas por los grupos de poder en los Estados Unidos y han emprendido una serie de laboratorios que quebrantan todo orden constitucional de los países; tal es el caso del golpe de Estado propiciado contra el presidente constitucional de la República de Honduras, Manuel Zelaya.

Para los países que comienzan a caminar hacia la consolidación de la democracia, el golpe de Estado en Honduras es un duro golpe y, por lo tanto, obliga a los pueblos a replantear las formas de lucha por la defensa de todos los frutos que a la población durante mucho tiempo se le habían negado.

La violencia como máxima expresión de la posguerra

Hay un elemento que adquiere gran trascendencia y que el proceso de transición democrática no ha logrado resolver: es el problema de la exclusión social, la mala distribución de la riqueza, la falta de empleo, falta de vivienda digna y educación, que en los últimos años ha provocado un auge mayor de la violencia en sus distintas manifestaciones, en el seno de un orden social que le da la espalda a la gran mayoría de la población en sus propios intereses.

Fenómenos como la violencia en todas sus formas se vieron florecer ya que se solucionó el conflicto armado, pero los Acuerdos de Paz en materia económica social no contemplaron reformas que permitieran una absorción de los militantes tanto del ejército nacional como del ejército guerrillero.

Bajo esta gama de problemas, los informes brindados por Las Naciones Unidas, nos ha llegado a clasificar como el segundo país más violento de América Latina después de Colombia, que vive un conflicto armado; los niveles de inseguridad que vive el país son alarmantes; se producen alrededor de 13 homicidios diarios y aumentan el fin de semana hasta 30 homicidios; el accionar del crimen organizado ligado a las estructuras de poder económico está a la orden del día al convertir al país en un puente del narcotráfico; las pandillas que operan bajo el esquema de rentas que imponen desde al vendedor de paletas hasta la mediana empresa provocan un miedo generalizado en la población.

Indudablemente, el estigma más claro para la actualidad es el que dejó la guerra civil que atravesó El Salvador de 1980 a 1992. El sólo hecho de

seguir llamando a la época actual como “posguerra” lleva implícita la idea de que está en gran parte relacionada con la guerra. Doce años de conflicto y alrededor de 75 mil muertos dejaron huella en las construcciones mentales y sociales de la población salvadoreña. Son construcciones profundas que no se deshacen simplemente con discursos de paz y democracia.

Hay que recordar que la guerra dada su naturaleza creó normas y valores sociales que legitimaron y privilegiaron el uso de la violencia en las relaciones sociales exacerbando y universalizando la cultura de la violencia en la que ahora vivimos inmersos.

La violencia se fue insertando en las concepciones de la sociedad, como una manera eficaz para dirimir los conflictos y obtener beneficios más rápidamente; por ello, estamos viviendo los días más negros del periodo de transición democrática, donde se experimentan homicidios espantosos que ni siquiera en el conflicto armado se observaban a pesar de ser una guerra sangrienta.

Para mencionar algunos hechos: están apareciendo cadáveres amputados donde algunas partes del cuerpo aparecen en un lugar y las otras partes en lugares distintos y muchas personas son encontradas calcinadas que antes de ser asesinadas fueron torturadas y estranguladas.

La población se encuentra asediada por la delincuencia; todos los días cierran negocios llámense tiendas, colegios, almacenes, pequeños comerciantes, ya que las maras imponen rentas que van desde 100 dólares hasta miles y muchos al no cancelar se exponen a ser asesinados.

En este contexto, para algunos empresarios, la delincuencia se convirtió en un negocio lucrativo, pues recién finalizada la guerra comenzaron a surgir las ventas de armas de fuego y cuyos propietarios son altos funcionarios de gobiernos anteriores; hay empresas de seguridad privada que en el momento actual tienen más de 25,000 policías privados: dicha cantidad no se equipara el número de efectivos con que cuenta la policía nacional civil.

Esta criminalidad que vive El Salvador revela una grave crisis, una descomposición social a la que nos llevaron las administraciones del entonces partido de Gobierno, Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que el primero de Junio del 2009 concluyó con 20 años en el poder.

La violencia se recrudece cada día y, en los últimos dos años de lo que va del 2009, las estadísticas de la policía nacional civil, fiscalía general de la república y medicina legal, señalan un elevado e incontrolable índice de delincuencia que, a pesar de los planes mano dura y súper mano dura, im-

plementados por el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) y Antonio Saca (2004-2009) y el endurecimiento de las leyes, no han tenido éxito, como lo demuestran los siguientes datos:

Para el año del 2007, se registraron 3,497 homicidios; en el 2008, existe una leve disminución, ya que se reportan 3,179, y sólo en lo que va de los primeros seis meses del 2009, se reportan 2,138; ello equivale a que sucede un promedio de 356 asesinatos por mes y una media de 12 homicidios por día.³⁷ Esta situación de inseguridad provoca que la población tome medidas para poder defenderse de la delincuencia, y lo más inmediato es poseer un arma, ante la impotencia de las instituciones de seguridad pública de erradicar dicho fenómeno.

Sin duda, las principales ciudades del país han debido experimentar con mayor fuerza este espiral de violencia por las grandes concentraciones de población que, producto de la falta de oportunidades en las zonas rurales y departamentos que reflejan mayores niveles de pobreza, han tenido que emigrar a los centros urbanos en busca de mejores condiciones de vida, lo cual genera nuevas configuraciones urbanas desde donde se expresan tanto los cinturones de pobreza como las ciudades cerradas con las mayores condiciones de seguridad para resguardarse de la delincuencia.

La nueva realidad urbana de El Salvador

El Salvador es uno de los países más densamente poblados y deforestados de América Latina; vive un acelerado crecimiento urbano producto de una serie de factores económicos, políticos y sociales que se pueden vislumbrar desde mediados del siglo XX y un claro aumento en el contexto del mundo globalizado, producto de la profundización de las condiciones más sentidas de la población.

Cuando examinamos los niveles de crecimiento urbano durante los últimos años, encontramos que el factor económico y la guerra son determinantes en los procesos de migración interna y que han contribuido a elevar los niveles de asentamientos en múltiples dimensiones desde las comunidades marginales con una cantidad de viviendas, un alto grado de población en condiciones que la vuelve vulnerable: por ejemplo, la mujeres sufren problemas de desempleo y discriminación, los niños sufren de una cantidad de epidemias en cada año, los jóvenes son estigmatizados bajo el

³⁷ Mesa Técnica (Policía Nacional Civil, Fiscalía General de la Republica, Instituto de Medicina Legal), año 2007, 2008, 2009. http://www.ocavi.com/docs_files/file_683.pdf

contexto delincencial que vive el país y viviendo en terrenos semicéntricos de extensiones considerables hasta vertederos humanos en el corazón de las ciudades donde no cuentan con servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y vías de acceso; en muchos casos, al habitar terrenos privados o municipales, son objeto de desalojos a través de decretos de ley que en muchos casos conducen a la utilización de la fuerza y la violencia.

Es importante considerar que la mitad de la población urbana está por debajo del nivel de pobreza en quince países del mundo, entre ellos **Bolivia, Colombia, Guatemala y Haití**.³⁸ En por lo menos otros ocho países, incluidos **El Salvador y Perú**, entre el 40% y el 50% de la población urbana vive por debajo de ese nivel, dice El Fondo de Población de Naciones Unidas. (UNFPA).³⁹

Los procesos migratorios internos de las últimas 2 décadas, uno provocado por la guerra civil de los años 80 y otro por el neoliberalismo, han generado todo un proceso de crecimiento urbano que pone en discusión los límites de lo urbano, ya que existe una expansión que genera nuevas y variadas formas de vida en la población como los condominios residenciales populares, colonias, vertederos humanos y ciudades cerradas o de exclusividad que fomentan una nueva trama social en el mundo de las relaciones sociales al excluirse y auto excluirse y los cuales son creados a partir de las condiciones de violencia que vive el país.

En los últimos tiempos, a finales del siglo XX y Principios del XXI, la mayoría de los países pobres de América Latina comenzaron a experimentar una serie de cambios económicos, políticos, sociales, culturales, dinamizados por el impulso y la expansión de las economías de los países desarrollados. La globalización concebida como el reacomodo de las economías a nivel mundial y la disputa de los mercados ha conducido a una serie de cambios en las economías de los países pobres en detrimento de sus realidades de atraso y miseria, y se han convertido en mercados de consumo, obligándolos a implementar una serie de medidas de reajuste estructural donde el Estado dejó de cumplir la función social, pasando a predominar la fuerza del mercado impuesta por los grandes monopolios y ampliando la brecha entre ricos y pobres.

El Salvador experimenta, sin duda alguna, los efectos de la globalización deshumanizante, marcada por el crecimiento económico, el desarrollo tecnológico, la expansión comercial, el predominio del mercado que cam-

³⁸ http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_6247000/6247096.stm

³⁹ <http://news.bbc.co.uk>, ibid.

bió de manera radical la forma de vida y la cultura de los salvadoreños, propiciando el individualismo y el hedonismo.

Por otra parte, se destacan también los procesos urbanísticos que han conducido a profundizar la exclusión social y una configuración urbana que se contrapone con el legado histórico de la ciudad.

Los nuevos espacios urbanos tienen base en el predominio del mercado y el fomento del consumo a través de los medios de comunicación que impactan constantemente en los patrones de conducta de los/as salvadoreños/as. El nuevo mapa urbano propicia las condiciones para una ciudad de consumo y de individualismo, donde un buen segmento de la población no goza de algunos servicios básicos por las condiciones precarias de vida en las que se encuentran; esto nos lleva a diferenciar entre los que se ubican en lo urbano cerrado y los que se encuentran en la periferia de la ciudad condenados al olvido por la ausencia de políticas públicas por parte del Estado.

Las principales ciudades del país son parte de esos cambios, ya que se trastocó el funcionamiento de éstas a partir de las inversiones extranjeras en la economía local principalmente en el negocio de inmobiliarios y que han modificado todo el entramado social histórico, generando distintos enclaves urbanos, al punto de considerar a la ciudad como un conjunto de piezas aisladas a partir de la fragmentación y el individualismo provocado por el neoliberalismo.

El nuevo mapa urbano y desarrollo inmobiliario que se desarrolla en el país tiene su base en el crecimiento poblacional a partir de los efectos desastrosos provocados por el neoliberalismo y la globalización, que condujeron a procesos constantes de migración del campo a la ciudad a partir del desaparecimiento casi total del sector agropecuario, en busca de un empleo que resolviera las necesidades más sentidas de la población.

Es importante destacar que las ciudades han atraído a las personas durante mucho tiempo por lo que ellas ofrecen; El Salvador no escapa a esta realidad. En una propuesta sobre pobreza urbana presentada al gobierno en el mes de julio del 2009 por el PNUD, se estima que, según el censo de población del año 2007, existía un cambio importante en la estructura demográfica del país. Esta es una realidad incontrastable, ya que 1.6 millones de salvadoreños/as viven en condiciones de pobreza en las zonas urbanas del país, cifra que equivale al 26.9 % de la población total y que representa más de la mitad de la población en situación de pobreza.

El salvador experimenta un crecimiento urbano que va del 26% al 60% entre 1950 y 2008; en otras palabras, ello significa que, de cada diez personas, seis viven en el área urbana, provocando un crecimiento exponencial. El PNUD contabiliza 1,747 asentamientos urbanos con pobreza extrema; el 41% está en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y San Miguel. Estas concentraciones de población en las principales ciudades del país evidencian situaciones alarmantes de pobreza, viviendo en condiciones no dignas para los seres humanos.

Los espacios urbanos están configurados con grandes contrastes: existen asentamientos donde viven miles de personas con múltiples carencias, y a la par o enfrente se encuentran los lujosos centros comerciales y las mejores zonas residenciales. Es decir, la exclusión de muchos convive con la inclusión de pocos; esta exclusión urbana, pese a estar tan cerca de los principales centros de poder político y económico y de los medios de comunicación, permanece invisible. En estos días en que se habla de democracia de forma teórica, masiva y repetitiva, bueno es recordar que toda esta realidad tiene un carácter estructural.

Las concentraciones urbanas y la creación de cinturones de pobreza en las ciudades impulsaron una fuerte inversión inmobiliaria en la periferia por parte de las compañías constructoras que, bajo la administración de los gobiernos anteriores, violentaban todo el marco jurídico y no tomaban en consideración factores de riesgo que pusieran en peligro las vidas de sus habitantes.

También es importante mencionar que, a escala nacional, la delincuencia generó todo un contexto de inversión inmobiliaria que llevó a crear zonas de exclusividad que le permitieran a la población resguardarse de los altos índices delincuenciales que vive el país.

El costo habitacional en el país es elevado; las zonas residenciales de exclusividad son creadas para sectores de la clase media hacia arriba con condiciones económicas privilegiadas y que reúnen circunstancias para crear toda una trama de relaciones sociales de exclusión, ya que las personas para ingresar a las ciudades cerradas cuentan con sistemas de seguridad privada, alarmas que dificultan la entrada de personas particulares.

Todo este entorno urbano ha estimulado el deterioro acelerado de las condiciones medioambientales, pues se han talado una cantidad de áreas de reserva forestal y se deterioran los mantos acuíferos, propiciando una contaminación del aire, el suelo y principalmente los ríos y lagos.

Bibliografía

Cardenal, Rodolfo y González, Luis Armando (2002). *El Salvador: La Transición y sus Problemas*. UCA editores. Primera edición. Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”. El Salvador.

DGECES (2000). Dirección General de Estadísticas y Censos, de El Salvador. <http://www.digestyc.gob.sv/>

Fernández, María Augusta (1986). *Ciudades en Riesgos*. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Costa Rica.

PNC (2007, 2008, 2009). *Mesa Técnica* (Policía Nacional Civil –PNC–, Fiscalía General de la República, Instituto de Medicina Legal). El Salvador. http://ocavi.com/docs_files/file_683.pdf

Redacción de BBC Mundo (2007). *Informe del Fondo de Población de Naciones Unidas*. 27 junio 2007. Inglaterra. http://news.bbc.co.uk/1/hi/spanish/international/newsid_6247000/6247096.stm

LAS INTERROGANTES SOBRE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS ¿QUIÉN MANEJA LA POLÍTICA EXTERIOR DE EEUU?

Marco A. Gandásegui⁴⁰, hijo

*“EEUU no va a imponer ningún sistema político a otro país,
aunque no quiere decir que no vaya a trabajar a favor de los valores democráticos”.*

Barack Obama

El 28 de junio de 2009, el golpe militar en Honduras que depuso al presidente Manuel Zelaya, puso en jaque al presidente Barack Obama. Las dudas que existían en torno a las intenciones del nuevo ocupante de la Casa Blanca se disiparon rápidamente. En bandeja de plata, las circunstancias se presentaban de manera prístina para que Obama actuara con decisión y en concierto con la comunidad internacional. Ante el llamado de un país golpeado y en dificultades, Obama optó por desviar la mirada y ocuparse de otros asuntos.

Su discurso de “la mano tendida” durante la campaña y los esfuerzos por crear una nueva imagen para EEUU, se encontró con Honduras, una prueba que lo enfrentó a dos sectores de la clase dominante norteamericana que pujaban por la hegemonía y legitimidad interna en ese país. Por un lado, hay quienes plantearon una acción radical a favor de la democracia en Honduras. Implicaría retirar al embajador, suspender los desembolsos y unirse a los países de la región. Otra corriente incrustada en los pasillos del poder, sin embargo, plantearon que si la Casa Blanca se limitaba a hacer

⁴⁰ Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”, en Panamá. Correo electrónico: gandasegui@hotmail.com

algunas gestos simbólicos, el mensaje deseado sería escuchado alto y claro en América latina.

La recesión y las luchas internas en EEUU

El enfrentamiento entre los dos poderosos sectores que dominan a EEUU perseguirá a Obama durante todo su gobierno, ya sea de cuatro años o de los ocho que aspira. En medio de la recesión económica, la situación se pone aún más difícil. La encrucijada que representa Honduras para Obama trasciende las debilidades históricas de la democracia en la región e, incluso, las relaciones de EEUU con América latina. Apunta directamente a las luchas entre las facciones norteamericanas que pretenden salir fortalecidas de la recesión económica y de los cambios radicales que se están gestando tanto dentro de EEUU como en el mundo.

La correlación de fuerzas en EEUU, con motivo de la crisis de acumulación iniciada en la década de 1970 y que estallara en septiembre de 2008 en la bolsa de valores de Nueva York, con la explosión de la burbuja inmobiliaria, ha dejado sólo dos grandes contrincantes en el tinglado del poder. Por un lado, los financistas que desesperadamente buscan cómo afianzarse y recuperar posiciones en un sistema capitalista mundial que invierte cada vez menos y que genera pérdidas crecientes. Por el otro, un sector capitalista depredador que visualiza como única solución la disminución de la tasa de ganancia de sus inversiones, el pillaje, que incluye invasiones, golpes de Estado y guerras a escala mundial (Cfr. Rozoff 2009)⁴¹. Incluso, el antaño poderoso conglomerado industrial ha quedado en ruinas producto de las políticas neoliberales iniciados por el presidente Reagan en la década de 1980. Los antes todo poderosos General Motors y General Electric han sido reemplazados por el general McChrystal y el almirante Stravridis.

El triunfo electoral de Obama en noviembre de 2008 fue el producto de una hábil campaña mediática y una presentación clara sobre sus atributos para alcanzar la recuperación de EEUU en el escenario mundial. Su oratoria es extraordinaria; sin embargo, no asegura la recuperación de EEUU. Obama en su campaña disminuyó el papel de los “depredadores” y se alió con los sectores financieros para prometer más bienestar al pueblo

⁴¹ Según Rozof (2009), en Afganistán, EEUU ha logrado concertar a los ejércitos de 50 países de todo el mundo –desde los más diminutos como Montenegro, hasta Alemania, entre los más grandes– para demostrar su hegemonía global. Países como China, Rusia, África del Sur o India no están en la lista de los 50 países.

de EEUU. Cuando viajó a la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, le aseguró a los mandatarios de América latina que cooperaría con los cambios necesarios para el desarrollo de la región. Sin embargo, mientras el discurso decía una cosa, las acciones abrían un camino distinto. Por un lado, continuó la política de Bush e incrementó la militarización de Colombia, abrió un espacio antes desconocido a los militares en México y, por el otro, para culminar sus primeros seis meses en el poder, dio luz verde al golpe militar en Honduras.

La complicidad norteamericana y el apoyo tácito al golpe militar de Honduras, que van acompañados de una represión dentro del país centroamericano, plantea la pregunta sobre quién está a cargo de la política exterior de EEUU. Las acciones indican que los “depredadores” no han perdido su control en el Pentágono y siguen muy poderosos en los pasillos del Departamento de Estado.

La política exterior hacia América latina de EEUU, basada en nuevas normas diplomáticas prometidas por Obama, ha capitulado ante las tácticas de un Negroponte, quien conserva su posición estratégica dentro del Departamento de Estado y controla una media docena de embajadores en capitales vitales de la región (Ecuador, Colombia, Honduras, Nicaragua y Guatemala, por lo menos). En el caso del embajador de Obama en Tegucigalpa, sus declaraciones se han limitado a expresar su deseo que Zelaya no regrese por la frontera para evitar confrontaciones.⁴²

EEUU cuenta con una base militar en Honduras –Soto Cano– donde operaba la contrainsurgencia desatada contra Nicaragua y El Salvador en las décadas de 1970 y 1980. En la actualidad, militares norteamericanos en Soto Cano entrenan oficiales de varios países de la región (especialmente la propia Honduras) y mantiene su vigilancia tanto en Centroamérica como sobre el Caribe. La base sigue funcionando normalmente a pesar del golpe de Estado y las relaciones entre los militares norteamericanos y hondureños parecen no haber sufrido contratiempo alguno (Cfr. Dierckxsens et al. 2009).⁴³

⁴² Los embajadores Hugo Llorens en Tegucigalpa, Robert Blau, (encargado de negocios) en San Salvador, Stephen McFarland en la ciudad de Guatemala y Robert Callahan en Managua - el cuarteto de Negroponte - tienen en común haber pasado por la Universidad de Guerra, trabajado en la Embajada de EEUU en Iraq y ser miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia.

⁴³ Según Wim Dierckxsens (et al., 2009), en la base norteamericana en Honduras de “José Soto Cano”, se encuentra la brigada combinada llamada “Bravo”, compuesta por tropas de seguridad norteamericana, del Ejército y de la Fuerza Aérea (el primer batallón número

A diferencia de Obama, sus aliados europeos suspendieron todos los desembolsos al gobierno de hecho de Micheletti al no aceptar los 7 puntos presentados por el mediador Oscar Arias en el plan de San José. La Organización de Estados Americanos (OEA), foro que se movilizó contra el golpe, fue rechazada por EEUU para mediar en la solución de la crisis hondureña. Se cree, incluso, que EEUU no apoyará la reelección de José M. Insulza para un próximo período como secretario general. A la secretaria de Estado, Hilary Clinton, no le gustó la manera en que Insulza manejó la condena unánime del golpe (Loudon 2009).

Según Loudon, “a pesar del cambio de gobierno en Washington, la influencia de Negroponte y otros extremistas de derecha parecen estar dominando el Departamento de Estado y la política exterior de EEUU”. En el caso de Honduras, “ha pasado un mes desde el golpe de Estado y Washington aún no se pronuncia con claridad y en forma contundente sobre el golpe militar”

El Gato y el Ratón

A pesar de la declaración del presidente Obama, calificando el golpe como ilegal y reconociendo a Zelaya como el presidente legítimo, el Departamento de Estado se niega a reconocer que lo ocurrido fue un golpe de Estado. Este reconocimiento obligaría legalmente a EEUU a suspender su ayuda al gobierno de Micheletti. La crisis democrática de Honduras ha descubierto otra crisis, mucho más profunda, en el seno de los propios EEUU (Loudon 2009).

En EEUU, la política exterior todavía gira en torno a tácticas que se remontan a la “guerra fría”. Obama dio un paso hacia una distensión de las relaciones con Cuba y fue detenido. El presidente de EEUU saludó de mano al presidente Chávez en la cumbre interamericana y fue denunciado de inmediato en los medios que controlan los “depredadores”. La noción de un “eje del mal”, inventado por Bush, sigue vigente en la visión que tiene la elite política de Washington sobre América latina.

La política exterior “depredadora” tiene que identificar un enemigo en la región para legitimar su existencia. Si el enemigo es plural aparece la noción de un “eje”. Desde 1959, el enemigo ha sido Cuba, supuestamente

228). La base cuenta con 600 efectivos militares y 18 aviones de Guerra Hu-60, Black Hawk y Ch-47 Chinook. El 31 de mayo de 2008, el presidente Zelaya anunció que la pista aérea de Soto Cano sería usada para vuelos comerciales. Además, una terminal civil sería construido con fondos de ALBA.

una base soviética en el hemisferio occidental, repetido mil y una veces en forma diaria por los medios de EEUU. En la década de 1970, Chile se sumó a la lista y la Unidad Popular fue objeto de un golpe militar sangriento. En la década de 1980, Nicaragua inició un proceso progresista bajo el Frente Sandinista y fue derrotado por una ofensiva militar norteamericana que no se detuvo hasta barrer con todo vestigio de avance social.

En la década de 1990, apareció la Venezuela Bolivariana, cuyo candidato a presidente, Hugo Chávez, ganó mediante elecciones. El triunfo bolivariano fue seguido por triunfos de candidatos progresistas en las urnas en Bolivia y Ecuador. EEUU reaccionó y apadrinó un golpe militar en 2002 que separó durante dos días al presidente Chávez del poder. Igualmente, en Bolivia, EEUU apoyó sin éxito a los racistas de las provincias de Oriente boliviano con intenciones de descuartizar el país. Asimismo, en Ecuador, la embajada de EEUU promueve el separatismo de Guayaquil y le echa candelas a las incursiones del Ejército colombiano en territorio de ese país.

En 2005, triunfó Manuel Zelaya en las elecciones presidenciales de Honduras. Su programa de gobierno tenía un contenido conservador con algunas medidas para mitigar la pobreza y la desigualdad en el país. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Honduras está entre los cinco países más pobres de la región. Las medidas para mitigar la pobreza incluían reconocer los derechos de los trabajadores, apoyar las reivindicaciones de los estudiantes, educadores, mujeres y pueblos indígenas. Además, redistribuir parte de la riqueza que generaban las inversiones extranjeras (Cfr. Wallerstein 2009)⁴⁴.

Las propuestas de Zelaya eran resistidas paso a paso por la oligarquía comercial (atrincherada en San Pedro Sula) y la rancia clase terrateniente. Las protestas y manifestaciones contra el gobierno de Zelaya en todo el país eran cotidianas. Los avances del gobierno, que se volvió progresista sobre la marcha, no eran suficientes para satisfacer las demandas populares. Desde la Presidencia, Zelaya se distanció poco a poco del Congreso en manos de sus partidarios liberales, de la Corte y del sistema judicial.

⁴⁴ Wallerstein (2009), uno de los sociólogos más destacados del siglo XX, señala que Zelaya, “emprendió programas internos que en verdad hicieron algo por la vasta mayoría de la población: se construyeron escuelas en áreas rurales remotas, se aumentó el salario mínimo, se abrieron clínicas de salud. Comenzó su periodo apoyando el tratado de libre comercio con EEUU, pero apenas dos años después se unió al ALBA. El resultado fue que Honduras obtuvo petróleo barato procedente de Venezuela”.

La complicidad de los “liberales” norteamericanos.

Con la complicidad de la Embajada de EEUU, el Ejército de Honduras (con la base de Soto Cano apoyando) prestó su apoyo logístico para paralizar el país, secuestrar a Zelaya y expulsarlo.

En el caso de Honduras, la política exterior de EEUU la está dirigiendo la fracción “depredadora”. Por su lado, los llamados “liberales” que se han refugiado en diferentes rincones del gobierno de Obama tratan de justificar su falta de acción frente a los golpistas hondureños.

Los liberales norteamericanos repiten los mismos alegatos de los depredadores, señalando que un retroceso en Honduras sería un triunfo del “eje del mal” que supuestamente encabeza el presidente Chávez de Venezuela. Además, señalan que fue el mismo Zelaya quien al querer reformar la Constitución se puso la soga al cuello.

Según el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), con sede en Washington, “EEUU, enfrentado a los hechos, tiene que maniobrar entre la condena del golpe – rechazado por el mundo – y asegurarse que Honduras se libere de la influencia tóxica de Venezuela. Debido a la connotación negativa que tiene la historia de intervenciones de EEUU en la región, Washington evita explícitamente cualquier apoyo a los golpistas, aunque ha llegado muy cerca de hacerlo” (COHA 2009).

El líder del Partido Demócrata, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado, John Kerry, se pronunció abiertamente en la dirección favorable al golpe. El ex candidato a la Presidencia de EEUU (en 2004), dijo que “el problema que percibió el Congreso fue que la OEA y sus líderes principales hicieron gestos algo precipitados en relación con Honduras, que pudieron haber disminuido la capacidad de esa organización de mediar con eficacia” (Vásquez 2009).

Para Kerry, no sólo el presidente Chávez constituye una amenaza a los intereses de EEUU. Igualmente, los gestos de la OEA no deben confundirse con políticas que promuevan cambios en la región. En el pasado, la OEA (un foro compuesto por cerca de 25 gobiernos del hemisferio occidental) ha expresado opiniones progresistas pero nunca alejadas de las líneas que emanan de Washington.

“La OEA, según Kerry, no debe olvidar que su rol es resolver crisis en favor de la democracia. Parece haber una mejora en este momento”. Cuando un vocero de tendencia liberal norteamericano habla de los intereses de la democracia, se está refiriendo a los intereses de las grandes trasnacionales de EEUU que operan en la región. Las declaraciones de Kerry

se hicieron cuando sus fuentes le indicaban que el presidente Zelaya ya no regresaría a Honduras.

En el marco académico norteamericano liberal, la justificación del golpe también fue muy generalizada. Sellgson y Booth señalan que “Zelaya insistió en realizar un plebiscito para medir el apoyo popular a una futura asamblea constituyente, a pesar de los esfuerzos legislativos y de las resoluciones de otras partes del gobierno hondureño. Haciendo frente a estos obstáculos, Zelaya intentó forzar el voto y después despedir al jefe de las fuerzas armadas”. Después, los profesores universitarios agregan que “la primera acción fue considerada ilegal y la segunda un poder constitucional reservado únicamente para el Congreso”.

Con información proveniente de fuentes que no citan, Seligson y Booth aseguran que los golpistas “conscientes del apoyo popular dividido para Zelaya y en ausencia de algún mecanismo formal de juicio político y de remoción del presidente en la constitución hondureña, se movieron para derrocarlo y justificar sus propias acciones inconstitucionales alegando que la crisis había sido provocada por las acciones inconstitucionales del propio Zelaya”.

Los académicos dejan por fuera todos los elementos fundamentales para efectuar el análisis. La correlación de fuerzas internas y la política exterior de EEUU no forman parte de la combinación de elementos que tenían que ser parte del estudio del golpe en Honduras (Cfr. Seligson y Booth 2009).

Si los voceros norteamericanos han cerrado filas en torno al golpe, los ideólogos de otras latitudes no se quedan atrás. El corresponsal de El País madrileño en Washington, Antonio Caño, le sale al paso a las acusaciones contra EEUU de haber conjurado una conspiración golpista. Plantea que la “administración de Barack Obama se ha caracterizado, precisamente, por la defensa del derecho internacional y de la aceptación de los contrarios”. El periodista del medio español ligado al PSOE gobernante, celebra la capacidad de “EEUU (que) ha encontrado en ese plan el pivote de una política muy inteligente: defender sus intereses y minar los del rival, con respeto a la ley y apoyo internacional”.

¿Quién es el rival? La Unión Soviética, Cuba, la República Popular China. No. Caño convierte el golpe de Estado en Honduras en un enfrentamiento por la hegemonía hemisférica entre Obama y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Señala que “ha sido después del derrocamiento cuando EEUU ha empezado a mirar a Honduras con creciente interés... Lo ha hecho, ciertamente, como una oportunidad de ponerle freno a Chávez”.

Si el periodista Caño se encuentra de alguna manera cerca de la verdad, entonces Obama es sólo la continuación de una política exterior equivocada enarbolada de manera más coherente por su antecesor, George W. Bush.

Según Caño, “EEUU no se ha movido un milímetro del papel que le corresponde a una democracia ante una acción golpista: ha exigido la restitución del presidente depuesto, ha retirado el visado a cuatro de las figuras del régimen de facto y ha anunciado próximas sanciones contra el Gobierno creado en Honduras. Ha estado, en fin, actuando en la misma dirección que el resto de sus aliados”. Aunque Caño identifica a quien considera el enemigo de Washington (Chávez), no señala quienes son “el resto de sus aliados”. En este caso podrían ser Uribe (Colombia) y Calderón (México). Quizás el presidente Arias en Costa Rica, “un hombre en quien Washington confía”.

Para Caño, lo más importante es que “en un plano subterráneo, Washington —especialmente el Departamento de Estado— ha entendido que esta crisis, por insignificante que pareciera en su nacimiento, podría equivaler, adecuadamente manejada, al principio del fin del chavismo en América Latina. Es decir, el fin de una doctrina que predica la confrontación y la acomodación de las leyes nacionales a la consolidación de un largo régimen. Para ello, EEUU ha contado con la complicidad, al menos silenciosa, de varios países latinoamericanos que tienen los mismos recelos hacia Chávez, aunque no se atrevan a expresarlos en público” (Caño A. 2009).

Según Atilio Borón, “falta ya muy poco para que Washington comience a declarar que el verdadero golpista es Zelaya y que fue él y no otro quien arrojó a su país a un caos de violencia y muerte. La promesa de nuevas mediaciones a cargo de la Casa Blanca sólo servirá para desfigurar aún más la verdad e inclinar el fiel de la balanza a favor de los golpistas y sus mandantes” (Borón A. 2009).

Según Wim Dierckxsens, la pregunta que debe hacersele a la Casa Blanca es aún más directa: “¿Estaban el presidente Obama y la secretaria de Estado Clinton informados con anticipación del golpe en Honduras y de la participación de funcionarios norteamericanos? Aún más problemático, “¿fue el operativo aprobado por Obama similar a la aprobación que le dio Kennedy a la invasión de Cuba en 1961”?

Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, “entonces el golpe militar de Honduras es un golpe de Estado a toda América latina. Es una operación política con intenciones de arrestar un movimiento democrático que caracteriza a toda la región. Es una amenaza para todos los gobiernos lati-

noamericanos. A pesar de ello, hasta ahora los mandatarios latinoamericanos están dispuestos a creer en la bondad de Obama y pensar que el golpe se ejecutó sin su conocimiento”.

Ahora bien, si la respuesta es negativa y Obama no tenía conocimiento del operativo, entonces se puede llegar a la conclusión que hay fuerzas siniestras dentro del aparato de inteligencia que han usurpado los poderes del presidente de EEUU para dirigir la política exterior de ese país. Aún peor, esta situación implica la presencia dentro del aparato del Estado de subalternos en abierta insubordinación frente al comandante en jefe de EEUU.

Wim Dierckxsens concluye que urge esclarecer este asunto ya que puede tratarse de un golpe “en las sombras de una fuerza capaz de chantajear cualquier gobierno en el mundo con el propósito de imponer una era neofascista a escala mundial. Se trata de un golpe en Honduras y algo parecido que se está incubando en EEUU” (Dierckxsens et al. 2009).

El financiamiento y el lobby en el Congreso

Según Eva Gollinger, “la nueva diplomacia estadounidense, denominada “smart power” (poder inteligente) ha jugado un papel principal antes, durante y después del golpe de Estado en Honduras”. Dos días después del golpe de Estado, los voceros del Departamento de Estado, admitieron que tenían conocimiento previo del golpe y habían estado trabajando con los golpistas en busca de “otra solución”. De igual manera, admitieron que dos altos funcionarios del Departamento de Estado, el subsecretario de Estado para América Latina Thomas Shannon y el subsecretario de Estado James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo.

El golpe de Estado fue financiado por organizaciones norteamericanas que formaron un frente empresarial con participación de lo que la agencia norteamericana de apoyo (USAID) llama la sociedad civil. Un mes antes del golpe contra el presidente Zelaya se formó una coalición entre diferentes organizaciones no gubernamentales, empresarios, partidos políticos, la Iglesia católica y los medios de comunicación, denominada “Unión Cívica Democrática”.

Entre los miembros de la “Unión Cívica Democrática” de Honduras están organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción, el Arzobispado de Tegucigalpa, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP),

el Consejo de Rectores de Universidades, la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), el Foro Nacional de Convergencia, la Federación Nacional de Comercio e Industrias de Honduras (FEDECAMARA), la Asociación de Medios de Comunicación (AMC), el Grupo Paz y Democracia y el grupo estudiantil Generación X Cambio.

La mayoría de estas organizaciones fueron beneficiarias de 50 millones de dólares que anualmente invierten la USAID y la National Endowment for Democracy (NED) en el “desarrollo democrático” en Honduras. Un informe de la USAID sobre su financiamiento y trabajo con COHEP, destaca que “el perfil bajo de la USAID en este proyecto ayudó a asegurar la credibilidad del Consejo de Empresarios (COHEP) como una organización hondureña y no un brazo de la USAID” (Colinger E. 2009a).

El presupuesto de la USAID y el Departamento de Estado aumentó en un 12 por ciento en 2010, con 2,2 mil millones de dólares destinados a América Latina. De este total, 447,7 millones de dólares son para “promover la democracia” en América Latina. La cuarta parte –101 millones de dólares– tiene como destino la oposición política boliviana. Otros 13 millones de dólares son para “promover la democracia” en Venezuela. Varios millones recibirá la OEA para “promover la democracia” en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua (Cfr. Gollinger E. 2009b).

El Instituto Republicano Internacional, que recibe fondos de la National Endowment for Democracy (NED), obtuvo más de 1,2 millones de dólares en 2009 para trabajar con los sectores políticos en Honduras. Su trabajo se dedicó a apoyar los “centros académicos” y “grupos de presión” en Honduras, para influir sobre los partidos políticos y la campaña electoral de 2009.”

El senador republicano John McCain, ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, ayudó coordinar la visita de la delegación golpista de Honduras a Washington a mediados de julio. McCain es conocido por su dura postura contra Venezuela, Bolivia y otros países de la región considerados “anti imperialistas” y por sus estrechos vínculos con la mafia cubana en Miami. McCain también es jefe del Instituto Republicano Internacional (IRI), ente financiero de los golpistas de Honduras.

Además de McCain, el abogado Lanny Davis fue contratado por la sede hondureña del Consejo de Empresarios de América Latina (CEAL) para hacer lobby a favor de los golpistas. Lanny Davis fue abogado del ex presidente Bill Clinton cuando estaba en la Casa Blanca y es asesor de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Davis está organizando reuniones entre

los representantes golpistas y diferentes congresistas, senadores y funcionarios del gobierno de EEUU. CEAL está compuesto por los empresarios latinoamericanos que más han promovido atentados contra los movimientos populares en la región.

Como parte de este esfuerzo, lograron una audiencia bipartidista especial ante el Congreso, que recibieron testimonios de personajes promotores del golpe, como Michael Shifter, del Diálogo Interamericano de Washington y Otto Reich, promotor de la desestabilización contra gobiernos en América Latina. Como resultado de este encuentro, el lobby está promoviendo una resolución del Congreso que reconozca como legítimo al gobierno de facto de Honduras.

La presencia del equipo de Negroponte en Centro América no es simplemente un recuerdo de las políticas desestabilizadoras del pasado gobierno de Bush. Todo indica que Obama continuará la misma política norteamericana en la subregión al igual que en el resto de América latina. Según un ex embajador norteamericano en El Salvador, Robert White, “la crisis en Honduras debiera recordar a la administración Obama que ha heredado una política inadecuada hacia Centroamérica” (White R. 2009). El peligro en la región, en la actualidad, no son los militares que actúan como peones en una estrategia global. Sobre la base de lo acontecido en Honduras, la región está conciente que la política exterior de EEUU los hace a todos – desde un Lula hasta un Chávez, pasando por un Tabaré Vázquez – vulnerables ante la agresividad del nuevo ocupante de la Casa Blanca.

Bibliografía

Borón, Atilio (2009). *Honduras y la SIP*. ALAI, 25 de julio.

Caño, Antonio (2009). *¿El Waterloo del chavismo?* El País, 1º de agosto 2009. España.

COHA (2009). *Honduras, Both Sides Say No Retreat*. Council on Hemispheric Affairs (COHA): Washington, 22 de Julio 2009.

Dierckxsens, Wim et al. (2009). *Military Coup in Honduras: Is It against Obama Too?* Agencia Latinoamericana de Información. América Latina en movimiento. 1009-07-23. <http://alainet.org/active/31883&lang=es>

Gollinger, Eva (2009ª). *Washington y el golpe de Estado en Honduras: aquí están las pruebas*. Rebelión, 13 de julio. www.rebelion.org

Golinger Eva (2009b). *Sigue el dinero: La ofensiva imperial en América Latina se evidencia en dólares*. Panamá Profundo. 31 de julio 2009.

Loudon, Tom (2009). *Honduran Coup reveals crisis of democracy in the United States as well*. Wagonia Latinoamericana de Información. América Latina en Movimiento. 2009-07-20. <http://alainet.org/active/31819&lang=es>

Rozoff, Rick (2009). *Pentagon's 21st Century Counterinsurgency Wars: Latin America and South Asia*. <http://usa.mediamonitors.net/content/view/full/64951>, 29 de julio.

Seligson, Mitchel y Booth, John (2009). *¿Prediciendo golpes de estado? Vulnerabilidades democráticas: El Barómetro de las Américas y la crisis hondureña de 2009*. Lapop, www.AmericasBarometer.org.

Vásquez, Humberto (2009). *El huracán Honduras sacude a la OEA*. IPS, 21 de julio 2009.

Wallerstein Immanuel (2009). *La derecha contra ataca*. Periódico La Jornada, de la ciudad de México. 18 de julio 2009.

White, Robert E. (2009) *Por qué el golpe de estado en Honduras no triunfará—ni debe hacerlo*. <http://americas.irc-online.org/am/6260> 16 de julio 2009.

HONDURAS: GOLPE DE ESTADO Y ALTERACIÓN DE LOS ESCAQUES DEL AJEDREZ POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA

Robinson Salazar Pérez⁴⁵

*El premio Nobel de la paz 2009 fue otorgado
a quien guardó silencio cómplice
ante el golpe de Estado
en Honduras; de él sólo esperamos
Impunidad ante la guerra.*

El golpe de Estado detonado en Honduras el 28 de junio de 2009 fue la fisura y apertura de la ventana para observar tres coordenadas enfiladas hacia el destino latinoamericano afines a detener todo asomo de reestatitución, evitar cualquier alternativa de bloqueo al mercado de las empresas transnacionales, contener el avance de los gobiernos nacionalistas de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y El Salvador en actual proceso de estructuración, además de sembrar el temor en los mandatarios latinoamericanos con el recordatorio de cómo los intereses extra nacionales imperan sobre la gobernabilidad aun cuando la legitimidad puede estar avalada por los votos.

La ruptura institucional en el país hondureño también reveló que en la región existen cerca de un centenar de hidroeléctricas, ríos represados, proyectos para abrir un canal conector entre los dos océanos y la habilitación de puertos secos. El cierre del círculo coincide precisamente en Hon-

⁴⁵ Robinson Salazar es investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa / México y es director de www.insumisos.com Correo electrónico: insumiso2000@yahoo.com.mx Una versión preliminar de este escrito fue publicada en *Alainet* en revista *América en Movimiento* No 447, agosto 2009 <http://alainet.org/publica/447.phtml>

duras con la ola privatizadora de todas las fuentes de energía. Es un volcán activo, donde la política depende de factores internos para conciliar y facilitar las maniobras del capital transnacional interesado en saquear de manera inmisericorde las riquezas de la biodiversidad y recursos naturales estratégicos, y del aval externo por parte de los agentes económicos y militares de los Estados Unidos otorgado a cambio de inversión, custodia con bases y operativos que legitiman la depredación absoluta de los países del área.

Militares, Narcotráfico, empresarios y pandillas: el eje golpista

En la consulta popular que impulsaba el presidente Zelaya mediante una acción participativa ciudadana cuyo objetivo era en caso de ser aprobada la posibilidad de una “cuarta urna” en las elecciones generales de noviembre próximo, los ciudadanos podrían decidir sobre reformar la Constitución. La convocatoria despertó la ira y los intereses velados de la clase oligarca-burguesa de los principales agremiados en la Cámara de Empresarios aliados con sectores militares en vínculo a los negocios ilícitos de tráfico de drogas y robo de autos pero leales a las pretensiones castrenses impuestas por los Estados Unidos en el país y a la región y, con ayuda de la instalación de bases de operaciones militares, instrumentaron el primer golpe de Estado del Siglo XXI en América Latina.

El pretexto para la ruptura institucional fue el mismo esgrimido por el sector neoconservador norteamericano relacionado a los intereses del pentágono: la reelección y subsistencia en el poder, la fortaleza en los vínculos con el gobierno venezolano, la intencionalidad de imponer el socialismo y la cercanía cada día más persistente con el bloque de gobiernos alternativos o terroristas (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua).

Oculto en el hilar noticioso, el rompecabezas de actos encadenados es visibilizado al reordenarse los hechos y datos que explican los factores que motivaron la interrupción del gobierno Zelayista.

Desde el año 2004, arreció la anti-mara en la región, y las pandillas de El Salvador, Honduras y Guatemala entraron en una etapa de negociación con los sectores del narcotráfico y el gobierno, a propósito de crear una alianza estratégica. En este marco, el desempeño de los pandilleros corresponde a un rol de bisagra: por un lado, distribuir la droga al menudeo y, por otro, realizar labores de profilaxis social para evitar la señalización de los agentes policiales y militares como autores de la represión propia del Estado policial en proceso de instauración regional desde los inicios del Plan Puebla Panamá (Salazar, 2002), hoy Iniciativa Mérida.

El crimen organizado, principalmente el eje del narcotráfico, aprovechó la estructura orgánica de las pandillas Maras de Centroamérica y el sur de México para enrostrarlas en el negocio de la distribución de la droga, especialmente en el mundo del narcomenudeo. De esta manera, fueron habilitadas dos estrategias, la primera enfocada al trabajo de redes propio de la era de la globalización y la desterritorialización que facilita el traslado y comercio de la droga, y la segunda dedicada a aprovechar la estructura redificada de las maras para abrir un zaguán que lo colocara en mejor posicionamiento para presionar autoridades, habilitar rutas, incursionar en sectores populares, abrir nuevos mercados y evitar las afectaciones en los decomisos.

El narcotráfico encontró así una nueva una etapa de expansión y diversificación dada la abundancia de las drogas sintéticas, construir nuevos núcleos de poder diseminados, desembarazar a los carteles de Colombia, agregar un plus valor a los aperturistas de nuevas rutas y mercados emergentes, encarecer el valor de la droga pero, asimismo, distribuir de manera ampliada los ingresos por medio del uso de dos campos: las pandillas y la estructura institucional del Estado, por lo que corrompió y vinculó sectores empresariales, banqueros, militares, policiales y aduaneros.

Este fenómeno hasta hace unos meses, finales del año 2008 y principios de 2009, produjo bajo la complicidad de policías y militares, conatos y conflictos en cárceles en busca de eliminar obstáculos, armar redes y vincular a cómplices con goce de libertad y ejercicio de la limpieza social en El Salvador, Guatemala y Honduras.

El neo paramilitarismo creó nuevas líneas de investigación en los especialistas en seguridad y violencia; su nuevo comportamiento en varias ciudades de los países dominados por la derecha no es producto de confrontaciones políticas ni por disputa de espacios como aconteció en Colombia. Hoy goza de una base re-articulada de redes orgánicas algunas ilícitas, y otras son parte del entramado institucional. La imbricación está dada con la intencionalidad de redes de complicidades y colaborativas con distintos fines pero enfrentan los mismos obstáculos para obtener el éxito de su acción. La acción ilícita está fundamentada en la obtención de dinero, lucrar con el producto y a la vez el reconocimiento del espacio de poder ejercido.

El fortalecimiento del Estado, la recuperación del control de la policía y los militares por parte del gobierno al cerrar los grifos de fuga de la urdimbre institucional eran materia de preocupación en los agentes involucrados

en el narcotráfico, lavado de dinero y tráfico de armas desplazadas por la Mosquitia hondureña, Golfo Fonseca y frontera con México, razón por la cual la operación concertada entre empresarios, militares y narcotraficantes fue eficaz en deponer a Manuel Zelaya.

Más de un millón de armas circulan en Honduras, nación poblada por 7 millones y medio de habitantes, y se comercializan desde 500 lempiras en el mercado legal e ilegal (mercado negro).

A lo anterior, agregamos la creación de “pequeñas milicias” o células armadas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua por los cárteles de la droga mexicanos desde hace 4 años; además, en zonas del sur y del sureste de México, surten de armamento sofisticado superior al de los efectivos policiales, para proteger y dominar el transporte y almacenamiento de cocaína enviada desde Colombia a Estados Unidos, indican informes oficiales. Y por el zaguán centroamericano introducen alrededor de 300 toneladas de cocaína, donde 12 puntos fronterizos marítimos y territoriales de Honduras facilitan el tránsito ilegal de drogas.

La estructura paramilitar posee el apoyo del “ministro consejero” Billy Joya Améndola del Presidente golpista hondureño Roberto Micheletti. Joya Améndola fue uno de los agentes protagonistas del Batallón de Inteligencia 3-36, encargado del secuestro y desaparición de opositores políticos, y fundador de los escuadrones de la muerte “Lince” y “Cobra”. A cargo de esta función, se convirtió en uno de los principales ejecutores de secuestros, torturas y asesinatos en Honduras, y se le acusó con certeza de al menos once ejecuciones bajo el pseudónimo de “Doctor Arranzola”. De 1984 hasta 1991 sirvió como enlace entre el ejército hondureño, los represores argentinos y los estadounidenses durante la guerra sucia (Carotenuto 2009).

El general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, fungió como puente entre el crimen organizado y fuerzas militares, quien fue detenido en 1993 por hurto de autos, y fue miembro de la banda internacional conocida como “Banda de los trece”, que habían sustraído más de 200 automóviles de Estados Unidos, México y países vecinos de Centroamérica; la pandilla se encontraba apadrinada por el Teniente Coronel Wilfredo Leva Cabrera y el Mayor Romeo Vásquez Velásquez, pero más tarde fueron liberados bajo los oficios del gobierno nacional y militares norteamericanos desplazados en las bases militares.

La cara formal del narcotráfico la prestó el sistema bancario y el comercio establecido, que aprovechó blanquear millones de dólares proveniente

del mismo tráfico de drogas a través del flujo de remesas, que alcanzó más de los 2,600 millones de dólares, que representa el 20 por ciento del Producto Interno Bruto en 2008, así como el contrabando de bienes generadores de fondos lavados a través del sistema bancario.

Empresarios, la derecha y militares dialogan

El derrocamiento de Manuel Zelaya reafirmó la confianza en los empresarios de ideología neoconservadora proclives a defenestrar todo vestigio de oposición al libre mercado y cercano al Estado.

La disposición de los empresarios de El Salvador, Guatemala y Nicaragua por mantener el comercio activo aun cuando el proceso golpista se curtía de conflictos y los gobiernos latinoamericanos habían cerrado fila en contra de la ruptura institucional, demostró que el mercado está divorciado de los asuntos públicos cuando sus intereses son afectados; el comportamiento como esfera indeterminada de toda la estructura macrosocial ha sido el objetivo permanente desde la fundación del neoliberalismo, con el objeto de apuntalar gobiernos que lo favorezcan para confrontar todo aquello opuesto a sus intereses económicos.

La mayor alianza se conformó al momento que el gobierno de Manuel Zelaya se adhirió a la organización de gobiernos de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), cuya finalidad es comercializar bajo formas más equitativas, no depender del dólar, trabajar al interior bajo el principio de reciprocidad e incrementar la separación de los países que obligan a una dependencia alimentaria, farmacéutica, tecnológica y científica. Justo bajo ese tenor, se habían dado paso para la compra de medicamentos de Cuba, a bajo costo y con reglas distintas a las establecidas por empresas monopólicas, venta de alimentos a Venezuela e intercambio de tecnología.

Laboratorios monopólicos multinacionales como Glaxo, Sanofi, Smiyh, Kline, Pfizer, Stein, Novartis, Bristol Myers y Aventis, que operan en Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Guatemala, movieron sus influencias ante el riesgo de caída en sus ventas en un 80 por ciento, acordaron acciones, presionaron a empresarios, dialogaron con sus lobbies de la casa matriz y se conectaron mediante la red de influencias con senadores norteamericanos republicanos para promover el golpe del 28 de junio de 2009.

Los medios de comunicación hondureños son un monopolio controlado por agentes relacionados con gobiernos represores (Carmona 2009), empresarios con vínculos internacionales, principalmente con la derecha de España, Venezuela y México; ellos magnificaron los acuerdos con el

ALBA, distorsionaron la consulta de la “Cuarta Urna”, construyeron discursivamente el escenario de socialismo, la reestructuración del ejército, la presencia de equipo castrense venezolano en materia de seguridad y vulneración de la soberanía nacional, entre otras calumnias, las cuales sembraron el terror y el miedo en los comerciantes y clase media a través de la labor divulgativa y el trabajo ideológico de los diarios más importantes: El Heraldo, La Prensa y La Tribuna tocaron la misma melodía afín a la letra que compuso la canción “Fuera Zelaya”.

El escenario abigarrado de mensajes de miedo, angustia, terror, presencia militar de venezolanos y reelección para perpetuarse en el poder fue la estrategia mediática que lobbistas, empresarios, medios de comunicación, sector político y diputados de la derecha en la espera de alcanzar el gobierno pusieron en marcha para asestar el golpe de Estado, reeditando así las aspiraciones políticas de los militares, relegados en los últimos 20 años de las grandes decisiones pero cerca de los círculos poderosos de Estados Unidos en capacitación, asesoría y logística, siempre atentos a entrar en acción.

Lo nuevo del Golpe

La usurpación del poder visibilizó la nueva estrategia de los empresarios corruptos, militares ligados al negocio del tráfico de drogas y custodios de los intereses norteamericanos y de empresas transnacionales en el área; asimismo develó la política de Barack Obama, quien arribó a la presidencia debilitado, sin equipo propio y apuntalado por el “roster” de Bill Clinton, el gestor de la guerra en Irak.

La nueva política operadora de los Estados Unidos hacia la región es la conjugación de acciones de tres actores que venían operando en el área y no habían encontrado la oportunidad de actuar conjuntamente para definir el rumbo de un país y la región: narcotráfico, pandillas y militares. Hillary Clinton afirmó que construir la arquitectura de cooperación global requiere de herramientas como el Poder Inteligente: este “poder inteligente significa el uso de la inteligencia por todos los medios disponibles, lo cual incluye nuestra habilidad para acordar y conectar; nuestra fuerza económica y militar; nuestra capacidad empresaria y de innovación; y la habilidad y credibilidad de nuestro nuevo presidente y su equipo. Y también la aplicación del antiguo sentido común para hacer política como una mezcla de principios y pragmatismo” (Clinton 2009).

En conclusión, la defenestración de Zelaya cuenta con factores de la tradicional Guerra de Baja Intensidad adecuada a los adelantos tecnológicos comunicacionales del Siglo XXI, principalmente con la propaganda del miedo, terror y angustia devenida de la estrategia psicológica; aderezado con alianzas estratégicas con sectores del narcotráfico, empresarios y empresas transnacionales que cuentan con intereses e inversiones en el área, demostrando el poco interés del gobierno norteamericano hacia el combate del narcotráfico, antes por lo contrario, es un aliado en zonas donde hay intereses comunes y propaganda para rearmar Estados serviles para su guerra armamentista, custodios de inversores y enemigos del libre mercado.

Finalmente, es un mensaje abierto y expedito a los gobiernos de Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y aun El Salvador, que para detener al enemigo y defender los intereses económicos no escatimará alianzas, esfuerzos ni recursos; porque la nueva política no la define Barack Obama sino la Reserva federal, el departamento del tesoro y su política aliancista con los grandes empresarios, senadores republicanos y demócratas y los cubanos de Miami; existe otro sector, el Pentágono con sus tentáculos en el congreso y el Departamento de Estado que es una incrustación militar de Clinton, que nunca cejó por rearmar a Colombia, Perú, Centroamérica y México.

Del Golpe a la Resistencia

El escenario inicial de lucha contra el golpe de Estado en Honduras fue el internacional, no porque así lo orientara el pueblo, sino porque los medios de comunicación, los intereses de las transnacionales, la intencionalidad de la oligarquía nacional y la orientación de la Casa Blanca fue situar el centro del conflicto en la “actitud intervencionista” de Venezuela, con el objetivo de desnacionalizar la resistencia que se estaba constituyendo, restarle espacio y no prestarle la caja de resonancia de la articulación de las distintas fuerzas y movimiento sociales al interior del país.

Se trataba de involucrar insistentemente al gobierno de Hugo Chávez en Honduras, persistir en construir intereses político estratégicos de Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y Argentina en Centroamérica para crear focos de tensión diplomáticos, asimismo revelar las inconsistencias de la OEA para resolver el conflicto y resaltar el músculo de la dictadura de nuevo tipo en América Latina; ésta fue la primera etapa de atención al conflicto por parte de los Estados Unidos y los países que se adhirieron a la voz pública de la Casa Blanca.

La dictadura de nuevo tipo contiene presencia militar en las calles, imposición de toque de queda, acotación de todos los espacios a la oposición, pensamiento único y enseñoramiento de los medios como mediación entre gobierno y sociedad, dado el sitio orientativo en los acontecimientos del día, la información del clima, la vialidad, las decisiones gubernamentales, los haceres prohibidos de la ciudadanía; infunde miedo, siembra terror y atemoriza con su lenguaje petrificado ante la resistencia popular. Asimismo, no desmonta el andamiaje institucional, deja en función el congreso, los juzgados, la estructura judicial, impone la seguridad por medio de la fuerza y cercena las libertades públicas y derechos políticos en aras de la seguridad democrática. Asume el gobierno todas las facultades y las concentra en el presidente respaldadas por el ejército; el congreso avala todas las iniciativas privatizadoras, maneja los recursos sin fiscalización alguna; los acuerdos y tratados bilaterales, la ayuda militar y las transacciones con organismos internacionales están guardados bajo la discrecionalidad del ejecutivo; las dependencias gubernamentales funcionan bajo la égida del fidecomiso para evitar que las instancias de evaluación y veeduría fiscalicen los recursos y movimientos de dineros; las medidas de emergencias son tomadas de manera impronta, con severidad y con aval de todas las instancias de gobierno con el fin de esconder el comportamiento golpista y militar.

Ante la novedosa forma de dar golpes de Estado e imponer el nuevo tipo de Estado policial-militar, el pueblo hondureño reaccionó por la vía de convergencia, porque de manera vertical cada movimiento o foco de resistencia podría ser eliminado y anulado. Asimismo, la organicidad de cada fuerza política no satisfacía los márgenes del plan de mediano y largo plazo que los militares golpistas y la oligarquía habían diseñado para desplazar al gobierno de Zelaya.

El Plan llevaba varias orientaciones; las tres más visibles son las siguientes:

1. Desenganchar a Honduras del “eje del mal” y debilitar la relación con el grupo de países del ALBA; cortar de tajo las relaciones con Venezuela y Cuba, evitar el contagio de la política por habilitar al Estado en ese país y alimentar las acciones futuras en Guatemala y El Salvador.
2. Experimentar en esta zona vital por la interconexión eléctrica de México y Centroamérica el aseguramiento del control de la biodiversidad mesoamericana para cercenar la conectividad de Honduras

con el sureste mexicano, zona conflictiva donde se encuentra el 85% de los municipios más pobres del territorio mexicano, y

3. Instaurar la nueva forma de dictadura sin ser el caso único en la región centroamericana, pues en otras áreas del subcontinente y el Caribe hay gobiernos con esta línea y forma comportamental como Perú, Colombia, México y Haití.

El Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe es la expresión del sujeto popular insurrecto que, estando fuera de la estructura partidaria y gremialista tradicional, habilita la caja de herramientas de su historicidad, enlaza acciones colectivas, construye en la represión sistemática hilos identitarios para edificar plataformas de lucha de manera impronta ante el avasallamiento de los militares o cuerpos represores. No es un sujeto etéreo ni negado de trayectoria política, antes por el contrario, cuenta con aprendizajes tradicionales, asimilaciones de distintas forma de lucha, experiencia en movilizaciones y con estrategias de sobrevivencia, la mayoría de las veces ante la represión y, cuando la lucha no ha llegado a puntos de inflexión, pasan o reposan en espacialidades de latencias pero habilitables como dispositivos políticos o de resistencia cuando la coyuntura o un nuevo estado de lucha se asoma y muestra signos prolongados.

La revelación del proyecto de la dictadura, que considera un control y asentamiento de Estado policial Militar por largo plazo y una vuelta de mayor grado de represión y venta de recursos activos del Estado y el desmantelamiento total de la estructura incipiente de todos los gremios opuestos al modelo depredador de economía vigente, fue el detonante para activar los recursos y dispositivos en la política del sujeto popular.

Es el Frente una estructura valiente, bien posicionada, con vida orgánica, con capacidad de combate, movilizadora a lo largo y ancho del país, conectora de todas las demandas sociales, de carácter nacional y permanente en coordinación con la totalidad de municipios en el país; tiene un discurso de resistencia activa y pacífica y el objetivo de restituir el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos, sin dejar de lado la confrontación, la defensa de espacios estratégicos, la anulación del agresor e incluso la posibilidad de asumir el enfrentamiento en las mismas condiciones impuestas por el enemigo.

El haber permitido la constitución del Frente marcó la ruta del conflicto; pasó de un golpe militar con intencionalidad de acallar todas las voces y cerrar los espacios de expresión democrática a una situación de insurrec-

ción popular que habilitó la calle como escenario de confrontación, posicionó la movilización como el vehículo de divulgación y visibilizó al ejército como actor de la confrontación, reveló a los sujetos insurrectos, robó cámara y así entró el conflicto en los medios de comunicación; el miedo fue desalojado de la subjetividad popular, pudo identificarse claramente el enemigo y desnudó los intereses de los golpistas en el aspecto económico, político y militar.

La respuesta del Frente re-direccionó la lucha y desconectó el discurso de los golpistas de la frecuencia mediática-ideológica instituido desde la oficina del Departamento de Estado norteamericano y el de los republicanos interesados en alejar a Honduras de las influencias del castrismo-chavismo y abrir una ventana de democracia tutelada.

Hoy ya no está vigente el discurso que involucra a Chávez, ni al grupo de países del ALBA; ahora el eje del conflicto va mas allá de la restitución de Mel Zelaya, pasa necesariamente por la nueva Constituyente, el repliegue militar y el reconocimiento del Frente como fuerza política

Atrapados en la agenda golpista

Los golpistas buscaron en primera instancia, con el desplazamiento del gobierno de Zelaya y su destierro, la eliminación del factor hologramático y desdibujar toda intención de acción colectiva que territorializara la lucha; así, toda la confrontación podía yacer fuera del espacio nacional.

Dejar sin territorio el motivo de conflicto es construir un espacialidad distinta donde se confronta; es enviar una señal falsa, engañar al enemigo para confrontarlo en el lugar de mayor conveniencia, y el espacio escogido fue el mediático.

La estrategia fracasó a la semana de haberse instrumentado, aun cuando contó con soportes del silencio de la Casa Blanca. Se sucedieron, además, los siguientes elementos: la reacción tardía del presidente norteamericano Barack Obama, la dilatación del tiempo por parte del representante del Departamento de Estado Hillary Clinton, las gestiones y habilitación de estrategia fuera del orden institucional por parte de congresistas republicanos, la intromisión de agentes paramilitares de Colombia y asesores israelíes, el incremento de tráfico de armas para proveer a las pandillas que colaboran con el crimen organizado y traficantes de drogas para que se contara con las herramientas capaces de eliminar a miembros del Frente. Además, se dio la complicidad de gobernantes, quienes desde el silencio o la evocación de neutralidad indulgente con los golpistas, cerraron los ojos y dieron

aval a los asesinatos y persecuciones, encarcelamientos y violaciones de todos los derechos al pueblo hondureño.

El fracaso político tuvo consonancia con la debacle económica del país, negando la pieza discursiva del golpista Roberto Micheletti acerca de un periodo de posible resistencia económica entre medio a un año de bloqueo.

A partir del golpe del 28 de junio y en el escenario de crisis financiera internacional, se comprimió el monto de las remesas provenientes de los Estados Unidos en 8.2%; la inversión extranjera directa (IED) pasó de US\$405.8 millones al primer semestre de 2008 a US\$274.4 millones en el mismo período de 2009. Asimismo, las reservas internacionales sólo han podido cubrir las importaciones para tres meses, mostrando signos de agotamiento en octubre; ahí residió la apertura para el diálogo.

Otro factor que debilitó a los golpistas fue la decisión de los organismos internacionales a tres días del golpe de Estado: el Banco Mundial y el BID anunciaron la suspensión de créditos a Honduras, y posteriormente expresaban lo mismo la Comisión Europea, la Cooperación Española, el BCIE, la Cuenta del Milenio, las Naciones Unidas con su retiro de la asistencia al proceso electoral; descendió la cooperación internacional, con graves consecuencias si consideramos la necesidad en el ejercicio de la política pública social por el respaldo de estos fondos.

El golpe demoledor para los empresarios fue la alteración del tránsito y tráfico por los puntos limítrofes de los países miembros del SICA (Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua), quienes cerraron sus fronteras durante 48 horas; estos tres países concentran el 19.3% de las exportaciones de Honduras y el 18.9% de las importaciones, o sea que la quinta parte de las compras y ventas de Honduras es comercializado con estos tres países; así, en dos días de paro fronterizo, la pérdida en exportaciones fue de 2.85 millones de dólares.

El sector turismo es otro de los afectados con una pérdida estimada de 950 millones de lempiras; además de la contracción del crédito, también lo resintieron la industria de la construcción, el transporte, las ventas a crédito, el transporte aéreo, terrestre, fronterizo, todo lo cual suma aproximadamente 15 mil millones de lempiras, cifra representativa del 6% del PIB a partir del golpe a la fecha.

El país perdió 36.8 millones de dólares diarios, y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa aceptaron el alcance de las pérdidas semanales sufridas en la exorbitante cifra de 3,500 millones de lempiras (182,2 millones de dólares) con efectos en el resto de los sectores económicos,

desde el comercio, la industria y el sector servicios. Todos los que secundaron y dieron aliento a la destitución y destierro del presidente Zelaya también fueron presos del invento golpista.

La disputa del ajedrez político

El juego político militar entre América Latina y Estados Unidos se dio en la mesa hondureña; ahí se disputaba el destino de nuestros pueblos, y la pulseada de Brasil intervino y retó a los gobiernos que intentaban aun mantener las aspiraciones neocoloniales.

Aceptar con pasividad y complacencia el golpe de Estado en Honduras sería la carta de aval requerida por los Estados Unidos para imponer un tipo novedoso de dictadura militar con la confabulación de toda la estructura institucional, que si bien no desaparece, tampoco juega un papel importante, sólo con la careta democrática pero se trata de un régimen impositivo y negador de los derechos ciudadanos. Esta iniciativa la trataron de imponer con el intento golpista de abril 11 del 2002 en Venezuela y ahora persiste en Honduras; sin embargo, existen otras modalidades de gobierno con sesgo dictatorial en México, Perú, Colombia y Haití.

Brasil y Venezuela permanecen activos por poner un alto a las políticas intervencionistas; cada gobierno tiene un perfil distinto pero la intencionalidad guarda el mismo fin: no más golpes militares y sepultura a la democracia, antes por el contrario, fortalecer la integración, las instituciones y la autonomía de las naciones.

A los 86 días después de habersele derrocado y desterrado, Manuel Zelaya regresó a territorio hondureño tras una jugada sutil, inteligente, bajo una estrategia gramsciana de guerra de posiciones y de movimientos en donde Brasil y Venezuela daban jaque mate al engañar a los custodios fronterizos e ingresar al presidente derrocado dándole alojamiento en la embajada de Brasil.

El movimiento estratégico resituó el holograma del motivo de lucha en el territorio, o sea territorializó la lucha dentro de los marcos de Honduras; ingresó a Manuel Zelaya como actor en la discusión y diálogo por la solución, dado que es parte de conflicto; colocó al Frente como cordón de resistencia para presionar la búsqueda de resolutivos sin renunciar a la demanda por la Constituyente; produjo confrontación y fisura entre el grupo golpista porque los militares fallaron en su papel de custodios y celosos defensores del territorio nacional; los medios de comunicación quedaron sin ser parte de la contienda y vacía de contenido la diatriba que

manejaban discursivamente en la programación cotidiana. Además, produjo la división del sector empresarial; algunos pedían el diálogo con severos condicionamientos y otros negaban esa posibilidad rotundamente como los del sur del país, signo de ruptura a la unidad y apertura de intersticios de divulgación de las voces disidentes y posturas encontradas.

Los militares culpaban, bajo una estrategia engañosa y acordada con los empresarios, al grupo de Roberto Micheletti del golpe; asimismo, el empresario dueño del periódico La tribuna Carlos Roberto Facussé culpaba a los militares y los conminaba a comparecer ante la justicia por el destierro del presidente Zelaya; fue el enredo de la madeja de hilo de la política nacional en busca desesperada de esconder a los protagonistas del golpe, limpiar de toda culpa a los militares y empresarios y enlodar en la medida de lo posible a los políticos, con el fin de, en caso de acordar la restitución de Zelaya, algún sector de los implicados quedara dentro del gabinete o estructura gubernamental como Caballo de Troya para controlar los movimientos del presidente legítimo.

En síntesis parcial, aún está en peligro América Latina; los gobiernos que pretenden imponer el Estado de corte policial-militar están activos; algunos lo instalan de facto, otros pretenden hacerlo como en Colombia, Perú y México bajo la política de guerra contra el narcotráfico; esconden las intenciones anti gremialistas y disfrazan sus apetitos privatizadores, depredadores para vender los recursos naturales estratégicos; prefieren el capital extranjero, despojan a la nación de sus activos públicos y destierran la política pública social.

Honduras es la bisagra de América latina. El panorama indica la opción de o iniciar la apertura de la democratización o entrar en un periodo de luchas y confrontaciones donde la violencia será la música que toque los oídos y alimente los odios para sembrar la guerra.

Bibliografía

Carmona, Ernesto (2009). *Zelaya los enfrentó temprano: Los “dueños de Honduras” también poseen los medios.* parte 1 y 2:

<http://www.argenpress.info/2009/07/zelaya-los-enfrento-temprano-los-duenos.html>

Carotenuto, Gennaro (2009). *El sicario de Roberto Micheletti: historia del torturador Joya Améndola, brazo derecho del Presidente “de facto”.* En Dossier especial sobre golpe de Estado en Honduras. Lecturas semanales en www.insumisos.com

Clinton, Hillary (2009). *Discurso en el CFR* (Council on Foreign Relations), 15 de Julio de 2009. Grupo de Sociedad Civil, www.gsc.bn

Salazar, Robinson (2002). *Los avatares del Plan Colombia*. Plan Dignidad y el Plan Puebla Panamá <http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/avatares.pdf>

HONDURAS: LA DICTADURA DE UN BLOQUE DE CLASES OLIGÁRQUICAS Y EL MOVIMIENTO DE RESISTENCIA POPULAR

Roberto Briceño Jiménez⁴⁶

1. La sociedad: rasgos estructurales

La sociedad hondureña es una sociedad diversa y contradictoria como toda sociedad capitalista subordinada; en ella se interrelacionan formas y modos de vida social que corresponden a épocas distintas conviviendo relacionadas en el mismo tiempo. Está estructurada por relaciones de producción capitalistas subordinadas, que determinan una estructura desigual, de relaciones diferenciadas y contradictorias, subordinadas a las relaciones del capitalismo imperialista.

Estas relaciones determinan la estructuración de grupos y clases sociales subalternas a grupos y clases sociales dominantes y hegemónicas. Una característica esencial de las relaciones capitalistas es que implican y subordinan todas las formas de producción y de vida social a la racionalidad de la producción y reproducción capitalista, evidenciando irracionalidad deshumanizada en la medida que lo esencial es la plusvalía.

La economía es primaria, con tendencia a la tercerización por efecto de deformaciones estructurales que resultan de sus vinculaciones asimétricas con el entorno del capitalismo central o desarrollado internamente, con la persistencia de formas y relaciones de producción que se reproducen socialmente en la producción de subsistencia.

⁴⁶ El Prof. Briceño es docente de sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Correo electrónico: *robert-brij.5@gmail.com*

La formación social hondureña resulta estructurada por clases, fracciones, estratos de clases y estamentos vinculados entre sí con relaciones desiguales y contradictorias. Esta estructura desigual y heterogénea es determinada por las diferentes formas de producción y de vida articuladas a las relaciones dominantes del capitalismo central que las subordina para reproducirse.

El surgimiento tardío de la burguesía hondureña es resultado de la expansión del capitalismo en forma de inversión transnacional en el sector primario exportador de minería, bananos, carne y otros productos agrícolas primero, y después en la producción industrial, el comercio, el capital financiero y los servicios.

1.1. La burguesía hondureña y los terratenientes

¿Quiénes son los dueños del país? La burguesía hondureña empezó a estructurarse a mediados del siglo XX, atraída por la inversión de capital extranjero traído por empresas transnacionales mineras y bananeras. Con él llegaron migrantes judíos y árabes, principalmente, invirtiendo en actividades comerciales primero, y después en la industria y los servicios de alimentación, comunicación, salud y otros.

Auspiciados por la política estatal, de estímulo a la inversión industrial, la burguesía ha crecido acumulando capital hasta constituirse en grupos dominantes que vinculan el interés privado con la políticas de Estado, haciendo que éste funcione en términos de la acumulación y de su reproducción ampliada.

Los grupos se estructuran en redes de empresas que tienen como cliente al Estado con todas sus dependencias, como único o el más importante comprador. Estos grupos aquí se identifican por apellidos o clanes familiares entre ellos los siguientes: Bográn, Agurcia, Soto, Rosental Oliva, Bueso, Golstein, Flores Facusé, Facusé Barjun, Canahuati, Kafie, Nasser Selman, Andonie Fernández, Corrales Alvarez, Wilians, Bendeck, Faskelle, Kattán, Larach, Maduro, Hasbun, Callejas, Handal, Vinelli, Ferrari, Atala, Faraj, Casanova, Simón, Lamas Bazos, Chain, Asfura, y más recientemente los grupos Pelas Chamorro y Martinelli. Estos grupos familiares vinculan y combinan muy bien sus intereses económicos con los medios de dominación política por medio de sus identidades sociales y los órganos del sistema político. Invierten en campañas políticas aunque algunos no tienen identidad partidaria y sólo lo hacen con la racionalidad de inversión y valorando el Estado como campo acotado de sus inversiones y fuente de recursos para incrementar y reproducir sus capitales.

Las identidades familiares que mantienen estos grupos de poder económico y político se vinculan con sus propios imaginarios o representaciones sociales con las que hegemonizan y dominan, e identidades de clase que refuerzan sus formas de cohesión y de auto conservación de grupos consolidados como bloque de poder oligárquico.

Los terratenientes son líderes locales y tienen su identidad social en la FENAGH (Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras), con influencia política en los departamentos y municipios, identificados con los partidos políticos principalmente Liberal y Nacional. Históricamente el Estado Hondureño ha estado gobernado por caudillos locales de esta clase incluyendo a Manuel Zelaya, Presidente destituido, y Porfirio Lobo Sosa, candidato Presidencial del Partido Nacional y declarado triunfador en las controvertidas elecciones de noviembre de 2009.

La burguesía y los terratenientes son las clases de donde ha surgido la élite gobernante que constituye el bloque de poder, y en los partidos políticos nombran candidatos y eligen los diputados alcaldes y gobernantes del país. Ellos tienen su identidad política en los Partidos Políticos, principalmente el Nacional y el Liberal. Existen asociaciones ideológicas como la APROH, que fue constituida en 1983 por empresarios, líderes políticos, militares, dirigentes sindicales, intelectuales orgánicos de la burguesía y terratenientes para legitimar la estrategia de seguridad nacional por medio de la represión política y militar contra los movimientos sociales y políticos para imponer el modelo Neoliberal sin oposición.

2. Las clases subalternas y el movimiento social hondureño

El proletariado hondureño, que surgió con la explotación capitalista de la minería y la producción agro exportadora, constituyó un movimiento sindical con mucha capacidad de movilización, presión social y política, aun durante los regímenes de facto militares, durante las décadas del sesenta y setenta con capacidad para incidir en escenarios deliberantes sobre problemas laborales y nacionales; se llegaron a establecer acuerdos con los grupos dominantes de la burguesía emergente en oposición a la oligarquía terrateniente y las transnacionales; se forjaron cambios estructurales en el Estado, que fueron objetivados en reformas que lógicamente contribuían con el desarrollo capitalista en el sector agrario e industrial en beneficio del mercado y de la reproducción del capital.

El sindicalismo hondureño, sin embargo, ha sido un movimiento relativamente reducido y contradictorio por influencias ideológicas del imperia-

lismo por medio de sus agencias de intervención, la socialdemocracia, la social cristiana y la tendencia clasista.

El campesinado es el otro movimiento o actor colectivo de los procesos de reforma agraria que vinculado al movimiento sindical también está diferenciado por tendencias en distintas organizaciones con identidad ideológica en el movimiento social; se constituyeron en fuerza beligerante que presionó e influyó en las políticas de reforma agraria e institucional del Estado.

El sindicato más beligerante de la empresa privada que sobrevivió a la represión político militar y el de mayor capacidad de convocatoria, participante en el movimiento popular sigue siendo el Sindicato de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).

2.1. Sindicalismo magisterial y de empleados públicos

La expansión de la estructura y funcionamiento del Estado con la creación de órganos y empresas estatales descentralizadas y el incremento de la burocracia Estatal hizo surgir un conjunto de sindicatos de empleados públicos que se constituyeron en fuerzas de presión mucho más beligerantes que la mayoría de sindicatos de la empresa privada.

El movimiento Magisterial también surgió en la década del sesenta en oposición a políticas Estatales relacionadas con los derechos laborales y políticas educativas. La forma de organización es formal basada en la ley de Colegiación obligatoria aplicada para profesionales en su mayoría de nivel medio no universitario y el código de trabajo. La relación entre Estado y los educadores es una relación laboral que reproduce las relaciones capitalistas en la que los trabajadores conciben al Estado igual que las empresas privadas de la educación como patronos y ellos sus trabajadores asalariados.

Desde los años ochenta hasta ahora, igual que el movimiento sindical, se movilizan e interrelacionan, entre divisiones y fraccionamientos internos, alianzas o federaciones de sindicatos y colegios Magisteriales del país asociados a la Internacional de la Educación, a nivel nacional, a la federación magisterial y tres Confederaciones sindicales nacionales que aglutinan a los sindicatos y organizaciones del movimiento campesino.

Las divisiones del movimiento sindical campesino y magisterial han estado influidas por la intervención de los órganos de dominación del Estado y las influencias ideológicas: Marxista en sus diferentes orientaciones y tendencias, social cristiana, social demócrata y Liberal.

El triunfo de la revolución en Nicaragua y las guerras civiles y revolucionarias en El Salvador y Guatemala, más la política de expansión y acu-

mulación capitalista Neoliberal objetivado en los Programas de Estabilización y Ajuste Estructural de la Economía, condicionaron la posición estratégica de Honduras como base de operaciones de Estados Unidos para atacar los movimientos revolucionarios en los países vecinos.

3. La democracia formal con régimen militar de seguridad nacional; guerra de baja intensidad y contrarrevolución

La transición de regímenes de facto a los gobiernos con formalidades democráticas se inició con elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que decretó la actual constitución de la República en enero de 1982.

Durante la década de 1980, hubo tres procesos electorales que eligieron tres gobiernos presididos por civiles, pero con fuerte influencia de las Fuerzas armadas. Durante estos años, en el país se establecieron bases militares de Estados Unidos, campamentos de la Contrarrevolución Nicaragüense y hasta un centro de entrenamiento militar para el ejército Salvadoreño.

El Estado de Seguridad Nacional impuso un régimen de represión contra las organizaciones del movimiento popular y selectivo de activistas, dirigentes sociales y políticos, encarcelamientos, torturas, asesinatos, desaparecidos e intervención, dividiendo organizaciones sindicales, campesinas, magisteriales y étnicas inclusive.

El resultado de la represión, el terror, la división y cooptación de movimientos y organizaciones del movimiento sindical y magisterial ejecutada en los años ochenta creó condiciones de ejecución de las políticas económicas Neoliberales de privatización y precarización de los derechos laborales de los trabajadores con muy reducida resistencia u oposición.

3.1. El neoliberalismo deslegitimó la democracia como forma de gobierno

El Programa de Ajuste estructural de la Economía, centrado en la privatización o transferencia de empresas del sector público a la empresa privada fundamentado en el libre mercado generó las contradicciones de la democracia como forma de gobierno en contraposición a la democracia como sistema político.

La represión aplicada por la estrategia política de seguridad nacional y contrainsurgencia política originó movimientos sociales por la defensa de los derechos humanos, feministas y antiglobalización.

El individualismo y la preeminencia del interés privado condicionaron las nuevas formas de cohesión y mediatización de las identidades de clase

por las ONG u OPEP, que asumieron las formas de solidaridad social en actividades que corresponderían a funciones del Estado. Esta ideología Neoliberal ha sido impulsada por la AID y facilitada por el Estado, condicionado por los Organismos de Financiamiento Internacional (OFI). La identidad de clase queda subsumida en el concepto de ciudadanía, que oculta desigualdades sociales como individualización y abstracción de la participación privada en el mercado.

La racionalidad neoliberal de crecimiento económico y acumulación de capital basado en la depredación de los recursos naturales y en la sobreexplotación del trabajo por medio de la precarización de las condiciones laborales implica la negación de derechos laborales, la contratación individual por la contratación colectiva, la sub contratación y la coinvertión para subsumir la explotación del trabajo de los campesinos en beneficio de la acumulación y concentración del capital.

3.2. Los resultados de la democracia neoliberal

Las consecuencias evidentes son las siguientes:

- Incremento relativo de las exportaciones desde 1990 hasta 2005 aunque negativo en 2006 en beneficio de la acumulación y concentración del capital.
- La destrucción de los sistemas ecológicos hasta el límite de la reducción del potencial productivo de los recursos naturales, el surgimiento de los movimientos ambientalistas regionales para la defensa de los recursos naturales y la saturación del ambiente por los residuos materiales de la contaminación que afecta la salud.
- Incremento de población con problemas de empleo: la tasa de desempleo y subempleo oscila entre el 30 y el 40%.
- Incremento y diversidad de actividades de subsistencia y supervivencia. El llamado sector informal de la economía en el que también se reproducen formas de sobreexplotación capitalista.
- La polarización de las desigualdades en la distribución del ingreso: la razón de ingresos del 20% de los hogares con mayores ingresos es más o menos 24 veces la del 20% de los hogares con menores ingresos en el mercado laboral (INE, 2007) pero en la distribución del ingreso nacional es entre 35 y 40 veces. El índice de desigualdad es más o menos de entre el 54 y el 60 por ciento (Paes de Barros, Carvalho y Franco, 2006: 80)

- Reducción del movimiento sindical en las relaciones de explotación propiamente capitalistas por la coinversión en el sector primario, la producción maquiladora y las subcontrataciones en el sector terciario.
- Reestructuración y reagrupamiento de la burguesía consolidada, por las interacciones y vinculaciones en redes mediáticas que facilitan las transferencias e intercambios de plusvalía realizada y de reparto de recursos de inversión estatal por los mecanismos de intermediación que el sistema ha creado.

Este agrupamiento de la burguesía, la estructuración como clase dominante, con capacidad de control absoluto de los órganos del Estado asumiendo los rasgos de gobiernos plutocráticos y con la convergencia de intereses políticos, aparentemente tiende a ser un bloque de poder homogéneo, constituido como un Estado de las clases oligárquicas.

- De 1982 a 2005 se han celebrado sin interrupción siete procesos electorales para igual número de gobiernos electos con relativa libertad política de la ciudadanía. En cada período de gobierno hubo cambios institucionales para asegurar la estabilidad del sistema y mejoras en la protección a los derechos fundamentales de las personas: el Ministerio Público, el Comisionado de los derechos Humanos, el Tribunal Superior de Cuentas, fundación y legalización del Partido Unificación Democrática, la opción de participación por candidaturas independientes, el voto domiciliario, subordinación de las fuerzas armadas a la autoridad civil formalizada en reforma constitucional el año de 2005. Sin embargo, la estructura militar y la concepción de su rol institucional siguió siendo el de un ejército de la oligarquía que homologa soberanía nacional, defensa de la Constitución con dictadura y autoritarismo: la represión y la tortura, en defensa del interés del bloque de poder, independiente de los partidos políticos, se han apropiado del Estado Hondureño.

3.3. El antineoliberalismo y la deslegitimación de la forma de democracia representativa.

La participación electoral en los siete procesos electorales se ha reducido gradualmente desde el 84% de participación electoral en el año 1985 hasta el 55% en 2005 medido por un abstencionismo creciente de 16% en 1985 al 24% en 1985 y 45% de los electores en 2005; el Presidente Manuel Zelaya resultó electo por un 46% de los votos con un 4% más que el candidato del Partido Nacional. El 46% de los electores que votaron por Zela-

ya es equivalente al 25% del total de electores de ese año. La tendencia es que una minoría de electores estaría eligiendo gobierno y que los dos partidos políticos mayoritarios se están reduciendo, pero no en beneficio de los partidos minoritarios, si no en aumento de los no partidarios, que se abstienen de participar en las elecciones. El resultado es una creciente concentración del poder en grupos élites de la empresa privada que ideológicamente coinciden con la élite de los partidos políticos tradicionales.

Otros indicadores de la deslegitimación de la democracia formal se muestran en los altos índices de violencia e inseguridad que los órganos de seguridad o represión son insuficientes para controlar; la corrupción o distorsión de los sistemas institucionales han reducido la confianza y seguridad social al límite de provocar la inseguridad y desconfianza en el funcionamiento de los órganos del Estado, incluyendo los órganos defensores de la sociedad.

La resistencia antiglobalización se mantuvo en los sindicatos, específicamente en el STIBYS y las organizaciones de empleados de las empresas estatales que constituyeron la Federación Unitaria de Trabajadores, la Confederación Unitaria de Trabajadores, los colegios y sindicatos magisteriales que han sostenido una lucha continua en la defensa de los servicios públicos, contra la privatización y por la recuperación de los salarios reducidos a causa de la devaluación y el incremento inflacionario.

En estas movilizaciones y reagrupamientos se constituyó la Plataforma de Lucha para la Democratización de Honduras con las Confederaciones de Trabajadores, el Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras y el COLPROSUMAH Auténtico. La Plataforma de Lucha logró acuerdos con el gobierno que presidía Rafael Callejas acerca de la agenda siguiente:

1. Regulación y control de precios.
2. Ley de Protección al Consumidor y sus reformas.
3. Ajuste General de Salarios.
4. Las privatizaciones.
5. Estabilidad laboral.
6. Injerencia empresarial y Estatal en las organizaciones sindicales.
7. Reformas al Código del Trabajo.
8. Conflictos laborales y legislación sobre conflictos.

Todos los puntos de la agenda se relacionaban con impugnaciones a las políticas y medidas del Programa de Ajuste Estructural de la Economía aprobado por este gobierno en marzo de 1990.

En otro escenario y con actores más influyentes representados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el gobierno acordaba la agenda siguiente:

1. Consolidación del proceso democrático.
2. Reformas estructurales en el agro y respeto al principio de legalidad.
3. Racionalización del gasto público.
4. Política económica y política social.
5. Nivel de precios y proceso inflacionario.
6. Niveles de salarios y poder adquisitivo.
7. Erradicación de la pobreza.
8. Problemas de salud educación y vivienda.
9. Relaciones obrero patronal.
10. Reforma a la Legislación laboral (Salomón, 1998: 68-69).

Esta agenda contenía los puntos de la Plataforma de lucha para la Transformación de Honduras, pero con racionalidad diferente en perspectiva de intereses opuestos. Independiente de los convenios de agendas con los trabajadores, al final, las políticas se han impuesto mediante acuerdos legitimados con el COHEP y fracciones del movimiento sindical y campesino cooptadas por el gobierno para mediatizar la oposición o resistencia.

Hasta 2005, la democracia formal en la República de Honduras se ha reducido a poliarquías que son las que han tenido el monopolio de la incidencia e influencia política subordinando a sus intereses las instituciones del Estado y haciendo de la democracia su democracia. Con otras palabras, la ciudadanía como acción social se reduce a estos grupos que son decisivos en el sistema político hondureño.

El Neoliberalismo es tan fundamentalista u ortodoxo que hasta el concepto de democracia privatizó. La democracia fue apropiada por la élite política que constituida en poliarquías elige y dirige gobiernos subordinados a sus racionalidades económicas.

La resistencia anti neoliberal ha impuesto límites al Neoliberalismo; contra la privatización y la depredación de recursos naturales y por ajustes a los salarios, surgió el bloque Popular en el año 2000 que, a partir de 2003, se constituyó en la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, agru-

pando las tres centrales obreras (CTH, CGT y la FUTH), la Federación de Organizaciones Magisteriales, COPIN, el Movimiento Ambientalista de Olancho, el Comité Cívico de organizaciones de Occidente la vía Campesina, organizaciones comunales y organizaciones del movimiento Feminista. Este movimiento anti neoliberal viene a ser otra identidad colectiva de mayor capacidad de convocatoria después de la Plataforma de Lucha por La Transformación de Honduras. Su capacidad de convocatoria fue evidente con la movilización de agosto de 2003, cuando fue capaz de parar el país un día con demandas de todos los grupos de presión aglutinados en este movimiento, fundamentalmente el referente al TLC, los salarios, la corrupción y la destrucción de los recursos naturales por las empresas mineras y madereras.

El magisterio y los sindicatos de las empresas del Estado han sostenido la defensa de la Educación y la salud pública además de los otros servicios públicos. Esos movimientos de oposición han mediatizado la ejecución plena de las políticas de la estrategia neoliberal.

En posesión de poderes reales, los grupos económicos interactúan en la disputa por el acceso a los recursos del Estado, situado en la condición de monopsonio como único cliente comprador de sus servicios y productos por medio de contratos muy ventajosos para beneficio de sus empresas, de la acumulación y de la reproducción de capital concentrado en estos grupos.

En la lógica de la acumulación y reproducción del capital, la reforma neoliberal impulsada por estos grupos de la burguesía “se orienta a sustituir al Estado Nacional por la gestión privada, al que se responsabiliza de la crisis. La tesis Neoliberal es que el mercado es el mejor mecanismo de crecimiento económico y de distribución de la riqueza”... (Romero, 2007; 98).

La objetivación de la sustitución de las funciones reguladoras del Estado como mediación entre los intereses privados y el interés público ha reducido las expectativas sociales.

El Estado capitalista concentra la política pública en la realización plena de la plusvalía, la renta de los grupos de la burguesía y los terratenientes en beneficio de la concentración de la riqueza y el poder en contradicción con las expectativas de legitimidad democrática.

Las condiciones de reproducción ampliada del capital generadas por la aplicación del modelo han estructurado grupos consolidados por las redes de intereses económicos que vinculan a estos grupos de modo articulado y complementario, reduciendo la competencia entre ellos y consolidándose

como unidad oligárquica de poder político sobre los órganos estratégicos del Estado para realizar sus privilegios.

Con referencia al poder de estos grupos, Manuel Torres dice: “es conocido que en Honduras mandan los personajes y grupos que controlan la banca, comercio, agroindustria, maquila, sector servicios, turismo, generación de energía y telecomunicaciones”... (Torres, 2007: 136).

Agrega Manuel Torres “que las modalidades en que los grupos de la burguesía imponen su poder y control sobre el Estado son diversas...una de las vías más importantes es la Jurídica, lo que convierte al Congreso Nacional y el poder Judicial en objetivos de disputa” (ídem: 137).

Los burgueses invierten en las campañas políticas de uno o de otro partido con opciones de ganar para asegurar escenarios de control político que les permita facilidades de uso de los recursos de control o dominación en beneficio del crecimiento de sus capitales. El resultado es la distorsión de la democracia representativa degradada al extremo de representación política prostituida por el tráfico de influencias.

4. La contradicción del bloque dominante con el gobierno del presidente Manuel Zelaya y en consecuencia el golpe de Estado

“...En diciembre de 2006 el señor Miguel Facussé y unos treinta influentes empresarios de todo el país convocaron al Presidente Manuel Zelaya a una sesión en la localidad de Farallones (propiedad del primero) en la zona atlántica del país. En esta sesión, el grupo oligárquico le presentó un plan de inversiones para cuyo financiamiento el Estado debería aportar una suma millonaria de lempiras, aprovechando el balance favorable de las reservas monetarias acumuladas en el Banco Central” (Meza, 2007: 11).

Miguel Facussé es uno de los principales actores del sistema político hondureño, entendiendo por **sistema político** “el conjunto del sistema social estudiado en sus aspectos políticos. La identidad en el cual confluyen los actores políticos” (Duverger M. 1955). Este capitalista es uno de los mayores beneficiarios de los recursos financieros de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), recursos de la deuda externa que nunca pagaron; es así que se convirtieron en poderosos bajo la protección del Estado.

Durante el primer año de gobierno, Zelaya mantuvo buenas relaciones con los grupos económicos pero tuvo mayor vinculación con el grupo Continental que preside Jaime Rosenthal Oliva, también líder del Partido Liberal; su hijo Yani Rosenthal ocupaba el cargo de Secretario Presidencial.

El gobierno impuso límites en términos de contratos que concedían muchos privilegios que el gobierno anterior mantenía con importadoras y productoras de químicos farmacéuticos para compra de estos productos, debido a fraudes de calidad, productos vencidos cuyo uso implicaba riesgos para la salud de los consumidores. A principio de 2009, el gobierno trató de hacer convenio de compra de genéricos a Cuba, basado en los acuerdos del ALBA; esta intención provocó la oposición de las transnacionales farmacéuticas por medio de una campaña mediática y apoyada por el colegio de Químicos Farmacéuticos.

La economía Hondureña es dependiente de la importación del petróleo y sus derivados y aunque los precios son definidos por la Comisión Administradora del petróleo constituidas en Oligopolio cuatro empresas Transnacionales importadoras ejercen su imperio en esta rama de la economía con ganancias mayores que el 21% por galón importado (Flores M., 2008: 165).

La energía termoeléctrica es generada por cuatro empresas que venden el servicio a la ENNE, las que además del precio cobrado por KW/h de potencia contratado, también disfrutaban de un 29.1% de ganancia por la comercialización y almacenamiento de cada galón de fuel oil (Ídem).

Zelaya pretendía reducir el costo de la intermediación importadora que por convenio de 1992 realizan cuatro empresas transnacionales de productos energéticos; suscribió un convenio con PDVSA como parte de la asociación acordada por el gobierno a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el convenio de PETROCARIBE; a partir de 2008, esta iniciativa provocó la oposición del COHEP y una manifestación en contra del gobierno de Estados Unidos a través de la embajada que amenazó con suspender la cooperación.

El oligopolio de los medios de comunicación: en Honduras, los medios de comunicación son propiedad de un grupo de empresarios vinculados a otras inversiones y empresas de producción industrial y servicios, desde materiales de construcción productos químico-farmacéuticos y telecomunicaciones entre otros.

En enero de 2007, el presidente Zelaya planteó el problema diciendo: “el principal problema de Honduras es que su sistema político, a través de la historia, ha concedido leyes, contratos, privilegios y concesiones que favorecen ciertos sectores, pero que discriminan en forma inmoral a las grandes mayorías de la nación hondureña” (Carmona 2009).

La campaña mediática vincula los intereses económicos de los grupos de poder y los objetivos políticos como medio para realizar sus inversiones

contra políticas del gobierno que regulan o limitan sus expectativas de realización plena de sus ganancias.

El gobierno optó por fundar sus medios para informar de las actividades oficiales para responder a la campaña mediática: un periódico impreso, Poder Ciudadano, un canal de televisión, Canal 8, aparte de la radioemisora nacional que ya tenía.

La iniciativa del gobierno de recuperar el aeropuerto de Palmerola que ocupa la base militar de Estados Unidos (Base Aérea Soto Cano) con fines comerciales provocó la oposición de la empresa Intereipor, administradora de Aeropuertos, que pertenece al mismo Propietario de LUFUSA, la mayor contratista de energía Térmica propiedad del señor Nasser, yerno de Miguel Facussé.

La reducción de las tasas de interés en el sistema Bancario, desde el 35% hasta el 10%, estimuló la construcción y la inversión, pero afectó al capital especulativo.

En enero de 2009, Zelaya decretó un incremento al salario de 3,428 Lempiras a 5,500.00 Lempiras en las Zonas urbana y a 4,500.00 Lempiras en las actividades primarias. Estos incrementos equivalen a un 38%; en los últimos doce años, las tasas promedio de ajuste al salario mínimo fue de 15%. El incremento impuesto por el gobierno provocó mucha ira en los burgueses y la manifestaron por medio de sus identidades sociales, la ANDI, la Cámara de Industria y Comercio y el COHEP, los que lo impugnaron legalmente y, aunque la corte falló en su contra, muchos capitalistas no cumplían en la práctica sus obligaciones salariales con los trabajadores.

La propuesta política que intensificó al límite más elevado de la tensión con las fuerzas del bloque oligárquico fue la iniciativa de una encuesta para una consulta popular que hiciera viable la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que decretaría una nueva Constitución de la República con la expectativa de avanzar de la democracia como forma de gobierno representativo a la democracia como sistema político de participación y de soberanía popular.

Las contradicciones inter partidarias fueron las siguientes: el Partido Liberal se dividió, y el movimiento más conservador liderado por Micheletti y Elvin Santos se aliaron con el Partido Nacional, la DC y los diputados del PINU en el Congreso Nacional, quienes consensuaron la elección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto. Todos estos órganos, incluyendo el Comisionado Nacional de los

Derechos Humanos, funcionaron como unidad en contra del Ejecutivo presidido por Zelaya Rosales.

El bloque oligárquico con sus intelectuales orgánicos y los medios de comunicación, homologando la identidad ideológica de la APROH, constituyeron ahora la Unión Cívica para la Democracia, la que dirigió la campaña ideológica de fantasmas para justificar y legitimar el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009.

El gobierno de Zelaya Rosales fue acusado de Traición a la Patria por señalados actos de violación a la Constitución de la República pero de lo que se trata es de una acusación de traición al bloque de clases que constituye la oligarquía ultraderechista hondureña. Los hechos ejecutados por los actores del Golpe niegan el significado simbólico del respeto y defensa de la Constitución; lo que defienden son sus privilegios en el poder, la capacidad de manejar los recursos de dominación política para asegurar la conservación del sistema, sus intereses y los medios de reproducción del capital.

4.1. Los actores del golpe

Los involucrados en ese acontecimiento fueron los siguientes:

- a. **Ejecutores:** las Fuerzas Armadas, la Fiscalía general, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional.
- b. **Las fuerzas que lo impulsaron:** el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (se identifican unos 10 grupos familiares con poder mediático financiero y político) apoyado por el Consejo Empresarial Latinoamericano. La Ultraderecha cubano Americana con agentes del Pentágono Norteamericano.
- c. **Fuerzas Legitimadoras:** Los candidatos Presidenciales de los Partidos Nacional, Liberal, Demócrata Cristiano y el PINU Social Demócrata con sus correspondientes Consejos Directivos y Comités de partido. La Unión Cívica por la Democracia, una organización ideológica constituida por los mismos actores involucrados, las empresas mediáticas vinculadas al poder de la oligarquía, los intelectuales de la burguesía, para hacer la campaña de propaganda de defensa de la Constitución y el Consejo de Universidades. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Los líderes religiosos de la congregación evangélica, el cardenal Rodríguez, otros obispos y párrocos.

4.2. Fuerzas de oposición al golpe

a. **Fuerzas Internas:** El Movimiento de Resistencia Popular Contra el Golpe de Estado Constituido por unas 45 organizaciones del movimiento popular y de los partidos políticos; entre las más beligerantes se encuentra el Bloque Popular, la Coordinadora de Resistencia Popular, la Federación de Organizaciones Magisteriales, la CGT y la FUTH, la Vía Campesina, el COPINH, Frentes Estudiantiles de las Universidades Nacionales, y la Federación Nacional de Estudiantes de Segunda Enseñanza, el Comité Cívico de Organizaciones de Occidente, el Movimiento Ambientalista de Olancho, los militantes del Partido Liberal que se identifican como Frente de Resistencia Liberal, el Partido de Unificación Democrática, militantes del PINU. Organizaciones Feministas, el Equipo de Reflexión e Investigación (ERI), organizaciones comunales, organizaciones del Bajo Aguán organizaciones de derechos Humanos: CIPRODEH, COFADEH y CODEH, la Unión de Escritores de Honduras y la Coordinadora de Resistencia Universitaria, un grupo de abogados defensores de los reprimidos en Resistencia, grupos de artistas de artes Plásticas y musicales.

b. **El Gobierno:** Manuel Zelaya, con parte de su gabinete y personal diplomático.

c. **Medios de Comunicación:** Diario Tiempo, Radio Juticalpa, Radio Progreso, Radio Globo, CHolusat Sur, canal 36, medios de televisión por cable locales y otros medios alternativos: boletines e internet, diversos BlogSpot, radioemisoras comunitarias y boletines.

d. **Fuerzas Externas:** La OEA y la ONU con un consenso Internacional de condena al Golpe de Estado.

e. El Movimiento Sindical Internacional y los movimientos políticos revolucionarios de América Latina.

f. El movimiento Internacional de los Derechos Humanos.

g. El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

4.3. Las contradicciones que surgen y se manifiestan con el golpe de Estado

a. La evidente contradicción entre dos concepciones de la democracia: la democracia representativa en la que se recrea la corrupción y se acota el Estado como patrimonio de la élite oligárquica con perspectivas de reducir el Estado a un apéndice subordinado al imperio del capital transnacional, y las fuerzas de la democracia popular que impulsa el movimiento de Resistencia por sus identidades colectivas en proceso de unificación y

definición política en la perspectiva de la constituyente para la democracia participativa.

b. La constitución del Estado Nación, dirigido por una oligarquía primitiva que no legitima el significado de Nación en términos de los intereses Nacionales y lo evidenció reducido a sus intereses específicos de clases en la corrupción, la voracidad, la sobreexplotación del trabajo, el reparto de los recursos y negocios del Estado y su incapacidad empresarial.

c. El Golpe legitima la intervención de Estados Unidos por su dual participación: de un extremo, sus agentes en el pentágono, de la ultraderecha en el senado y, en el otro, su concepción de la democracia que pretende afirmar en la región; ambas políticas confluyen en la perspectiva estratégica de mantener la legitimidad de sus intereses hegemónicos,

d. La concepción paleolítica de la democracia de la oligarquía hondureña contra la concepción de la democracia participativa comprendida como sistema político más que como forma de gobierno en el entorno internacional.

e. La vinculación de los movimientos sociales de Resistencia de América Latina, solidarios con el movimiento popular hondureño agrupado en el Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado en oposición a las fuerzas de la burguesía y la ultraderecha internacional que pretende salvar de la crisis, al capitalismo.

5. Nuevos escenarios de lucha política que resultan del golpe de Estado

El Frente Nacional de Resistencia ha generado una capacidad de convocatoria que moviliza gente en todas las regiones del país. El aumento y la afirmación de la conciencia colectiva en el movimiento popular no tiene precedentes; en contraste, el régimen de facto se ve deslegitimado en la sociedad hondureña, tan reducido que sólo se relaciona con los empresarios y los militares.

El Frente ha logrado afirmar en la conciencia colectiva el concepto de golpe y que sus ejecutores son los golpistas. Los líderes políticos religiosos y militares que son identificados como golpistas son rechazados en todos los eventos, tanto que el concepto de golpista resulta ofensivo y denigrante en la conciencia colectiva.

Los candidatos oficiales de los partidos políticos involucrados en el golpe de Estado no pueden convocar a asambleas por temor al rechazo popular.

Todo indica que si el régimen de facto pretende legitimarse con las elecciones podrían generarse situaciones de violencia hasta convertirse en guerra civil.

El golpe de Estado y el rechazo general al gobierno de facto refuerzan la demanda racionalizada en la lucha por la elección de una Asamblea Nacional Constituyente para una nueva constitución.

Independiente de la estrategia mediadora del Gobierno de EU y la OEA a través del Presidente de Costa Rica para lograr un acuerdo de restitución del gobierno de Zelaya, el Movimiento de Resistencia con una visión política no ha dado tregua en sus movilizaciones pacíficas, a pesar de la represión militar y de los muertos que hoy son mártires de la Resistencia Popular.

La polarización resultante del golpe de Estado y la creciente movilización popular hace que el proceso electoral y sus actores resulte deslegitimado, independiente de que se restituya o no al Presidente Zelaya. La visión del movimiento de Resistencia es la institucionalización del Estado de Derecho por medio de una Constituyente. Esa visión es la que unifica y hace crecer al Movimiento de Resistencia contra el Golpe de Estado.

El gobierno de facto pretendió criminalizar y ocultar en la clandestinidad al Movimiento de Resistencia, pero éste se ha legitimado: los participantes se quitaron los pañuelos y ahora organizan la resistencia, en ciudades barrios y comunidades. Esta legitimidad del Movimiento se fundamenta en la razón de la lucha pacífica y se refuerza con el reconocimiento y la solidaridad de los movimientos sociales del mundo, de la Justicia Internacional, el rechazo internacional al golpe de Estado y la imposición de la dictadura oligárquica.

La candidatura independiente del dirigente obrero Carlos Humberto Reyes se ha fortalecido en el Movimiento de Resistencia; pero se retiró del proceso electoral porque su participación implicaría legitimar las elecciones en el régimen de facto si no se restituye el sistema institucional de Estado fundamentado en el Derecho

Bibliografía

Borón, Atilio (2009). *Honduras en Lucha*. Sábado 11 de julio de 2009.
<http://bondurasenlucha.blogspot.com/2009/07/intelectual-y-analista-atilio-boron-no.html>

Chomsky, Noam,...compilado por Borón, Atilio (2004). *Nueva Hegemonía Mundial, Alternativas de cambio y movimientos sociales*. CLACSO 1ª reimpresión, Buenos Aires.

Dierckxsen, Wim; Jarquín, Antonio y Carcanholo, Reinaldo; Campanario Paulo y Nakatani, Paulo (2009). *Golpe Militar en Honduras ¿es también contra Obama?* Observatorio Internacional de la Crisis, www.observatoriocrisis.org

Equipo Nizkor y Radio Nizkor (2009). *Los Nombres del Golpe de Estado en Honduras*. 29 junio 2009. <http://derechos.org/nizkor/honduras/doc/nombres.html>

Flores, Alex Geovanni (2008). *La Dependencia Estratégica en el petróleo y la Revolución energética de Honduras*. Post grado Centroamericano en Economía y Planificación del Desarrollo, Revista Centroamericana de Economía y Planificación del Desarrollo, II época, año 13 N°71 Universidad Nacional Autónoma de Honduras.pp.141 a 191.

Freytas, Manuel (2009). *Lo que viene en América Latina: 'La Democracia Blindada' y el Final del Capitalismo Asistencialista*. IAR Noticias, 16/03/2009. http://www.iarnoticias.com/2009/secciones/contrainformacion/0017_fin_capitalis_a_sistencialista_16mar09.html

Kozloff, Nikolas (2009). *Otto Reich y el Instituto Internacional Republicano. Desestabilización, Honduras y Cía.* Domingo 12 julio de 2009. <http://hondurasenlucha.blogspot.com/2009/07/otto-reich-y-el-instituto-internacional.html>

INE (2007). *Trigésima quinta Encuesta Permanente de Hogares*. Instituto Nacional de Estadística, Tegucigalpa Honduras.

Meyssan, Thierry (2009). *HONDURAS: el primer golpe de Estado Militar de la Administración Obama*. 03/07/2009. <http://www.todoschile.cl/content/view/full/553249/Honduras-el-primero-golpe-de-Estado-militar-de-la-administracion-Obama.html>

Meza, Victor; Salomón, Leticia et al. (2007). *Honduras Poderes Fácticos y Sistema Político*. 1ª edición, Centro de Documentación de Honduras, Tegucigalpa, Honduras.

O' Donnell Santiago (2009). *Honduras: Dictadura Post Bananera*. 8/03/2009 <http://surasway.blogspot.com/2009/08/honduras-dictadura-pos-bananera.html>

Machetera (2009). *Otto Reich y el Golpe de Estado en Honduras: El Provocador, su Discípulo y el Presidente Derrocado*. 10/08/2009. Traducido por Manuel Talens y Paloma Valverde. <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=89853>

Paes de Barros, Ricardo; De Carvalho, Mirela; Franco, Samuel (2006). *Pobreza Rural en Honduras: Magnitud y Determinantes 2006*. Tegucigalpa, PNUD, Honduras.

- Palacios Romero, Francisco (2009). *Argumentos de derecho constitucional primario para una oligarquía golpista primaria*. Universidad de Saragoza, España.
- Salomón, Leticia (1998). *El Buen Gobierno*. Centro de Documentación de Honduras. Tegucigalpa, Honduras.
- Salomón, Leticia (1998) Honduras: Cultura Política y Democracia. Centro de Documentación de Honduras. Tegucigalpa, Honduras.
- Salomón, Leticia (2009). *El Golpe de Estado en Honduras: Caracterización, Evolución y Perspectivas*. 4 jul 2009. <http://www.otromundoesposible.com/?p=3393>
- Salomón, Leticia. (2009). *El Golpe de Estado. El Contexto crítico de la Democracia*. Agencia latinoamericana de Información. América Latina en Movimiento. 2009/07/14. <http://alainet.org/active/31692>
- Semán, Ernesto (2009). *La Embajada de EE.UU. en Honduras; su rol en el golpe de Estado*. Ciencias Sociales Hoy – Weblog. <http://aquevedo.wordpress.com/2009/07/12/ee-uu-su-embajada-y-el-golpe-de-estado-en-honduras/>
- Tribunal Supremo Electoral (1985-2005). *Estadísticas Electorales*. Honduras.
- Wallerstein, Immanuel (2009). *La Derecha Contraataca*. Traducido por Manuel Talens y Paloma Valverde. Edición de Atenea Acevedo. www.machetera.wordpress.com y Tlaxcala.

LA DINÁMICA POLÍTICA EN NICARAGUA

Luis Serra Vázquez⁴⁷

Introducción

En este escrito, se presentan los principales rasgos del sistema político nicaragüense y la dinámica de los actores sociales y políticos en los últimos años, particularmente a partir del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las elecciones presidenciales del 2006. Se trata de brindar una información básica de la realidad socio-política y de las posiciones de sus principales actores para ayudar al lector a comprender las contradicciones y las tendencias planteadas actualmente en el país, sin pretender realizar una evaluación integral de la gestión gubernamental o del desempeño de otros actores políticos y sociales.

En una primera parte, se exponen los rasgos distintivos del estado nicaragüense establecidos en la Constitución Política, y su aplicación real por las fuerzas políticas que han dirigido las instituciones estatales. El segundo apartado presenta a los partidos políticos como actores claves de la gobernabilidad y el desarrollo nacional, especialmente los partidos mayoritarios que hace una década establecieron un acuerdo que ha limitado la “transición democrática” en el país hasta el presente.

La cultura política se aborda en el siguiente ítem, ya que nos permite comprender la conducta de los actores políticos y de los ciudadanos; en resumen, observamos la confrontación de elementos culturales tradicionales (caudillismo, autoritarismo, corrupción, clientelismo) con nuevas for-

⁴⁷ El prof. Luis Serra es doctor en Sociología por la Universidad de Lovaina y coordina actualmente el estudio “Índice de Sociedad Civil en Nicaragua” con la Red Nicaraguense por la Democracia y el Desarrollo Local. Correo electrónico: luisbectorserra@yahoo.com.ar

mas de una cultura democrática (participación ciudadana, equidad de género, etnia y generacional, redes horizontales).

El cuarto apartado presenta los indicadores socio-económicos básicos del país, que reflejan la débil estructura productiva, la dinámica de población, la problemática de salud y la situación de pobreza que afecta a la mayoría de la población. El último apartado aborda las relaciones entre las organizaciones de sociedad civil con las instituciones estatales y partidos políticos en los últimos años, en particular durante el actual gobierno que ha impulsado un sistema de consejos de poder ciudadana como interlocutores de la sociedad civil con el gobierno. En las conclusiones, se plantean algunas reflexiones y pistas de investigación futura sobre la dinámica política del país.

1. El Estado Nicaragüense

La sociedad política en Nicaragua de inicios del siglo XXI es el producto histórico de las transformaciones ocurridas a partir del fin de la dictadura somocista que rigió el país durante 44 años (1936-1979). El triunfo de la revolución sandinista (19 julio 1979) abrió una década de profundos cambios en la distribución de las riquezas, la participación ciudadana y la organización estatal. Luego de un amplio proceso de consultas, se aprobó en 1987 una nueva Constitución Política que definía al Estado como una república democrática, participativa y representativa. Es decir, que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce de forma indirecta por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal entre los candidatos propuestos por los partidos políticos, y de forma directa en las diversas instancias de participación ciudadana establecidas en el ámbito local, departamental, regional y nacional.

Desde 1990, se han realizado procesos electorales con amplia participación ciudadana y supervisión internacional, que permitieron la selección pacífica de los sucesivos gobiernos hasta las elecciones municipales del 2008, empañadas por la proscripción de dos partidos políticos y el fraude electoral comprobado en 46 municipios (IPADE 2009).

La constitución establece que los órganos de gobierno central son los siguientes: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Electoral. Al igual que el resto de países de la región, Nicaragua tiene un régimen de carácter presidencialista, es decir, que el Poder Ejecutivo concentra las principales atribuciones siendo su Presidente, electo de forma directa cada 5 años, al mismo tiempo, Jefe de Estado, Jefe de Go-

bierno y Jefe del Ejército. Sus atribuciones principales son el cumplimiento de la constitución y las leyes, representar a la nación, dirigir la economía del país y las relaciones internacionales, nombrar los ministros y embajadores, dictar decretos ejecutivos en materia administrativa; tiene la facultad de iniciativa de ley y el derecho al veto, propone a la Asamblea candidatos para otros poderes del estado.

El amplio poder del ejecutivo ha sido reducido en las reformas constitucionales de 1995 que otorgaron a la asamblea la decisión sobre el presupuesto anual, los tratados internacionales y la exclusividad de la función legislativa, además de prohibir la reelección inmediata del presidente o sus parientes cercanos o ministros de gobierno. Las reformas del 2000 establecieron el dominio bipartidista entre el Frente Sandinista (FSLN) liderado por Daniel Ortega y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) dirigido por Arnoldo Alemán vía cambios en las normas electorales, la inmunidad de funcionarios, la distribución de cargos en el Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia y Contraloría General. Las últimas reformas (2005) ampliaron las facultades de la asamblea y desataron una grave crisis política resuelta gracias a la mediación de la OEA.

El Poder Legislativo lo ejerce la Asamblea Nacional compuesta por 90 diputados, electos de forma directa cada 5 años, más 2 diputaciones acordadas por el pacto FSLN-PLC, otorgadas al ex presidente y ex vicepresidente. La Asamblea tiene las funciones de elaborar y aprobar las leyes y decretos, otorgar la personalidad jurídica de las asociaciones civiles, solicitar informes a ministros, aprobar el presupuesto general y conocer su ejecución, aprobar impuestos, elegir miembros de otros poderes: la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y el Fiscal General.

El Poder Judicial está dirigido por la Corte Suprema de Justicia compuesto por 16 magistrados electos por la Asamblea Nacional (5 años) que tiene las funciones de organizar y dirigir la administración de Justicia, nombrar a los jueces, autorizar a notarios y abogados, conocer y resolver los recursos de amparo por inconstitucionalidad, así como los conflictos y las competencias entre los poderes de Estado, entre municipios, regiones autónomas y gobierno central. La participación ciudadana está contemplada en la integración de los jurados de conciencia en el nuevo procedimiento penal de carácter oral y público.

Al Poder Electoral le corresponde la organización de las elecciones, plebiscitos y referendos, así como el Registro Civil de las personas, la cedu-

lación ciudadana y el Padrón Electoral. Está dirigido por el Consejo Supremo Electoral compuesto por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional por 5 años, con las funciones de dirigir las elecciones, nombrar a miembros de Consejos Departamentales o Regionales, otorgar personería a partidos políticos y resolver los conflictos que surjan, organizar el registro civil, la cedulação y el padrón electoral. Las últimas reformas electorales (1999) establecieron que la composición de estos órganos del Poder Electoral sea decidida por los partidos políticos mayoritarios (PLC y FSLN), restando credibilidad a la actuación del poder electoral; así, en distintos casos de impugnaciones planteadas en las sucesivas elecciones realizadas en esta década, los órganos electorales han fallado a favor de estos dos partidos.

La división político-administrativa del país establece instancias territoriales dotadas de Autonomía, como los 153 Municipios y las dos Regiones Autónomas (Norte y Sur) de la Costa Caribe⁴⁸. También existen los Departamentos (17) como unidades de división territorial, carentes de poder político-administrativo, salvo las competencias delegadas a filiales de ministerios y entes autónomos. Es decir, que en la organización territorial del estado nicaragüense encontramos básicamente dos niveles: central y municipal, salvo en la Costa Caribe con los gobiernos regionales del Norte y Sur que gozan de cierta autonomía.

Durante los 90s, se observa una tendencia de fortalecimiento de la autonomía municipal promovida por actores nacionales como las Asociaciones de Municipios, la Red por la Democracia y el Desarrollo Local, con apoyo de instituciones estatales como el Instituto de Fomento Municipal y organismos de cooperación internacional. La situación ha cambiado a partir de la recentralización nacional de las instituciones estatales dependientes del Poder Ejecutivo luego que asume el FSLN el gobierno en 2007, incluyendo la subordinación de los municipios a los planes nacionales y la participación de los Comités/Gabinetes de Poder Ciudadano en la ejecución de programas sociales y económicos.

2. Los partidos políticos

En Nicaragua, los partidos políticos se han caracterizado por su débil institucionalidad, su organización vertical bajo caudillos carismáticos que oscilan entre el enfrentamiento y los pactos, destacándose la actividad par-

⁴⁸ Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley N° 28-1987)

tidaria en coyunturas electorales a fin de obtener votos para alcanzar cargos en un estado que visualizan como fuente de ganancias y de poder. Es notoria la debilidad programática y el eclecticismo ideológico de los partidos políticos, así como el predominio de una cultura pragmática y oportunista en la conducta de la élite política frente a los actores sociales y las fuerzas de la globalización. Los partidos políticos han menospreciado la promoción de la participación ciudadana en la gestión pública y la concertación con las organizaciones civiles, a quienes visualizan como competidoras en la representación de demandas ciudadanas y de quienes temen su fiscalización crítica⁴⁹.

Históricamente ha predominado un sistema bipartidista desde el siglo XIX, donde competían el partido liberal y el conservador hasta los años 80s cuando la revolución sandinista cambió el sistema político. A partir de 1990, ha surgido un nuevo bipartidismo en las elecciones nacionales entre dos fuerzas políticas del país que han concentrado los votos ciudadanos: por un lado, el FSLN ha mantenido la adhesión firme de un sector importante de la ciudadanía (42% en elecciones nacionales 2001 y 38% en el 2006⁵⁰) y, por otro lado, una coalición de agrupaciones antisandinistas lideradas en 1990 por Violeta Chamorro y por el Partido Liberal Constitucionalista en las elecciones del 1996 y del 2001 (56% votos en 2001). Este escenario bipolar de sandinistas vs. antisandinistas ha cambiado en las últimas elecciones nacionales del 2006 donde encontramos cinco fuerzas políticas compitiendo en las elecciones nacionales de presidente y diputados: el sector liberal dividido entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) liderada por Monte alegre; el sector sandinista también dividido entre el FSLN y el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), y el quinto competidor ha sido el minúsculo Partido Alianza Cristiana (AC).

Los resultados le otorgaron la victoria al FSLN para la presidencia en la primera vuelta con un reducido 38% de los votos válidos –gracias a la división de la oposición y al pacto FSLN-PLC de 1999 que permitía ganar con el 35% de los votos–, seguido por la Alianza Liberal Nicaragüense con 28%, luego el PLC con 27%; seguía el Movimiento Renovador Sandinista con 6% y por ultimo Acción Cristiana con 0.30%. Se mantuvo el predominio masculino en la Asamblea: hay sólo 17 mujeres diputadas, de las cuales

⁴⁹ Guzmán L.H., *La representación política en Nicaragua*, Managua, FNG, 2004.

⁵⁰ En alianza con otras fuerzas políticas minoritarias como por ejemplo el Partido Social Cristiano.

12 son del FSLN. En la Asamblea Nacional, estas elecciones rompieron el bipartidismo que imperaba desde 1996 entre PLC-FSLN, al abrir el juego a 4 fuerzas políticas que luego han sufrido subdivisiones y reagrupamientos, lo que permitía un contrapeso al poder ejecutivo, ya que el FSLN con 38 diputados no alcanza la mayoría⁵¹.

Entre las limitantes observadas en el sistema de partidos, se destaca el sistema actual de nombramiento de candidatos para las votaciones; por un lado, se carece de un proceso de elecciones primarias democráticas a lo interno de los partidos, y por otro lado, los candidatos son presentados a los electores en listas cerradas escogidas por la dirigencia partidaria. Se ha eliminado la opción de candidatos municipales o regionales que no pertenecen a un partido político sino que son propuestos por organizaciones civiles. Estos elementos fortalecen la concentración del poder en una cúpula partidaria, las relaciones de lealtad personal basadas en clientelismo político y la falta de rendición de cuentas con los electores (Guadamuz 2006).

Los conflictos entre poderes del estado han sido muchas veces una fachada de pugnas de poder entre caudillos y partidos; la proliferación de estos conflictos en los últimos años ha llevado a una grave crisis institucional. Por estas razones, desde la perspectiva de la Coordinadora Civil (CC), Iván García ha señalado “la necesidad de un estado con poderes más independientes y respetuosos entre sí, a su vez que esos poderes del estado tengan espacios verdaderos de relación con la sociedad civil” (Serra 2008: 67).

3. La cultura política en Nicaragua: elites y mayorías

Para comprender el funcionamiento del sistema político es preciso referirnos, siquiera brevemente a la cultura política prevaleciente en Nicaragua, especialmente la que predomina entre la élite dirigente del país. El politólogo E. Álvarez Montalbán ha definido la cultura política como la “posición o actitud que determinado grupo social adopta y expresa sobre asuntos relacionados con la política” (Montalvan 2000: 70) y ha considerado que Nicaragua atraviesa una transición de una sociedad tradicional oligárquica hacia una sociedad democrática, observándose un panorama heterogéneo de valores y concepciones, predominando en las élites una cultura política caracterizada históricamente por los siguientes rasgos:

⁵¹ 22 diputados de Alianza Liberal, 25 Partido Liberal, 3 Movimiento Renovador Sandinista y 3 votos flotantes

- El autoritarismo en el ejercicio poder concentrado en caudillos.
- La intolerancia política y la violencia que se alternan con los pactos entre caudillos.
- El nepotismo, amiguismo y el compadrazgo en las instituciones estatales
- El patrimonialismo y corrupción en el manejo de bienes públicos.
- El cortoplacismo y la improvisación política.

Indudablemente que la cultura política que ha predominado históricamente entre las élites partidarias ha compartido esos valores y concepciones opuestos a los requeridos en un sistema democrático que promueva la gestión pública eficaz y transparente así como la participación ciudadana en las políticas públicas. Es justo reconocer que también la historia del país muestra ejemplos de líderes portadores de estos valores democráticos y éticos entre los que se destacan en el siglo XX, Augusto César Sandino y P. Joaquín Chamorro, además de movimientos sociales y organizaciones civiles que han promovido una cultura democrática.

Diversos estudios han encontrado rasgos diferenciados entre la cultura política de las mayorías respecto de los valores y concepciones de las élites en Nicaragua, así como una heterogeneidad de subculturas diferenciadas por grupos étnicos, generacionales y de género (Montenegro y Cuadra, 2001; PNUD, 2005). Esto es comprensible si consideramos que una (sub) cultura política es un proceso dinámico de construcción o reproducción realizado por los actores sociales y políticos conforme sus intereses y el contexto.

A manera de ilustración mencionamos una encuesta a nivel nacional realizada en 2004 sobre el tema de las reformas al sistema electoral que han planteado en los últimos años la mayoría de las OSC para permitir un pluralismo político y fortalecer la transparencia y neutralidad de las instituciones electorales (Serra 2004). Observamos que, mientras los líderes de los partidos políticos en el poder se han opuesto sistemáticamente a estas reformas, la mayoría de los ciudadanos encuestados muestran un alto nivel de aprobación a nominar localmente los candidatos a diputados (contrariamente a listas cerradas nominadas por caudillos), que organizaciones civiles puedan plantear candidatos a Concejales y Alcalde (como existió antes de las reformas del 2000), a favor del aumento de mujeres en la

asamblea nacional; por el contrario rechazan el manejo de fondos discretionales por parte de los diputados⁵².

Diversas organizaciones civiles llevan años trabajando en la construcción de una nueva cultura política que enfatice la participación ciudadana en los asuntos públicos de forma equitativa (entre hombres/mujeres, adultos/jóvenes/niños y distintos grupos étnicos), que promueva los valores de respeto, solidaridad y responsabilidad y que busque el diálogo y la concertación inter-institucional en espacios de gobernanza que permitan enfrentar los graves problemas que afectan a la población. Como señalan Cohen y Arato, “para preservar el espíritu democrático se requiere el establecimiento y la creación, en el nivel de la estructura constitucional y de la cultura política, de un papel activo de las iniciativas de la sociedad civil (Cohen y Arato, 2000: 502). Sin embargo, este proceso enfrenta obstáculos fuertes por parte de actores políticos tradicionales que ven amenazadas sus fuentes de poder.

4. Situación socio-económica

La economía nicaragüense se caracteriza por una estructura productiva atrasada tecnológicamente, con un predominio de actividades primarias de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería (22% PIB); un sector manufacturero dominado por la agroindustria y la maquila textilera (20% PIB), un amplio sector terciario de servicios personales y comercio informal (47% PIB), y sectores reducidos en construcción (4% PIB) y administración pública (7% PIB). La tasa de crecimiento de la economía nacional ha sido de 2.6% del PIB en los últimos tres años. (Solá M. 2008).

La situación económica que experimenta Nicaragua en la actualidad se caracteriza por profundos desequilibrios provocados por un elevado déficit fiscal, un limitado Producto Interno Bruto (US\$ 4,135 mill PIB nominal) que sólo cubre una mitad de la demanda global y un fuerte déficit en la balanza comercial (US\$1,733). Esta brecha externa ha sido cubierta por las remesas internacionales de trabajadores nicaragüenses (estimada en US\$800 millones anuales), sumado a la ayuda externa (US\$550 mill anual promedio hasta 2008) por parte de organismos donantes e instituciones financieras internacionales, hasta su recorte drástico luego de las elecciones municipales.

⁵² Durante el gobierno de Alemán (1996-2001) se acordó que cada diputado recibe una asignación presupuestaria anual de unos C\$400,000 para uso discrecional en supuestos proyectos sociales, lo cual reproduce el clientelismo político y desvía fondos que reclaman las Alcaldías para sus planes de desarrollo municipal.

En la región centroamericana, Nicaragua es el país que tiene el PIB más bajo y los más altos índices de pobreza, como podemos observar en el siguiente cuadro:

Cuadro 1
Indicadores de Pobreza en Centroamérica

País	PIB per cápita(U\$) 2005	Pobreza (% \$2 día)	Pobreza Extrema (% \$1 día)	% Población Desnutrida
Panamá	4630	17.1	6.5	25
Costa Rica	4590	7.5	2.2	4
El Salvador	2450	40.6	19.0	10
Guatemala	2400	31.9	13.5	23
Honduras	1190	44.0	20.7	22
Nicaragua	910	75.8	39.4	27

Fuente: Estado de la Región 2008

Otros indicadores sociales nos muestran que un 44% de la población del país viven en condiciones de hacinamiento en sus viviendas, un 32% ciento no tienen acceso al agua potable, 47% por ciento no disponen del servicio de la energía eléctrica. El deterioro de los indicadores de educación, salud e ingresos ha significado que Nicaragua ha descendido en el Índice de Desarrollo Humano al puesto 121 de 185 países del mundo.

La situación de pobreza afecta a la mayoría de la población nicaragüense que oscila entre un 48.3% (incluyendo 17.2% en extrema pobreza), según las cifras oficiales basadas en el método de “agregado de consumo”, y asciende a un 65.9% de la población (incluyendo 36.8% en extrema pobreza), según resultados basados en el método de “necesidades básicas insatisfechas” (NBI). La pobreza presenta una mayor incidencia en las zonas rurales que en las urbanas, y afecta particularmente a los grupos sociales de mujeres, niños e indígenas. En la zona rural, el 60.7% de la población viven con menos de un dólar al día y 91.9% de la población del campo sobrevive con menos de dos dólares. La región Central Rural y el Atlántico Rural muestran las proporciones más altas de población en pobreza extrema (Gobierno de Nicaragua, PNDH 2008).

Los hogares en situación de pobreza extrema presentan indicadores superiores al promedio nacional, por ejemplo el nivel de escolaridad (2.7 años), la tasa de mortalidad infantil (50 por 1000 niños), la tasa de subem-

pleo (57.5%); además, padecen un acceso limitado a servicios de agua potable (26.5%), saneamiento (53%) y energía eléctrica (32.3%). Los hogares en pobreza extrema tienen en promedio siete miembros (tres más que las familias no pobres), de los cuales tres son niños menores de 13 años. Los hogares pobres extremos presentan un mayor hacinamiento, residen en viviendas construidas con materiales precarios y más de un tercio no poseen título legal de propiedad de su casa (Gobierno de Nicaragua, PNDH 2008).

La población total de Nicaragua se estima en 5,743,000 en 2009, con una tasa de crecimiento anual de 1.3% y una esperanza de vida de 63 años; un 57% habita en zonas urbanas, es decir, que casi la mitad de la población vive en zonas rurales (OPS 2009). La tasa global de fecundidad es de 2.7 hijos por mujer, mayor en el campo (3.5) que en las ciudades (2.2). Nicaragua posee la tasa de embarazo adolescente más alto del continente; una quinta parte de las jóvenes entre 15-19 años han tenido al menos un hijo. Las mujeres en pobreza extrema tienen en promedio el doble del número de hijos que las mujeres no pobres, lo que plantea el difícil reto de atender las necesidades básicas de esos niños con los escasos recursos disponibles, particularmente en el caso de hogares dirigidos por mujeres debido al abandono paterno de sus responsabilidades (MINSA, ENDESA 2007).

La inseguridad ciudadana ha crecido en los últimos años, particularmente los delitos contra la propiedad y la violencia personal, especialmente contra las mujeres. Según una encuesta nacional realizada sobre este tema, en mayo 2008 un 29.7% de la población declaró haber sido víctima de un delito en el último año y medio. Al mismo tiempo, ha crecido la desconfianza de la población en las instituciones que deben atender esta problemática, como son la política y los tribunales de justicia. (Perspectivas N°31 Abril 2009)

El desempleo abierto alcanza un 12% de la población económicamente activa; sumada un 36% en situación de subempleo, significa que la mitad de la población carece de un empleo estable, tiempo completo y con un ingreso justo. Las mujeres participan en el mercado de trabajo en menor medida que los hombres, siendo mayor la participación femenina en las zonas urbanas. Sus ingresos laborales son inferiores (14%) al promedio medio nacional y a la remuneración media que tienen los hombres (en 21%) (Trejos 2006).

En este contexto, la emigración a Costa Rica, El Salvador, Guatemala o EE.UU. aparece como la mejor opción para tener un empleo remunerado; se calculaba en 2005 que había 732,000 nicaragüenses que vivían y trabaja-

ban fuera del país, muchos de ellos jóvenes y con un nivel educativo superior al promedio nacional. Estos emigrantes aportan en remesas unos U\$800 millones anuales para la sobrevivencia de sus familias; un 22% de los hogares nicaragüenses reciben remesas del exterior que destinan en un 85% para gastos básicos de alimentación, vestuario, salud, vivienda y educación. Por otro lado, se han manifestado efectos negativos de la migración en términos de la desintegración familiar, la discriminación xenofóbica y la violación de derechos laborales y humanos en los países receptores. (Crawnshaw 2007, Baumeister 2008).

Un sector económico de rápido crecimiento en las últimas décadas han sido las inversiones en maquilas, aprovechando los salarios más bajos de la región (U\$0.70 la hora en Nicaragua) y los beneficios fiscales (exención de impuestos municipales, de renta, valor agregado y sobre importaciones de equipos o materia prima). En Nicaragua, había 111 empresas en 12 departamentos del país en 2007 dedicados principalmente al vestuario (71 empresas), tabaco (10), arnés automotriz (6). Los capitales son de distintos orígenes: Corea, USA, Taiwán, Nicaragua, México (Sola Montserrat 2008). El sector maquila daba empleo directo a 75 mil personas en 2007 y empleos indirectos a 225 mil. Sin embargo, la crisis económica contrajo la demanda en USA, provocando el cierre de varias empresas y el despido de miles trabajadores en 2008-09.

5. Políticas Económicas y Sociales

La derrota electoral del FSLN en 1990 inició un período de 16 años de gobiernos neoliberales que han producido profundos cambios en el estado y en la sociedad civil. Las políticas de ajuste estructural impuestas en esa década por el FMI/BM en el marco del “Consenso de Washington” significaron la reducción del aparato estatal para convertirlo en un facilitador de las fuerzas del mercado global y un promotor de la estabilidad macroeconómica, la desregulación de la economía y el fomento de la inversión extranjera.

El proceso de privatización sin controles de los servicios públicos de transporte, telecomunicaciones, energía, educación, salud, bancos y de todas las empresas estatales fue en beneficio de grandes empresas nacionales y extranjeras. La eliminación de la banca de fomento afectó a los pequeños productores del campo al mismo tiempo que la apertura comercial permitía la libre importación de productos agropecuarios subsidiados en los países del Norte, afectando la seguridad alimentaria del país que se vio

obligado a importar alimentos. La falta de control estatal sobre la banca privada se evidenció con la quiebra fraudulenta de seis bancos a fines de los 90, cuyas deudas fueron asumidas por el gobierno lo que multiplicó la deuda interna en U\$600 millones con operaciones ilícitas que beneficiaron a un reducido grupo financiero. En consecuencia, el desempleo abierto creció al 23.5% de la PEA para 1995, y la población en situación de pobreza alcanzó al 75% de los nicaragüenses.

En todos los países de Centroamérica se observa en los 90s una concentración de capitales a partir de la integración de las grandes empresas que aprovecharon la estabilidad política de la postguerra, los acuerdos de libre comercio (CAFTA), la privatización de servicios públicos, la demanda derivada de las remesas familiares (Segovia 2005). En Nicaragua, se reconstruyeron los grupos empresariales nicaragüenses que habían trasladado sus inversiones afuera del país en la década revolucionaria de los ochenta. Un mecanismo clave de enriquecimiento ha sido la apropiación de concesiones monopólicas de servicios públicos y la privatización de empresas mediante tráfico de influencias, como señala una investigación: “así se gesta un nuevo modelo neoliberal sustentado en la migración, las remesas familiares, el comercio importador, los oligopolios en el sector financiero y la monopolización de los servicios públicos...un régimen tributario regresivo” (Mayorga 2007:146-7).

La concentración de capitales se ha acelerado en Nicaragua durante las últimas dos décadas bajo el control de cinco poderosos grupos financieros (BANPRO, BANCENTRO, BAC, BANCO UNO, BDF) que en 2005 poseían el 92% de los activos del sistema financiero nacional. “Estas ganancias de capital están haciendo emerger una minúscula pero poderosa clase social, posiblemente una docena de individuos, con capitales personales de centenares de millones de dólares” (Mayorga 2007: 125). Esta es la contracara del proceso de empobrecimiento de las grandes mayorías de nicaragüenses, al amparo de un estado facilitador de un mercado controlado por poderosos grupos financieros.

Las políticas gubernamentales de A. Alemán y E. Bolaños para el combate a la pobreza (ERCERP-PND) implementadas a partir de la condonación en 2001 de la deuda externa con la “Iniciativa de Países Altamente Endeudados” no lograron reducir los niveles de pobreza. La falta de participación de actores sociales y económicos afectó la legitimidad y la validez de estas políticas anti-pobreza, como señala un estudio: “La ERCERP y el PND no cumplieron con la expectativas de sus creadores por la falta de una incor-

poración y participación de los agentes económicos así como la ausencia de un respaldo político en la Asamblea nacional debido al distanciamiento entre ambos poderes (Ejecutivo y Legislativo), situación que provocó en gran parte el fracaso de ambas estrategias” (Roque y Cuadra 2007:25).

Por otro lado, la carencia de un enfoque de género ha reducido sus beneficios al sector más vulnerable de la población nicaragüense que son las mujeres junto con niños e indígenas (Quiroz et.al 2003:204). Otro factor ha sido el insuficiente financiamiento de los programas anti-pobreza debido a la priorización del pago de la deuda interna, como señala el economista Néstor Avendaño: “Durante el período 2002-06, el monto total del alivio HIPC otorgado por los países miembros del Club de Paris y las instituciones financieras internacionales sumó U\$1.048 millones...sólo se asignaron U\$460 millones (43.8%) al gasto de reducción de la pobreza...” (Avendaño 2007: 77). El grueso de esa suma fue destinado al pago de la deuda interna del gobierno originada en las confiscaciones de los ochenta, liquidaciones bancarias y venta de títulos valores de dudosa legalidad a fines de los noventas.

El Gobierno actual (2007-2011) del FSLN ha elaborado un Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2008-2012) que propone un nuevo modelo llamado “Poder Ciudadano” basado en los principios de inclusión y equidad social, armonía con la naturaleza, soberanía nacional y alineamiento de la cooperación externa a las prioridades del país. La visión a largo plazo que plantea el PNDH es el desarrollo humano, y el crecimiento económico sostenido y la reducción de la pobreza (Gobierno de Nicaragua 2008).

El plan señala como los principales factores determinantes de la reproducción de la pobreza en el país al sistema capitalista global, las políticas neoliberales impulsadas entre 1990-2006 y la estructura de poder oligárquico en Nicaragua. Sin embargo, este plan de gobierno plantea explícitamente una continuidad de las políticas macro-económicas como la estabilidad macroeconómica, las políticas monetaria, cambiaria y fiscal, la garantía a la propiedad privada, el respeto a las reglas de juego de la economía de mercado, un clima para atraer la inversión nacional y extranjera, el pago de la cuestionada deuda interna, además de mantener los acuerdos comerciales existentes como el Tratado de Libre Comercio con EEUU y Centroamérica (Perspectivas N°29, Feb. 2009).

Los ejes centrales del PNDH son los siguientes:

- Servicios públicos accesibles a los pobres: educación y salud gratuita, subsidios en los servicios de agua, electricidad y transporte público
- La complementariedad entre los ámbitos local, nacional y regional en el marco del ALBA⁵³
- Fomentar la asociatividad entre los micros, pequeño y medianos productores a fin de fortalecer su capacidad de gestión y productividad.
- Creación de los Comités de Poder Ciudadano (CPC) como instancias de participación y toma de decisiones por el pueblo.
- El comercio justo basado en precios satisfactorios para el productor, el consumidor y el distribuidor
- El consumo y el desarrollo deben estar en armonía con el medio ambiente que debe ser protegido.
- Expansión de la capacidad nacional de generación de energías alternativas.
- Promover la soberanía y la seguridad alimentaria.
- Mantener la estabilidad macroeconómica y el clima de inversiones para las empresas nacionales y extranjeras.

Estas políticas públicas del PNDH se expresan a través de programas específicos, entre los cuales se han comenzado a implementar desde el 2007 los siguientes:

- Fortalecimiento de los CPC en barrios urbanos y comarcas rurales de todo el país, así como en instituciones públicas como interlocutores privilegiados entre la sociedad civil y el estado.
- Programa de la merienda escolar que beneficia a niños de escuelas primarias con apoyo de la cooperación internacional (PMA)
- Programa Hambre Cero que consiste en la entrega de un “bono productivo”⁵⁴ a 75,000 mujeres campesinas pobres en 5 años con el objetivo de ampliar la producción de alimentos y la nutrición de estas familias.

⁵³ Alianza Bolivariana de las Américas impulsada por el Presidente Hugo Chávez de Venezuela.

⁵⁴ El bono incluye 5 gallinas, 1 gallo, 1 cerda y 1 vaca preñadas, alimentos, materiales para construir un gallinero y una porqueriza, biodigestor, semillas de hortalizas y árboles frutales.

- Programa Usura Cero que consiste en micro créditos a mujeres organizadas en “grupos solidarios” para aportar capital de trabajo en actividades económicas.
- Programa de semillas mejoradas de maíz y frijol para siembra de los agricultores.
- Programas de apoyo financiero y técnico a las pequeñas empresas y cooperativas.
- Subsidios de combustible al transporte público de Managua.
- Fortalecimiento de la empresa estatal ENABAS para el acopio y distribución de alimentos a precios accesibles.
- Programa dirigido a promover los derechos de los niños y las niñas.

Según Orlando Núñez, asesor presidencial, el Programa Hambre Cero ha beneficiado a 33,000 familias a Julio 2009 y, sumado a otras acciones dirigidas a sectores campesinos –semillas mejoradas, fertilizantes baratos, títulos de propiedad, banco de fomento–, permite que el país tenga garantizada la soberanía alimentaria además de contribuir a disminuir la inflación de la canasta básica y aportar a la exportación hacia otros mercados (Espinoza, Agosto 2009). Las acciones de combate a la pobreza que impulsa el gobierno nacional han sido bien recibidas por la población pobre que ha sido marginada por los gobiernos anteriores. Sin embargo, se ha criticado la selección de beneficiarios basada en criterios partidarios y la falta de asistencia técnica y seguimiento en los programas de crédito revolvente “Hambre 0” y “Usura 0” (FIAN 2008).

En el sector educativo, se destacan las políticas de gratuidad de la educación pública, la merienda escolar para disminuir la deserción y aumentar el rendimiento, la consulta para una reforma curricular, los programas de formación de maestros empíricos y la campaña de alfabetización que disminuyó el analfabetismo del 20.7% al 4.7% según verificó una comisión de la UNESCO (Grisby 2009). Por otro lado, se ha criticado la insuficiente inversión pública en educación, la falta de información sobre la gestión educativa, la suspensión de la ley de participación educativa y la parálisis de las instancias de concertación con la sociedad civil (Grupo Promotor de Incidencia en Políticas Educativas 2008).

En el sector salud, también se han prohibido los cobros y servicios privados existentes antes en los hospitales públicos; ahora se promueve la desconcentración de los servicios de salud basado en un enfoque familiar y comunitario. La atención médica en zonas remotas del Caribe se ha mejo-

rado con la cooperación de brigadas de Cuba y otros países. Ha sido un éxito el programa para la operación de cataratas que beneficia especialmente a personas mayores con apoyo de Venezuela. Sin embargo, se ha señalado la carencia de medicinas e insumos y las deficiencias en la atención médica en algunos hospitales y centros de salud.

6. Las relaciones sociedad civil – estado

En las últimas décadas, las organizaciones civiles (OC) han multiplicado su número y su contribución al desarrollo del país en distintos ámbitos socioeconómicos y culturales, tanto en espacios urbanos como rurales, con un apoyo financiero y técnico de organizaciones civiles globales y agencias de cooperación. La diversidad multicultural que presentan las OC constituye su mayor riqueza al facilitar la participación ciudadana en función de sus intereses e identidades particulares. Entre las fortalezas de las OC nicaragüenses se destaca su contribución al desarrollo humano fundamentalmente a nivel local, la generación de empleos y la producción de bienes y servicios, la atención de demandas de sectores excluidos de las políticas públicas, la promoción de la participación ciudadana, el capital social y los derechos humanos, la incidencia en políticas y la auditoría del uso de recursos públicos, la articulación en redes temáticas a nivel nacional y regional (Serra 2008).

Las políticas neoliberales aplicadas desde 1990 generaron una fuerte respuesta de las organizaciones civiles y movimientos sociales. Un estudio sobre los conflictos ocurridos entre 1991 y 1997 identificó 2.156 acciones armadas, 546 tomas de tierra, 1.340 tomas de instalaciones, 818 manifestaciones, 351 huelgas y 405 alteraciones del orden (Cuadra et.al, 2005). En el campo, los principales conflictos estallaron en torno a las propiedades agrarias que eran reclamadas por antiguos dueños confiscados en los 80, por los beneficiarios de la reforma agraria sandinista y por los desmovilizados del ejército sandinista o de la “contra”. En las ciudades, se destacaron las luchas de los estudiantes universitarios por la entrega del 6% del presupuesto anual, los trabajadores en defensa del empleo y los derechos laborales, los pobladores por los cortes y las alzas de tarifas de agua y luz, los transportistas por un subsidio al combustible o un aumento de los pasajes. Sin embargo, las violentas protestas de los primeros años fueron decreciendo paulatinamente, a la par de las negociaciones que establecía el FSLN con el gobierno y del desgaste que producía en los movimientos

sociales la estrategia gubernamental de negociar acuerdos que no luego cumplían.

Una demanda histórica de las organizaciones civiles nicaragüenses ha sido establecer espacios de diálogo con las instituciones estatales para la elaboración y seguimiento de políticas públicas, así como para resolver conflictos de intereses. En 1999, las Organizaciones Civiles aglutinadas en la Coordinadora Civil por la Reconstrucción (CCR) lograron con respaldo del PNUD que se instalara el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES) como instancia de diálogo y consulta entre el estado y la sociedad civil prevista en la Constitución reformada en 1995. Otra instancia promovida por las organizaciones civiles ha sido el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES) como un foro de análisis y propuestas de políticas de desarrollo sostenible conforme los lineamientos de la Agenda 21. En 2001, el CONADES junto con el CONPES, implementaron un valioso proceso de diálogo entre OTS y Estado para consensuar líneas comunes de desarrollo que se plasmaron en el documento “Visión de Nación: la concertación de nuestro futuro”. En 2005, ambos entes organizaron un amplio proceso de consulta con las organizaciones civiles de los distintos departamentos y regiones del país para señalar los principales obstáculos al desarrollo y plantear las líneas de acción demandadas por la ciudadanía, que se plasmaron en un Plan Quinquenal 2007-2011, que fue ignorado por el gobierno actual, que desarticuló el CONPES para coparlo con sus organizaciones afines (CONPES 2006).

Luego de un arduo proceso de incidencia, las organizaciones civiles lograron la aprobación de la Ley de Participación Ciudadana (475-2003), que abre la oportunidad a las organizaciones de la sociedad civil de involucrarse en instancias municipales, departamentales, regionales y nacionales, a fin de contribuir a la formulación y seguimiento de políticas públicas tratando de articular los esfuerzos de los distintos actores sociales y políticos del país. Esta ley establece diversos espacios para el diálogo y la concertación entre el Estado y la Sociedad Civil:

- A nivel municipal: el Comité de Desarrollo Municipal,
- A nivel departamental y regional: los Comités de Desarrollo Departamental o Regional
- A nivel nacional: el Consejo de Planificación Económico y Social (CONPES) y las Comisiones Sectoriales (por ejemplo, Salud, Edu-

cación, Transporte, Trabajo, Ambiente, Turismo, Agraria, Juventud, Consumidores, Minería, Café)

Según la ley, el gobierno debe consultar a las organizaciones ciudadanas los proyectos de políticas públicas antes de aprobarlas, tanto de leyes a nivel nacional como de ordenanzas municipales. También el Estado debe brindar información pública a cualquier ciudadano u organización civil que lo solicite. Las Organizaciones Civiles pueden presentar a las autoridades estatales las inquietudes de la población y plantear propuestas constructivas de políticas públicas (leyes, ordenanzas, programas) que los funcionarios de gobierno deben tener en cuenta. Por ejemplo, a nivel municipal, todos los años la Alcaldía debe consultar su propuesta de Presupuesto Anual y Plan de Inversiones, y debe informar y rendir cuentas de su gestión municipal. También se han establecido instancias de consulta y concertación en los ámbitos de salud, educación, prevención de desastres mediante otras leyes aprobadas gracias a la incidencia de la sociedad civil⁵⁵.

Sin embargo, el gobierno actual (FSLN) ha creado una nueva forma de relaciones entre la Sociedad Civil y el Estado a través de los Consejos de Poder Ciudadano (CPC), que se forman a nivel local y municipal con militantes del partido, bajo la dirección nacional del Presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Este sistema organizativo fue aprobado por decreto presidencial luego de una fuerte disputa con la Asamblea nacional en la que intervino la Corte Suprema de Justicia declarando la legalidad de los CPC pero que no podían manejar fondos del presupuesto. En cada comunidad rural y barrio urbano, los CPC tienen un coordinador y deben conformar 16 comisiones de trabajo: Jóvenes, Mujer, Tercera Edad, Desarrollo Agropecuario, Medio Ambiente, Salud, Educación, Deporte, Cultura, Seguridad Ciudadana, Defensa del Consumidor, Transporte e Infraestructura, Promoción de Empleos, entre otras. También se ha orientado la conformación de un Gabinete de Poder Ciudadano a nivel municipal con la participación de las delegaciones del gobierno nacional, la Alcaldía y los coordinadores de los CPC comunales, donde se aborden asuntos de interés público.

Los promotores de los CPC consideran que han fracasado las formas tradicionales de participación ciudadana y, para superar sus limitantes, proponen una forma directa de democracia a través de los CPC; así lo

⁵⁵ Ley de Participación Educativa (N°413-2002), Ley General de Salud (N°423-2003), Ley de Régimen Presupuestario Municipal (376-2001).

explicó un líder del FSLN en Bonanza: “Los cabildos se volvieron una forma de que llegan, exponen; se fue y no pasó nada. Los concejos del poder ciudadano tienen una forma más eficiente, no es la democracia neoliberal que me das un voto y después yo no te conozco; es ejercer el poder desde su territorio, demandar, planificar, proponer, monitorear los programas y proyectos.”

Entre las actividades de los CPC se destaca la implementación de diversos programas del gobierno nacional (en gran parte, gracias a la cooperación venezolana) tales como el Programa Hambre Cero con mujeres del campo, el Programa Usura Cero con mujeres de la ciudad, el Programa de Alfabetización “Yo si puedo” con adultos iletrados, el Programa “Casas para el pueblo” con familias pobres, los puestos de venta de granos básicos con ENABAS. Los CPC mantienen estrecha relación con las delegaciones de ministerios e institutos del gobierno central y obtienen apoyo en sus gestiones para sus comunidades; en muchas instituciones de gobierno, se pide un “aval” de los CPC para realizar gestiones, todo lo cual afianza su convocatoria y legitimidad. Su crecimiento desde inicios del 2007 ha sido lento; una encuesta realizada a principios del 2009 identificó que hay una participación en los CPC entre 5 y 7% de la población, 81% de los cuales se identifican con el FSLN (Stuart 2009).

La valoración ambivalente de los CPC ha sido observada en varios estudios (Prado 2008, Red Local 2007), entre ellos, una encuesta nacional sobre cultura política arroja el siguiente resultado: “La gran mayoría de nicaragüenses han escuchado hablar de los CPC, pero muy pocos han asistido a sus reuniones. Un 33.8% piensa que son instrumentos para aumentar la participación de los ciudadanos, pero el 21.4% cree que son mecanismos para incrementar el control partidista y un 16.9% que son un mecanismo para vigilar a los ciudadanos” (Pérez y Seligson 2008: 23).

Este nuevo modelo ha creado confusión y tensiones con el sistema legal ya que se duplican las instancias de participación y se ignoran los espacios legales. Además, los CPC están bajo control partidario a diferencia de los espacios establecidos por ley que tienen un carácter pluralista porque participan distintas organizaciones sociales, productivas, religiosas y políticas. Un estudio reciente del Observatorio de Participación Ciudadana a nivel municipal muestra que hay “un avance gradual del nuevo modelo de participación ciudadana impulsado por el gobierno nacional a partir del 2007, especialmente en las Alcaldías lideradas por el FSLN y en las Delegaciones Ministeriales. Esto ha significado la creación de nuevas organizacio-

nes (CPC) y espacios de concertación (Gabinetes) que han afectado los espacios plurales previstos legalmente como los Comités de Desarrollo Municipal en dos sentidos: vaciando su función al crear una instancia paralela, o bien copando y controlando el espacio legal con sus organizaciones...” (Red Local 2008)

Las comunidades indígenas y afro descendientes del Caribe, no están de acuerdo en crear los CPC ya que tienen sus propias organizaciones tradicionales como la Asamblea Comunitaria, el Síndico, el Juez y el Consejo de Ancianos. Igualmente sucede en otras comunidades urbanas y rurales del país donde existen organizaciones locales que funcionan y tienen legitimidad, por ejemplo, comités comarcales, asociaciones de pobladores, comités de desarrollo comunal, comités de salud, cooperativas (Red Local 2009a).

Sin embargo, los CPC han sido efectivos en obtener beneficios de gobierno central a través de programas sociales y económicos, lo cual motiva a los ciudadanos pobres y desempleados a integrarse a este nuevo sistema. Es decir un tipo de participación condicionada en el marco de relaciones de clientelismo político, que son típicas de sociedades con altos niveles de pobreza y desigualdad como Nicaragua.

La polarización política agudizada por este gobierno ha fracturado la sociedad civil en tres grupos, por un lado las OC aliadas del FSLN como son los CPC, el Frente Nacional de los Trabajadores, el Movimiento Comunal, la Unión de Agricultores y Ganaderos y otras organizaciones; por otro lado, las OC que son autónomas del gobierno, que demandan participar en la incidencia y auditoría de políticas públicas, y que tienen posiciones críticas de algunas políticas que restringen la libre participación y organización ciudadana, entre ellas, se destaca la Coordinadora Civil que aglutina a 630 OC y redes del país. En la zona intermedia encontramos un sector amorfo de OC que tratan de mantener el equilibrio entre ambas posiciones, evitan tomar posiciones críticas del gobierno ya que no desean poner en riesgo su organización, y tienden a colaborar con las instituciones estatales y las OC sandinistas.

Las relaciones entre las organizaciones civiles autónomas y el gobierno sandinista se han deteriorado gravemente en los últimos años. Un aspecto crucial fue la ley de penalización del aborto terapéutico aprobada por la Asamblea Nacional ante la demanda de diversas iglesias en medio de la campaña presidencial en Octubre 2006, lo cual suscitó el rechazo del movimiento de mujeres y de las principales redes de organizaciones civiles. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomendó al

gobierno cumplir con los convenios internacionales sobre derechos humanos que Nicaragua ha firmado. Los efectos han sido trágicos para mujeres pobres que han muerto en los últimos 2 años por embarazos de alto riesgo ya que carecen de recursos para viajar fuera del país para operarse. Para frenar la campaña nacional e internacional del movimiento de mujeres nicaragüenses contra esta violación de los derechos de las mujeres, el gobierno intervino con la policía (octubre 2008) las oficinas del Movimiento Autónomo de Mujeres y acusó a 9 lideresas por asociación para delinquir y apología del delito de aborto (Amnistía Internacional 2009).

Otro tema controversial ha sido la labor que realizan muchas organizaciones civiles y medios de comunicación de fiscalización ciudadana de los recursos públicos y del desempeño de funcionarios; igualmente, la demanda de información sobre la gestión estatal que realizan a diario los periodistas con base a la Ley de Acceso a la Información Pública. Un estudio realizado en 2009 por la Fundación V. B. Chamorro en instituciones estatales sobre el acceso a información pública señala que sólo el 12.5% de las solicitudes fueron atendidas en tiempo y forma, como un indicador del secretismo que impera en las instituciones públicas desconociendo las leyes y manteniendo desinformados a los/as ciudadanos/as. Por ejemplo, se ha señalado reiteradamente la falta de transparencia con el manejo de la millonaria cooperación venezolana, que es administrada por ALBANISA, CARUNA y otras empresas privadas que son propiedad de FSLN.

Estos señalamientos han sido rechazados por el gobierno que ha impulsado una campaña de desprestigio de las organizaciones y medios de comunicación no alineados con el FSLN. Así, a inicios del 2009, ha elaborado una normativa para controlar los fondos de cooperación con organizaciones civiles donde se les prohíbe financiar acciones de incidencia política y apoyar a organizaciones que no tengan personería jurídica⁵⁶. También ha intervenido con la policía y la fiscalía algunas organizaciones civiles bajo acusaciones infundadas de lavado de dinero y otros delitos y, en otros casos, ha utilizado de forma selectiva mecanismos de control de estas organizaciones y medios a través de diversas instituciones estatales como el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de Impuestos.

Las contradicciones políticas se agudizaron en 2008 al cancelar la personería jurídica de partidos políticos que competían con el FSLN como el Movimiento Renovador Sandinista o que podía restar votos al PLC como

⁵⁶ La mayoría de las organizaciones civiles carecen de personería jurídica porque se requiere de una ley de la asamblea y significan gastos que pocas organizaciones pueden costear.

el Partido Conservador. Las marchas ciudadanas realizadas en junio y julio del 2008 con masiva participación de distintos sectores fueron las últimas permitidas por el gobierno ya que a partir de agosto de ese año entraron a funcionar fuerzas de choque para dispersar cualquier manifestación pública, y las rotondas de Managua fueron tomadas por grupos de “rezadores” contratados por el FSLN para orar por la paz, todo ello con la anuencia de la Policía bajo el control directo del señor presidente. Una excepción ha sido la marcha realizada el 21 de noviembre del 2009 promovida por organizaciones civiles y partidos de oposición en el aniversario del fraude electoral para reclamar el cambio de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, el respecto al marco constitucional y el rechazo a la reelección presidencial sucesiva.

El fraude realizado en 46 municipios por parte del FSLN (Noviembre 2008) –que ahora dirige 104 Alcaldías de 153 gracias al control del poder electoral– fue rechazado por los partidos políticos, la conferencia episcopal, la coordinadora civil y el consejo superior de la empresa privada, quienes pidieron un recuento de los votos y las actas.⁵⁷ La negativa de revisión electoral agudizó las contradicciones políticas en el país y generó el rechazo de varios gobiernos que cortaron sus programas de cooperación con el gobierno afectando las inversiones públicas y el presupuesto nacional. Frente a esta situación, diversas organizaciones han planteado la necesidad de una reforma del sistema electoral que incluya el cambio de los magistrados actuales y el nombramiento de personas honestas ajenas a los partidos políticos, la posibilidad de observación electoral nacional e internacional, la opción de las organizaciones civiles de presentar candidatos en elecciones municipales y regionales, entre otras reformas (IPADE 2009).

Por su parte, las redes y organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Civil que no fueron consultadas en la elaboración del Plan de Desarrollo del actual gobierno han elaborado una propuesta “La Nicaragua que Queremos 2007-2011”, donde plantean los objetivos principales para un desarrollo humano incluyente que se resumen en este párrafo:

“Se requiere que la riqueza producida en el país se distribuya en forma equitativa con enfoque de derechos para reducir al máximo las desigualdades existentes. Y que las políticas, planes, leyes y presupuestos beneficien en forma priorizada a los sectores más vulnerables del país, en particular, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, personas con capacidades

⁵⁷ Se desconocen los resultados finales de las elecciones nacionales del 2006 y las municipales del 2008.

diferentes, pueblos indígenas y grupos étnicos. Pero igual se requiere la democratización del poder y para ello la apertura de espacios y funcionamiento efectivo de instancias que aseguren la participación informada de la ciudadanía, de los organismos de sociedad civil en la definición, ejecución, auditoría y evaluación de las políticas públicas, leyes y presupuestos.”

Esta propuesta de la sociedad civil comparte con el plan gubernamental el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como la meta de un desarrollo humano sostenible, pero se diferencia claramente al plantear el respeto a las distintas expresiones de la sociedad civil y su participación en la definición y evaluación de políticas públicas a través de las instancias establecidas en la Ley de Participación Ciudadana.

La última sorpresa de ese año ocurrió el 19 de octubre 2009 cuando la Sala Constitucional de la Corte Suprema, en una reunión donde se excluyeron a magistrados liberales, emitió una sentencia que reconoce el planteamiento del Presidente Ortega y 104 Alcaldes de que sus derechos estaban afectados por la norma constitucional que prohíbe la reelección sucesiva a fin de poder postularse a la reelección de sus cargos. El Consejo Supremo Electoral aceptó de inmediato que el Presidente y los Alcaldes están habilitados para competir en las próximas elecciones. Este acto ha sido denunciado como un golpe de estado del presidente Ortega con el fin de perpetuarse en el poder, ya que la reforma a la constitución es potestad de la asamblea nacional y no del poder judicial. Sumado a este hecho, el gobierno propuso una reforma tributaria que ha generado rechazo porque incrementaría los impuestos a empresarios, obreros y jubilados. Sin embargo, las expresiones de rechazo no se han traducido en movilizaciones abiertas por temor a las fuerzas de choque pro gubernamental que controlan los espacios públicos.

El gobierno alega que el procedimiento judicial utilizado por los jueces del FSLN para permitir su reelección es legal y es necesaria la continuidad para implementar con éxito su programa revolucionario. Además, aclaran que ese mecanismo fue el mismo que realizaron los jueces del PLC a inicios del 2009 para aprobar el sobreseimiento definitivo al ex presidente Arnoldo Alemán sentenciado a 20 años de cárcel por apropiación de bienes públicos. También argumenta el FSLN que se mantiene la democracia y no se asegura la reelección de Ortega porque es el pueblo quien decidirá en las próximas elecciones sus próximas autoridades. A nivel regional del continente, hay experiencias similares como los casos de Oscar Arias en Costa Rica y Uribe en Colombia, además de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

La primera sorpresa del 2010 ha sido un decreto presidencial que ha decidido mantener en sus cargos a funcionarios de otros poderes del Estado (electoral, judicial, contraloría y procuraduría de derechos humanos) cuyo período vence próximamente y que aún no han sido nombrados por la asamblea Nacional. Con esta medida, el Presidente ha usurpado funciones que le competen a la Asamblea Nacional, la cual ha rechazado dicho decreto al igual que muchas organizaciones del país.

Reflexiones finales

Durante las últimas décadas, Nicaragua ha tratado de avanzar en un complejo proceso de democratización política, tanto en el ámbito representativo con procesos electorales periódicos como en la dimensión participativa con el creciente rol de las organizaciones civiles en políticas públicas; sin embargo, se observa una brecha considerable entre el marco jurídico del sistema político y la realidad donde ha prevalecido la voluntad de los grupos de poder.

Otros obstáculos encontrados en la democratización del país han sido la subcultura política verticalista, pragmática y excluyente que predomina entre los líderes políticos y el escaso tiempo de apropiación y ejercitación de la Ley de Participación Ciudadana (2003-06) por parte de las organizaciones y de las instancias de concertación. Por otra parte, están las limitantes en la ciudadanía derivadas de la situación de pobreza, la desinformación, el bajo nivel educativo combinado con una fuerte influencia de una ideología religiosa providencialista y fatalista.

En las últimas décadas, muchas organizaciones civiles han promovido los derechos humanos y la participación ciudadana en la gestión pública, en particular de grupos vulnerables como mujeres, niños e indígenas. Luego de arduas campañas se logró aprobar una serie de leyes para la democratización política, como la ley de participación ciudadana y la ley de acceso a la información pública, tratando de fortalecer los espacios de consulta y concertación con el estado. De forma paralela y contradictoria con este proceso democratizador, los principales partidos políticos (FSLN-PLC) pactaban la distribución de los poderes del estado y las reglas de juego electoral a su conveniencia. El desconocimiento del estado de derecho y la aplicación amañada de las leyes ha sido una tendencia histórica, en la cual se inscriben las acciones del actual gobierno tales como el fraude electoral en 46 municipios del país y la sentencia que permite la reelección presidencial.

Es decir, se observa un retroceso del proceso político democratizador, ya que están en cuestión actualmente las libertades de organización y expresión ciudadana, y la garantía de un proceso electoral competitivo, transparente y justo. El sistema político de poder ciudadano recuerda mucho el socialismo del siglo XX que pretendía construir el FSLN en los 80 bajo la dirección de una vanguardia que ordenaba al estado/partido y a las organizaciones de masas, modelo que colapsó con la URSS en 1989. Una investigación reciente concluye que “El modelo de poder ciudadano, similar al implementado en otros gobiernos (Venezuela, Bolivia, Libia) descansa en tres pilares entrelazados: gobierno, partido y grupos comunitarios, siendo el partido el factor dominante” (Stuart 2009: 10).

En el ámbito socio-económico, se observan avances con las actuales políticas de erradicación del analfabetismo, gratuidad de la educación y los servicios de salud, fomento de la autosuficiencia alimentaria a través de aumento de la producción campesina, combate a la extrema pobreza priorizando a las mujeres, apertura de mercados externos y fuentes de cooperación en el marco del ALBA. Las acciones políticas antes mencionadas han impactado la economía pero, en la medida que ha disminuido la cooperación internacional de USA y Europa, también ha bajado la inversión extranjera al aumentar “el riesgo país”. Estos factores agravan la crisis financiera mundial que ha impactado negativamente en el país al disminuir las exportaciones, las remesas, el turismo y la construcción; esto afecta la recolección de impuestos y el presupuesto nacional que ha debido recortarse 3 veces en 2009.

En conclusión, se avizoran dos escenarios futuros distintos: por un lado, la consolidación de un sistema político centralizado, excluyente y perpetuo, lo cual implica la exacerbación de las contradicciones del gobierno con los partidos opositores, organizaciones civiles autónomas, iglesias y empresarios, en un contexto de cierre de espacios legales de protesta y elección que parece repetir un triste ciclo histórico de violencia. Por otro lado, el gobierno trata de compaginar el combate a la pobreza y el desarrollo humano con el avance en el campo de los derechos ciudadanos y la democratización inclusiva del sistema político, lo cual facilitaría la concertación de recursos y esfuerzos de todos los actores antes mencionados, dejando de lado ideologías partidarias o religiosas, en la solución de problemas estructurales como la pobreza, la educación, el deterioro ambiental, en definitiva, el desarrollo humano sustentable de Nicaragua

Bibliografía

- Acevedo, Adolfo (2009). *Los salarios reales de los trabajadores ¿Cómo han evolucionado?* Boletín de Coordinadora Civil, Managua, 11 Febrero 2009
- Acosta, M. Luisa (2004). *Régimen legal de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua*. URACCAN, Managua.
- Amnistía Internacional (2009). *La escandalosa prohibición total del aborto en Nicaragua niega tratamiento que salva vidas de niñas y mujeres*. 27 Julio 2009. www.amnesty.org/es/news-and-updates/report/escandalosa-prohibici%C3%B3n-total-del-aborto-niega-tratamiento-2090727
- Avendaño, Néstor (2007). *El gobierno no tuvo capacidad para cambiar la política presupuestaria*. Revista Envío. No. 300 Marzo 2007, Managua, UCA.
- Barahona, Milagros (2006). *Familias, hogares, dinámica demográfica, vulnerabilidad y pobreza en Nicaragua*. Serie Población y Desarrollo 69. UNFPA-CEPAL. Santiago de Chile.
- Baumeister, Eduardo; Fernández, Edgar; Acuña, Guillermo (2008). *Sobre las migraciones regionales de los nicaragüenses*. Editorial de Ciencias Sociales. Guatemala.
- Córdoba, Ricardo et al (2003). *Participación ciudadana y desarrollo local en Centroamericana*. FUNDAUNGO. El Salvador.
- CONPES (2006). *Acción Ciudadana para el Próximo Quinquenio 2007-2011. Propuestas y sugerencias desde la ciudadanía para fortalecer la democracia y el desarrollo en Nicaragua*. Managua.
- Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe (2008a). *Plan de Desarrollo de la Costa Caribe*. Nicaragua.
- Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe (2008b). *Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe de Nicaragua*. Nicaragua.
- Cranshaw, Martha (2007). *Análisis de las migraciones en Nicaragua*. Red de Organizaciones Civiles para las Migraciones. Managua, Nicaragua.
- Cuadra, E.; Montenegro, S.; Saldomando, A. (2005). *La gobernabilidad en Nicaragua: primer informe*. CINCO. Managua, Nicaragua.

Cunningham Kain, Myrna (2008). *El fraude del mestizaje: anotaciones sobre el racismo en la Nicaragua multiétnica*. Revista WANI N°55 Oct-Dic 2008, BICU-CIDCA. Nicaragua.

De Souza Santos, B. (2005). *Reinventar la democracia, reinventar el estado*. CLACSO. Buenos Aires, Argentina.

DIRINPRO-NITLAPAN-IDESO (2004). *Muerte arriba. Las pandillas en Nicaragua 1999-2004*. UCA. Managua, Nicaragua.

Espinoza C., Mikek (2009). *Programa Hambre Cero contribuye a garantizar soberanía alimentaria*. 20-VIII-2009 <http://www.tortillaconsal.com/tortilla/node/2991>

Ética y Transparencia (2009). *Informe Final Electoral*. Revista Envío, N° 234 Marzo 2009. UCA. Managua, Nicaragua.

FIAN Internacional (2008). *El Derecho a la Alimentación y la lucha contra el hambre en Nicaragua. Un año del Programa Hambre Cero*. ONU, Nueva York.

Fonseca, G.; Williamson D. y Frank, E. (2008). *Participación e incidencia ciudadana del pueblo indígena sumu/mayangna en los asuntos públicos y de gestión del gobierno regional y los gobiernos municipales de la RAAN*. Fondo Gobernabilidad. Managua, Nicaragua.

Foro Nacional de Organizaciones Comunitarias (2008). *La participación ciudadana que queremos*. 22 julio 2008. León, Nicaragua.

Gobierno de la República de Nicaragua

> *Ley de Participación Ciudadana* N°475-2003

> *Ley de Municipios* N°40-1988 con sus reformas

> *Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica* N°28-1987

> *Plan Nacional de Desarrollo Humano* (Octubre 2008)

González M., Fruhling P., Buvollen H. (2007). *Etnicidad y Nación. El desarrollo de la autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua 1987-2007*. F&G Editores. Guatemala.

Grisby, William (2009). *El gobierno ha hecho importantes reformas estructurales y el desafío lo tiene ahora la gente*. Revista Envío Año 28 N°329 Agosto 2009, UCA. Managua, Nicaragua.

Grupo Promotor de Incidencia en Políticas Educativas (2008). *Declaración de Organizaciones de Sociedad Civil: Políticas educativas: avances, reflexiones y retos*. 12 de Agosto del 2008. Managua, Nicaragua.

Guadamuz, C. (2006). *Pobreza y Gobernabilidad en Nicaragua*. Embajada Suecia. Managua, Nicaragua.

Hengstenberg, P.; Kohut, K.; Mainhold, G. (eds.) (1999). *Sociedad Civil en América Latina: representación de intereses y gobernabilidad*. Nueva Sociedad. Caracas, Venezuela.

INEC (2005). *VIII Censo de Población y IV de Vivienda*. Managua, Nicaragua.

INIDE (2007). *Mapa de Pobreza Extrema Municipal por Necesidades Básicas Insatisfechas*. Managua, Nicaragua.

Instituto de Desarrollo Rural (2006). *Experiencias de Combate a la Pobreza: Caso de Nicaragua*. www.eclac.org

IPADE (2009). *Informe final Elecciones Municipales en la RAAN*. 22 enero 2009. Managua, Nicaragua.

Kliksberg Bernardo (2007). *¿Cómo avanzar la participación en América Latina, el continente más desigual?* Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 37. Caracas, Venezuela.

Mattern, Jochen (2003). *Las Regiones Autónomas: un desafío para el proceso de descentralización en Nicaragua*. WANI, revista del Caribe nicaraguense. N°32 Enero-Marzo 2003. Pp. 19-35. CIDCA-UCA. Managua, Nicaragua.

Mayorga, J. (2000). *La participación ciudadana en Nicaragua*. Fundación Nueva Generación y Fundación K.Adenauer. Managua, Nicaragua.

Mercado, E.; Wilson, L; González, M. (2006). *Yatama: la lucha por una verdadera autonomía en la Moskitia Nicaraguense*. Bilwi, URACCAN. Nicaragua.

Miller, Dolene (2008). *La participación ciudadana en el proceso de demarcación” y “Autonomía y sociedad civil”*. Revista Saumuk Raya Vol.II, Nov.2008, Bluefields, Comité ONGs RAAS. Nicaragua.

Ministerio de Salud (2007). *Encuesta Nacional de Demografía y Salud*. ENDESA. Managua, Gobierno de Nicaragua.

Montalbán Álvarez, E. (2000). *Cultura política nicaragüense*. Hispamer, Managua, Nicaragua.

Montenegro, Sofía y Cuadra, Elvira (2001). *Jóvenes y cultura política en Nicaragua. La generación de los 90*. Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO). Marzo del 2001. Managua, Nicaragua.

Hispanamer, Managua y Montenegro, Sofía (2007). *El espacio político de la sociedad civil nicaragüense en el contexto actual*. Foro de Sociedad Civil para la Gobernabilidad Democrática de Nicaragua. Mayo 2007. Managua, Nicaragua.

Observatorio Nacional de la Democracia y la Gobernabilidad (2008). *Nicaragua: la democracia a la deriva*. CDC-CINCO-IPADE. Managua, Nicaragua.

Organización Panamericana de la Salud (2009). *Situación de Salud en las Américas. Indicadores 2009*. Washington, EE.UU.

Pérez, Orlando y Seligson, Michael (2008). *Cultura política de la democracia en Nicaragua. El impacto de la gobernabilidad*. Michigan, Central Michigan University. EEUU.

Perspectivas 29 (2009). *La crisis mundial y el plan de gobierno*. Suplemento de Análisis Político N°29, Feb. 2009. CINCO. Managua, Nicaragua.

Perspectivas 31 (2009). *Los riesgos y retos de la seguridad ciudadana en Nicaragua*. Suplemento de Análisis Político N°31, Abril 2009. CINCO. Managua, Nicaragua.

PNUD (2002). *El desarrollo humano en Nicaragua. Las condiciones de la esperanza*. Managua, Nicaragua.

PNUD (2005). *Informe de Desarrollo Humano 2005. Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. ¿Nicaragua Asume su Diversidad?* Managua, Nicaragua.

Prado, Silvio (2008). *Modelos de participación ciudadana y presupuestos municipales: entre los CDM y los CPC*. CEAP. Managua, Nicaragua.

Programa Estado de la Nación (2008). *Estado de la Región en Desarrollo Humano y Sostenible*. San José, Costa Rica.

Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local.

- a. (2009a) *La participación ciudadana en las regiones del Caribe*. Nicaragua.
- b. (2009b) *Las organizaciones civiles en Nicaragua: su organización y su impacto social*. Nicaragua.
- c. (2008) *La participación ciudadana que queremos*. Nicaragua.
- d. (2008) *Observatorio de la participación ciudadana*. Informe 2007. Nicaragua.

- e. (2007) *Sistema de Participación Ciudadana para la Incidencia en Políticas Públicas*. Nicaragua.
- Rizo, Mario et al (2004). *Ciudadanía e Identidad en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua*. CIDCA-UCA-FINNIDA. Managua, Nicaragua.
- Ortega, Hegg M. (2000). *Construyendo la participación ciudadana en Centroamérica. Experiencias y tendencias regionales de participación ciudadana en la gestión local*. CASC-UCA. Managua, Nicaragua.
- Quiros, Ana; Bradshaw, Sara y Linneker, Brian (2003). *Las Mujeres en Nicaragua, la pobreza y cómo se pretende reducirla*. En Reducción de la pobreza, gobernabilidad democrática y equidad de género. GTZ. Tomo I. Managua, Nicaragua.
- Segovia, Alexander (2005). *Integración real y grupos de poder económico en América Central*. Fundación Ebert. San José, Costa Rica.
- Serra Vázquez, Luis H.,
- > (2008a) *Las relaciones entre sociedad civil y estado a nivel local: los espacios de gobernanza en Managua*. Cuadernos de Investigación, UCA, Managua
 - > (2008b) *Políticas neoliberales y sociedad civil en Nicaragua 1990-2007*. 8ª Conferencia Internacional de la Sociedad de Estudios del Tercer Sector. Barcelona, España.
 - > (2007) *La sociedad civil en Nicaragüense: sus organizaciones y sus relaciones con el estado*. UCA-FES, Managua.
 - > (2004) *La cultura política de la democracia en Nicaragua*. Con P.López y M.Seligson. Nicaragua.
- Sola Montserrat, Roser (2008). *Estructura económica de Nicaragua y su contexto centroamericano y mundial*. Hispamer. Managua, Nicaragua.
- Stuart, Roberto A. (2009). *Consejos de poder ciudadano y gestión pública en Nicaragua*. CEAP. Managua, Nicaragua.
- Téllez, D. María (2007). *Hasta donde llegue el autoritarismo de este gobierno dependerá de nosotros*. Revista Envío. No. 305 Agosto 2007. Managua, Nicaragua.
- Trejos, J.D. (2006). *Mercado de trabajo, ingresos laborales y pobreza en Nicaragua*. Managua, Nicaragua.

Voces Caribeñas (2008). *Agenda de las Mujeres Caribeñas*
http://www.mujeresafro.org/files/publicacion/1232038398_Agenda%20final.pdf

Wallace, Salinas M.G. (2002). *Participación ciudadana y su importancia para la transparencia en la gestión del gobierno municipal*. Centro Derechos Constitucionales. Managua, Nicaragua.

Williamson, Denis y Fonseca, Gizaneta (2007). *Compendio estadístico de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua*. CIDCA-UCA. Managua, Nicaragua.

EL MILITARISMO EN PANAMÁ

Marco A. Gandásegui⁵⁸, hijo

Introducción

Hemos dividido esta exposición en cinco partes, cada una enlaza con la otra de una manera inseparable. Comenzamos por la ofensiva norteamericana a fines de 2009 para establecer bases “aeronavales” sobre costas panameñas.

En segundo lugar, abordamos la teoría del militarismo, que en un régimen capitalista es abordado con mayor claridad desde una perspectiva marxista.

En tercer lugar, relacionamos el militarismo con lo que el sociólogo salvadoreño Mario Lungo denominara el “imperativo histórico”, es decir, la presencia de EEUU en el Gran Caribe y Sur América desde principios del siglo XX. Es el análisis del imperialismo desde la perspectiva global.

En cuarto lugar, analizaremos lo que llamaremos la “contra insurgencia del siglo XXI”. Es el programa que EEUU aplica en Panamá.

Por último, hacemos referencia al militarismo en Panamá. Su relación estrecha con EEUU desde fines del siglo XIX y su política expansiva. Haremos referencia al militarismo panameño vinculado a la lucha de clases, encabezadas por las llamadas clases “transitista” y “burguesía nacional”, que también está asociado al “populismo”, en una alianza que levantaba como bandera un proyecto nacional. Finalizamos con la coyuntura actual de Panamá y las presiones norteamericanas para re-militarizar las instituciones del país en el marco de su visión de “espectro completo”.

⁵⁸ Marco Gandásegui, hijo, es profesor de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos “Justo Arosemena”. Correo electrónico: gandasegui@hotmail.com

Antes de entrar a desarrollar los puntos mencionados, es necesario señalar que el militarismo responde a una crisis del aparato político. La crisis del desarrollo capitalista genera soluciones que a menudo se resuelven buscando salidas militares. Enfrentar estas crisis requiere, en primer lugar, conocer las características del régimen militar. Sin embargo, aún más importante, requiere de nuestra parte tener una teoría sobre el desarrollo del capitalismo y sus contradicciones. Para combatir el militarismo, hay que conocer su causa y forma de articularse.

1. Las bases “aeronavales” de EEUU en Panamá

A fines de 2009, el gobierno panameño anunció que “la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Frontera y el Servicio Nacional Aeronaval firmaron un acuerdo interinstitucional para el establecimiento de bases aeronavales y de policía panameñas en el litoral Pacífico y Atlántico del país”. La declaración oficial es un encubrimiento del pacto que previamente acordaron Panamá y EEUU para que este último país establezca bases militares en el Istmo panameño. Según el internacionalista Julio Yao, el anuncio “no sorprende porque serán bases aeronavales y de policía panameñas que podrán ponerse a disposición de EEUU”. Yao señala que un acuerdo previo firmado en 2002, entre el ministro de Gobierno y Justicia Salas y el embajador Becker, “dispuso que los puertos y aeropuertos de Panamá podrán ser usados generosamente por las fuerzas armadas de Estados Unidos”.

Anteriormente, el presidente Ricardo Martinelli informó que le había cedido dos “estaciones” navales a EEUU, después de reunirse con la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton. Las dos “estaciones” se multiplicaron y ahora son cuatro bases “aeronavales”. Las cuatro bases aeronavales están en el Pacífico y en el Caribe.

La primera base “aeronaval” se ubicará en la Isla Chaperá, en el Archipiélago de las Perlas, cerca de la Isla Contadora. La segunda base se ubicará en Rambala, en la provincia de Bocas del Toro. La tercera en Punta Coco, provincia de Veraguas y la cuarta –y última– en Bahía Piña, provincia de Darién, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia.

Según Yao “las bases puestas a la disposición de EEUU profundizan la militarización de un amplio espacio territorial... desde el cual será posible lanzar operaciones sobre toda la región en franca conspiración contra la pacífica convivencia entre los pueblos y la solución pacífica de las conflic-

tos”. El operativo es una caricatura del realizado hace poco en Colombia, donde ese país cedió siete bases a EEUU.

El gobierno panameño podría parafrasear al general Freddy Padilla, ministro de Defensa encargado de Colombia cuando defendió el acuerdo de Bogotá con Washington: “No son bases norteamericanas, son colombianas... pero brindamos la posibilidad de que accedan a nuestras instalaciones”.

Según EEUU, las cuatro bases que se instalarían en Panamá tendrían como objetivo frenar el tráfico de drogas y de “personas ilegales”. También hacen referencia al eufemismo del terrorismo. Según Yao, “las Naciones Unidas carecen de una definición sobre el terrorismo, motivo por el cual no existe un solo tratado que lo regule. En cambio, sí existe una definición sobre la soberanía nacional, que comprende la independencia nacional y la integridad territorial”. Con este acuerdo que se ha realizado en forma secreta, el gobierno actual está violando en forma abierta la soberanía nacional que le ha costado tanto conquistar al pueblo panameño.

Según varios acuerdos que no tienen fundamento constitucional, firmados a principios de la presente década, EEUU (sus fuerzas armadas, terrestres, aéreas o navales) puede surcar el territorio nacional sin mayores trámites o requisitos.

Según la denuncia de Yao, “todos los barcos de bandera panameña pueden ser interceptados en alta mar por naves de EEUU bajo el programa de control de armas de destrucción masiva. Conforme a esos acuerdos, EEUU puede invitar para que entren a nuestro territorio otros Estados con el propósito de que éstos cooperen con Panamá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico y otros delitos internacionales. Conforme a esos acuerdos, Panamá se obliga a no ejercer jurisdicción sobre funcionarios civiles o militares de Estados Unidos, acusados de crímenes de guerra, ni de someterlos al Tribunal Penal Internacional”.

Los citados arreglos intentan cubrir las maniobras militares *Panamax* que desde 2003 llevan a cabo países latinoamericanos y miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Panamá con el pretendido propósito de atender la protección y defensa del Canal y de Panamá. Las maniobras *Panamax* han sido dirigidas siempre por un almirante del Comando Sur. La Constitución Política de Panamá atribuye exclusivamente a panameños la defensa de su territorio y prohíbe a nuestros funcionarios civiles o militares recibir órdenes de militares extranjeros. A su vez, el Tratado de Neutralidad imposibilita la presencia militar extranjera en nuestro país.

Con relación al Tratado del Canal sobre la neutralidad de la vía, entre Panamá y EEUU, Yao aclara que “el Artículo V del Tratado de Neutralidad dispone que, después del 31 de diciembre de 1999, sólo la República de Panamá mantendrá fuerzas e instalaciones militares y sitios de defensa dentro de su territorio nacional. Los defensores de la militarización norteamericana de Panamá argumentarán que la Reserva Nunn al Artículo V del Tratado de Neutralidad permite acordar dicha presencia militar, les advertimos que una cosa es lo que se pretendió con dicha Reserva y otra es lo que la misma dice”.

Lo que dice la Reserva Nunn es que, no obstante el Artículo V, Panamá y EEUU podrán acordar la presencia militar extranjera para garantizar el régimen neutral del Canal. La neutralidad de la vía acuática consiste en la libre navegación y la desmilitarización del Canal. Mal puede la Reserva Nunn garantizar la neutralidad si ella misma introduce condiciones (las bases) que específicamente la niegan. La Convención de Viena es clara al estipular que pueden aceptarse enmiendas a los tratados siempre y cuando no contradigan sus propósitos fundamentales. Si esto último ocurre, las enmiendas dejan de tener validez jurídica. Este sería el caso de la Reserva Nunn, concluye Yao.

2. La teoría del militarismo

Cuando hablamos de una teoría del militarismo, estamos hablando de una corriente de pensamiento que explique la aparición de lo militar como una forma de gobernar, o de influir sobre quienes gobiernan. La teoría más preclara sobre este problema ha sido y sigue siendo la teoría marxista. Marx y los marxistas recogen la tradición teórica más rica del desarrollo capitalista, tanto en su forma metodológica (la filosofía dialéctica), como en el orden político (la democracia de clase) y el desarrollo económico (la teoría del valor).

La teoría del valor nos plantea que la producción de toda riqueza requiere la intervención humana. El trabajo social se convierte en el motor de la economía. En el capitalismo, la producción de la riqueza se genera mediante la organización del trabajo subordinado al capital. Sobre esta contradicción (dialéctica) se generan los excedentes que son apropiados por los agentes del capital (la burguesía).

El proceso de producción no termina en el momento de la producción propiamente tal. La mercancía, que es el producto de esa relación dialéctica, tiene que realizarse, tiene que ser objeto del consumo. Aparece el mer-

cado que se convierte, en primera instancia, en un campo de batalla. En torno a los mercados se desatan las guerras políticas, ideológicas y militares. El capital crece sobre la base de la acumulación, también se extiende geográficamente sometiendo todo lo que encuentra en su camino a su política (la democracia de clase) y, también, a su ideología (mercantilista de consumo).

Donde el capital se enfrenta a una oposición política e ideológica que no puede doblegar, se introduce el elemento militar. Se trata de un factor militar que tiene que “mezclarse” en la educación política e ideológica. Como consecuencia, la democracia de clase necesita un elemento militar que lo sostenga y que lo proyecte. Igualmente, la clase dominante tiene que construir una ideología que le deje espacio a ese militarismo que lo sostiene y defiende.

El militarismo se convierte en elemento permanente cuando el capitalismo no logra legitimar su dominación y necesita una ideología que supere la “crisis de hegemonía”. Cuando hablamos de crisis permanente, tenemos que hablar, como consecuencia, de militarismo permanente.

¿Puede el capitalismo sobrevivir sin un aparato militar, sin una democracia de clase que descansa sobre el militarismo, sin una ideología militarista, sin el militarismo?

Para que el capital alcance sus objetivos tiene que ejercer su dominación –cambiante– sobre los distintos sujetos, actores, que se combinan y transforman en forma permanente. Para ello, el capital puede subordinarse política e ideológicamente siempre y cuando logra sus objetivos estratégicos: la extracción de plusvalor y su transformación en nuevo capital. Los terratenientes o los comerciantes pueden ejercer el dominio del Estado, la ideología puede ser fundamentalista o socialista, siempre que contribuya y no interrumpa la generación de ganancias.

La administración del aparato político del Estado puede delegarse a una categoría social como la burocracia, la Iglesia o a los militares. En este último caso, hablamos de militarismo. ¿Qué conduce al militarismo?

¿La crisis económica (pérdida de la tasa de ganancia), la crisis institucional (pérdida de la legitimidad) o crisis de hegemonía (colapso de los valores y normas)?

Hace varios siglos, Maquiavelo se refirió al militarismo como tendencia hacia el fortalecimiento del Príncipe frente a los señores de su territorio. En forma similar a la actual “doctrina Bush”, recomendó, en materia militar, “el golpe preventivo” para neutralizar al enemigo. Era el primer paso hacia la profesionalización de un ejército al servicio del Príncipe. Ya no

dependerá más de las milicias que podrían ofrecer los señores para la defensa del territorio.

Rosa Luxemburgo:

Según Rosa Luxemburgo, autora revolucionaria de principios del siglo XX, el militarismo se ha hecho hoy imprescindible, por tres razones:

- 1) como medio de lucha para defender los intereses “nacionales” frente a la competencia de otros grupos nacionales;
- 2) como importante destino de la inversión tanto del capital financiero como del capital industrial;
- 3) como instrumento de dominación de clase en el interior del país sobre la clase obrera.

“En sí mismos –dice Rosa Luxemburgo–, todos estos intereses no tienen que ver con el desarrollo del modo de producción capitalista. Y lo que mejor demuestra el carácter específico del militarismo actual es, en primer lugar, su aumento en todos los países a consecuencia, por así decirlo, de impulsos internos y mecánicos y, en segundo lugar, el carácter fatal de la próxima explosión, que se acerca y es inevitable. De motor de desarrollo capitalista, el militarismo se ha transformado en su mal endémico”.

En otras palabras, del instrumento que acompaña la dialéctica del desarrollo, lo militar se transforma en su peor enemigo. Según Rosa, “en esta dualidad entre el desarrollo social y los intereses de la clase dominante, el Estado toma partido por estos últimos. Al igual que la burguesía, el Estado aplica una política contraria al desarrollo social y, con ello, pierde cada vez más su carácter de representante del conjunto de la sociedad y se va convirtiendo progresivamente en un puro Estado de clase”.

“El desarrollo social y los intereses de clase se van distanciando entre sí hasta llegar a ser contradictorias dentro de la propia esencia del Estado, contradicción que se hace cada día más aguda”.

Rosa agrega, que “por un lado, crecen las funciones de carácter general del Estado, su injerencia en la vida social, así como el “control” sobre ésta. Pero, por otro lado, su carácter de clase le obliga a concentrar más y más su actividad y sus medio coercitivos en aspectos que son de utilidad para la burguesía, como el militarismo y las políticas aduanera y colonial”.

Sobre la cuestión relativa a reforma o revolución, Rosa también nos ofrece lecciones muy oportunas. La creación de partidos políticos que

pretenden tomarse el poder no puede descansar sobre la organización electoral según las reglas impuestas por el “Estado de clase”. Según ella, “el ‘control social’ que el Estado ejerce va impregnándose y es dominado por su carácter de clase (piénsese en cómo se aplica en todos los países la legislación laboral)”. Condena a los reformistas planteando que “la extensión de la democracia (de clase), que es vista por Bernstein como un medio de implantación gradual del socialismo”, coincide con los intereses del Estado de clase.

Según otro teórico del la social democracia, Konrad Shmidt, la consecución de una mayoría parlamentaria conduce directamente a la “socialización” gradual de la sociedad. No hay duda de que las formas democráticas de la vida política son un fenómeno que expresa claramente el proceso de conversión del Estado (de clase) en sociedad (sin clases) y, en esta medida, es una etapa en la transformación socialista.

Pero precisamente la dualidad señalada en la naturaleza del Estado capitalista se manifiesta, del modo más crudo, en el moderno parlamentarismo. Es cierto que, formalmente, el parlamentarismo sirve para expresar los intereses de toda la sociedad dentro de la organización del Estado. Sin embargo, realmente, sólo expresa los de la sociedad capitalista, es decir, una sociedad en la que predominan los intereses capitalistas.

El partido que surge de la organización del pueblo tiene que utilizar las reglas del Estado de clase como una herramienta adicional, combinada con otras formas, en la consolidación de su unidad y proyecto.

Gramsci:

Según el estudioso de Gramsci, Martin Carnoy (1984), “la falsa conciencia” explica, en gran parte, la aceptación de la denominación por parte de las clases subordinadas. Gramsci señalaba que la aceptación es el resultado de la hegemonía de clase (dominación de los valores y normas de otra clase). La crisis del sistema capitalista no es propiamente económico, sino hegemónico. Cuando el consenso comienza a derrumbarse la sociedad entra en una fase de transformaciones.

El militarismo es producto de la hegemonía de clase o de la “falsa conciencia”. En el siglo XX la clase obrera organizada de los países centrales cedieron a las políticas militaristas de las clases dominantes. A principios del siglo XX, los obreros siguen ocupando la primera línea abanicando las políticas militaristas que supuestamente generan crecimiento económico y empleos.

En el caso de los países de la periferia, la crisis del capitalismo y la crisis de hegemonía tienen un carácter permanente. La clase dominante que no logra legitimar su poder utiliza la fuerza para sentar las bases de su política económica. Las capas medias, que vacilan entre sus intereses y los intereses de la clase dominante, perciben la solución militar como su última línea de defensa.

En el caso de los sectores populares, una vez incorporados al proyecto nacional de la burguesía (es decir, encerrados en la “falsa conciencia”), comienzan a ver el militarismo como una fuerza de unidad nacional, de consolidación del proyecto. Es el resultado de la ideología del etapismo.

Surgen las propuestas que plantean que los avances de las clases subordinadas deben cumplir ciertas etapas.

3. El militarismo e imperialismo: “El imperativo histórico”

Mario Lungo, sociólogo salvadoreño, introdujo la noción del “imperativo histórico”, para referirse a la intervención militar de EEUU en Centro America y en toda la región (Lungo 1990).

Sobre la base de un desarrollo capitalista dependiente, la dominación burguesa no puede consolidarse; existe una crisis permanente. El militarismo en América Latina es un reflejo de las crisis políticas permanentes que dan cuenta de las principales transformaciones socioeconómicas (Mandel 1979).

Según Luis Vitale (1979: 54-66), las fuerzas armadas se convirtieron en los partidos políticos de la burguesía dependiente. El alto mando militar “discute los planes de gobierno, la política económica, la forma de enfrentar los conflictos sociales, la política internacional y todo aquello relacionado con el quehacer político de una nación”. Según Vitale, en 1969, Rockefeller señaló que la única alternativa para la región son las dictaduras militares.

“La política del imperialismo respecto de los militares ya no es sólo darle entrenamiento antisubversivo contra los movimientos sociales, son también ejercer un control ideológico y político de los altos mandos de las fuerzas armadas”. Vitale agrega que los militares en la región “han adquirido raíces económicas propias, al convertirse en ejecutivos no sólo de empresas del Estado, sino también del área privada... constituye una capa social nueva, ligada a los intereses del capital monopólico mundial y sus socios nacionales”.

Vitale apunta a un aspecto central para nuestra comprensión. Hay que caracterizar correctamente el militarismo y, especialmente, sus agentes tanto profesionales como políticos. El militarismo es una expresión del capitalismo y del Estado de clase. No son fascistas como algunos han querido definirlos. “Hay que diseñar, como consecuencia, una política para las capas medias que no apoyan (el militarismo), existiendo posibilidades para ganarlas a una lucha por la democracia”.

Aquí hay un paralelismo con lo actual en Panamá. No hay que entender que se deben construir puentes hacia las llamadas redes. Hay que tener presente que estas redes, de origen clasista, tienen impacto sobre la población – tanto en sus formas organizadas, como las no organizadas – sobre la cual hay que actuar.

La academia norteamericana:

En EEUU, también se han hecho importantes estudios sobre el militarismo. Wright Mills (1983) planteó que en EEUU hay una oligarquía gobernante compuesta por tres sectores. En primer lugar, la gran burguesía que dirige y administra los procesos productivos y especulativos generadores de los excedentes y la distribución de las ganancias. En segundo lugar, una burocracia militar capaz de dominar por la fuerza el mundo donde se encuentran las materias primas y los mercados. Por último, una clase política que legitima ante el pueblo el sistema político de dominación (Mills 1983).

Según Mills, en la segunda mitad del siglo XX, los dos primeros – la gran burguesía y la burocracia militar – establecieron una alianza estratégica que les permite mantener su hegemonía sobre la sociedad norteamericana y el mundo. Planteó que la clase política se ha hecho innecesaria en la presente coyuntura. Mills subrayó la importancia del discurso de Eisenhower, pronunciado en 1960, cuando advirtió sobre el peligro militarista que acechaba a EEUU, engendrado en la alianza militar – industrial.

Teóricos como John Johnson plantearían que la única barrera al militarismo en América Latina era lo que llamaba “la clase media”. En otras palabras, una capa social que pudiera ocupar los escalones del poder político. A falta de esa barrera, la oligarquía terrateniente exportadora sólo podría recurrir a las fuerzas armadas para consolidar su poder (Johnson 1966).

El militarismo autoritario, para O'Donnell, representaba el retorno al orden político y a la salud económica. Coincide con Johnson en el sentido de que el factor que falta es la clase media para ocupar los puestos gubernamentales (O'Donnell 1998). En la actualidad, los militares han regresado

a los cuarteles y han aparecido gobiernos de signo social, demócratas y populistas. Para algunos autores, estamos frente a “revoluciones pasivas”, citando a Gramsci. Para Johnson u O’Donnell, han hecho su aparición triunfal –por fin– las clases medias.

Noam Chomsky (2002), en su libro *Los estados canallas*, contraataca estas nociones sobre el militarismo señalado que las potencias históricamente han utilizado la fuerza para su expansión más que para su defensa. Cita al famoso secretario de Estado norteamericano, Dean Acheson, a mediados del siglo XX quien decía que el derecho internacional sólo es útil cuando le conviene a EEUU. Curiosamente, palabras casi calçadas fueron pronunciadas por la candidata a vicepresidente de EEUU, Sarah Palin, en su primera entrevista nacional realizada por la cadena de televisión ABC (10 de septiembre de 2008).

Chomsky junto a Edward Hermann (Chomsky & Hermann 1988) plantea que una sociedad de clases no puede sobrevivir sin su componente militar. Para ello, es necesario organizar una “máquina de propaganda militar”. Destaca el papel de Walter Lippmann, ideológico norteamericano de principios del siglo XX quien acuñó la noción de que mientras más se insistía en una mentira, más rápidamente se convertía en una verdad.

4. La contrainsurgencia del siglo XXI

En la actualidad, los decretos militares aprobados por el Ejecutivo responden a los intereses de EEUU. Los aparatos de inteligencia y de represión selectiva, que comienzan a organizarse en el presente tienen proyecciones para el futuro. Según Ana Esther Ceceña, estamos enfrentando una estrategia de “contrainsurgencia del siglo XXI” (Ceceña A.E. (2004).

Pero hay que tener claro que no se está hablando de un proyecto panameño. Estamos siendo llevados por una peligrosa corriente que Panamá conoció a mediados del siglo XX. En aquella época, a nombre de la doctrina de la “contención” se militarizó el país. En la actualidad, en nombre de la “seguridad nacional” reiniciamos el mismo camino.

Desde la última década del siglo XX, el Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad de EEUU, como figura representativa de la potencia hegemónica, está organizando su visión de la dominación de espectro completo. La pretensión consiste en controlar cielos, mares, tierra y subsuelo en todos los lugares, incluyendo a todos los habitantes del planeta. El espectro es geográfico, espacial, social y cultural, simultáneamente, y cuenta

para ello con el trabajo combinado de NASA y del Departamento de Defensa.

El propósito de alcanzar una dominación de espectro completo va acompañado de una estrategia de guerra que combina cuatro dimensiones:

- 1) prevención,
- 2) disuasión,
- 3) persecución y
- 4) eliminación

Se trata de perseguir y eliminar al disidente o al insurrecto para que a nadie más se le ocurra desafiar al poder. Evitar que los nuevos contingentes de desposeídos, desestructurados o excluidos piensen en rebelarse, encaminándolos hacia las válvulas de escape producidas por el propio poder o intimidándolos con la persecución y eliminación.

La guerra preventiva moderna es una guerra que se adelanta a la necesidad de la guerra, que antecede a la amenaza para disuadirla. Es una guerra que fabrica al enemigo en prevención de un futuro conflictivo y que arrebató los derechos humanos y sociales a un colectivo universal de sospechosos.

Guerra preventiva parece ser la palabra de orden que caracteriza los nuevos modos de imponer la dominación. Sin embargo, la novedad de la guerra del siglo XXI no es su carácter preventivo. Lo que cambia hoy es la concepción de prevención, que trasciende la necesidad de desplegar posiciones de batalla con antelación o de estar siempre preparado para un conflicto, para desplazarse hasta el punto donde hay que destruir toda posibilidad de amenaza.

De hecho, todos somos sospechosos hasta demostrar lo contrario; se cierran los espacios de la política y se instaura el estado de excepción como estado permanente. Si la sociedad es sospechosa, se le debe impedir actuar. El sujeto de la historia no es más la sociedad, sino la camarilla en el poder que pretende actuar en su representación.

El desarrollo tecnológico alcanzado hasta hoy puede tomar como signo los misiles usados en Palestina para asesinar a personas específicas desde posiciones lejanas. Abarca una amplia variedad de campos, indispensables para acercarse a los objetivos de invulnerabilidad y dominio simultáneos.

Una prueba de ello lo presenta la masacre perpetuada contra un campamento de las FARC en territorio de Ecuador realizado probablemente desde la base de EEUU en Manta. Según Borón, “EEUU ha desplegado

750 bases y misiones militares en 128 países, una máquina de guerra sin parangón en la historia de la humanidad” (Borón 2006).

El conocimiento es un estrecho aliado en los procesos de militarización. En la actualidad todas las áreas de conocimiento aportan, a veces inconscientemente, a la construcción de mecanismos que pretenden controlar la sociedad mundial. Un sistema capaz de llevar adelante la guerra asimétrica, al cual quedarían conectados todos los cuerpos de seguridad de EEUU en cualquier parte del mundo. Se trata del Centric Warfare Network, anunciando en los documentos estratégicos del Comando Sur.

El Departamento de Defensa se encuentra en medio de una transformación hacia lo que se llama ‘Red Centralizada de Guerra’. En esencia, la Red Centralizada de Guerra traduce la superioridad en información en poder de combate (DARPA 2003). Esto implica:

1. El conocimiento y producción exclusivo de materiales resistentes, ligeros, flexibles y lo suficientemente sofisticados como para que nadie más pueda disponer de ellos;
2. Un manejo de las transmisiones en el espacio y conocimientos sobre la vida en los límites;
3. Experimentos con sistemas complejos vivientes, para inducir su comportamiento;
4. Invisibilización de los mecanismos de vigilancia, investigación y control mediante su miniaturización (nano – robótica);
5. Producción de naves o tanques de guerra no tripulados;
6. Trabajo con sistemas de información instantáneos;
7. Emulación del funcionamiento cerebral mediante sistemas de procesamiento informático (brain machine).

Hemos enumerado algunos de los campos más cotizados del trabajo científico en la actualidad. Todos ellos contribuyen a cubrir las metas de la plantación estratégica diseñada por el Pentágono. Se han aplicado en Panamá, se están aplicando en Panamá y todo indica que seguirán aplicándose en Panamá, sin el conocimiento o consentimiento del gobierno y, mucho menos del pueblo panameño. Este es el militarismo que pretende entronarse nuevamente en Panamá. Nuestra oligarquía (transitista y liberal) siente que sus intereses están mejor resguardados mediante una fórmula de subordinación política y, además, militar.

5. El militarismo en Panamá

El militarismo en Panamá se inaugura, tal como lo conocemos hoy, con el desembarco de los “marines” norteamericanos en las playas de Colón en 1904. En la naciente República de Panamá, el militarismo no es una alianza entre clases, una expresión del populismo (como lo llegó a ser entre 1969 y 1986). El militarismo en Panamá expresa las contradicciones imperialistas a escala mundial y tiene su expresión en el Caribe donde EEUU se declaró la potencia regional.

La necesidad de EEUU de tener una vía rápida hacia sus posesiones territoriales en la costa occidental norteamericana lo lleva a construir el Canal de Panamá. Antes había derrotado a México y cualquier pretensión que pudiera tener sobre sus costas. Había destruido toda expresión soberana en Centro América y había expulsado a España de sus colonias caribeñas de Cuba y Puerto Rico.

Al mismo tiempo que desembarcaban los marines en Colón, el gobierno panameño disolvía el Ejército nacional que había tenido un papel significativo en el movimiento de independencia de noviembre de 1903. La oligarquía panameña –la clase transitista– entendió, desde un principio, que su sobrevivencia no dependía de un Ejército nacional sino de la presencia militar de la nueva potencia.

EEUU convirtió el Ejército en una policía cipaya a las órdenes de un inspector general norteamericano. EEUU construyó rápidamente una colonia militar en la Zona del Canal de Panamá. En 1906, Washington responsabilizó a su Ejército para que asumiera la construcción del Canal y, al mismo tiempo, que administrara la nueva colonia. La Zona del Canal, con apenas mil kilómetros cuadrados, se impuso sobre la nueva República con 77 mil cuadrados.

El “enclave” de tránsito no tiene las funciones clásicas de ser exportadora de materias primas al mercado mundial. Su función en el siglo XX fue servirle a la estrategia norteamericana para consolidar su poder en la región y, además, como futuro trampolín en su expansión mundial.

Hernán Porras señalaría que la pequeña oligarquía de la ciudad de Panamá –que él llamaba los “capitalinos blancos”– logró sobrevivir gracias a su habilidad para negociar con EEUU la construcción del Canal y la creación de la República. Esta oligarquía había sido derrotada por los “liberales populares” en la guerra civil de los Mil Días (1899 – 1902). En esa misma guerra, según Porras, la oligarquía “terrateniente” del interior del país –

aliada de los “capitalinos blancos” – no sólo había sido derrotada, fue destruida como clase para nunca más levantarse (Porras 2008).

El militarismo en Panamá, entonces, no es producto del desarrollo nacional. Es el producto de alianzas coyunturales que tienen a la cabeza la potencia norteamericana y a los sectores que aparecen en las luchas intestinas panameñas. En primer orden, los conservadores vinculados a la zona de tránsito (“blancos capitalinos”) que manejaban y siguen manejando la economía transitista. En segunda instancia, bajo la tutela norteamericana, los liberales que se plegaron al proyecto norteamericano (unos más temprano – Eusebio Morales – otros más tarde – Belisario Porrás). Posteriormente, en la década del 1920, aparece Acción Comunal, “hijos de la clase de “terratenientes” del interior destruidos, emigrados a la ciudad, convertidos en profesionales, que asumen el poder en 1932 en alianza con los transitistas y liberales, bajo la supervisión de EEUU.

La militarización de la Policía Nacional en la década del 1930 se combina con la Doctrina Truman de contención del “comunismo” a fines de la siguiente década. En 1953, se crea la Guardia Nacional bajo la presidencia del coronel José A. Remón. Por un lado, la Guardia le hace honor a su compromiso con EEUU, persiguiendo toda señal de protesta de los sectores trabajadores y populares. Por el otro, le hace honor a una incipiente “burguesía nacional” que con fondos del Estado invierte fuertemente en el sector productivo, tanto en las ciudades como en el campo.

Por primera vez en su historia, por lo menos desde la desaparición de los hermanos Pizarro en el siglo XVI (Castillero C. 2008), la clase dominante panameña ve con buenos ojos la organización de una fuerza armada militarizada. En las ciudades, necesita una fuerza militarizada para disciplinar a la creciente clase obrera que desborda los entornos urbanos y comienza a reivindicar sus derechos. Igualmente, la expropiación de las tierras de los campesinos en las áreas rurales sólo es posible mediante una fuerza militarizada. La militarización de la sociedad hace posible pensar en hacer realidad el proyecto de mercado nacional.

La oligarquía transitista y sus aliados comerciantes de tradición liberal, transformados en burgueses caminan de la mano de una incipiente institución militar –que sigue bajo la influencia norteamericana–. Sin embargo, la represión y la persecución no son suficientes para mantener el orden y, aún más importante, las ganancias de sus inversiones. Los cuestionamientos políticos, las huelgas sindicales, los movimientos sociales y las luchas por la soberanía se combinan para unir a sectores cada vez más amplios del país.

La “democracia de clase” panameña se desploma y, en su lugar, aparece la institución militar que pone orden.

La oligarquía (transitistas y liberales) se dividen en apariencia frente a los militares. La Guardia Nacional asume todas las responsabilidades de gobierno y con el tiempo pone orden en las filas de los sectores dominantes. Bajo la dirección de Torrijos se presenta la posibilidad de construir el Estado populista de consolidar el proyecto de nación (en el discurso se abandona el mercado) dejando en los márgenes políticos a los sectores más radicales (de derecha y de izquierda). El militarismo en su variante populista le abre las puertas a los sectores organizados del pueblo que se suman al proyecto de Estado pluriclasista en forma subordinada.

La crisis mundial capitalista de la sobreproducción o, vista de otra manera, la disminución de la tasa de ganancia sacudió a Panamá y el proyecto de mercado nacional hasta sus cimientos. Sin probar alternativas posibles, en la década de 1980, el gobierno militar adopta las recomendaciones de ajuste económico (políticas neoliberales) para iniciar un proceso de transferencia de riquezas hacia el centro de la economía mundial mediante el desmontaje de la economía nacional. El proyecto de mercado nacional se abandona y se adopta el modelo de mercado mundial.

En este proceso, se presenta la crisis centroamericana, y EEUU transforma la Guardia Nacional en las Fuerzas de Defensa (FDP) en 1983. Washington veía con buenos ojos la transformación de la institución militar panameña en el nuevo guardián del orden para toda América Central. Las contradicciones que surgen de la ejecución de este proyecto, en combinación con las nuevas políticas neoliberales, colocan sobre la palestra la opción de eliminar del todo el aparato militar panameño, que a su vez controlaba las instituciones del gobierno.

La versión militarista panameña se consolidó a mediados del siglo XX con la presencia de un Ejército de ocupación en la Zona del Canal. Los espacios que pudieron haberse abierto para la negociación eran inmediatamente cerrados por EEUU. En 1941, destituye de la Presidencia a Arnulfo Arias (heredero de la tradición de Acción Comunal); en 1955 asesina al presidente Remón, y sigue una cadena de acciones contra los jefes militares panameños: en 1969 exilia a Boris Martínez, en 1981 accidenta a Torrijos y, en 1989, secuestra y condena a una pena de cárcel en EEUU a Noriega.

La invasión norteamericana de 1989 interrumpe lo que parecía ser un proceso en permanente crecimiento del militarismo en Panamá. Los transitistas regresaron al poder y pidieron que EEUU se convirtiera en el protec-

tor de su dominación. Al mismo tiempo, sometieron a la nueva Policía a una política de “shock” reduciéndola a vigilante con pito y tolete. Los transitistas regresaban a la experiencia de 1904 con la disolución del Ejército comandado por Esteban Huertas.

Las políticas neoliberales se prestan a la nueva tarea policíaca. La reducción de los aparatos de gobierno (“Estado”) se aplica tanto a la burocracia civil como a la uniformada. La dinámica global, sin embargo, impone un ritmo algo diferente a los procesos internos. La política de “seguridad nacional” de EEUU requiere contrapartes militares en toda la región. En la década de 1990, después del colapso del bloque socialista, la política militar de EEUU de la segunda post guerra de “contención” tiene que modificarse. Se buscan nuevos enemigos para derrotar militarmente. Aparecen los gobiernos malditos (rogues), los traficantes de drogas y los terroristas islámicos.

El “imperativo histórico” se define y se hace más claro en 2001 después de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York en que EEUU descubre su nueva variante de guerra “preventiva”. La guerra contra el terrorismo, los gobiernos malditos y los traficantes de drogas se sintetizan en una variante de guerra total, donde no sólo el pueblo norteamericano sino todos los pueblos del mundo tienen que proclamar su patriotismo o, de lo contrario, ser declarados enemigos de EEUU.

Panamá se plegó al nuevo orden mundial “patriótico”. La Autoridad del Canal de Panamá se declara en estado de alerta permanente⁵⁹ (hasta el día de hoy). Poco después, EEUU impone un conjunto de “tratados” sin aprobación legislativa que subordina el territorio del país a las necesidades estratégicas del EEUU. En 2008, mediante decretos, el ejecutivo crea, en medio de protestas, el nuevo Servicio de Inteligencia y un Servicio Nacional de Fronteras.

Una ONG de Washington reaccionó señalando en septiembre que “Torrijos inició la militarización de las estructuras de inteligencia”. El mismo analista señaló, sin embargo, que no hubo acuerdo entre los dos países

⁵⁹ Panamá, 11 de septiembre de 2001 (AP): Las autoridades del Canal de Panamá tomaron medidas de seguridad ante los atentados ocurridos el martes en Estados Unidos e informaron que la vía seguirá operando normalmente. El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso condenó los episodios terroristas ocurridos en Nueva York y Washington. Un comunicado de la Autoridad del Canal indica que se han puesto “en marcha los mecanismos acostumbrados de seguridad interna, a la vez que coordinan los aspectos pertinentes con los organismos de seguridad del Estado”. Tomado de *La Prensa en línea*.

para trasladar a Panamá la base que realiza vuelos sobre Colombia en busca de insurgentes desde Manta en Ecuador (Sánchez 2008).

La militarización de Panamá, que refleja los crecientes decretos gubernamentales de los últimos cuatro gobiernos, responde a la visión de EEUU para rodear a Colombia en una operación que le permita sostenerla, evitando que caiga en manos de una insurrección armada. La clase transitista, que se ha plegado a esta visión de EEUU, no tiene proyecto nacional por lo que la presencia de bases “aeronavales” o “estaciones navales” le es indiferente. Los residuos de un proyecto populista (burguesía productiva y clase obrera) no aparecen en el horizonte para justificar la recreación de una institución militar.

Conclusión

Para sus fines, EEUU y sus aliados internos han reclutado a hijos de generales, antiguos coroneles y muchos trasnochados para servirles de pantalla. El militarismo se puede enfrentar y derrotar. En primera instancia, no hay que olvidar que el militarismo es un reflejo de una fase del desarrollo del capitalismo. Son las contradicciones del capitalismo que buscan soluciones militares a sus problemas.

Hay que comprender cuáles son esas contradicciones para actuar en el marco de las luchas que se desatan. El militarismo es una consecuencia de esas contradicciones y se puede combatir conociendo su inserción en la fórmula política de los gobernantes. En el caso de Panamá, el militarismo es una consecuencia de la imposición por parte de EEUU de sus políticas de “seguridad nacional”.

Se puede combatir el militarismo mediante la educación, la organización y la agitación. Los enfrentamientos tienen que reflejar un conocimiento de las relaciones entre gobierno y oligarquía y de éstos con EEUU. Cada enfrentamiento genera una propuesta de los sectores populares para derrotar el militarismo y transformar la sociedad. En ese proceso, es necesario establecer alianzas con todos los otros sectores que comparten los objetivos de lucha contra el militarismo y el desarrollo de las contradicciones que genera el capitalismo. Por último, la propuesta, los enfrentamientos y las alianzas deben llevar a la conquista de espacios sociales cada vez más amplios por parte de los sectores populares.

La primera y más importante lección que debemos aprender se refiere a la crisis permanente y a las contradicciones que caracterizan el desarrollo capitalista. Hay que estudiar la lucha del sistema capitalista para mantener

una tasa de ganancia adecuada, que depende de la producción así como de la circulación de mercancías. Esta lucha del capitalismo no es igual en todas partes y hay que estudiar las particularidades de cada región y, especialmente, la realidad panameña.

En el libro *La democracia en Panamá*, concluimos que la democracia no es alcanzable en el marco de una dictadura militar. Aun más, la democracia es imposible si sometemos al país a una militarización a nombre de la “seguridad nacional” de EEUU (Gandásegui 1998).

El militarismo es la expresión de una crisis en el desarrollo de una sociedad. En el caso particular de América latina, el militarismo es la expresión de una crisis que se produce en una fase del desarrollo del capitalismo. Enfrentar estas crisis requiere, en primer término, conocer las características de la crisis del sistema capitalista en su conjunto (“sistema-mundo capitalista”) y su desdoblamiento en regímenes políticos con signos militares.

Aún más importante, empero, requiere que nos apropiemos de una teoría sobre el desarrollo del capitalismo y sus contradicciones. Para combatir el militarismo hay que conocer su causa y forma de articularse. El militarismo se combate conociendo su relación con la estructura social. A la vez, mediante la educación y agitación entre los sectores más amplios de la sociedad.

Los enfrentamientos con las instancias y clases sociales que promueven el militarismo exigen que los sectores democráticos hagan propuestas con alternativas. Las propuestas demandan formar alianzas amplias entre los diferentes grupos opuestos al militarismo. Sólo los sectores más lúcidos y combativos pueden resolver la crisis del capitalismo y sus expresiones militaristas.

PostScriptum: El legado que construye Martinelli

(Noviembre de 2009)

El presidente Ricardo Martinelli cumplirá próximamente medio año al frente del Ejecutivo. En este período no ha logrado imprimirle a su gestión un impulso distinto a experiencias del pasado que pueda identificarse con su lema del “cambio”, eje central de su campaña electoral. Sus colaboradores más cercanos fueron reclutados de los mismos sectores empresariales que colaboraron con los gobiernos anteriores. Los otros poderes – Legislativo y Judicial – también siguen empantanados en aguas turbulentas, sin transparencia.

A pesar de las limitaciones, sus partidarios e, incluso, sectores de la oposición señalan que Martinelli ha logrado definir algunas metas que le permitirán dejar su huella como mandatario panameño. Se menciona que la ideología de Martinelli es de derecha pero “eficaz”. Además, hay quienes juegan con la idea de que el mandatario panameño, en el mejor estilo maquiavélico, se ha acercado a sectores de la izquierda panameña. También, hay otros a la derecha del espectro político que aplauden su iniciativa de lanzar una cruzada conservadora a nivel regional.

Es oportuno señalar que los tres objetivos señalados por los defensores de Martinelli tienen poca sustentación sobre los cuales descansar. Veamos con más detalle cada una de los supuestos objetivos políticos:

1. Martinelli no representa una derecha “eficaz” que ha roto con el “tradicionalismo” de los grupos de esa ideología reaccionaria. Tampoco representa un sector empresarial con una visión clara de su accionar político. Martinelli es el resultado de la bancarrota de los partidos que ocuparon el espacio político después de la invasión, quienes han encontrado un buen administrador mediático. Una derecha “eficaz” fue la fracción del PRD (Frente Empresarial) que lideró Pérez Balladares en la década pasada que hizo “tabla rasa” de la clase obrera (Ley 95), capas medias, burguesía productiva y la ideología nacionalista de amplios sectores del país (CMA). Las políticas neoliberales de Pérez B. debilitaron tanto al país que todavía no se ha recuperado.

2. Martinelli no tiene en su proyecto formar alianzas con supuestas izquierdas “radicales” panameñas para debilitar a otros sectores “moderados”. La alusión obvia, que hacen estos analistas, a FRENADESO o PAP es producto del temor que tienen con relación al descalabro interno sufrido por el PRD. Generar este tipo de fricciones en los sectores de la izquierda panameña parecieran tener la intención de entregarle a la derecha y a EEUU la iniciativa para “manipular” a los sectores progresistas panameños. Una debilidad extendida en la región donde los sectores progresistas (Venezuela, Bolivia y Ecuador) llegaron al poder mientras la izquierda se disputaba espejitos ideológicos.

3. El proyecto de la derecha en América latina, con su componente militar, lo encabeza EEUU. La ofensiva político-militar de Washington en Colombia tiene como objetivo el eje bolivariano con Venezuela a la cabeza. Para ello, golpeó fuerte en Honduras y asumió el rol de “componedor” en las elecciones panameñas. EEUU liquidó Haití, tiene a México de rodillas y

ahora quiere ir directo a la yugular del continente. Martinelli tiene un papel menor en este juego que desarrolla EEUU: es el peón que puede ser sacrificado por Washington en el momento menos esperado.

El equipo asesor más cercano al presidente, por su lado, tiene muy claras cuáles son las tácticas políticas a corto y mediano plazos: 1. Martinelli no debe perder puntos en los sondeos de popularidad, 2. Debe obviar los conflictos internos de la alianza gubernamental y 3. Debe mantener una línea expedita con la Embajada de EEUU.

Bibliografía

Borón, Atilio (2006). *La cuestión del imperialismo*. En La Teoría Marxista Hoy. Ediciones de CLACSO. Buenos Aires, Argentina.

Carnoy, Martin (1984). *The State & Political Theory*. University Press. Princeton.

Castillero Calvo, Alfredo (2008). *Agresión externa y poblamiento en Panamá*. Tareas, No. 126. Mayo-Agosto 2008.

Ceceña, Ana Esther (2004). *Sujetizando el objeto de estudio, o de la Subversión epistemológica como Emancipación*. En Los Desafíos de las Emancipaciones en un contexto militarizado. Ediciones de CLACSO. Argentina.

Chomsky, Noam (2002). *Los estados canallas*. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina.

Chomsky, Noam & Hermann, Edward (1988). *Manufacturing Consent*. Pantheon Books. New York.

Gandásegui, Marco. Hijo (1998). *La democracia en Panamá*. Ediciones del CELA. Panamá.

Johnson, John J. (1966). *Militares y Sociedad en América Latina*. Solar/Hachette. Buenos Aires, Argentina.

Lungo, Mario (1990). *El Salvador en los 80: contrainsurgencia y revolución*. Editorial Universitaria Centroamericana. FLACSO. San José, Costa Rica.

Mandel, Ernst (1979). *El capitalismo tardío*. Editorial Era. México

Mills, Wright C. (1983). *La élite del poder*. Fondo de Cultura Económica. México.

O'Donnel, Guillermo (1998). *Democracia Sustentable*. Editorial Paidós. Buenos Aires, Argentina.

Porras, hernán (2008). *Papel histórico de los grupos humanos en Panamá*. En *Las Clases Sociales en Panamá*. Ediciones del CELA. Panamá.

Sánchez, Alex (2008). *The Brazilian Military is back, as it fleshes out its Weaponry and Strategies*. COHA. Sept. 10, 2008. Washington.

Vitale, Luis (1979). *La formación social latinoamericana*. Editorial Fontamara. Barcelona, España.

